



Conferencia Internacional: “Tierras y Territorios en las Américas: Acaparamientos, Resistencias y Alternativas”

Bogotá 2016

Bogotá, 23 al 26 de Agosto de 2016

Sede: Universidad Externado de Colombia

PROGRAMACIÓN EJE V: Luchas, resistencias, alternativas y respuestas entorno a la tierra y a la defensa del territorio en las Américas.

CONTENIDO

PROGRAMACIÓN EJE V: Luchas, resistencias, alternativas y respuestas entorno a la tierra y a la defensa del territorio en las Américas.....	1
CONTENIDO.....	1
V: Luchas, resistencias, alternativas y respuestas entorno a la tierra y a la defensa del territorio en las Américas.....	6
PARTICIPANTES.....	7
EQUIPO DE TRABAJO.....	7
ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS POR CRONOGRAMA.....	8
MARTES 23 DE AGOSTO: LUCHAS POR LA TIERRA Y EL TERRITORIO CAMPESINO.....	8
1. LA LUCHA CONTRA EL LATIFUNDIO EN LA VENEZUELA BOLIVARIANA. YARACUY, TIERRA RESCATADA.....	9
1. TERRITORIALIZACIÓN CAMPESINA DE LA LUCHA POR LA TIERRA Y EL ORDENAMIENTO PROPIO. ESTUDIO COMPARADO EN DOS ZONAS DE RESERVA CAMPESINA.....	32
2. AUTONOMIA E LUTA CAMPONESA NO BAIXO PARANAÍBA MARANHENSE, NORDESTE, BRASIL: PROCESSOS DE LUTA E GARANTIA TERRITORIAL EM VIAS DO BEM VIVER.....	38



3. R-EXISTENCIAS COTIDIANAS, PÚBLICAS Y POR ALIANZAS PRIVILEGIANDO LA VIDA - CAMPEÑINOS/AS DE LO QUE HOY ES SUAPE (BRASIL) Y DE LA ZONA DE RESERVA CAMPESINA DEL VALLE DEL RIO CIMITARRA (COLOMBIA).....	42
4. BANCO DE DADOS DA LUTA PELA TERRA: DEZ ANOS DE PESQUISA SOBRE A QUESTÃO AGRÁRIA EM MINAS GERAIS - BRASIL.....	46
5. RESISTÊNCIA CAMPONESA, BATALHAS POR TERRA, TERRITÓRIO E BENS NATURAIS DO BICO DO PAPAGAIO – BRASIL.....	54
CARTA MAIOR. Conflitos no campo: o rastro da violência e da política. http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Movimentos-Sociais/Conflitos-no-campo-o-rastro-da-violencia-e-da-politica/2/33304 , acesso em 30.07.2016.....	78
6. RECREANDO TERRITORIOS: ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIONES INDIGENAS Y CAMPESINAS EN LA LUCHA POR INCREMENTAR CONTROL SOBRE TIERRA Y RECURSOS NATURALES EN LA ERA MINERA ...	81
7. LA REIVINDICACIÓN TERRITORIAL EN LA CUMBRE AGRARIA, CAMPESINA, ÉTNICA Y POPULAR COMO ALTERNATIVA A LA HEGEMONÍA EXTRACTIVISTA....	113
MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO: DEFENSA DEL TERRITORIO Y LOS BIENES COMUNES NATURALES	130
8. LOS RÍOS QUE NOS UNEN. EL MOVIMIENTO ANTIREPRESAS EN MÉXICO	130
Mónica Montalvo Mendez	130
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco.....	130
momm85@gmail.com.....	130
Las presas no se construyen en un vacío, se construyen en un territorio determinado, donde existen diversas clases de relaciones en este espacio, no sólo entre los grupos que se asientan en él, entre éstos y las autoridades, sino con la propia naturaleza; por lo tanto, en la construcción de presas se disputan al menos dos concepciones de vida y territorio. Por un lado, la del capitalismo que considera que todo se puede mercantilizar y por lo tanto tener precio (en este caso, el territorio, el agua y la vida); y, la otra concepción es de las comunidades quienes afirman que su vida, historia, identidad y dignidad no tienen precio.....	131
9. BOOM BIOETANOLERO Y (RE)CONCENTRACIÓN DE LA TIERRA EN EL PERÚ: LUCHAS SOCIALES EN UN CONTEXTO NEOLIBERAL.....	134
10. UNA APROXIMACIÓN AL DRAMA MINERO EN ZACATECAS	137
11. DISPUTANDO LOS RESGUARDOS PARA SUPERARLOS: MÁS ALLÁ DE CONFLICTO ARMADO, EL MULTICULTURALISMO Y SUS LÓGICAS DE LA EXCLUSIÓN EN LOS TERRITORIOS ÉTNICOS	140
12. DE LO COMUNITARIO COMO TERRITORIO A LOS TERRITORIOS COMUNITARIOS. EMERGENCIA Y CREACIÓN DE UNA NUEVA TERRITORIALIDAD.....	144
13. DESARROLLO HEGEMÓNICO Y RESISTENCIA CAMPESINA EN EL ESTADO DE HIDALGO	147



A partir de esta visión, se instauró la concepción de sociedades desarrolladas y subdesarrolladas y el crecimiento y la modernización se convirtieron en un objetivo a alcanzar por todas las naciones. 148

En este sentido, autores como Sachs (1996) y Esteva (1996) insisten en la vaciedad del concepto de desarrollo y en la defunción del mismo, sin embargo no sólo la idea no ha desaparecido sino la articulación con gobiernos, que no sin ironía, se postulan como progresistas, es una ideología hegemónica, persistente y vigente: 148

El desarrollo es todavía un sueño anhelado pero también combatido: una idea que se despliega, para enseguida recibir críticas y cuestionamientos, se adapta, y se reconfigura bajo una nueva versión que se presenta como superación de la anterior, pero que vuelve a sumirse en la crisis al poco tiempo (Gudynas, 2012:39). 148

Como lo plantea el autor, la idea de desarrollo es muy resistente no solo porque se postula desde los grupos en el poder sino porque también es reclamado por los movimientos y las comunidades: todos quieren tener acceso al desarrollo. En este sentido Žižek tiene razón cuando señala: “Toda universalidad hegemónica tiene que incorporar por lo menos dos contenidos particulares: el contenido particular autentico y su distorsión, generada por las relaciones de dominación y explotación”. (Žižek, 2011:198). 148

El desarrollo imperante opera a través de instituciones y de un discurso, es decir, se articula en prácticas e ideas que se han expandido globalmente hasta convertirse en una forma de pensar y sentir (Escobar 2005; Gudynas, 2012). Las reivindicaciones de los pueblos y sus alternativas, se generan ante el desarrollo como mito o ideología que expresa la aspiración del progreso de la modernidad occidental (Gudynas, 2012). 149

La pregunta de Rist (2006) sobre dónde radica la fuerza del discurso del desarrollo y su capacidad de seducción, se responde desde la ilusión de la ideología hegemónica como método para acabar con la pobreza en todas partes. El desarrollo histórico, desde su génesis, se ha organizado a través de creencias y subjetividades para reproducir un orden social. Los aparatos ideológicos – empresas, instituciones de gobierno, organismos internacionales, etc.- insisten sobre el apego a la mitología del desarrollo, donde las contradicciones y el conflicto se diluyen o tratan de ser diluidos. 149

Así, el desarrollo no es un concepto neutral, es el medio por el cual los grupos dominantes engloban una serie de acciones –prácticas y discursos-, mientras los grupos subalternos tratan de redefinir su dirección y significado. El desarrollo lejos de estar bien definido en sus objetivos y resultados, expresa la lucha social y la confrontación de distintos actores con interpretaciones diferentes y particulares que definen la orientación de la trasformación social. De igual forma, el desarrollo depende de un contexto donde se van construyendo alternativas, desde el espacio socio cultural y los proyectos a futuro que los propios actores definen desde su territorio. 150

Reconociendo esta base ideológica, las alternativas propuestas por los pueblos campesinos e indígenas cuestionan desde sus prácticas y saberes. Así, el debate sobre el desarrollo vuelve a estar en el centro de la discusión (Gudynas 2012). Desde los pueblos indígenas existen conceptos que se traducen en discursos y prácticas, como el *sumak kawsay* de los pueblos indígenas de Ecuador o el *suma qamaña* en Bolivia. Si bien estas propuestas son contra hegemónicas en el sentido de que buscan cuestionar a esa particularidad del pensamiento occidental que se concibe como universal, son los actores sociales los que con su acción,



luchan por el reconocimiento de sus derechos, la defensa de su territorio y en suma, otra forma de vida. 150

Desde los márgenes, los pueblos y comunidades ponen en entre dicho todo el andamiaje ideológico del desarrollo al menos en dos sentidos: uno que tiene que ver con el resurgimiento de saberes y prácticas negadas; y otro sobre la crítica de la modernidad como base ideológica del desarrollo y proyecto civilizatorio de occidente. Por ello, la impronta de los movimientos sociales de base, el conocimiento local y el poder popular en la resistencia al desarrollo, son parte central para comprender los procesos actuales (Escobar, 2007). 151

En este sentido, romper con la monocultura de occidente y la razón metonímica que se pretende universal como parte que trata de abarcar el todo (Santos, 2006) permite dar cuenta de la disputa por el desarrollo. Existen entonces, una multiplicidad de experiencias, las cuales se producen como no existentes por el discurso hegemónico. Esto abre un campo de visibilidad ante la negación de prácticas y conocimientos subalternos. La lucha, resistencia y forma de organización de los campesinos e indígenas del Valle del Mezquital ante el despojo de sus recursos y la desarticulación de su modo de vida, se da en este conflicto por la generación de alternativas encubiertas por el discurso de la modernización y el progreso. Estas luchas ponen en evidencia la cara perversa del desarrollo pero sobre todo desmitifica a éste como el único camino. 151

Las relaciones de dominación que ejerce este modelo impulsado por instituciones, en el ámbito nacional, local e internacional, potencializa el conflicto y lleva a los actores sociales a emprender acciones colectivas para defender prácticas y dinámicas bajo procesos complejos basados en la cultura y el lugar. 151

En este sentido, el desarrollo “resulta de una disputa, de una lucha entre los grupos que intentan imponer su hegemonía y grupos y actores sociales que se resisten desde sus espacios locales porque tienen otra perspectiva de cómo organizar la sociedad y la economía” (Rodríguez, 2009:5). Así, existen dos elementos a destacar en el paradigma del desarrollo: como resultado de una disputa donde intervienen una heterogeneidad de actores sociales y segundo, la importancia de los espacios locales para disputar esta articulación hegemónica. 152

Para salir del desarrollo empero, no existen recetas o soluciones fáciles y aún el posdesarrollo, es un horizonte más que una realidad concreta. Desde lo que nos proponemos comprender sobre los actores sociales en las comunidades indígenas campesinas del Valle del Mezquital, es relevante esta disputa al enfatizar la pluralidad de acciones que se están llevando a cabo y la negativa a universalizarlas como un pensamiento único. Así, la resistencia viene dada desde el lugar y situación histórica y coyuntural de los pueblos que la disputan: 152

No existen grandes alternativas que puedan aplicarse a todos los lugares y a todas las situaciones. Pensar en alternativas bajo la modalidad del desarrollo sostenible, por ejemplo, es ubicarse dentro del mismo modelo del pensamiento que produjo el desarrollo y lo sostuvo. Debemos resistirnos al deseo de formular alternativas en el nivel macro y abstracto (Escobar, 2007:362). 152

Las alternativas, se encuentran en las prácticas y formas de resistencia que los pueblos entablan ante los grupos de poder dominantes. Es desde el lugar y la relación entre las comunidades y el desarrollo



hegemónico donde las alternativas se vislumbran: “desde sus manifestaciones específicas en lugares concretos” (Escobar 2007:373). En el caso de las comunidades del Valle del Mezquital, es posible visibilizar la disputa por el desarrollo, entre otros elementos, desde su matriz cultural y territorial donde las prácticas y la apropiación del espacio por parte de los actores sociales son parte estructurante de este proceso. 152

14. WE NEVER STOPPED BEING PAÏ: A CASE STUDY OF LAND RECLAIMED BY THE PAÏ TAVYTERÄ GUARANI IN PARAGUAY 167

15. DINÂMICAS ESTATAIS E PROCESSOS DE MEDIAÇÃO: AS LUTAS TERRITORIAIS DE QUILOMBOLAS EM ITAPECURÚ MIRIM - MA 195

Cíndia Brustolin 195

JUEVES 25 DE AGOSTO: EXPERIENCIAS DE AUTONOMÍA CAMPESINA 202

16. DESPUÉS DEL RESCATE, SIGUE LA LUCHA: REDES CAMPESINAS EN TIERRAS RESCATADAS DE LATIFUNDIO EN VENEZUELA 202

17. LA ZONA DE RESERVA CAMPESINA (ZRC) DE HECHO EN EL SUMAPAZ; TERRITORIALIDAD, RESISTENCIA Y LUCHA 215

1. Introducción..... 215

1.2 Abstract 216

3.1 Objetivos específicos..... 216

5. Referencias teóricas desde el marco categorial..... 217

5. Metodología..... 221

6. Resultados de la investigación 223

bibliografía..... 232

18. ENTRE LAS VÍAS DE HECHO Y LAS DE DERECHO: ORDENAMIENTO TERRITORIAL CAMPESINO COMO PROPUESTA DE REFORMA AGRARIA 235

19. “EL ESTADO SOMOS NOSOTROS”: PRÁCTICAS ORGANIZATIVAS COMUNITARIAS DE LA ZONA RURAL DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ, COMO MATERIALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LOCAL EN COLOMBIA 242

20. EL PAPEL DEL MOVIMIENTO SOCIAL EN LA PRODUCCIÓN DE IDENTIDAD CAMPESINA TERRITORIALIZADA. UNA APROXIMACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DE TERRITORIO AGROALIMENTARIO EN EL MACIZO COLOMBIANO 285

21. EL INTERCAMBIO DE SEMILLAS Y SABERES EN LA DEFENSA DEL TERRITORIO: LA EXPERIENCIA DE LA RED DE MUJERES RURALES DE COSTA RICA..... 291

22. DEFENSA DEL CUERPO- TERRITORIO EN AMÉRICA LATINA: RESISTENCIAS CAMPESINAS FEMINISTAS 293



23.	FORMAÇÃO DAS CRIANÇAS SEM TERRA NA LUTA PELA TERRA.....	297
24.	TRANSFORMACIONES EN LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE MUJERES CAMPESINAS AFRODESCENDIENTES POR LA EXPANSIÓN DEL CULTIVO DE PALMA DE ACEITE. CASO: MUNICIPIO DE MARÍALABAJA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, COLOMBIA.....	303
25.	JÓVENES Y TERRITORIALIDAD EN EL CORREGIMIENTO DE EL GARZAL, MAGDALENA MEDIO .	313
	VIERNES 26 DE AGOSTO: EXPERIENCIAS DE TERRITORIALIZACIÓN E INSTRUMENTOS PARA EL ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO.....	333
26.	DYNAMICS OF LAND GRABBING IN THE GLOBAL SOUTH: TERRITORY, EXTRACTIVE ECONOMIES AND SOCIAL RESISTANCES.....	334
27.	ALTERNATIVE TERRITORIAL ORDERING: PROSPECTS AND CHALLENGES OF GRASSROOTS-STYLE NEW POLITICS IN COLOMBIA	343
28.	A INTERDISCIPLINARIDADE NA EDUCAÇÃO DO CAMPO COMO INSTRUMENTO PEDAGÓGICO DO PROCAMPO – ALAGOAS/BRASIL	351
	a) Identificar os educandos enquanto objetos e pesquisadores da sua própria práxis educativa;.....	362
29.	MEMORIA Y TERRITORIO: SABERES Y PRÁCTICAS GEOPOLÍTICAS EN EL CAUCA INDÍGENA.....	381
30.	PROBABILIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA PISTA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSÉ MARÍA CÓRDOBA, MUNICIPIO DE RIONEGRO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN COLOMBIA	382
31.	BIODIVERSIDAD, AGUA Y MINERÍA EN LA DISPUTA TERRITORIAL: DOS CASOS EN MÉXICO	394

V: Luchas, resistencias, alternativas y respuestas entorno a la tierra y a la defensa del territorio en las Américas.

Este eje se propone analizar las alternativas y resistencias, la acción y la inacción pública, las medidas nacionales, regionales y sus resultados. ¿Qué proponen y qué posiciones tienen los movimientos sociales? ¿Qué posiciones tienen los inversionistas y empresarios? ¿Qué alianzas



existen entre ellos? ¿Qué modelos alternativos de desarrollo se discuten en la región? ¿Qué se propone desde el Estado? De la tierra al territorio (resguardo o reserva) que protege de la acumulación/concentración (experiencias, resultados, perspectivas); ¿Resistencia o transformación campesina (experiencias, logros y fracasos; expectativas)?

Preguntas guía:

¿Resistencia o transformación campesina (experiencias, logros y fracasos; expectativas)? ¿Cuáles son las alternativas a las transacciones de tierras a gran escala y cómo se despliegan en toda la región? ¿De qué forma los movimientos sociales urbanos y rurales se agrupan en torno a cuestiones de la tierra y el territorio y por qué? ¿Los movimientos sociales urbanos se movilizan en torno a la tierra? ¿Cómo han sido afectadas históricamente las mujeres por la concentración de tierras y cuáles con sus propuestas para transformar esta situación?, ¿Qué significa el desarrollo en este contexto? ¿Cómo respondemos y resistimos? ¿Qué papel tienen los académicos (la academia), los activistas (movimientos sociales) y los responsables políticos (el Estado)? ¿Qué lenguaje pueden utilizar los tres para hablar el uno con el otro?

PARTICIPANTES

EQUIPO DE TRABAJO

Eje V: Luchas, resistencias, alternativas y respuestas entorno a la tierra y a la defensa del territorio en las Américas.

Universidad Externado:

Coordinación académica y operativa: Manuel Vega,



<p>Equipo de coordinación grupo de trabajo.</p>	<p>Flavio Bladimir Rodríguez, Alfredo Molano, Gustavo Montañez</p> <p>manuel.vega@uexternado.edu.co flavio.rodriguez@uexternado.edu.co gustavo.montanez@uexternado.edu.co gumogo@gmail.com</p> <p>Comité Internacional: Alberto A Fradejas, Luis Felipe Rincón feliperincom@gmail.com altitumir@yahoo.es</p> <p>Comité Nacional: Jon Jairo Rincón, Guillermo Ferro john.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co</p> <p>Dinamizadoras:</p> <p>María José Yoscuá García maria.yoscu@est.uexternado.edu.co</p> <p>Daniela Sierra Navarrete daniela.sierra01@est.uexternado.edu.co</p>
<p>Temas sugeridos para organizar las mesas de trabajo:</p>	<p>Luchas por la tierra y resistencias territoriales: Desarrollo y defensa de los territorios</p> <p>Recursos naturales, tierra y trabajo en los procesos actuales de acumulación</p> <p>Propuestas y alternativas desde lo local</p>

ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS POR CRONOGRAMA

MARTES 23 DE AGOSTO: LUCHAS POR LA TIERRA Y EL TERRITORIO CAMPESINO

SESIÓN 1

Hora: 2:00pm – 4:00pm



Salón: E- 207

Responsables:

- **Coordinador(a) de mesa: Flavio Bladimir Rodríguez**
- **Comentarista: Alfredo Molano**

1. LA LUCHA CONTRA EL LATIFUNDIO EN LA VENEZUELA BOLIVARIANA. YARACUY, TIERRA RESCATADA.

Gabriel José Gil Torres¹
Universidad Politécnica Territorial Kleber Ramírez
gabrielpool@yahoo.com

En 1999 Venezuela se encontraba sumida en una grave crisis que mantenía a la mayoría de su población en distintos niveles de pobreza (crítica, extrema y atroz) y presentaba una distribución poblacional particular en la que más del 70 por ciento de la gente vive en las ciudades y la otra parte permanece en zonas rurales con precarísimas condiciones de vida. La herencia de los nefastos gobiernos del siglo XX, sumaban una acentuada dependencia de las importaciones de alimentos, una agricultura en crisis y unos precios del petróleo por el suelo (Parker, 2008).

El éxodo rural obligatorio expulsaba cotidianamente a campesinos para las grandes ciudades, huyendo de la trágica alternativa de convertirse en peones de haciendas, de grandes y medianos propietarios de tierras, cuyos títulos fraudulentos fueron obtenidos por acciones políticas de despojo a pobladores locales y reafirmados por reformas agrícolas que solo beneficiaban a la clase dominante ostentadora del poder político y económico.



El problema de la tierra es una de las claves de los más grandes conflictos de la historia de Venezuela. Colonia, independencia, guerra federal, caudillismo, dictadura y democracia, constituyen etapas y sucesos en cuyo fondo se halla el anhelo aun insatisfecho de las masas campesinas de poseer la tierra que trabajan para otros (Araujo, 1968). Este autor, además afirmaba que la violencia original del latifundio, era la madre de todas las violencias que nos aquejaban. “...una clase de grandes señores de la tierra impone su voluntad y explota a su antojo a una vasta masa de desposeídos integrada por indios, mestizos y negros esclavos: las plantaciones coloniales de cacao, tabaco, caña de azúcar, algodón y, mas adelante, café, componen el cuadro productivo de una explotación extensiva de la tierra e intensiva del hombre”(Araujo, 1968). El feudalismo del siglo XIX y principios del XX, con el capitalismo imperialista del siglo XX, se habían encargado de enajenar la vida campesina, de usurpar la tierra, primero el suelo, con grandes explotaciones para exportación de materias primas a las grandes metrópolis imperiales y luego, la apropiación del subsuelo para expoliar la riqueza petrolera que igualmente fue a subsidiar el desarrollo de las grandes potencias.

Ni la independencia ni la guerra federal pudieron cambiar el estado de cosas que se cernía sobre la tierra. Los despojados de ayer, eran los despojados de hoy, la clase campesina, heredera de la dignidad afro e indígena, de las luchas derrotadas pero no agotadas. Los gobiernos pseudo democráticos de la llamada IV república no hicieron más que entregarse a los intereses foráneos de las grandes economías mundiales en detrimento de una población nacional a la que sumieron en el hambre y la miseria.

Hugo Chávez llega al poder político en Venezuela con una titánica tarea, superar en pocos años la grave crisis política, económica, social, cultural y alimentaria del país. Esto último, se convierte en



una prioridad de su gobierno. Así, uniéndose a las fuerzas e ideas populares que lo llevan a la Presidencia de la república, comienza una serie de acciones político-jurídicas que deberían derivar en la reivindicación integral del campesinado y en el desarrollo de una economía endógena lo mas autónoma posible de las fuerzas del mercado global. Se une su osadía como gobernante con el cumulo de las luchas históricas del pueblo campesino venezolano.

Chávez, autorreconocido como campesino, se declara anti latifundista y por ley habilitante, sanciona en noviembre de 2001, “La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario”, que desarrolla el principio constitucional de declarar al régimen latifundista como contrario al interés social (art 307, CRBV, 1999). Dicha norma declara que la tierra y la propiedad no son privilegios de unos pocos, sino que están al servicio de toda la población, dentro de los valores de solidaridad e igualdad de oportunidades. Igualmente prevé que el Estado deberá tomar las medidas de orden financiero, comercial, transferencia tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano de obra, etc., necesarias para asegurar el desarrollo del sector agrario.

El preámbulo de la ley, afirmaba que el nuevo régimen agrario en construcción, somete el derecho de propiedad a un interés social. El contenido del derecho de propiedad, con sus atributos de uso, goce y disposición, se encuentra sujeto al efectivo cumplimiento de la función social específica que el ordenamiento jurídico le atribuya. A pesar de que dicha ley, no era un instrumento radical, sino que formaba parte de una propuesta de soberanía alimentaria que se pronunciaba expresamente partidaria de dar tratamiento preferencial a los sectores nacionales productores de alimentos, provoco una reacción hostil, inclusive antes de que hubiera intentos de aplicarla, por parte de los gremios empresariales (Parker 2008: 121-143). El Presidente de Fedenaga (Federacion de Ganaderos de Venezuela) en un simbólico acto de desacato a la nueva norma constitucional,



rompió la gaceta oficial que la publicaba, frente a las cámaras de los medios privados de prensa del país. Esta acción no solo contribuyó a provocar el golpe de Estado fallido de abril de 2002, sino que desató una matanza sistemática de líderes campesinos que a la fecha suman más de 300 personas asesinadas a manos de sicarios contratados por latifundistas y empresarios.

De 1999 a 2004, la extrema conflictividad política imperante en el país, una especie de guerra fría, que obligaba a la movilización permanente de los sectores en pugna, el pueblo que apoyaba el proceso de cambio por una parte y los sectores de la Derecha pro imperialista por otra; impidió que en este periodo no se avanzara más allá de definir la política agraria, que no se concretara la aplicación de la mencionada ley.

Una vez que , a fines de 2004, el referendo revocatorio se convierte en referendo ratificatorio Presidencial, aparentemente la conflictividad política se serena un poco y el contexto permite a los movimientos campesinos reiniciar el rescate de tierras del latifundio, proceso que teniendo como base una ley jurídica avanzada, ha sido manchado de sangre por las estrategias de exterminio que el sector de propietarios de tierra ha implementado sin que hasta ahora se haya podido superar la impunidad con que han actuado y menos establecido acciones de protección de líderes campesinos.

En este trabajo se plantea analizar, la dinámica de rescate de tierras en el estado Yaracuy, Venezuela, zona emblemática e histórica para las luchas campesinas cuyas tierras usurpadas por latifundistas, son consideradas como unas de las mejores del amplio territorio nacional por tener escasas limitaciones para la agricultura diversificada. Para ello analizaremos el proceso de rescate de tierras desde el 2005 hasta el 2010, desde una perspectiva de investigación militante, como actor involucrado en dicho proceso. Se pretende usar como enfoque la perspectiva de transformación



social de la agroecología: “Se refiere a la realización de actividades conjuntas investigador-agricultor para el diseño participativo de acciones productivas y de cambio social que mejoren su calidad de vida, Ahora no solo se trata de dar la voz a lo investigado sino de aceptar que este adquiera el papel de investigador, como conductor del curso dinámico de sus prácticas económicas, sociales y políticas” (Sevilla Guzmán et al., 2011:42-49).

Es la investigación –acción participativa la que rompe la estructura de poder sujeto-objeto de la metodología científica convencional, lo que genera la posibilidad de un cambio en las acciones sociales dentro de sucesos de actuación como analizadores históricos (Villasante, 1998, citado por Sevilla Guzmán, 2011:42-49).

Usaremos el enfoque ampliado de la agroecología que reconoce las luchas por tierras y territorios unidas al manejo ecológico de los recursos naturales, como formas de acción social colectiva que presentan alternativas a la actual crisis civilizatoria. Según Sevilla Guzmán, la agroecología introduce junto al conocimiento científico, otras formas de conocimiento, desarrollando un enfoque pluriepistemológico que acepta la biodiversidad sociocultural, la visión de los movimientos campesinos en lucha.

El rescate de tierras en el estado Yaracuy en el periodo en estudio, ha sido liderado por organizaciones campesinas articuladas en el movimiento campesino Jirajara, instancia de organización política que ha abordado espacios claves de poder institucional a nivel regional y a su vez ha coordinado acciones colectivas simultaneas para el acceso legitimo o por vías de hecho a la tierra usurpada por el latifundio. Las acciones legítimas de acceso a la tierra han logrado presionar y agilizar las decisiones jurídicas a favor del campesinado. Si se espera solo por esto



último, sin aplicar los procesos colectivos de lucha por la tierra, el Estado aun imperante, trunca y detiene los rescates. Las acciones organizadas del movimiento campesino, han permitido que muchos colectivos accedan a tierras que estaban usurpadas por terratenientes y que en alianza con actores institucionales claves, reciban apoyo económico, formativo, financiero; para desarrollar procesos de producción de alimentos en transición agroecológica. En Yaracuy más de 100 fundos han sido rescatados del latifundio, mas de cien mil has están en manos campesinas, con procesos diferenciados de desarrollo productivo y organizativo. Los desafíos son muy amplios: se valoran acciones para resistir en los espacios productivos, para generar cada vez más autonomía, generando procesos endógenos que impulsen procesos productivos de bajos insumos y de bajo riesgo.

El método investigativo, la decisión de contar y analizar nuestra propia historia.

El movimiento campesino Jirajara, usando el enfoque de la acción social colectiva en agroecología, mencionado arriba, es el movimiento social con potencial de cambio y se convierte en esta investigación, en el agente social básico de interés; teniendo como particularidad que sus mismos miembros incursionan en el proceso investigativo.

La propuesta de auto investigación surge de la necesidad de analizar los procesos vividos recientemente en los últimos años, en torno a la lucha por la tierra y que requieren de una óptica cercana, protagonista, comprometida, para contrarrestar los análisis superfluos de muchos investigadores que banalizan acontecimientos, relativizan los logros, atentan contra la verdad y que nos dan el papel degradante de objetos investigados.

La lucha contra el latifundio, por el acceso a la tierra, la reconocemos como una de las dimensiones más relevantes de la agroecología y desde ella partimos para elaborar de forma participativa, la



sistematización contemporánea de la lucha de nuestro movimiento, que derive en una iniciativa endógena para consolidar una propuesta de agricultura tropical sustentable en los territorios rescatados.

Creemos que el estudio de las luchas recientes, duras, riesgosas, exitosas; es clave para enfrentar la amenaza actual de reversión de los rescates de tierras del latifundio, ante la reconfiguración y mimetización del mismo y; de la pérdida de territorios, que desde el punto de vista cultural están en un proceso de recampesinización, pero bajo la amenaza constante del agronegocio transnacional.

La dimensión local de nuestras luchas, con gran potencial endógeno, ha tenido una trascendencia nacional sin precedentes y requieren de una articulación entre el conocimiento campesino y el científico para acercarnos a la tan ansiada soberanía alimentaria de la nación. La construcción de sistemas de producción de alimentos sanos, requiere trascender las dicotomías sabio-ignorante, científico- popular; tomando lo que nos convenga como clase campesina en lucha, de la ciencia convencional y revalorizando los conocimientos ancestrales culturales de donde provenimos; visibilizando lo afro, lo campesino, lo indígena.

Nuestra investigación requerirá de una gran ayuda de intelectuales orgánicos, pues nos adentraremos en el análisis de la compleja práctica social y política en torno al rescate de tierras del latifundio. Develaremos que nuestra acción social colectiva, tuvo, tiene y deberá tener una praxis transformadora de la realidad.

Afirmamos que la investigación –acción-participativa es la metodología que nos reconoce como actores válidos, que no descalifica nuestro discurso como anecdótico, que prepara el escenario



político para intentar establecer un dialogo de igual a igual entre la ciencia y nuestro conocimiento, rompiendo la relación hegemónica que ha prevalecido y que nos ha intentado convencer que la servidumbre es nuestro destino y la impotencia nuestra naturaleza.

La Revolución Bolivariana, a pesar del Estado imperante, nos ofreció en estos últimos anos, condiciones inigualables para que desde el campesinado organizado, enfrentáramos la hegemonía política, intelectual, ideológica, moral, jurídica y económica de la burguesía. Avanzamos en los rescates de tierras, logramos infiltrar cuadros políticos nuestros en las instituciones con el lema de “tirar la casa por la ventana a favor de nuestros aliados de clase”: el campesinado. Implementamos intermitente y frágilmente, políticas públicas en el ámbito de la agroecología y la agricultura campesina, enfrentamos agresiones de sicariato físico y jurídico, entre decenas de acciones para reforzar nuestros intereses de clase siempre explotada.

Promovimos cambios revolucionarios que hoy en día están en riesgo de frustrarse ante la arremetida de la Derecha nacional pro imperialista que ha retomado espacios en la Asamblea Nacional, que sostiene una guerra económica feroz contra el pueblo venezolano, que es abiertamente anti campesina y racista. Nuestra tarea investigativa es ardua y compleja y debe separarse de los paradigmas teórico - metodológicos que defienden los intereses de la burguesía dominante. ¿A quién o a quienes le interesa desarrollar una investigación de este tipo en la actualidad venezolana? La respuesta es clara: a nosotros mismos, el movimiento en lucha.

Como movimiento campesino Jirajara, asumimos un papel protagónico en la investigación, intentando tener una relación dialógica entre nuestro conocimiento y el de los científicos orgánicos



que nos acompañarán en este proceso, por supuesto desde la perspectiva de defensa de nuestros intereses populares.

Nuestra practica investigativa iniciática, de sujetos auto investigados, en permanente acción y reflexión usara técnicas empíricas como encuestas, cuestionarios, entrevistas semi estructuradas, etc., deslastradas de su enfoque positivista y contextualizadas a nuestras necesidades. Asumimos que el rol de la investigación-acción es “... producir conocimiento que tenga relevancia para la práctica social y política, no se estudia nada porque si”. (Borda 1976:17).

Está en construcción entonces, nuestro propio sistema de interpretación de la realidad, nuestra propia ciencia al servicio de lo popular.

La cuestión de la tierra en Yaracuy. Breve contexto histórico.

El estado Yaracuy posee 7100 kilómetros cuadrados y en él se encuentran quizás, las mejores tierras del país para la agricultura diversificada. Con un régimen pluviométrico casi perfecto, con algunas sequias intermitentes de los últimos anos, se sigue presentando como un territorio promisorio para la produccion de alimentos sanos y con un arraigo de luchas indígenas, afro descendientes y campesinas.

Las luchas históricas y aguerridas por la tierra en esta área del país, han sido visibilizadas con veracidad y crudeza por un investigador militante cuya formación universitaria no le impidió adentrarse en los confines de la lucha y aplicando una metodología participante, fue también protagonista de esa lucha en la segunda mitad del siglo XX. Hablamos de Raúl Domínguez y su



libro silenciado y escondido por mucho tiempo: “La serpiente en la niebla”. Su lectura nos ha permitido tener conciencia de la herencia de lucha que tenemos, definir la violencia primaria de los usurpadores desde la invasión de los españoles a estas tierras, pasando por las guerras de independencia y federal, que no se concretaron en la reposición de la tierra usurpada a los pobladores y describiendo los nuevos despojos de tierras a lo largo del siglo XX, que denotan grandes sufrimientos para los pueblos victimizados que han sido nacidos y criados allí.

Desde los primeros pobladores, los indios caquetios, pasando por las luchas a muerte de los Yaracuyes, las rebeliones de los esclavos negros lideradas por el negro Miguel y el zambo Andresote, la participación del campesino Prudencio Vásquez como comandante en la guerra federal, las constantes y a veces letales luchas del último tercio del siglo XX; desde épocas tan remotas hasta los años que van del siglo XXI, la tierra yaracuyana ha sido manchada con la sangre de sus aguerridos pobladores por el hecho de no aceptar por las buenas, la esclavización, el desplazamiento, el despojo, la alienación, a que la colonia, la nueva vida republicana, el Estado moderno y la burguesía actual pro imperialista nos han sometido. Nelson López, militante del movimiento campesino Jirajara ha sido la última víctima letal de los latifundistas del Yaracuy, cuando el 12 de febrero de 2009, un sicario contratado por el terrateniente Luis Gallo, lo asesino de 14 tiros por la espalda.

Narra Domínguez: “...en 1730, después de las sangrientas derrotas del cacique Yaracuy y del negro Miguel, emergió de los escombros del antagonismo entre la periferia dominada y el Estado metropolitano, el zambo Andresote, alzado en nuestros montes contra los desafueros de la compañía Guipuzcoana...” Confiesa Ricardo Miranda, militante urbano -campesino de larga data, que la lectura colectiva del libro mencionado, con campesinos afro descendientes del eje negro de



Yaracuy, desde la población de “El Chino” hasta “Palmarejo”, en el año 2000, permitió revalorizar entre la población negra, su historia de lucha, su valiente saga; lo que derivó en una reorganización casi inmediata de la gente para rescatar las tierras comuneras del municipio Veroes en el año 2005. Hoy, más de 25000 has de tierras comuneras de la zona negra que habían sido usurpadas por neolatifundistas, están en manos de organizaciones campesinas afrodescendientes.

En la entrevista oral semi-estructurada a Miranda, como miembro del movimiento campesino Jirajara, enfatizó la importancia del legado histórico para impulsar las nuevas luchas por la tierra y los territorios, contra la pretensión de los empresarios de reducir a la clase campesina a peones de hacienda. En el diálogo abierto que sostuvimos redefinió preguntas y extendió respuestas. Dijo: “hablar de Jirajaras es hablar de dignidad, de ética revolucionaria, de resistencia indígena, de fuerza afrodescendiente. Los pueblos descamisados hacen causa común y resisten. Yaracuy es tierra de cumbes, es un hecho histórico trascendental, un legado que se recoge y tributa a la resistencia.” Tipiar aquí estas palabras, no minimizan la elocuencia con que son proferidas por el autor y el poder que han demostrado para crear conciencia política y arrojarse a una lucha que parece eterna.

En los años 80, refiere Miranda, se encontraron con el investigador Raúl Domínguez y lograron concretar un amparo constitucional a favor del pueblo de “los cañizos –Palo Quemao”, que había sido despojado de sus tierras por los centrales de caña de azúcar, en esa época. El encuentro orgánico entre investigador y campesinos permitió implementar como metodología de lucha, las decisiones asamblearias en la comunidad, las estrategias se discutían y se tomaban en caliente con la participación de todos y todas. “Por la historia, por la tierra y por la vida” fue la consigna de la lucha de los cañizos, que mantuvo el continuo histórico de lucha en Yaracuy en las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado. La narración pormenorizada de los hechos hasta nuestros días, es motivo



de estudio de esta investigación. Con Chávez como Presidente se logró darle mayor fuerza orgánica al movimiento y se masificó el rescate de tierras en el valle del río Yaracuy, refiere Ricardo, que insiste en considerar el conocimiento de nuestra historia como un intenso motivador de las luchas por la tierra. La historia truncada por la burguesía siempre ha intentado borrar nuestras luchas.

La Revolución Bolivariana y el campesinado.

Hugo Chávez como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, se auto reconoce como campesino, revaloriza una cultura vilipendiada, discriminada y ridiculizada por más de 50 años de gobiernos de Derecha que le precedieron. Basta con leer algunos ejemplares de la revista “El agricultor Venezolano” órgano divulgativo del Ministerio de Agricultura desde la década de 1940 hasta los 70 del mismo siglo, para sacar una amplia antología de frases discriminatorias y de burla contra el campesinado venezolano al que consideraban atrasado, rumiante de su propia miseria. El discurso descalificador contra el campesinado y sus conucos, iba acompañado de gritos de llamado a la modernidad y a la neo colonización de nuestras tierras por parte de agricultores europeos a los que se consideraban dueños de un conocimiento agrícola de avanzada. Estos criterios provenían de investigadores e intelectuales que instrumentalizaron como asesores del Estado burgués, un nuevo despojo contra el campesinado. Los resultados de del discurso de la modernidad agrícola, estaban cruelmente plasmados en la realidad que Chávez recibe en 1999: un 80 por ciento del campesinado en diversos niveles de pobreza: extrema, crítica y atroz, obligados a huir del campo y a poblar cinturones de miseria en las ciudades.

Por ley habilitante, en el año 2001 se aprueba la ley de tierras y desarrollo agrario, cuyo primer artículo tipifica: “...establecer las bases del desarrollo rural integral y sustentable...dentro de una



justa distribución de la riqueza y una planificación estratégica, democrática y participativa, eliminando el latifundio y la tercerización como sistemas contrarios a la justicia, la igualdad, al interés general y a la paz social en el campo...” Las cartas estaban echadas, a pesar del débil Estado heredado para luchar contra el régimen dominante establecido, se crean las bases jurídicas para reiniciar con más firmeza, el rescate de tierras del latifundio. Como fue referido antes, dicha ley desata una masacre contra campesinos y contribuye al golpe de Estado fallido de 2002. A pesar de las contradicciones internas dentro del gobierno, a pesar de la resistencia de empresarios importadores mimetizados como productores, a pesar de las fuerzas represivas del Estado y sus normas jurídicas burguesas, el discurso comprometido de Hugo Chávez con el campesinado, ofreció condiciones estelares para que los movimientos sociales implementaran estrategias para recuperar la tierra por vía de hechos legítimos mas allá de esperar por el cumplimiento de normas legales que se fragilizaban en un Estado minado hasta en sus huesos por la burguesía que había sumido al pueblo en hambre y miseria.

Rescate de tierras, Yaracuy enciende la llama en el año 2005.

Una vez superado el intento de referendo revocatorio contra Hugo Chávez, su ratificación en el poder, hace que la Derecha se repliegue por un corto periodo de tiempo, el cual, en el ámbito agrario, se aprovecha para rescatar masivamente las tierras en el estado Yaracuy, que habían sido invadidas por terratenientes desde inicios del siglo pasado.

En este primer ejercicio experimental y preliminar de auto investigación, Laura Lorenzo, lideresa del movimiento campesino Jirajara, esboza la estrategia de lucha para rescatar la tierra usurpada,



en el periodo en estudio. Por ahora no hay notas a pie de página, ni referencias bibliográficas; están las voces de los protagonistas de tan ardua, peligrosa y gratificante lucha. En la entrevista oral refirió acciones en las diversas dimensiones de la lucha: “En medio de la Revolución Bolivariana, confluyen diversas historias de lucha, se unen, se fortifican y a cinco años de Chávez en el poder, la lucha por la tierra hace efervescencia. Recuerda con alegría que el comandante Chávez les dijo, ahora sí, vamos a darle con todo a la tierra...”

El movimiento campesino socialista Jirajara, venia de una lucha férrea desde el año 2000 al 2004, contra un gobernador de Derecha, el célebre fascista Eduardo Lapi, que a pesar que la Revolución Bolivariana ostentaba el ejecutivo nacional, las gobernaciones estatales eran autónomas y permitían como en este caso, que un gobernador tuviera a su equipo direccional a la policía estatal, como un cuerpo paramilitar al servicio de sus intereses. Los temibles “pantaneros”, eran los policías de Lapi, que servían de equipo de comando policial para sacar a los campesinos de la tierra que rescataban por legitimo derecho. Nos trataban como animales, dice Laura, vulneraban todos nuestros derechos. La policía regional sin tener potestad, desalojaba campesinos de las tierras, los incriminaban por delitos falsos de invasión a la “ propiedad privada” de la que años antes habían sido expulsados, les aplicaban los artículos 471 y 472 del código penal, los privaban de libertad y los liberaban con regímenes de presentación como si fueran vulgares delincuentes.

La prensa burguesa, a pesar de esta realidad, falseaba permanentemente los hechos, acusaban a Chávez de dictador y de controlar todos los poderes, cuando era el poder económico que seguía implementando sus poderes facticos a través del estado burgués. El descaro de algunos investigadores les ha permitido afirmar que el gobierno Bolivariano expropiaba tierras productivas a promisorios empresarios del campo, para regalárselas a los y las campesinas. Eso no sucedió. El



campesinado tuvo que entrar a las tierras por vías de hecho y soportar las agresiones descritas para poder hacer cumplir algunas leyes nuevas que les beneficiaban.

Refiere Lorenzo, que el escenario político permitió que militantes del movimiento Jirajara, a partir del año 2004, ocuparan puestos decisivos y decisorios en el ámbito agrario regional y nacional. Esto se logra por movilizaciones y presiones fuertes del movimiento ante diversas instancias de la vida pública nacional y gubernamental que no estaban a la altura de reivindicar las necesidades del campesinado. Se entra a funciones de gobierno con una premisa: tirar la casa por la ventana a favor de nuestros aliados de clase, el campesinado y con la tarea de estar siempre conectados a la base social. Esta dinámica del movimiento está actualmente en análisis y se sistematizan los logros alcanzados en cuanto al desarrollo de políticas públicas integrales a favor del campesinado pero también se evalúa minuciosamente y se intenta detectar si hay correlación entre el rol de funcionarios públicos del equipo de vocería del movimiento y la desarticulación parcial que actualmente sufre.

Se crea en diciembre de 2004, una vez que Lapi pierde las elecciones estatales, la Secretaria de Tierras del estado Yaracuy, que sería coordinada por una campesina Jirajara y que tendría la tarea de aplicar la ley de tierras a nivel regional, usando ardides jurídicos y políticos para catalizar procesos administrativos que permitieran el rápido acceso del campesinado a los fundos usurpados. En esos días en reuniones cerradas, los y las dirigentes del movimiento redactan el decreto 090, que debía ser aplicado regionalmente por la secretaria de tierras y que obligaba a la conformación de una comisión intergubernamental, interinstitucional e interministerial con amplia presencia campesina, para el estudio pormenorizado de las cadenas titulativas de 64 fundos en poder de



terratenientes y que habían sido denunciados por diversos grupos de campesinos desde los años 60, 70 y 90 del siglo 20, como tierras originarias de asentamiento.

Lorenzo, al frente de la Secretaria Regional de Tierras y acompañada por un gran movimiento popular que en esa época mostraba una gran fuerza movilizadora, gesto un proceso de inspección de fundos y estudio de cadenas titulativas que al transcurrir 5 meses había concluido que todos los documentos de propiedad presentados por los supuestos dueños a la comisión, eran falsos.

Cien mil hectáreas de las mejores del país esperaban ser devueltas con diligencia a sus legítimos dueños, los campesinos. Una vez realizado el trámite jurídico pertinente, el Estado burgués imperante, no dio la respuesta esperada. Al contrario, inicio procesos que intentaron detener o paralizar los rescates inminentes. Si lo legal era bueno para quitarnos la tierra, también era bueno para devolvérsela, pero no fue así de fácil, admite Laura. Vino entonces la decisión del movimiento Jirajara de ocupar las tierras por vías de hecho, de manera organizada, simultanea en 24 fundos un día y los otros 40 fundos fueron ocupados por ejes territoriales, de manera masiva, con el propósito de romper o quebrar el accionar de los cuerpos represivos que aun en esa época seguían defendiendo las propiedades ilegales de la clase dominante.

Una vez en la tierra, vino un periplo muy riesgoso para el movimiento, que incluyo agresiones jurídicas y asesinatos de dirigentes campesinos y también un avance extraordinario en la liquidación del latifundio en algunos municipios, en la superación del monocultivo de la caña de azúcar, en la diversificación productiva, en la mejora de las condiciones de vida de las cooperativas que ocuparon legitima y legalmente la tierra. Más de 15000 campesinos, participantes de la Misión formativo-productiva “Vuelvan caras” fueron beneficiados con el acceso a la tierra, con créditos



sin intereses ni hipotecas, con acompañamiento técnico, etc. Este periodo y los logros y fracasos, en el mismo forman parte fundamental de este estudio.

La respuesta sangrienta de los propietarios.

Desde que en el año 2001 se promulgo la ley de tierras y desarrollo agrario, hasta este año 2016, han sido asesinados más de 270 líderes campesinos a lo largo del territorio nacional. En el periodo febril de 2005 a 2010, más de 200 campesinos perdieron la vida a manos de sicarios contratados por terratenientes. Así como el Movimiento Sin Tierra del Brasil influyo positivamente en las luchas campesinas yaracuyanas con su consigna: ocupar, resistir y producir; también el paramilitarismo colombiano logro atravesar la frontera, para tener en Venezuela un espacio de honor mercenario entre los latifundistas locales.

La clase propietaria en su afán por mantener la propiedad de tierras que no les pertenecen, marco su estrategia política con sangre: aniquilar al movimiento campesino. Uso la muerte simbólica: matando a los nuestros cuando entraban o salían de las instalaciones del Instituto Nacional de Tierras, o acribillando líderes en las propias tierras rescatadas o cobardemente disparándoles por la espalda en algún espacio donde se les espero agazapados.

El Estado burgués dominante ha permitido que el terrateniente actúe con impunidad. La mayoría de estos crímenes no han sido castigados porque el aparato de justicia se sigue moviendo a favor de la corriente que marcan los propietarios. Solo un caso fue esclarecido y el terrateniente fue prófugo de la justicia hasta que una juez del estado fronterizo de Apure, cambio el móvil del asesinato de sicariato a una agresión de hampa común, por lo que la acusación de Luis Gallo como autor intelectual del asesinato del líder campesino Jirajara Nelson López, quedo sin efecto.



Se creó una comisión en la Asamblea Nacional para la investigación sobre víctimas del sicariato, pero esta no cumplió sus objetivos de detener la impunidad y hacer justicia. Incluso la presencia de diputados campesinos en dicha comisión resultó inerte, sin efecto alguno.

El movimiento Jirajara apoyó la iniciativa de un investigador aliado para recopilar todos los casos de sicariato en el periodo mencionado, pero por razones logísticas se paralizó la misma. Ahora, la clase terrateniente sigue intentando hacer desaparecer cada expediente, borrar los procesos judiciales que se siguen, incluso en los casos más visibles. Esta tarea de sistematización de las agresiones físicas y jurídicas está incluida en la investigación que se plantea. Es responsabilidad nuestra juzgar estos crímenes en el presente, porque el futuro seguro infringirá nuevas víctimas que necesitarán igualmente de un proceso de justicia.

Poderes divididos, sicariato judicial contra campesinos.

La ley de tierras del 2001 en su primera versión, fue una ley muy avanzada que nos permitió abordar la tierra que nos había sido expropiada, nos permitió promulgar una guerra justa y pacífica contra el latifundio, pero dicha ley, elaborada en una Asamblea Nacional diversa, con miembros de la Derecha en ella, trajo una disposición transitoria (la número 10), que criminalizaba la ocupación previa de tierras. Esta trampa jurídica tipificada en un solo artículo de una extensa ley, provocó que en el periodo del 2005 al 2010, más de 2500 campesinas y campesinos, fueran imputados por delitos falsos de invasión a la “propiedad privada”. En ese momento con una estructura de Derecho agrario casi inexistente en el país, los tribunales ordinarios con mucha influencia de los propietarios, actuaba en conflictos de tierras, aplicando siempre el código orgánico procesal penal contra los ocupantes campesinos de tierras que legítimamente les pertenecían. La presión



campesina sobre las instituciones que imparten justicia en el país y el compromiso popular de algunos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, permitió que la ley fuera modificada en algunos artículos que se prestaban a interpretaciones de diversa índole que terminaban afectando a los principales sujetos y sujetos de la ley. Se crearon los tribunales agrarios, se eliminó la procuraduría general agraria que había sido más un objeto inanimado en la cuarta República que una institución que tenía como responsabilidad la protección jurídica del campesinado.

La defensoría del pueblo acudió al llamado del sector campesino e inicio un proceso de revisión de todas las agresiones jurídicas contra el campesinado a nivel nacional, y a pesar que su labor fue obstruida, su investigación a medias, sirvió para que el TSJ dictaminara una jurisprudencia que impide a los tribunales ordinarios y penales inmiscuirse en conflictos de tierras y criminalizar las luchas campesinas. Actualmente se recupera la memoria histórica de cada agresión jurídica para revisar concienzudamente cada expediente, para develar como el Derecho romano y positivo sigue presentándose más bien como un enemigo que como un aliado de las clases victimizadas a lo largo de los últimos siglos. Esta investigación también nos permitirá hacer un uso alternativo del derecho burgués y encaminarlo hacia los intereses de la clase campesina como sucedió con el mencionado decreto 090, producto del puno y de la letra y de la conciencia política e histórica del movimiento campesino Jirajara.

Destrucción del monocultivo de caña de azúcar y la transición agroecológica truncada.

Ya mencionamos que Yaracuy es un estado promisorio para la producción diversificada y por eso, las mafias importadoras de alimentos, mimetizadas como gremios empresariales agroindustriales, aplicaron en su territorio, una estrategia muy perversa, ocultada bajo el monocultivo a gran escala.



La tarea de los pseudo productores empresariales nacionales fue muy sencilla, ocupar tierras de primera calidad con el monocultivo de la caña para luego solicitar licencias de importación de rubros alimenticios que no podían sembrarse en el país, pues la industria del azúcar infrutilizaba la tierra para su negocio redondo. Esto vino acompañado de una desactivación a medias de los centrales de caña de azúcar. Los empresarios, a propósito, desmembraban el área de molienda de sus empresas y modernizaban el área de refinado de la azúcar cruda importada. Esta trampa mil veces orquestada ha permitido que en Venezuela exista una clase terrateniente pseudo productora y pseudo empresarial, que no produce o produce muy pocos alimentos en el país, pero que domina la importación de muchos rubros alimenticios y controla más de un 60 % de la cadena de intermediación nacional que establece permanentemente practicas de compra venta ampliamente especulativas. Conforman una clase parasita que destruye la economía nacional y que a la vez obtienen amplios márgenes de ganancia monetaria.

Esto fue tema de estudio dentro del movimiento Jirajara, antes de las incursiones en los latifundios. Antonio Ramírez de la cooperativa agua e culebra y ocupante del fundo “Los caballos” narra su experiencia en su incursión al latifundio usurpado por terratenientes: “...cuando entramos en esas tierras, lo que había era el 20 por ciento de cana y el 80 por ciento de pajón. No había comida allí. Acabamos con el pajón y la caña, con el apoyo de los tractores de 16 cooperativas que ya tenían tierra y sembramos batata, yuca, jojoto...” También allí hicieron, con el apoyo de asesores cubanos, una prueba de maní y otra de papa, sembraron cachamas en una laguna construida en tiempo record, metieron ganadería bovina y caprina. En dos años la producción se había diversificado en ese y cien fundos más rescatados del latifundio en Yaracuy. A pesar de ello la prensa y las reseñas investigativas reiteraban que no había producción en los fundos recuperados



por el campesinado. Nada más en el fundo mencionado Ramírez afirma que en la primera cosecha, de una hectárea de batata sacaron 250 sacos, de 13 hectáreas cosecharon mas 36 camiones de 10000 kg cada uno. De la hectárea de jojoto sacaron 30000 unidades en 60 días, en un cuarto de hectárea de tomate produjeron tanto, que se dieron el lujo de repartir gratuitamente entre sus vecinos muchos kilogramos.

La producción diversificada fue registrada precariamente por las cooperativas en cada fundo y es tarea pendiente sistematizar la información al respecto, es una de las dimensiones de la investigación en proceso, cuantificar la amplia producción campesina que dinamizó en el periodo de estudio, las economías locales y contribuyó a lograr la premisa de hambre casi cero en el país.

Con los militantes del movimiento Jirajara en la estructura institucional agrícola regional y con la confluencia de muchas cooperativas, se logró implementar la política de financiamiento de unidades agroecológicas (más de 305 hectáreas en la primera fase); el financiamiento de monocultivos con prácticas alternativas no venenosas. El maíz, cultivo muy importante en la zona, fue sembrado con prácticas agroecológicas que preparaban la transición para la diversificación productiva y disminuían la carga tóxica en los agroecosistemas campesinos. La escuela popular de monitoreo de plagas y enfermedades, innovación organizativa campesina, permitía que técnicos comprometidos con la agroecología y los campesinos rescatadores de tierras intercambiaran experiencias y saberes en las jornadas de monitoreo permanentes y rotativas en todas las parcelas de un área que llegó a cubrir más de 9000 hectáreas con liberación de controladores biológicos como la avispa *Telenomus*, con el caldo mineral sulfocálcico, con el entomopatógeno Bt y con el abono líquido de lombriz. En el 2009, gracias a la implementación de estas prácticas alternativas se logró dejar de usar 9000 litros del pernicioso insecticida fosforado Karate.



La dinámica participativa campesina en torno a la transición agroecológica que avanzaba aceleradamente, fue bruscamente truncada desde el mismo Estado. En la guerra de contradicciones con el agronegocio, este sigue llevando la ventaja y la mayoría de las políticas agrícolas del país siguen bajo su brazo demoledor. La tarea del movimiento campesino en este aspecto es graficar los logros alcanzados en la transición, sacar cuenta de la desintoxicación agrícola lograda, de las toneladas de alimentos más sanos producidos y mejorar las estrategias formativas al respecto.

La lucha campesina en la Venezuela Bolivariana es pues como hemos descrito, muy compleja, por todas las dimensiones que involucra y requiere para investigarla en favor del campesinado de la confluencia de la ciencia popular comprometida y de las experiencias de lucha de los movimientos sociales. La intención es construir un gran bloque latinoamericano de lucha por la tierra que vaya más allá de lo mediático y que estructure luchas simultáneas en todos los territorios en pugna con el agronegocio y con las burguesías latifundistas. Solo así podemos garantizar que los procesos a favor del campesinado sean irreversibles.

¡Tierra, mujeres y hombres libres es nuestra consigna

Bibliografía.

Araujo Orlando (2013), Venezuela Violenta, Caracas, Banco Central de Venezuela.

Acosta Saignes Miguel (2009), Latifundio, Caracas, El perro y la rana.

Domínguez Raúl (1992), La serpiente en la niebla, Caracas, Faces-UCV.

Fals Borda Orlando (1976), El problema de cómo investigar para transformar, artículo publicado en la página www.ts.ucr.ac.cr.



Parker Dick (2008), Chávez y la búsqueda de una seguridad y soberanía alimentaria, en Revista venezolana de economía y ciencias sociales, volumen 14, numero 3.

Rodríguez Marcial (2002), El zambo Andresote, el cimarrón de Yaracuy, Caracas, Proysum.

Sevilla Guzmán y J. Morales (1996), La acción social colectiva en Agroecología, ponencia presentada en el II congreso de la sociedad española de agricultura ecológica, Pamplona, Ireina, septiembre.



1. TERRITORIALIZACIÓN CAMPESINA DE LA LUCHA POR LA TIERRA Y EL ORDENAMIENTO PROPIO. ESTUDIO COMPARADO EN DOS ZONAS DE RESERVA CAMPESINA

Hellen Charlot Cristancho Garrido¹

Núcleo de Estudios, Pesquisas y Proyectos de Reforma Agraria (NERA)

hellen.cristancho@gmail.com

Problema

Desde una perspectiva de larga duración, el surgimiento de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), puede explicarse como resultado de la lucha y movilización campesinas por el acceso a la tierra y como posibilidad de construcción de procesos de desarrollo alternativos a los impuestos por el modelo de desarrollo dominante. Derivan de un problema agrario no resuelto que se inscribe en la naturaleza de la configuración de la formación socioespacial colombiana. Formación ésta que se caracteriza, entre otros aspectos, por su articulación dependiente-periférica al sistema capitalista; por la existencia de dos vertientes de desarrollo agrario, la agricultura capitalista por un lado, y la agricultura familiar y campesina por otro; lo mismo que por continuas formas de violencia política y por la heterogeneidad regional, siendo estos dos últimos, elementos que hacen compleja la cuestión agraria colombiana.

¹ Doctoranda en Geografía FCT-UNESP, Campus Presidente Prudente, miembro del Núcleo de Estudios, Pesquisas y Proyectos de Reforma Agraria (NERA). E-mail: hellen.cristancho@gmail.com



En una aproximación a la historia reciente, es posible identificar tres momentos relevantes de la trayectoria de las ZRC en los que se materializa la lucha por el territorio campesino: i) Su origen como figura jurídica, es decir, el proceso que revela cómo la ZRC se propuso como mecanismo para regular la ocupación y la colonización de baldíos, dándole vía legal en la última ley de reforma agraria (Ley 160 de 1994); ii) El proceso de apropiación de la figura de ZRC por comunidades campesinas que no se localizan en zonas de colonización, pero hacen uso de la figura como una estrategia de territorialización que les permite o aspiran a que les permita la defensa de su territorio; y iii) Los debates políticos y académicos suscitados sobre la propuesta de conformar un Sistema Nacional de ZRC y/o un Programa Nacional de ZRC dentro de la denominada “Política de Desarrollo Agrario Integral” y “Reforma Rural Integral”, primer punto de discusión de los Diálogos de Paz entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP .

El trabajo de parte de la premisa de que las ZRC constituyen territorios campesinos que encarnan una territorialidad alternativa al modelo de desarrollo hegemónico, en un proceso de lucha que es potenciado entorno a la formalización jurídico-institucional de la figura, pero que no se agota en ella. Es decir, si bien el reclamo central de las organizaciones campesinas que lideran las ZRC es que el Estado cumpla las disposiciones emanadas de la Ley 160 de 1994, el hecho de que las comunidades campesinas se organicen alrededor de la figura de ZRC, ya constituye el factor fundamental de su lucha por el territorio, más allá de la efectividad jurídica de la figura.

Objetivos

Se busca comprender el proceso de construcción de territorio campesino impulsado por organizaciones con amplia trayectoria de la lucha por la tierra (reforma agraria), trayectoria que no



se considera excluyente, sino que puede combinar la reivindicación del derecho al territorio y múltiples formas de resistencia. En ese sentido, se indaga principalmente por la forma en que las comunidades campesinas han venido construyendo sus territorios, en un entorno en que sus organizaciones han devenido en dinamizadoras del movimiento campesino, que por demás, confluye en la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC). Serán discutidas otras cuestiones relativas a los alcances y limitaciones de las ZRC como mecanismo de acceso colectivo y/o de redistribución de la tierra y la materialización de autonomía territorial que disputa ordenamientos territoriales hegemónicos, tanto del Estado como del capital.

Con el propósito de realizar un análisis comparativo que permita problematizar la premisa formulada, se caracterizan las condiciones estructurales y contingentes que operaron en el proceso de construcción de territorios campesinos alrededor de la figura de ZRC en regiones distintas, cuyas bases sociales cuentan con reconocida trayectoria de lucha por la tierra. Se seleccionaron dos ZRC para la pesquisa empírica: la ZRC de El Pato-Balsillas, localizada municipio de San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, y la ZRC de Inzá-Tierradentro, localizada en el municipio de Inzá, departamento del Cauca. La primera corresponde a una ZRC, zona tradicional de colonización, constituida y reconocida formalmente por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER). La segunda corresponde a una ZRC de hecho, que apropió la figura para demarcar el territorio campesino frente a la aspiración territorial de ampliación del territorio indígena dentro del municipio de Inzá. El recorte temporal para el estudio de estas dos ZRC fue definido a partir de la creación de las asociaciones campesinas que lideran la constitución y el funcionamiento de las respectivas ZRC; así como las movilizaciones campesinas que condujeron



a las regulaciones institucionales de carácter nacional (Ley 160 de 1994) y a las normas reglamentarias.

Referencias teóricas

Inicialmente se parte de una lectura territorial de la cuestión agraria colombiana con base en la teoría del desarrollo geográfico desigual (Harvey, 2007; Smith, 1984,), así como del debate sobre el desarrollo del capitalismo en el campo (Bartra, 2013; Bernstein, 2011; Martins, 1979, Van Der Ploeg, 2013), los elementos de la geografía agraria sobre la territorialización del capital y las formas de monopolización del territorio campesino por el capital (Oliveira, 1999, 2004) y el análisis del proceso de Territorialización-Desterritorialización-Reterritorialización (T-D-R) del campesinado asociado a sus estrategias de resistencia (Fernandes, 2008, 2009, Haesbaert, 2004, Saquet, 2007). Enfatizo en la potencialidad explicativa del carácter relacional del territorio como conjunto de relaciones histórico-sociales mediadas por el ejercicio de formas de poder, por el cual ocurren los procesos de TDR y la disputa por diferentes ordenamientos territoriales.

Metodología

En términos metodológicos, además de la revisión de fuentes bibliográficas y bases de datos secundarias, la estrategia de producción de la información se soportó en el análisis documental y la realización de entrevistas semiestructuradas a partir de una muestra cualitativamente escogida, según las instituciones, sujetos y periodos involucrados en conformación de las ZRC. El análisis de los contenidos de los documentos y de las entrevistas se codificó en una categorización que parte de bloques temáticos ligados a los referentes teóricos.



Resultados parciales

Es posible afirmar que la territorialización campesina en ZRC es permanentemente ejercida a través de múltiples estrategias, y relacionamientos diferenciados con las instituciones del Estado (municipal, departamental, nacional). En un análisis preliminar se destacan como estrategias estructurantes de las ZRC: el fortalecimiento organizativo que orienta acciones para el ejercicio de autogobierno comunitario de hecho; las acciones para garantizar el acceso a la propiedad privada de la tierra, así como su redistribución interna; las prácticas de economía solidaria, la capacidad de gestión de recursos provenientes de la financiación por parte de agencias internacionales (FAO, PNUD, ACNUR); la afirmación/re-construcción de la identidad territorial (no solo como campesinado, o campesinado-colono, sino como campesinado perteneciente a una ZRC); la actuación en instancias de participación política en el ámbito local de administración del Estado, así como en diferentes redes de organización campesina en los ámbitos regional y nacional. En la discusión de resultados se destacan los conflictos territoriales derivados del ordenamiento jurídico del territorio, de la articulación subordinada al mercado capitalista y de la relativa autonomía territorial.

Referencias bibliográficas

BARTRA, Armando Os Novos Camponeses. Cultura Acadêmica. Coleção Vozes do Campo, 2013.

BERNSTEIN, Henry. Class dynamics of agrarian change. Kumarian Press, 2010.



FERNANDES, Bernardo M. Questão agrária: conflitualidade e desenvolvimento territorial. En: Luta pela terra, reforma agrária e gestão de conflitos no Brasil. Campinas: Editora da Unicamp, 2008, p. 173-224.

FERNANDES, Bernardo M. Sobre a tipologia de territórios. En: Saquet, Aurélio Marcos; Sposito, Eliseu Savério (org). Territórios e territorialidades: teorias, processos e conflitos. São Paulo: Expressão Popular, 2009. pp. 197-215.

HAESBAERT, Rogério. O mito da desterritorialização: do “fim dos territórios” à multiterritorialidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004.

HARVEY, D. “Notes towards a theory of uneven geographical development” en David Harvey, 2006, Spaces of global capitalism, Verso, UK/USA, (págs. 69-116), 2007.

MARTINS, José de Souza. La sujeción de la renta de la tierra al capital y el nuevo sentido de la lucha por la reforma agraria, UNESP, Rio Claro, 1979.

OLIVEIRA, Ariovaldo U. de. A geografia agrária e as transformações territoriais recentes no campo brasileiro. In: CARLOS, Ana F. A. (Org.). Novos caminhos da geografia. São Paulo:Contexto, 1999, p. 63-137.

OLIVEIRA, Ariovaldo U. de. Geografia agrária: perspectivas no início do século XXI. En: OLIVEIRA, Ariovaldo U. de; MARQUES, Marta Inês Medeiros (Org.). O campo no século XXI: território de vida, de luta e de construção da justiça social. São Paulo: Casa amarela; Paz e Terra, 2004, pp. 27-64.

SAQUET, Marcos. Abordagens e concepções de território. São Paulo: Expressão Popular, 2007.



SMITH, Neil. Desenvolvimento Desigual. Rio de Janeiro: Editora Bertrand, 1988.

VAN DER PLOEG, Jan Douwe. Peasants and the art of farming: A Chayanovian manifesto. Fernwood, 2013.

2. AUTONOMIA E LUTA CAMPONESA NO BAIXO PARANAÍBA MARANHENSE, NORDESTE, BRASIL: PROCESSOS DE LUTA E GARANTIA TERRITORIAL EM VIAS DO BEM VIVER

Saulo Barros da Costa
Doutorando em Geografia / PPGEU UFPE
Pesquisador LEPEC / UFPE e GERUR / UFMA
Geógrafo e Agente da Comissão Pastoral da Terra - CPT MA
saulo.barroscosta@ufpe.br

Rosemire Diniz
Graduanda em Ciências Sociais / UFMA
Agente do Conselho Indigenista Missionário
meirecimima@gmail.com

O modelo agrícola exportador nacional possui elementos de homogeneização de territórios e máximo lucro, segundo a exploração de biomas e sujeitos sociais subalternos (SVAMPA, 2011). Desde dos anos de 1990, os extensos plantios de eucaliptos avançam no cerrado maranhense e mata dos cocais, com marcas sobre as recargas hídricas e dinâmica dos modos de vida de povos e comunidades tradicionais maranhenses. O agronegócio que adentra o território do Baixo Parnaíba maranhense nas décadas recentes têm demarcações explícitas e concretas em suas políticas, como na construção oportuna e contingencial de fábricas para transformar saberes e trajetórias em pinos



de eucalipto e *pallets*. Este território é contestado diante os conflitos territoriais e ambientais, mo explicitado nas formas e possibilidades de reprodução camponesa (PAULA ANDRADE, 2012; CPT, 2015). Sujeitos em posições contra-hegemônicas são acionados a disputarem seus territórios, com confrontos diretos e formas resistência, num embate por um modelo de sociedade, segundo suas diversidades identitárias e processos de reprodução social (FOSTER, 2005; FONTES, 2010). O objetivo deste artigo é uma análise da construção territorial coletivas e comuns feita por camponeses no Baixo Paranaíba maranhense com bases na diversidade de modos de vida, práticas, autonomia e do bem viver, em revelia ao modelo de desenvolvimento e aptidão regional para agronegócio de eucalipto, pautado por empresas como a Suzano Papel e Celulose S. A. A resistência concreta camponesa (SCOTT, 2013) possui a dimensão da autonomia e da luta, construída historicamente e materializada em ações que promovem mudanças radicais nas estruturas do Estado. A "lei do bacuri verde" foi aprovado no território da comunidade São Raimundo, município de Urbano Santos, Maranhão, em dezembro de 2012, com base nos princípios: extrativismo coletivo e diversificado; e luta contra o avanço dos plantios de eucalipto nos territórios de comunidades encurraladas multilateral e espacialmente. Esta lei revela a política que estes sujeitos tecem em suas práticas, demarcando seus modos de vida. A força deste processo camponês pautou ao Ministério Público denúncias, que a finalidade da garantia territorial camponesa, como expressão da desobediência autônoma dos resistentes (CRUZ, 2013; PÉREZ, 2015). Em análise, a política de Estado para a transformação do território limitado a 1.635 ha em infindáveis campos agrícolas no cerrado e ausência de fiscalização, segundo as demandas dos sujeitos sociais da comunidade São Raimundo, e também o desmatamento e extrativismo do bacuri verde, gera internamente uma autonomia e formas territoriais de resistência. Os ordenamentos não



escritos nos autos estatais são resultados presentes de tamanha insurgência. No certame ao debate teórico e conceitual, um alargamento das fontes de compreensão dos processos sociais, para além dos conflitos e resistências, se faz necessário, ora visto a contribuição em vias das realidades denunciadas nos choques políticos e ambientais (LITTLE, 2006). Em vias do avanço do capitalismo agrário, o território camponês do Baixo Paranaíba demarca segundo suas representações espaciais de "chapadas" e "baixões", a diversidade de usos e modos de vida de sujeitos, em disputa pelas vias institucionais externas e resistências internas de preservação e uso do cerrado, descrevendo outra polifonia na cartografia das resistências e dos territórios comunitários.

Palavras-chave: resistência camponesa; lei do bacuri verde; Baixo Paranaíba maranhense; territórios em disputa; territórios comunitários; bem viver.

Referências

Comissão Pastoral da Terra - CPT. (2015). **Conflitos no Campo – Brasil 2014**. Goiânia: CPT Nacional.

CRUZ, Valter do. (2013). Das lutas por redistribuição de terras às lutas pelo reconhecimento de territórios: uma nova gramática das lutas sociais? In: ACSELRAD, Henri. (Org.). **Cartografia social, terra e território**. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional.

FONTES, Virgínia. (2010). **O Brasil e o capital imperialismo: teoria e história**. Rio de Janeiro: EPSJV/Editora UFRJ.



FOSTER, John Bellamy. (2005). **A ecologia de Marx: materialismo e natureza**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.

PAULA ANDRADE, Maristela de. (2012). **CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS NO LESTE MARANHENSE: problemas provocados pela atuação da Suzano Papel e Celulose e dos chamados *gaúchos* no Baixo Parnaíba**. São Luís: Universidade Federal do Maranhão, Centro de Ciências Humanas, Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais, Grupo de Estudos Rurais e Urbanos (relatório de pesquisa).

PÉREZ, Mercedes Solá. (2015). **Resistências dos Camponeses do que hoje é SUAPE: entre questões de desenvolvimento e agrárias**. Recife: Programa de Pós-graduação em Geografia, tese de doutoramento (no prelo).

LITTLE, Paul Elliot. (2006). **Ecologia política como etnografia: um guia teórico e metodológico**. Porto Alegre: Horizontes Antropológicos, ano 12, nº 25, pp. 85 - 103, jan/jun.

SCOTT, James C. (2013). **A dominação e arte da resistência**. Discursos ocultos. Lisboa: Livraria Terra Livre.

SVAMPA, Maristella. (2011). “Extractivismo neodesarrollista y Movimientos Sociales ¿Un giro ecoterritorial hacia nuevas alternativas?”. In: LANG, Miriam; MORKRANI, Dunia. (orgs.). **Más allá del desarrollo**. Quito: Ediciones ABYA Ayala/Fundación Rosa Luxemburgo.



3. R-EXISTENCIAS COTIDIANAS, PÚBLICAS Y POR ALIANZAS PRIVILEGIANDO LA VIDA - CAMPESINOS/AS DE LO QUE HOY ES SUAPE (BRASIL) Y DE LA ZONA DE RESERVA CAMPESINA DEL VALLE DEL RIO CIMITARRA (COLOMBIA)²

Mercedes Solá Pérez³

**Universidade Federal de Pernambuco; Laboratório de Estudos e Pesquisas sobre Espaço Agrário e Camponato – LEPEC, Red de Geografía Crítica de Raíz Latinoamericana - GeoRaizAL
mercedessolap@hotmail.com**

Claudio Ubiratan Gonçalves⁴

**Universidade Federal de Pernambuco
birarural@ig.com.br**

En América Latina el renovado ciclo de expropiación y mercantilización de la naturaleza del modelo de producción capitalista, producido por su necesidad permanente de expansión, viene generando conflictos territoriales (SEOANE, 2012) y, contradictoriamente, r-existencias por parte de las comunidades rurales que están siendo despojadas de sus territorios de vida.

² Reflexiones realizadas con base en la tesis de doctorado en Geografía titulada "R-existências dos camponeses/as do que hoje é Suape: justiça territorial, pós-desenvolvimento e descolonialidade pela vida" defendida en el Programa de Postgrado en Geografía de la Universidade Federal de Pernambuco y financiada por la Fundación de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco - FACEPE - Brasil.

³ Doctora en Geografía por la Universidade Federal de Pernambuco, Brasil. Integrante del Laboratório de Estudos e Pesquisas sobre Espaço Agrário e Camponato - LEPEC -, del colectivo de Estudos sobre Conflitos pelo Território e pela Terra - ENCONTTRA -, de la Red del Centro de Estudios de Geografía del Trabajo - CEGeT y de la Red de Geografía Crítica de Raíz Latinoamericana - GeoRaizAL. mercedessolap@hotmail.com

⁴ Profesor Doctor del Departamento de Ciencias Geográficas de la Universidade Federal de Pernambuco, Brasil. Coordinador del Laboratório de Estudos e Pesquisas sobre Espaço Agrário e Camponato - LEPEC - e integrante de la Red de Geografía Crítica de Raíz Latinoamericana - GeoRaizAL. birarural@ig.com.br



Estos procesos de desposesión vienen siendo combatidos a través de diversas estrategias de r-existencias que proponemos identificar en este trabajo a partir de los casos de los campesinos/as de lo que hoy es Suape (Brasil) y de los campesinos/as de la Zona de Reserva Campesina Valle del Rio Cimitarra (Colombia).

Los campesinos/as de lo que hoy es Suape ocupan tradicionalmente 13.500 ha. de tierras entre los municipios de Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca en la costa sur del Estado de Pernambuco, Brasil. Son campesinos/as que desde fines de la década de 1970 están siendo expropiadas de sus territorios por la instalación y ampliación de la empresa pública de derecho privado Suape - Complejo Industrial Portuario Gobernador Eraldo Gueiros (CIPS). Esta empresa aplica diferentes procedimientos para realizar las expropiaciones desde hace más de treinta años y sin embargo hasta el presente momento los campesinos/as continúan viviendo en esas tierras. Esto supone, además de la violencia perpetuada por parte del Estado, la r-existencia permanente de los campesinos/as.

Los campesinos/as de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Rio Cimitarra (ZRC-VRC) tienen un territorio de 500.000 ha. - de las cuales 185.000 ha. son reconocidas legalmente como Zona de Reserva Campesina - en parte de los municipios de Remedios y Yondó (Antioquia) y en parte de los municipios de Cantagallo y San Pablo (Sur de Bolívar) en Colombia (MENDEZ, 2014). Llegaron a la región a partir de la década de 1970 debido a los desplazamientos y r-existen en su territorio frente al contexto de conflicto armado, la presencia paramilitar, la presencia de empresas mineras y entre la legalidad y la ilegalidad de la figura territorial.

En este contexto, entendemos que los campesinos y campesinas - y comunidades rurales en general - no sólo resisten, sino que r-existen en el sentido de recrear su propia existencia permanentemente



(PORTO-GONÇALVES, 2002). Se van reconstruyendo, resignificando su propia existencia social y culturalmente en el territorio siguiendo sus propios parámetros, sus formas de vivir. Esto se da especialmente frente a los conflictos, pero también frente a la vida en sí misma. Se plantean las r-existencias como estrategias de reproducir la vida en el día a día.

Así, proponemos para este trabajo identificar esas diversas estrategias de r-existencia que han ido realizando los campesino/as de lo que hoy es Suape y de la ZRC-VRC y presentar lo que se viene construyendo en torno de las r-existencias.

En estos casos, que podrían ser tantos otros a lo largo de América Latina, identificamos tres tipos de r-existencias: cotidianas, públicas y por alianzas. Las primeras, tienen relación con los discursos ocultos e implican luchas en el día a día de los campesinos/as que hacen/producen/son protagonistas de sus vidas en relación con sus territorios específicos. Las resistencias públicas son colectivas y organizadas, como las huelgas, las manifestaciones, las ocupaciones (SCOTT, 2000). Las resistencias por alianzas consisten en denuncias, actividades de formación y/o acciones de mediadores externos a las comunidades, en estos casos, rurales.

Estas estrategias de r-existencias han sido así sistematizadas a partir de las relaciones que fuimos estableciendo entre las experiencias en los trabajos de campo realizados en ambos territorios y con la revisión de diversos autores/as que abordan la temática, especialmente a partir de premisas decoloniales. Así, buscamos consolidar ese diálogo de saberes entre los sujetos investigados, los investigadores y los autores que teorizan sobre estas cuestiones relativas a las r-existencias.

Concluimos que las experiencias vividas son mucho más complejas que aquello que se puede explicitar en un texto y que son éstas las que nos permiten comprender que la vida se está



planteando, formando, existiendo y r-existiendo día a día en las comunidades rurales. Allí en los territorios los caminos se hacen al andar y los muchos mundos son existentes y posibles. Por eso esas comunidades luchan y r-existen por la tierra, por los territorios, por su reconocimiento político. Porque r-existen por la vida. Por eso hay una apuesta por parte de las comunidades rurales en la autonomía en los territorios, como manera de "conformar otras lógicas de producción, abrir el horizonte de la valoración de la vida, saliendo de la valoración del capital (PRADA ALCOREZA, 2012, p. 181). Porque hay r-existencias, porque hay vida.

Referencias

MÉNDEZ BLANCO, Yenli Angélica. Derecho de los campesinos al territorio, justicia y Zonas de Reserva Campesina, la experiencia del Valle del río Cimitarra. Bogotá: Ántropos, 2014.

PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. A globalização da natureza e a natureza da globalização. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006

SCOTT, James. C. Los dominados y el arte de la resistencia. Discursos ocultos. México: Era, 2000.

SEOANE, J. Neoliberalismo y ofensiva extractivista: Actualidad de la acumulación por despojo, desafíos de Nuestra América. THEOMAI 26, 2012.



4. BANCO DE DADOS DA LUTA PELA TERRA: DEZ ANOS DE PESQUISA SOBRE A QUESTÃO AGRÁRIA EM MINAS GERAIS - BRASIL

Otavio Augusto Oliveira⁵

Universidad Federal de Triângulo Mineiro (UFTM)

Otavio.oapp@gmail.com

Fabiana Borges Victor⁶

Universidad Federal de Uberlândia (UFU)

fabianabvictor@yahoo.com.br

Introdução

O Banco de Dados da Luta pela Terra – DATALUTA é um projeto de extensão e pesquisa (iniciação científica e pós-graduação) desenvolvido em parceria por diferentes grupos de pesquisa de universidades públicas brasileiras, envolvidos na análise da questão agrária e da luta pela terra promovida pelos movimentos socioterritoriais. Em Minas Gerais, esse projeto é desenvolvido desde 2005, e assim destacamos sua importância nesses dez anos de investigação onde busca-se manter em discussão os problemas agrários ainda enfrentados pela população do campo brasileiro.

Ao todo, nove instituições de ensino superior se articulam neste projeto abrangendo dados de todo o território nacional. Esses dados são coletados, sistematizados e disponibilizados pelos pesquisadores

⁵ Graduação em Geografia, Universidade Federal do Triângulo Mineiro-UFTM. E-mail: otavio.oapp@gmail.com.

⁶ Mestrado em Geografia, Universidade Federal de Uberlândia-UFU. E-mail: fabianabvictor@yahoo.com.br.



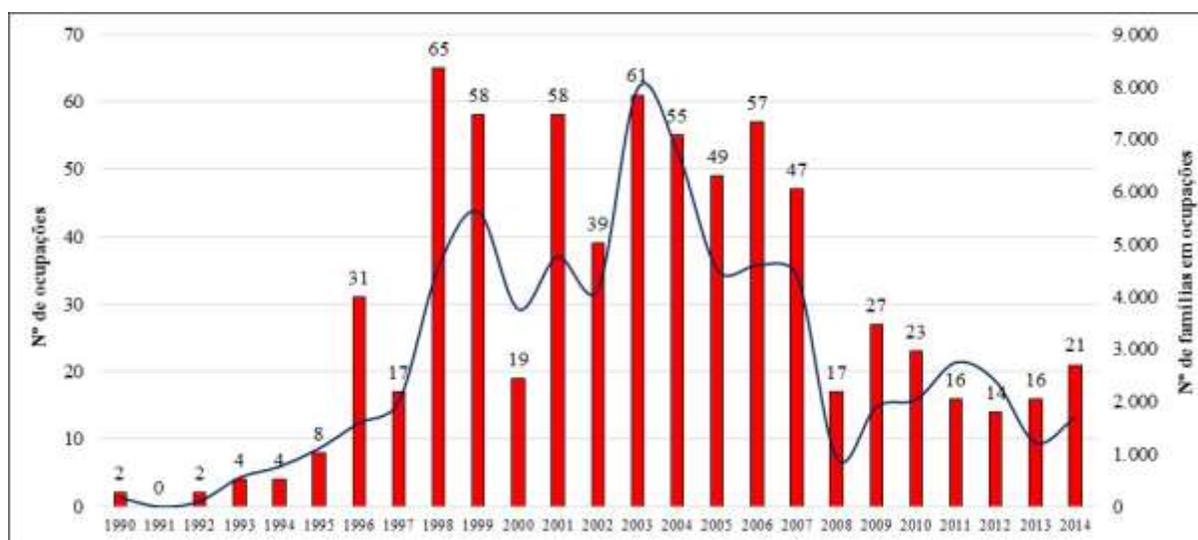
a partir das categorias *ocupações de terras, assentamentos rurais, estrutura fundiária, manifestações e movimentos socioterritoriais*, categorias estas que conformam um quadro geral da realidade do campo e dos diferentes processos e transformações da questão agrária brasileira, e particularmente no estado de Minas Gerais. O banco de dados e os resultados das pesquisas têm sido usados para acompanhar e analisar a atuação dos movimentos socioterritoriais que lutam pela terra no Brasil, bem como as ações do Estado ao lidar com esta questão a partir de políticas públicas, além de identificar o avanço e consolidação do agronegócio no campo e a ainda evidente concentração de terras.

Elementos da questão agrária em Minas Gerais a partir do DATALUTA

Nesse processo, a ocupação é a forma mais importante de acesso à terra e enfrentamento contra a concentração fundiária, além de exercer a necessária pressão ao governo para efetivar a distribuição de terras e viabilizar a reforma agrária, vista principalmente pelos movimentos como fundamental ao desenvolvimento tanto do país quanto da população, especialmente as diretamente envolvidas neste contexto. Conforme Fernandes (2001), por meio da ocupação os sem-terra intensificam a luta, e impõem ao governo a realização de uma política de assentamentos rurais. Ainda segundo o mesmo autor, é preciso destacar que a ocupação é uma ação decorrente de necessidades e expectativas, onde os trabalhadores desafiam o Estado, que por sua vez só apresenta políticas sob intensa pressão dos trabalhadores. Assim, a ocupação é a defesa dos interesses dos trabalhadores, a fim de desapropriar o latifúndio, assentar as famílias, produzir e reproduzir o trabalho familiar, garantir políticas agrícolas para o desenvolvimento da agricultura camponesa e políticas destinadas aos direitos básicos da cidadania.

Sendo assim, durante o desenvolvimento do DATALUTA nestes últimos dez anos, os dados obtidos garantem afirmar a importância das ocupações de terras no estado de Minas Gerais para a continuidade da luta e conquista do acesso à terra pelos movimentos socioterritoriais, como demonstra o Gráfico 1 a seguir.

Gráfico 1 - Minas Gerais: Número de ocupações de terras e de famílias, 1990-2014



Fonte: DATALUTA, 2014.

Os números de ocupações e de famílias são referentes a 1990-2014, período que se tem a sistematização dos registros. Assim, o gráfico destaca a atuação dos movimentos socioterritoriais por meio das ocupações de terras, que registra um aumento em meados da década de 90 de forma a pressionar o governo na desapropriação de terras e efetivação da Reforma Agrária, e que se mantém considerável até o ano de 2014. Uma vez que o Estado não atende a demanda por terra das famílias, os conflitos permanecem e as ocupações continuam. Essa continuidade é uma forma de

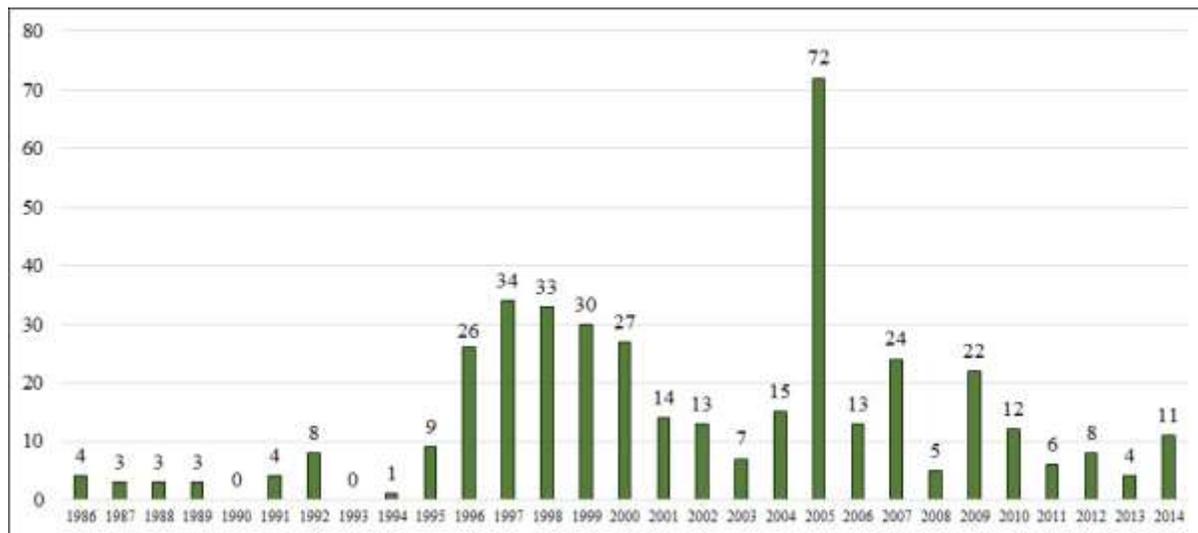


cobrar e garantir o assentamento das famílias, e fortalecer a posição contrária ao desenvolvimento desigual no campo.

Além disso, o estado de Minas Gerais possui uma economia fortemente influenciada pelo agronegócio, como é o caso da produção de cana-de-açúcar no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba. Nestas regiões especificamente é registrado maior número de ocupações devido à alta concentração fundiária, revelando o enfrentamento direto entre o agronegócio e os movimentos que lutam pela terra.

Destaca-se que o assentamento rural é o principal resultado das ocupações, visto que o acesso à terra e permanência é o objetivo primeiro dos movimentos envolvidos. Assim, os dados obtidos pelo DATALUTA revelam que o número de assentamentos criados está relacionado ao número de ocupações, o que demonstra a eficácia dessa estratégia de ação. Evidenciamos essa análise a partir do Gráfico 2 abaixo.

Gráfico 2 – Minas Gerais: Número de assentamentos rurais, 1986-2014





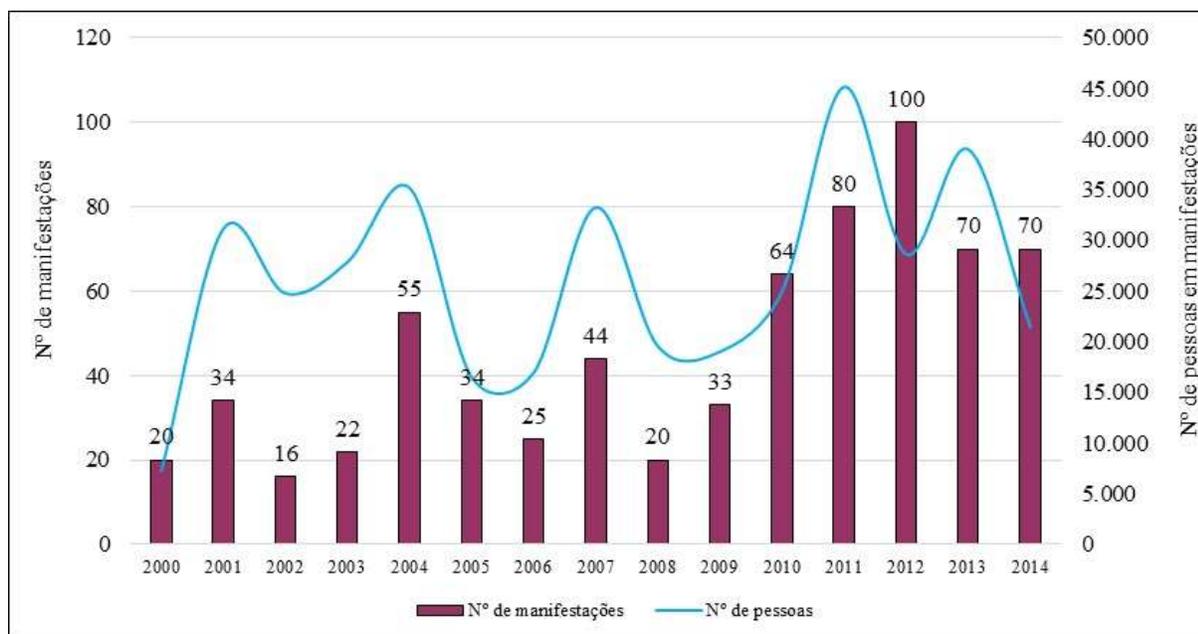
Fonte: DATALUTA 2014.

É no assentamento, fração do território conquistada na luta pela reforma agrária, que se recriam as relações sociais do campo. Trata-se da territorialização daqueles que buscam a redistribuição da terra. Para Fabrini (2010), os assentamentos de reforma agrária destacam-se como importante território camponês em que as novas e antigas sociabilidades são restabelecidas a partir da conquista da terra, onde um conjunto de saberes são recriados e recuperados como estratégias de existência pela resistência dos camponeses.

Importante ainda sinalizar que, com a conquista do assentamento rural inicia-se nova luta pela permanência na terra, garantindo a reprodução do modo de vida e trabalho camponês nesse território conquistado (COCA, 2011). Desse modo, segundo o autor, aos assentados a partir dos movimentos socioterritoriais cabe buscar melhores condições de vida e trabalho, tais como educação, saúde, lazer, energia elétrica, estradas para escoamento da produção, créditos produtivos, entre outros.

Em busca dessas melhores condições que garantam a permanência na terra, além da terra como reivindicação, é que o DATALUTA identificou a importância das manifestações de luta pela terra, entendidas também como uma dimensão da questão agrária. Assim, nesse período de pesquisa os dados obtidos corroboram nosso entendimento, conforme o Gráfico 3 seguinte.

Gráfico 3 – Minas Gerais: Número de manifestações e de pessoas, 2000-2014



Fonte: DATALUTA 2014.

Os dados representados no gráfico foram sistematizados a partir do ano 2000, e representam a expressiva atuação dos movimentos socioterritoriais nos atos públicos que revelam a pertinência dos problemas no campo. Expressiva também é a quantidade de pessoas que se mobilizam nessas estratégias de ação.

Vale destacar que os movimentos mais atuantes no estado mineiro são o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST, Movimento de Libertação dos Sem Terra - MSLT, Movimento Terra, Trabalho e Liberdade – MTL, dentre outros, promovendo tanto as ocupações de terras quanto as manifestações.

Por sua vez, compreendemos por manifestação os públicos em um ou várias locais com a participação de organizações sociais, camponesas e do agronegócio caracterizadas por passeatas,



ocupações de prédios públicos e privados, bloqueio de rodovias, formação de acampamentos em praças, protestos, entre outros. A partir destes atos públicos os integrantes dos movimentos reivindicam diferentes políticas públicas, repudiam os atos do governo que atendem sobremaneira os interesses do capital, e principalmente cobram o cumprimento dos acordos a garantia dos direitos destes trabalhadores do campo. Dentre as demandas expressas nas reivindicações, destacamos o crédito, incentivos à pequena produção, assistência técnica, renegociação de dívidas, denúncia da violência no campo, entre outros. Enfim, por diferentes objetivos é que as organizações coletivas saem às ruas.

Considerações finais

Destacamos aqui a importante contribuição do Banco de Dados da Luta pela Terra – DATALUTA para a pesquisa, debate e disponibilização dos elementos que configuram a questão agrária brasileira, e especificamente do estado de Minas Gerais. Por meio do trabalho desenvolvido pelas diferentes instituições de ensino, considerando dez anos desse envolvimento, é possível compreender a territorialização e as dinâmicas da luta pela terra, e do mesmo modo contribuir com o debate sobre as transformações ocorridas no campo.

Em Minas Gerais esse contexto se revela expressivo, demonstrando a permanência dos conflitos no campo, e o enfrentamento entre os movimentos socioterritoriais e o agronegócio, fator que faz afirmar a necessidade e continuidade da pesquisa. Por fim, entendemos a luta pela terra como um instrumento de mudança social, que envolve a garantia da produção de alimentos, bem como dos direitos básicos da população como um todo, do campo e da cidade.

Referências



COCA, Estevan Leopoldo de Freitas. Um estudo da diversidade e atualidade da reforma agrária: análise dos tipos de assentamentos do Território Cantuquiriguaçu - estado do Paraná. 231f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Geografia, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente, 2011.

DATALUTA, Banco de Dados da Luta pela Terra. Relatório 2014 - Minas Gerais. LAGEA – Laboratório de Geografia Agrária – IG/UFU. Coordenação: CLEPS JUNIOR, João. Uberlândia, Minas Gerais. Novembro de 2015.

FABRINI, J. E. O campeisinato frente à expansão do agronegócio e do agrocombustível. In: SAQUET, M. A.; SANTOS, R. A. (Org.). Geografia agrária, território e desenvolvimento. 1 ed. São Paulo: Expressão Popular, 2010, v. 1, p. 126-151.

FERNANDES, Bernardo Mançano. Questão agrária, pesquisa e MST. São Paulo: Cortez Editora, 2001.

FERNANDES, Bernardo Mançano. Movimento social como categoria geográfica. In: Terra Livre, São Paulo, n.15, p.59-85, 2000.

VICTOR, Fabiana Borges. Da resistência à conquista da terra: as formas de manifestações de luta pela terra em Minas Gerais. Monografia. Instituto de Geografia, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2013. 89p.



SESIÓN 2

Hora: 2:00pm – 4:00pm

Salón: E- 206

Responsables:

- **Coordinador(a) de mesa: Luis Felipe Rincón**
- **Comentarista: Natalia Espinosa Rincón**

5. RESISTÊNCIA CAMPONESA, BATALHAS POR TERRA, TERRITÓRIO E BENS NATURAIS DO BICO DO PAPAGAIO – BRASIL

Mariana Leal Conceição Nóbrega⁷
Universidad Estatal de Campinas (UNICAMP)
alemdalogica@yahoo.com.br

Débora Assumpção e Lima⁸
Universidad Estatal de Julio de Mesquita Filho (UNESP)
deborassumpcaolima@gmail.com

⁷ Agrônoma e doutoranda do Departamento de Geografia, Instituto de Geociências (IG) – UNICAMP. alemdalogica@yahoo.com.br. Desenvolve pesquisa relacionada a processos de resistência camponesa cujo trabalho foi intitulado “Geografia das Resistências: Batalhas Camponesas do Século XXI – Processos de Lutas, Articulação e Mobilização Social na Mesorregião do Bico do Papagaio.

⁸ Geógrafa e doutoranda do Departamento de Geografia, Instituto de Geociências (IG) – UNICAMP. deborassumpcaolima@gmail.com. A pesquisadora denominou seus estudos “Círculo espacial Produtivo de Grãos: Produção Agrícola Moderna e Acumulação de Capital na Amazônia” cujo objetivo é analisar os avanços da produção de grãos na fronteira agrícola moderna localizada na Amazônia Legal.



Introdução

O presente estudo tem como tema central o processo de resistência camponesa no Brasil, especialmente na mesorregião denominada Bico do Papagaio⁹. Resistência no sentido de opor-se, fazer face, conservar-se firme, não sucumbir, recusar-se, negar-se. E nesse sentido o campesinato¹⁰ brasileiro, é um excelente referencial teórico e empírico, na medida em que ele apresenta distintas formas de resistências ao longo dos diversos momentos históricos que estiveram envolvidos. Tais processos de resistência se expressam a partir de seus modos de vida peculiares associados as suas atividades produtivas, aos seus costumes, aos seus ritos e as suas festas. A organização e a mobilização política deste grupo social também constituem formas de resistência bastante significativas. No entanto, os processos de resistências camponesas sempre foram violentamente reprimidos no Brasil, seja pelo aparato estatal, seja pelos interesses do capital, estes

⁹ A mesorregião do Bico do Papagaio é constituída no Sudoeste Maranhense pelos municípios de Imperatriz, Açailândia, Amarante do Maranhão, Buritirana, Cidelândia, Davinópolis, Governador Edison Lobão, Itinga do Maranhão, João Lisboa, Lajeado Novo, Montes Altos, Ribamar Fiquene, São Francisco do Brejão, São Pedro da Água Branca, Senador La Roque e Vila Nova dos Martírios; no extremo norte do Tocantins pelos municípios de Aguiarnópolis, Ananás, Angico, Araguatins, Augustinópolis, Axixá do Tocantins, Buriti do Tocantins, Cachoeirinha, Carrasco Bonito, Darcinópolis, Esperantina, Itaguatins, Luzinópolis, Maurilândia do Tocantins, Nazaré, Palmeiras do Tocantins, Praia Norte, Riachinho, Sampaio, Santa Terezinha do Tocantins, São Bento do Tocantins, São Miguel do Tocantins, São Sebastião do Tocantins, Sítio Novo do Tocantins e Tocantinópolis; No Sul Paraense representado pelos municípios que estão espalhados em seis diferentes microrregiões: Paragominas (Abel Figueiredo, Bom Jesus do Tocantins e Rondon do Pará), Parauapebas (Água Azul do Norte, Canaã dos Carajás, Curionópolis, Eldorado dos Carajás e Parauapebas,), Marabá (Brejo Grande do Araguaia, Marabá, Palestina do Pará, São Domingos dos Araguaia e São João do Araguaia), Redenção (Pau D'Arco, Piçarra, Redenção, Rio Maria, São Geraldo do Araguaia, Sapucaia e Xinguara), Conceição do Araguaia (Conceição do Araguaia e Floresta do Araguaia) e Tucuruí. (Itupiranga, Jacundá e Nova Ipixuna)

¹⁰ O professor Teodor Shanin em seus estudos nos conta que “as comunidades camponesas demonstram uma real habilidade para se ajustar a novas condições e também uma grande flexibilidade para encontrar novas formas de se adaptar e ganhar a vida. Em alguns lugares, há comunidades de camponeses que hoje vivem principalmente do turismo. Há lugares onde as comunidades camponesas ganham a vida com novos métodos de produção e, em outros, os camponeses ganham a vida por meio da combinação do trabalho camponês e do trabalho não-camponês” (SHANIN, 2008: 24-25)



últimos, materializados em grandes grupos econômicos. Ou ainda, como é muito comum acontecer, pela associação desses dois agentes econômicos.

A organização camponesa no Brasil por meio de suas batalhas - Trombas e Formoso – GO; Movimento dos Agricultores Sem Terra – MASTER/RS; Região de Pindaré – MA - entre tantos outros processos de resistência camponesa ocorridas em diversas regiões demonstra a força deste processo de empoderamento político camponês, que a todo custo sempre foi invisibilizado pelas classes dominantes com claro apoio Estatal que até os dias atuais se utiliza de seus aparatos jurídicos e de seus instrumentos repressores para desmobilizar, desqualificar e eliminar os camponeses como atores políticos da história desse país.

A partir da segunda metade do século XX, o processo de colonização ressurgiu com maior força na Amazônia como ferramenta política, de planejamento e de desenvolvimento regional pautada na sua integração e modernização ao restante do território brasileiro. Os planos implementados na década de setenta e oitenta intensificaram as transformações na formação econômico-social da Amazônia e, em espaços delimitados, observam-se, em profundidade, mudanças sociais e ambientais, especialmente nas regiões escolhidas para implementar os projetos de infraestrutura, mineração, agropecuária agroindustriais e colonização.

A mesorregião do Bico do Papagaio se constitui em uma área de confluência dos rios Araguaia-Tocantins e região de fronteira entre os estados do Pará, Maranhão e Tocantins, o Bico do Papagaio nas décadas de 1960/70 do século passado, significou o acesso para a toda a Amazônia Legal constituindo-se numa região de intensos conflitos envolvendo camponeses, grileiros e fazendeiros durante todo o Regime Militar (1964-1985). Integra 66 municípios do norte do Tocantins (25), Sul do Pará (25) e Sudoeste do Maranhão (16), estados integrantes da Amazônia Legal.



Entretanto, a questão fundiária era um problema de segurança nacional, justificando o temor de uma possível politização do camponês. Essa preocupação com a região acabou sendo ainda mais intensa com o episódio da Guerrilha do Araguaia (1972-1974), organizada pelo PC do B (Partido Comunista do Brasil). Os integrantes do PCdoB desejavam implantar o comunismo no Brasil, principiando o movimento pelo campo, analogamente do que já ocorrera na China e em Cuba. O local das operações se deu no Bico do Papagaio, região onde os estados de Goiás, Pará e Maranhão fazem fronteira. O nome foi dado por se localizar as margens do rio Araguaia, próximo às cidades de São Geraldo e Marabá no Pará e de Xambioá, no norte de Goiás, hoje norte do Tocantins.

A falta de justiça com relação às atrocidades cometidas em 1974 tem uma conexão com a impunidade que sustenta a violência e os abusos que hoje assombram a região. Episódio histórico capital, o remate da guerrilha foi uma atroz operação de extermínio, com execuções e decapitações de prisioneiros. Torturas foram impostas a centenas de pessoas suspeitas de ligação com os guerrilheiros. E quem são eles, onde estão esses torturadores e executores que aparecem nos relatos dos torturados? E depois, em virtude da guerrilha, o governo, movido pela doutrina da segurança nacional, pintou a região com a cor vermelha do comunismo. Avesso ao movimento camponês e para promover um desenvolvimento que os excluía, decidiu ocupar a região com grandes fazendas de criação de gado. Então, sob a divisa segurança e desenvolvimento e empregando altissonantes enunciados, tais como “vamos inundar a Amazônia com civilização”, o governo pôs em marcha uma série de grandes projetos. Efetivamente muitas barbaridades foram cometidas (PEIXOTO, 2014: 48).

No II PND projetou-se o futuro da Amazônia baseado no desenvolvimento de meios de transporte e comunicação, expansão de atividades de exportação (carne, madeira, minerais) e a concentração de investimentos, de conformidade com Programa de Pólos da Amazônia (POLOAMAZONIA). Posições públicas criticavam a “ocupação predatória dos pequenos” e justificavam priorizar agentes econômicos e políticos com capacidade de reafirmar este direcionamento da política. É assim que o II Plano Nacional de Desenvolvimento (1974-1979) define algumas estratégias empresariais e inaugura a intervenção dos denominados “grandes projetos” como o Programa Grande Carajás.



A mesorregião do Bico do Papagaio¹¹ apresenta nuances históricos marcados por conflitos sociais, sobretudo no que tange à questão fundiária, devido ao nível acentuado de concentração de terras. A década de noventa do século passado registrou os maiores índices de violência no campo, por outro lado no mesmo período, foi registrado uma expansão de mobilizações de segmentos camponeses que resultou em ocupações de terra, como forma de pressão para a implementação de uma política de reforma agrária do Estado.

Os confrontos entre fazendeiros e camponeses pelo uso da terra e manejo de bens naturais, geraram muitos conflitos e mortes ao longo das décadas de 1970, 1980 e 1990, transformando a Região Bico do Papagaio num dos principais palcos de tensão agrária do país. A construção de Brasília e a abertura e pavimentação da rodovia Belém–Brasília nos anos 50 e 60, deu impulso à sua ocupação com atividades agropecuárias e extrativistas tradicionais. Conforme SADER (1986), a mesorregião do Bico do Papagaio é marcada por uma história de confrontação de duas forças fundamentadas em racionalidades distintas: a do campesinato, cuja terra se constitui seu meio de reprodução social e cujo produto se realiza também como mercadoria de um complexo circuito comercial e a do proprietário capitalista cuja terra se constitui única e exclusivamente em mercadoria.

Conforme Peixoto (2008) a atrocidade impune que vigora até hoje no Bico do Papagaio tem suas raízes na repressão à guerrilha, à medida que se naturalizou uma sucessão de eventos bárbaros infligidos aos camponeses, entendidos pelos militares como ameaça comunista. A repressão molestou a população local, eliminou roçados, humilhou e torturou moradores no campo de

¹¹ A mesorregião do Bico do Papagaio é instituída oficialmente pelo governo brasileiro através do Decreto nº 6.047, de 22 de fevereiro de 2007 que Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Regional – PNDR.



concentração que foi a base militar de Xambioá (TO). O autor narra que adotando o modelo das forças oficiais de repressão, a atitude abusiva e extremamente violenta de particulares contra a reforma agrária instalou sua guerra particular em nome nas palavras de Peixoto do “inalienável direito à propriedade”. Antigos donos de castanhais imputando direitos ilegítimos, novos fazendeiros trazidos pelos profusos incentivos da SUDAM, grileiros em conluio com cartórios de registro de terras, traduzidos em elite local se armou de pistoleiros e assumiu para si a incumbência de frear o avanço dos camponeses.

A intenção neste estudo é discutir processos de resistência camponesa por meio da luta pela terra, disputa por território e mais recentemente por riquezas naturais através dos Cadernos de Conflito no Campo da Comissão Pastoral da Terra- CPT¹² no período de 1985 a 2015 na mesorregião do Bico do Papagaio e ainda apresentar o caso das quebradeiras de coco babaçu do Povoado Petrolina, situado no Município de Imperatriz, estado do Maranhão, relacionado à resistência que empreendem na defesa de suas identidades e, sobretudo na luta que realizam em defesa dos babaçuais.

Dessa forma, somando-se a esta sessão apresentamos este estudo em 5 sessões. A próxima sessão trata dos conflitos que foram registrados no campo na mesorregião do Bico do Papagaio no século 20 no período de 1985 a 1999. Serão analisadas as tabelas que foram elaboradas a partir dos cadernos de conflitos no campo da Comissão Pastoral da Terra - CPT que demonstram os conflitos

¹² A Comissão Pastoral da Terra (CPT) foi criada em junho de 1975, durante o Encontro de Pastoral da Amazônia, convocado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), e realizado em Goiânia (GO). Fundada em plena ditadura militar, como resposta à grave situação dos trabalhadores rurais, posseiros e peões, sobretudo na Amazônia, a CPT tem um importante papel no Brasil. Ligada à Igreja Católica porque a repressão estava atingindo muitos agentes pastorais e lideranças populares, e também, porque a igreja possuía certa influência política e cultural. Informação disponível em <http://www.cptnacional.org.br/index.php/quem-somos/-historico>, acesso em 31.03.2016.



e as reações frente a violência e violação dos direitos dos camponeses. Na terceira sessão atualizamos esses conflitos por meio de análise de dados compilados também pelos cadernos do campo da CPT no período de 2000 a 2015. Por questões de limitações deste modelo de apresentação de estudos não traremos todos os dados que já foram compilados. Na quarta sessão discutiremos processos de resistência camponesa frente aos desmandos de um estado repressor e de uma elite local. E ainda mais recentemente frente às pressões derivadas da implantação de projetos de investimentos e de infraestrutura de grandes grupos hegemônicos, especialmente aqueles associados aos monocultivos de eucaliptos que obtiveram expressivo crescimento na ocupação de áreas e de produção nas últimas décadas na região ora apontada. Como já indicamos no resumo enviado para este evento, recorreremos ao caso das quebradeiras de coco babaçu do Povoado Petrolina, situado no Município de Imperatriz, estado do Maranhão. Assim como Martins (1991), recorreremos ao caso das quebradeiras de coco “não para ilustrar, mas para situar a reflexão” (MARTINS, 1991: 15) que empreendemos sobre esse processo de resistência camponesa na região do Bico do Papagaio. E na quinta e última sessão, faremos as considerações que não avaliamos como conclusivas, mas que podem ser perspectivas e indicativos de como o processo de resistência camponesa passa por diversos momentos de transformação se reinventa e não cessa frente dinâmica da expansão do agronegócio brasileiro que não somente busca se apropriar das terras camponesas, mas dos territórios e riquezas naturais dos ecossistemas envolvidos.

O Estado de Guerra: Conflitos entre Camponeses e Latifundiários no período de 1985 a 1999.

Assim como no caso dos camponeses do México analisado por Warman (1984) os camponeses do Bico do Papagaio tem como elemento central de suas mobilizações e articulações sociais a luta pela terra. A questão agrária continua sendo a principal bandeira de luta desses movimentos sociais



camponeses. As revoluções camponesas que ocorreram no século XX (México, China, Cuba, Nicarágua) configuram-se como importantes processos de transformações sociais conduzidas por esses atores.

Não referimos-nos sobre camponeses isolados com missões religiosas e tão somente ocupados com sua atividade produtiva, mas especialmente camponeses que atuam coletivamente, são integrantes de organizações e movimentos que articulam e coordenam ações que se contrapõem ao modelo vigente. São protagonistas de batalhas que foram responsáveis por transformações da realidade agrária brasileira.

Em geral, quando se estuda camponeses, esses são vistos como parte de problemas agrários, rurais e agrícolas. Poucas vezes os pensam como atores políticos (CASANOVA, 1984). Esta é uma incursão pela história desses camponeses que vivem em um cenário conflituoso de extrema violência e violações aos direitos humanos. A violência a que são submetidos, é sempre um cenário atual, a exemplo do camponês Raimundo Santos Rodrigues¹³ morador e conselheiro da Reserva Biológica do Gurupi, Bom Jardim, Maranhão, assassinado em 25 de agosto de 2015.

A primeira publicação da CPT em 1985 foi denominada de “relatório de conflitos” e apresentava como objetivo principal a denuncia as graves violações aos direitos humanos dos camponeses brasileiros, apresentando dados (ainda que como apontava o relatório – não expressasse a realidade em sua totalidade) em números e nomações de criminosos e vítimas. Neste ano, a CPT

¹³ Raimundo Santos Rodrigues era membro do Conselho da Reserva Biológica do Gurupi e era bastante atuante na defesa dos bens naturais dos ecossistemas envolvidos da região. Estava acompanhado da esposa, que foi atingida por tiros e levada ao Hospital Municipal de Imperatriz, a 412 km de distância de Bom Jardim. Informação disponível em: <http://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2015/08/conselheiro-da-reserva-biologica-do-gurupi-no-ma-e-assassinado.html>, acesso em 22.09.2015.



classificou 8 tipos de conflito no campo brasileiro que foram intitulados de: terra, boia-frias, trabalhistas, sindical, seca, garimpo, agrótóxicos e outros. Tinha como fonte de levantamento próprio colhidas Para efeitos deste artigo, utilizamos dados relacionados a terra.

A pesar de que no Brasil no ano de 1985 iniciou um novo ciclo na política e no regime governamental, com o que foi denominado na época de “nova república”, a CPT indicava a existencia de um processo que ocorria no campo brasileiro de extrema e avassaladora violencia envolvendo trabalhadores rurais, indios, e agentes da igreja católica. Esse processo foi denominado de “estado de guerra”¹⁴ baseado nos números de conflitos que culminavam no aumento de assassinatos de lideranças camponesas. Os estados do Maranhão, Pará e Goiás apresentavam os maiores números conforme segue na tabela abaixo:

Tabela 01: Conflitos no Campo – Bico do Papagaio/ Brasil (1985-1999)¹⁵

ANO	PAÍS / UF	QUANTIDADE	%	FAMÍLIAS	ÁREA	ASSASSINATOS
1985	BRASIL	636	100%	86.854	9.557.902	216
	PARÁ	84	13%	13.191	2.012.787	54
	MARANHÃO	71	11%	14.717	435.965	19
	GOIÁS	61	10%	2.850	401.283	13
1986	BRASIL	634	100%	118.481	12.615.847	89
	PARÁ	80	13%	6.404	829.871	12
	MARANHÃO	52	8%	47.183	1.396.006	6
	GOIÁS	52	8%	1.334	202.598	8
1987	BRASIL	582	100%	133.435	17.633.879	109
	PARÁ	58	10%	0	0	35
	MARANHÃO	78	13%	0	0	12
	GOIÁS	42	7%	0	207.660	7
1988	BRASIL	621	100%	80.747	19.973.897	93

¹⁴ A CPT conceitua “estado de guerra” indicando a violência imposta aos camponeses por proprietários de terra e Estado e a resistência travada por esses grupos sociais frente ao processo de violência que vivenciavam.

¹⁵ Esta tabela foi organizada a partir dos dados da CPT que trata sobre conflitos de terras com especificidade nos dados das tabelas de “violência contra ocupação e posse” e dados das tabelas “violência contra a pessoa”.



	PARÁ	88	14%	2.837	1.378.519	17
	MARANHÃO	43	7%	4.761	469.514	7
	GOIÁS	23	4%	1.143	103.372	1
	TOCANTINS	22	4%	1.585	221.896	4
1989	BRASIL	500	100%	3.907	14.480.254	56
	PARÁ	66	13%	2.447	923.833	9
	MARANHÃO	26	5%	4.194	280.976	6
	TOCANTINS	34	7%	1.279	138.639	1
1990	BRASIL	401	100%	38.310	13.835.756	75
	PARÁ	55	14%	4.413	1.021.576	19
	MARANHÃO	35	9%	5.652	145.823	8
	TOCANTINS	32	8%	2.387	411.412	2
1991	BRASIL	383	100%	48.439	7.037.722	49
	PARÁ	47	12%	8.326	863.587	14
	MARANHÃO	36	9%	3.389	1.552.915	13
	TOCANTINS	33	9%	1.310	150.327	1
1992	BRASIL	361	100%	30.845	5.692.211	35
	PARÁ	40	11%	4.650	519.208	13
	MARANHÃO	44	12%	2.393	197.627	7
	TOCANTINS	32	9%	698	147.157	1
1993	BRASIL	361	100%	50.447	3.221.252	42
	PARÁ	53	15%	823	433.032	19
	MARANHÃO	29	8%	4	215.392	5
	TOCANTINS	38	11%	101	194.027	5
1994	BRASIL	379	100%	47.500	1.819.963	47
	PARÁ	35	9%	2.731	165.463	12
	MARANHÃO	33	9%	4.601	131.194	8
	TOCANTINS	39	10%	2.640	162.129	0
1995	BRASIL	440	100%	63.692	3.250.731	39
	PARÁ	38	9%	6.708	331.703	14
	MARANHÃO	20	5%	2.097	47.494	3
	TOCANTINS	9	2%	314	19.248	2
1996	BRASIL	653	100%	96.298	3.395.657	46
	PARÁ	63	10%	8.286	195.733	33
	MARANHÃO	29	4%	3.674	180.717	4
	TOCANTINS	14	2%	826	29.108	0
1997	BRASIL	658	100%	95.421	3.034.706	29



	PARÁ	60	9%	13.151	424.553	12
	MARANHÃO	17	3%	2.336	56.714	1
	TOCANTINS	22	3%	1.122	76.719	0
1998	BRASIL	751	100%	132.518	4.060.181	38
	PARÁ	37	5%	13.872	328.175	12
	MARANHÃO	19	3%	1.585	647.591	4
	TOCANTINS	8	1%	526	4.498	2
1999	BRASIL	870	100%	107.244	3.683.020	27
	PARÁ	86	10%	13.615	1.187.349	9
	MARANHÃO	16	2%	1.095	120.859	1
	TOCANTINS	13	1%	464	11.103	0

Fonte: Cadernos de Conflitos no Campo do Brasil da Comissão Pastoral da Terra. Org.: Nóbrega, 2016

Nos interessa especialmente analisar o conflito relacionado a terra¹⁶, referente as violações contra a ocupação, uso e posse da terra pelos camponeses. Na década de 1980 do século passado no período de 1985 a 1989 verifica-se que o número de conflitos dos estados que compõem a mesorregião do Bico¹⁷ correspondem a uma média de 30 % do total de conflitos registrados no país. Chama a atenção ainda o número de assassinatos. Neste mesmo período do universo de 553 assassinatos no Brasil, 217 ocorreram no Bico, o que representa um percentual de 39, 24% do total de mortos no Brasil naquele período.

É importante registrar que a partir das lutas que ocorreram entre camponeses e os ditos grandes proprietários de terras que também podem ser denominados de usurpadores ou grileiros de terras que originalmente pertenciam aos povos camponeses e indígenas, é clarificada na história do país,

¹⁶ Para a CPT o conceito de conflitos é relacionado “as ações de resistência e enfrentamento que acontecem em diferentes contextos sociais no âmbito rural envolvendo a luta pela terra, água, direitos e pelos meios de trabalho ou produção. Estes conflitos acontecem entre classes sociais, entre os trabalhadores ou por causa da ausência ou má gestão de políticas públicas. Os conflitos são catalogados em conflitos por terra, conflitos pela água, conflitos trabalhistas, conflitos em tempos de seca, conflitos sindicais e conflitos em áreas de garimpo.” (CPT, 2004, p.218).

¹⁷ O estado do Tocantins foi criado em 1988, hoje os municípios que compõem a região norte do referido estado que compõem a mesorregião do Bico do Papagaio até 1987, pertenciam unidade federativa do estado do Goiás.



o entendimento do camponês enquanto classe. Para Marques (1994), o campesinato é uma classe social que pode ser entendida a partir do seu modo de vida. Esta classe é fundamental na sociedade capitalista mesmo de forma subordinada, pois ao mesmo tempo em que serve aos interesses capitalistas também lhe é contraditório.

Após o período dos governos militares, ocorreram no Bico em meados dos anos de 1980, intensas disputas pela terra e com a formação de oposições pela disputa da direção dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais (STR's), envolvendo lideranças de trabalhadores e trabalhadoras rurais e os denominados "pelegos" que ocupavam os espaços dos sindicatos e não representavam a classe de forma legítima.

No Maranhão, o expediente mais usado para apropriação indébita de terras continua sendo a grilagem¹⁸, processo esse com íntima relação com projetos de desenvolvimento alicerçados na ideologia de “segurança nacional” durante os governos militares no Brasil. Nas palavras de ASSELIN (2009 [1982]), “a dimensão do grilo foi tão elástica, que, ainda hoje, ele não parou de inchar”, como se pode verificar, o processo de legalização através de emissão de escrituras particulares e públicas, que transforma as terras devolutas públicas em propriedade privada, perdura até os dias atuais.

A década de 1990 deste mesmo século que estamos tratando também não nos trouxe uma realidade diferente relativa a violência no campo. O número continuavam alarmantes, os assassinatos no Brasil no período de 1990 a 1999 chegou a quantidade de 427 mortos, sendo que no Bico do

¹⁸ A grilagem é um instrumento oficialmente assumido para incorporar as terras públicas – terras do povo brasileiro – às mãos dos grandes proprietários. A propriedade de terra no Brasil passa em sua grande maioria por esse processo violento, ilegal (ASSELIN, 2009: 15).



Papagaio ocorrem 224 assassinatos, ou seja, mais da metade do total de ocorrências no país, correspondendo a uma porcentagem de 52,45%.

Os impactos relacionados à questão fundiária e ao acesso e formas de uso de determinadas riquezas naturais explorados economicamente pelas comunidades rurais espalhadas no Bico, provocou o êxodo das famílias de camponeses para os centros urbanos mais próximos, que não apresentavam condições de absorver o crescente contingente humano.

Durante este período, os conflitos no campo se acirraram a medida que processos de resistência foram sendo engendrados pelos camponeses, a exemplo de centenas de ocupações de terra que ocorreram frente a pressão de grandes proprietários de terras, grileiros e empresas nacionais e transnacionais representados por monocultivos de espécies vegetais alienígenas¹⁹, capitaneado pelo agronegócio no Brasil.

O século XXI no Campo Brasileiro: Os Conflitos no Bico do Papagaio Continuum

O século XXI também é caracterizado por diversos conflitos no campo, envolvendo ainda casos de pistolagem, grilagem, trabalho escravo, disputa por terra entre grande proprietários de terra, grandes empreendimentos econômicos e camponeses. Neste século as ocorrências continuam ocorrendo em torno das áreas onde estão localizadas as comunidades tradicionais, áreas indígenas e até assentados de projetos de reforma agrária. Continuam procesos e despejos judiciais contra famílias camponesas que continuam na luta por terra e territórios, além disso ao direito e acesso ao uso das riquezas naturais nos ecossistemas e biomas de convivência.

¹⁹ Uma das características marcantes do agronegócio brasileiro relacionado às riquezas naturais é a supressão da vegetação original de biomas como a Amazônia e Cerrado e substituição por espécies vegetais alienígenas como no caso dos monocultivos da soja e eucalipto. Trata-se de um processo de devastação ambiental violento e avassalador, significando, sobretudo tentativas de eliminação da cultura campesina da região de estudo.



No caso brasileiro, apesar das formas de violência se ampliarem e tomarem outras formas e denominações, os protagonistas desse cenário criminoso no campo, pressionando as famílias camponesas responsáveis por grilagens, envolvidos em pistolagem e uso de dispositivos legais em seu favor continuam sendo os mesmos desde o século passado. Conforme denuncia a reportagem da revista Carta Maior:

No Brasil existem muitos grupos empresariais, gerações que se sucedem na política, como o caso do senador Ronaldo Caiado, tataraneto do coronel Antônio José Caiado, que foi comandante superior da Guarda Nacional e vice-presidente da Província de Goiás nos anos 1800. Caiado é proprietário de quase seis mil hectares de terra. Já a senadora Kátia Abreu se tornou proprietária com uma dádiva governamental, o projeto chamado Campos Lindos, do governo do Tocantins, na época de Siqueira Campos, a família que sempre administrou o estado como uma capitania hereditária. O projeto, criado em 1989, distribuiu lotes para interessados na produção de grãos ou de frutas. A senadora recebeu dois lotes somando 1.265 hectares depois mais outro, totalizando 2.485 hectares. O governo tocantinense desapropriou 105 mil hectares e dizia no lançamento do projeto que beneficiaria os posseiros que ali moravam há várias décadas. Na verdade doou os lotes para políticos e figuras conhecidas, inclusive para o irmão da senadora, Luiz Alfredo de Abreu. Em 2005, um hectare de terra valia R\$5.200 no município de Campos Lindos, em 2014 passa a valer mais de R\$10 mil. Entre os anos de 2000-2010, das 129 denúncias de trabalho escravo no estado, 123 eram de Campos Lindos. Em 2015, a delegacia do trabalho do Tocantins anunciou que não faria nenhuma fiscalização em propriedades para verificar a situação dos trabalhadores. O motivo: são sete fiscais para todo o estado. O Tocantins virou um modelo de agronegócio exportador comandado pelas transnacionais, como Bunge, que tem plantação de cana e uma usina em Pedro Afonso, a Cargill, com três unidades, a Ceagro, a Multigrain, e por último chegaram ADM e o grupo Amaggi. a criação do estado do projeto chamado PRODECER, de irrigação nos municípios de Lagoa da Confusão e Formoso do Araguaia – investiram no plantio de arroz e soja irrigados.(CARTA MAIOR, 2015)

Para Castillo (2008) sob a superfície dessa composição se constitui um sistema de relações que articula, de um lado, latifundiários, madeireiros e pecuaristas, responsáveis diretos pela degradação ambiental, trabalho escravo, expulsão de pequenos produtores familiares e, de outro, as grandes empresas do agronegócio (Grupo Amaggi, Bunge, ADM, Coinbra, Cargill, Caramuru, entre outras), as mesmas que brandem a bandeira da sustentabilidade (social, ambiental e econômico-financeira) – todos conectados por e acordos, fundados nos circuitos espaciais produtivos, sobretudo, na política e no mercado.



Essas mudanças refletem nas questões de reprodução e manutenção das identidades coletivas e específicas desses povos. As transformações da vida local e cotidiana de grupos sociais camponeses estão relacionadas aos seus valores, símbolos e principalmente a transmissão dos seus conhecimentos acumulados ao longo de gerações. Mais que do que perder sua condição enquanto categoria e segmento trabalhista é perder sua cultura e identidade. Não raramente grandes grupos econômicos impõem acordos a povos e comunidades tradicionais expropriando seus bens naturais para a implantação e/ou ampliação de megaempreendimentos, desconsiderando os direitos desses grupos sociais.

Conforme podemos inferir da tabela 02 no Brasil a quantidade de assassinatos no campo no período de 2000 a 2015 foi de 482 assassinatos e os estados que compõem a mesorregião do Bico do Papagaio representaram a quantia de 269 assassinatos no campo, o que significa que o Bico continua sendo a representação mais significativa de ocorrências de violência ao campesinato brasileiro.

O Bico do Papagaio é constituído por cenários diversos, abarcando situações complexas que envolvem nas palavras de Becker (2007) de um lado o território corporativo e de outro o território de grupos sociais. A expansão da fronteira agrícola através da inserção dos Cerrados Nordestinos e Centro Norte do país via modernização da agricultura, é um processo recente, sobretudo a partir da segunda metade do século XX e se constitui no aprofundamento dos espaços de exclusão social no território brasileiro.

Tabela 02: Conflitos no Campo – Bico do Papagaio/ Brasil (2000-2015)

ANO	PAÍS / UF	QUANTIDADE	%	FAMÍLIAS	ÁREA	ASSASSINATOS
2000	BRASIL	564	100%	88.826	1.880.485	21



	PARÁ	53	9%	13.143	622.744	5
	MARANHÃO	12	2%	1.010	96.304	1
	TOCANTINS	5	1%	2.143	82.432	1
2001	BRASIL	681	100%	83.629	2.214.930	29
	PARÁ	115	17%	14.732	781.935	8
	MARANHÃO	87	13%	3.983	351.418	2
	TOCANTINS	3	0%	142	7.315	0
2002	BRASIL	743	100%	85.156	3.066.436	43
	PARÁ	110	15%	17.421	1.113.049	20
	MARANHÃO	70	9%	4.039	582.140	0
	TOCANTINS	10	1%	343	11.788	0
2003	BRASIL	659	100%	1.127.205	3.831.405	73
	PARÁ	136	21%	19.732	602.226	33
	MARANHÃO	91	14%	10.170	357.585	4
	TOCANTINS	46	7%	4.689	73.074	2
2004	BRASIL	752	100%	193.142	5.069.399	39
	PARÁ	104	14%	11.840	570.559	15
	MARANHÃO	92	12%	7.287	285.905	2
	TOCANTINS	25	3%	1.205	13.220	0
2005	BRASIL	1.304	100%	1.607.701	1.487.072	38
	PARÁ	183	14%	25.948	644.396	16
	MARANHÃO	98	8%	9.752	974.325	2
	TOCANTINS	48	4%	2.767	34.404	0
2006	BRASIL	1.212	100%	140.650	5.051.348	39
	PARÁ	151	12%	18.561	315.250	24
	MARANHÃO	68	6%	4.011	229.338	2
	TOCANTINS	52	4%	2.485	28.824	0
2007	BRASIL	1.027	100%	122.400	8.420.083	28
	PARÁ	138	13%	21.250	199.880	5
	MARANHÃO	82	8%	6.680	649.723	3
	TOCANTINS	41	4%	1.229	108.039	2
2008	BRASIL	751	100%	70.845	6.568.755	28
	PARÁ	101	13%	10.303	878.580	13
	MARANHÃO	72	10%	4.412	132.989	1
	TOCANTINS	9	1%	192	20.353	0
2009	BRASIL	854	100%	83.058	15.116.606	25
	PARÁ	160	19%	17.851	159.473	8



	MARANHÃO	77	9%	6.901	240.426	1
	TOCANTINS	22	3%	802	10.339	0
2010	BRASIL	853	100%	70.387	13.312.343	34
	PARÁ	125	15%	11.718	107.688	18
	MARANHÃO	170	20%	13.071	956.186	4
	TOCANTINS	19	2%	475	0	1
2011	BRASIL	1.035	100%	91.735	14.410.626	29
	PARÁ	125	12%	13.760	112.137	12
	MARANHÃO	224	22%	12.663	100.491	7
	TOCANTINS	15	1%	1.186	9.184	0
2012	BRASIL	1.067	100%	92.113	13.181.570	36
	PARÁ	89	8%	12.471	526.599	6
	MARANHÃO	161	15%	10.043	810.378	3
	TOCANTINS	14	1%	1.536	72.000	0
2013	BRASIL	1.007	100%	87.015	6.228.667	34
	PARÁ	89	9%	8.836	2.602.194	6
	MARANHÃO	152	15%	7.746	466.095	3
	TOCANTINS	23	2%	3.682	94.307	0
2014	BRASIL	1.018	100%	120.048	8.134.241	36
	PARÁ	59	6%	8.159	1.474.735	9
	MARANHÃO	123	12%	9.803	1.243.362	5
	TOCANTINS	32	3%	3.018	31.890	0
2015	BRASIL	998	100%	120.658	21.387.160	50
	PARÁ	99	10%	13.514	5.250.782	19
	MARANHÃO	120	12%	8.988	514.675	6
	TOCANTINS	24	2%	1.164	15.706	0

Fonte: Cadernos de Conflitos no Campo do Brasil da Comissão Pastoral da Terra. Org.: Nóbrega, 2016

Resistência Camponesa: O Caso das Quebradeiras de Coco Babaçu do Povoado Petrolina

A palmeira de babaçu é uma espécie vegetal de origem brasileira que tem como área de ocorrência natural onze estados: Maranhão, Piauí, Tocantins, Pará, Ceará, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Rondônia e Amazonas, abrangendo 279 municípios. Essa área possui formação de floresta secundária de 13 a 18 milhões de hectares (BRASIL, 2009). Contudo, é nos estados do Maranhão,



Pará, Tocantins e Piauí que a atividade extrativa de babaçu se realiza como atividade econômica e possui organizações políticas e institucionais realizada pelas quebradeiras de coco babaçu. O Maranhão se destaca com maior concentração de palmeiras, maior volume produtivo e maior contingente de extrativistas. (FIGUEIREDO, 2005).

As quebradeiras de coco babaçu²⁰ são mulheres que tem como principal atividade produtiva o extrativismo do babaçu, que consiste na coleta e quebra de coco babaçu e nas atividades relacionadas ao beneficiamento do fruto. A relação estabelecida com as palmeiras de babaçu possui uma importância essencial na sua reprodução física, social e cultural, invertendo a noção dogmática da propriedade privada, que trata a árvore como “bem secundário”, mero acessório do solo (SHIRAIISHI NETO, 2005).

Das lutas das décadas de 1960 e 1970, quando o acesso aos babaçuais era impedido pelos grandes proprietários de terras corporificados na figura do fazendeiro, passando pela década de 1980, com a inserção de grupos empresariais (pólos siderúrgicos) e em 1990, com a chegada dos monocultivos de plantios homogêneos de eucalipto, até os dias atuais, a luta das quebradeiras assume novas formas e processos de resistência.

No início da década de 1990 para abastecimento energético do complexo agroindustrial das siderúrgicas, houve intensa demanda por carvão vegetal, contribuindo com uma intensa e

²⁰ Não poderíamos neste estudo deixar de citar a principal expressão de organização social das quebradeiras que se trata do Movimento Interestadual de Quebradeiras de Coco Babaçu – MIQCB, que foi instituído oficialmente em 1995 e tem a missão de “organizar as quebradeiras de coco babaçu para conhecerem seus direitos, defenderem as palmeiras de babaçu, o meio ambiente e a melhoria das condições de vida nas regiões de extrativismo do babaçu”. Informação obtida em <http://www.miqcb.org/#!/miqcb/c1wfv>, acesso em 10.07.2016.



desordenada substituição da paisagem natural e implantação de cultivos monolíticos, tendo como espécie vegetal o eucalipto.

Esse processo foi inicialmente capitaneado pela CELMAR²¹ (Indústria do ramo de papel e celulose), que após a privatização da Vale do Rio Doce²², foi substituída pela Ferro-Gusa Carajás²³ sendo responsável pela implantação e cultivo de centenas de hectares de eucalipto entre os municípios de Imperatriz e Cidelândia. E que em 2008 seria dirigida pela empresa Suzano Papel e Celulose²⁴, ao qual é até hoje.

A cadeia produtiva do carvão vegetal está associada diretamente as indústrias de siderurgia que utilizam essa matéria-prima como fonte energética para desenvolvimento produtivo. Uma das grandes dificuldades da Associação enfrentadas pelas quebradeiras está no fato destas não possuírem terras para extração do coco, pois as mesmas pertencem a Suzano Papel e Celulose.

²¹ A Celmar S.A. – Indústria de Celulose e Papel (Celmar) foi incorporada a Companhia Vale do Rio Doce – CVRD em 2003, a referida empresa possuía 30.000 hectares de plantios de eucalipto, ativos que foram aportados na Ferro Gusa Carajás S.A. (Ferro Gusa), *joint venture* formada entre CVRD e Nucor Corporation, siderúrgica norte americana. <http://www.vale.com/PT/investors/home-press-releases/Press-Releases/Paginas/cvrd-incorpora-celmar.aspx>, acesso em 06 de julho de 2013.

²² A Companhia Vale do Rio Doce – CVRD, atualmente denominada Companhia Vale, é a maior empresa de mineração das Américas, produtora e exportadora de minério de ferro e pelotas do mundo e uma das principais produtoras mundiais de manganês e ferro ligas. A Vale também produz bauxita, ouro, caulim, potássio, alumina e alumínio, e a maior *player* de logística do Brasil. Possui participações em siderúrgicas na América do Sul e Estados Unidos. <http://saladeimprensa.vale.com/pt/releases/interna.asp?id=11124>, acesso em 06 de julho de 2013.

²³ A empresa Ferro Gusa Carajás S.A é uma *joint venture* formada entre CVRD e Nucor Corporation, siderúrgica norte americana. <http://www.vale.com/PT/investors/home-press-releases/Press-Releases/Paginas/cvrd-incorpora-celmar.aspx>, acesso em 06 de julho de 2013. Para esclarecimento *joint venture* pode ser definida por um conjunto de grandes empreendimentos que se associam permanentemente ou com uma determinada finalidade para explorar uma atividade econômica, sem que nenhuma das empresas perca sua personalidade jurídica.

²⁴ A Suzano Papel e Celulose é uma empresa do ramo madeireiro e uma das maiores produtoras verticalmente integradas de papel e celulose de eucalipto da América Latina. A operação da companhia está dividida em três unidades de negócios: Florestal, Celulose e Papel. Em 2010, com a definição de um novo posicionamento estratégico, sua atuação da ganhou duas novas frentes: energia renovável e biotecnologia. <http://www.jornalalerta.com.br/2012/03/suzano-papel-e-celulose-comemora-20-anos-da-unidade-mucuri/>, acesso em 06 de julho de 2013.



A luta das quebradeiras de coco babaçu do Povoado Petrolina, localizado no município de Imperatriz, estado do Maranhão, se intensifica com a fundação em 1998 da Associação das Quebradeiras de Coco Babaçu do Povoado Petrolina, com um número efetivo de 40 sócias. Formada e coordenada, exclusivamente, por mulheres quebradeiras de coco do povoado de Petrolina. “Despertar o espírito de solidariedade entre as associadas, promovendo o desenvolvimento cultural, social, econômico e ambiental, além de assegurar a preservação e conservação dos recursos naturais de forma equilibrada e sustentável”, é objetivo estatutário da Associação e vem sendo implementado nos quase 20 anos de sua existência.

A luta travada pelas quebradeiras em defesa dos babaçuais, da flora nativa da região e seu aproveitamento racional constituem-se no entendimento da associação como uma forma de garantir a preservação e conservação dos recursos genéticos. Além da valorização do conhecimento tradicional, este processo é uma forma de fortalecer esse entendimento, pois, as quebradeiras fazem um trabalho de seleção das riquezas naturais florísticas, tendo o cuidado de fazer uma coleta seletiva, deixando uma parte para reconstituição das plantas nativas e interação com seu habitat natural.

Conforme relatos das representações de quebradeiras de coco babaçu, a comercialização do carvão originado do coco inteiro terá, a médio e longo prazo, efeitos sociais, ambientais, econômicos e principalmente culturais bastante negativos. Pois as atividades de extrativismo não predatório cada vez vão se extinguindo mais e perdendo espaço. O trabalho desenvolvido junto à comunidade do povoado onde estão inseridas a preservação e a conservação dos ecossistemas e sua rica biodiversidade, em especial os babaçuais, fortalece uma cultura já desenvolvida pela Associação de valorização dos direitos das mulheres e princípios de cooperação.



A Associação das Quebradeiras de Coco Babaçu do Povoado Petrolina tem contribuído para ajudar a definir e criar os caminhos de consolidação das alternativas econômicas sustentáveis para o cerrado e área de transição amazônica. Dessa forma, essas quebradeiras de coco babaçu são protagonistas de sua própria história sendo favorecidas para uma vida mais harmoniosa com as pessoas e com o meio ambiente. Aliado a agricultura camponesa (arroz, milho, feijão, mandioca...) a Associação tem se organizado e lutado para preservar ainda o que existe de palmeiras, assim como justificar sua produtividade e viabilidade econômico-ambiental, através da criação de leis²⁵ que permitam que as palmeiras fiquem de pé e que os babaçuais sejam de acesso livre para as extrativistas da região.

Também consideramos como processo de resistência camponesa o campo identitário e como estes grupos sociais se autodenominam. A afirmação desta identidade coletiva é caracterizada por marcar um posicionamento que demonstra seu lugar e função social. A organização coletiva da produção realizada pela associação das quebradeiras expressam a elaboração e gestão de uma proposta que se traduz em sentimentos de autonomia, cooperação, solidariedade e respeito às culturas e modos de vida dos povos e comunidades tradicionais. Trata-se de um desafio que é construído a partir da

²⁵ Ainda que criadas somente em âmbito municipais as leis conhecidas como as leis do “babaçu livre” representam o reconhecimento formal ainda que de forma bastante reduzida, das práticas sociais das quebradeiras relacionadas ao uso e manejo dos babaçuais. Referimo-nos a: Lei Municipal nº 007/ 1997, que “dispõe sobre a proibição da derrubada de palmeiras de babaçu no município de Lago do Junco no Estado do Maranhão e dá outras providências.” Lei Municipal nº 32/ 1999, que “dispõe sobre a proibição de derrubada de palmeiras de babaçu no município de Lago dos Rodrigues no Estado do Maranhão, e dá outras providências.”; Lei Municipal nº 255/ 1999, que “dispõe sobre a proibição da derrubada de palmeiras de babaçu no município de Esperantinópolis no Estado do Maranhão, e dá outras providências.”; Lei Municipal nº 319/ 2001, que “dispõe sobre a proibição da derrubada de palmeiras no município de São Luís Gonzaga, e dá outras providências.”; Lei Municipal nº 001/ 2003, que “dispõe sobre a proibição de queimadas desenfreadas, a derrubada de palmeiras de babaçu e sobre a preservação da área ribeirinha no município de Praia Norte, e dá outras providências.”; Lei Municipal nº 306/ 2003, que “dispõe sobre a preservação das palmeiras de babaçu no município de Axixá do Tocantins, e dá outras providências.”; Lei Municipal nº 1.084/ 2003, que “dispõe sobre a proibição da derrubada de babaçu no Município de Imperatriz, Estado do Maranhão, e dá outras providências.”; Lei Municipal nº 934/ 2004, que “dispõe sobre a preservação das palmeiras de babaçu no município de São Domingos do Araguaia, Estado do Pará, e dá outras providências.”



vivência e reflexão com o uso de uma linguagem simples, capaz de estimular o sentimento coletivo, criativo e afetivo, sem descartar o conjunto de saberes das comunidades envolvidas, em toda a riqueza e diversidade existente.

Considerações Finais

As estratégias de resistência desses grupos sociais em antagonismo a expansão do capitalismo materializado no agronegócio e suas commodities perpassam por uma reprodução social que atua interna e externa ao Estado. Essas estratégias se apresentam de várias formas, pela transmissão oral dos conhecimentos, estabelecimento de relações afetivas familiares e comunitárias; conhecimento acerca dos bens naturais acumulados através da observação, domesticação de plantas e animais, praticas medicinais e culinárias e a forma de organização espacial em seus territórios. Outra importante estratégia de reprodução foi à constituição de organizações sociais relacionadas aos múltiplos grupos sociais e constituição de movimentos relacionados às identidades coletivas que podem ser determinadas a partir de uma relação com a natureza (quebradeiras de coco babaçu, pescador, agroextrativista, seringueiro, castanheiros, ribeirinhos) ou ainda decorrer de consequências da instalação de grandes projetos industriais e de infraestrutura (assentados, atingidos, deslocados)

Os camponeses do Bico marcam seu lugar na história como uma classe que se organizou na defesa intransigente dos seus direitos e por sua reprodução social. Na mesorregião do Bico do Papagaio podemos citar no norte do Tocantins organizações sociais camponesas como *Alternativa para Pequena Agricultura no Tocantins – APA-TO* (Augustinópolis), Associação Regional das Mulheres Trabalhadoras Rurais no Bico do Papagaio – ASMUBIP (São Miguel do Tocantins), Associação de Apicultores do Bico do Papagaio – ABIPA (Axixá); No leste paraense, citamos o



Centro de Estudo e Pesquisa e Assessoria Sindical e Popular – CEPASP/ (Marabá), Fórum Regional de Educação do Campo, Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Pará (FETAGRI), (regional sudeste) e no oeste maranhense temos o Centro de Educação e Cultura do Trabalhador Rural – CENTRU (Imperatriz – MA); Casa Familiar Rural de Amarante do Maranhão (Amarante do Maranhão); Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (Imperatriz) e muitos outros sem falar em movimentos que transcendem fronteiras estaduais como é o caso do Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu – MIQCB e Fórum Carajás²⁶.

Esses movimentos sociais camponeses do Bico do Papagaio ao longo de sua trajetória tem influenciado na elaboração e implementação de políticas públicas que são fundamentais para o desenvolvimento dos povos do campo a exemplo do Programa Nacional de Fortalecimento Agricultura Familiar – PRONAF e Plano Nacional de Promoção das Cadeias de produtos da Sociobiodiversidade (PNPSB). Além disso, tem construído experiências que em primeira análise podem indicar modelos de gestão que substituem ou exercem o papel do Estado, pois mesmo com reduzido ou sem o apoio deste, implementam e favorecem o exercício da cidadania e a garantia de direitos fundamentais, como por exemplo educação, como é o caso das Casas Familiares Rurais no estado maranhense.

O Estado nacional burocrático, por intermédio de seu corpo de especialistas, já não é a única esfera com autoridade para planejar as políticas públicas, agora em processo de descentralização. Há o discurso que sugere a abertura de possibilidades da participação da sociedade civil organizada no planejamento e no controle dessas políticas sociais contemporâneas. As *políticas públicas* são definidas, implementadas,

²⁶ Fórum Carajás - Centro dos Direitos das Populações da Região do Carajás - se constitui em uma articulação de entidades do Maranhão, Pará e Tocantins, cuja missão é acompanhar e monitorar os impactos socioambientais dos grandes empreendimentos. Informação disponível em <http://www.forumcarajas.org.br/>, acesso em 27.09.2015.



reformuladas ou desativadas com base na memória da sociedade ou do Estado, guardando estreita relação com as representações sociais que cada sociedade desenvolve sobre si própria (ARAÚJO, 2014: 99-100).

Os movimentos sociais camponeses do Bico do Papagaio incorporam nos seus projetos e programas de atuação, a reivindicação de leis e políticas públicas que contemplam as demandas e direitos coletivos dos povos do campo. Participam ativamente na elaboração, gestão e monitoramento da aplicação desses dispositivos²⁷ que contribuem de maneira significativa para uma certa autonomia e prática de uma cidadania ainda que muitas vezes seja tolhida pela própria ação e omissão Estatal.

Referencias bibliográficas

ALVES, Vicente E. L (2015). (eds.). Modernização e regionalização nos cerrados do Centro Norte do Brasil: Oeste da Bahia, Sul do Maranhão e do Piauí e Leste do Tocantins. Rio de Janeiro, Consequência Editora.

ALVES, Vicente E. L. (2014). “Región Centro-Norte de Brasil: Dinámicas Territoriales Recientes e nel Campo y em la Ciudad” en la Cuadernos de Geografía, v. 23, p. 47-60-60.

ARAÚJO, Helciane. F. A (2014). Estado/Movimentos Sociais no campo: a trama da construção conjunta de uma política pública no Maranhão. Manaus, UEA edições.

BALDUINO, Dom Tomás (2004). O Campo no Século XXI: Território de Vida, de Luta e de Construção da Justiça Social. (eds) OLIVEIRA, Arioaldo U., MARQUES, Marta I. (Orgs.). O campo no século XXI. São Paulo: Editora Casa Amarela e Editora Paz e Terra, p. 19-25.

²⁷ Contemporaneamente os movimentos sociais camponeses participam da construção de políticas públicas a partir de sua inserção em esferas de participação governamental a exemplo de conferencias e conselhos instituídos e regulados pelo Estado.



BECKER, Bertha K. (1986). “A crise do Estado e a região. A estratégia da descentralização em questão” em la. Revista Brasileira de Geografia, Rio de Janeiro, 48 (1), pp. 43-62, jan/mar.

BECKER, Bertha K (2007). Logística e a Nova Configuração do Território Brasileiro: Que Geopolítica será Possível? DINIZ, Clélio Campolina(eds). Políticas de Desenvolvimento Regional: desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil. Brasília, Editora Universidade de Brasília.

BERNARDES, Júlia Adão. BRANDÃO FILHO, José Bertoldo (2009). A territorialidade do capital. Rio de Janeiro: Arquimedes Edições.

CASTILLO, Ricardo (2008). Sustentabilidade, desenvolvimento e globalização. (eds) OLIVEIRA, M. P.; COELHO, M. C. N.; CORRÊA, A. M. (org.). O Brasil, a América Latina e o Mundo: espacialidades contemporâneas (I). Rio de Janeiro: Lamparina: Anpege: Faperj, 2008.

CARTA MAIOR. Conflitos no campo: o rastro da violência e da política.
<http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Movimentos-Sociais/Conflitos-no-campo-o-rastro-da-violencia-e-da-politica/2/33304>, acesso em 30.07.2016.

CASANOVA, Pablo González (1984). (eds) Historia Política de Los Campesinos Latinoamericanos. Siglo XXI Editores. 1º Edição. México.

CHAYANOV, Aleksandr Vasilievish (2014). Teoria dos sistemas econômicos não capitalistas (1924). CARVALHO, Horácio Martins de. (eds). Chayanov e o campesinato. 1. ed. São Paulo, Expressão Popular.

DIAS, Claudete Maria Miranda (2008). Movimentos Sociais do século XIX: resistência e luta dos balaios no Piauí. p. 199-218. MOTTA, Márcia; ZARTH, Paulo. (eds.). Formas de Resistência Camponesa: visibilidade e diversidade de conflitos ao longo da história. 1a.ed.São Paulo: UNESP, 2008.



G1. Conselheiro da Reserva Biológica do Gurupi , no MA, é assassinado. Disponível em <http://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2015/08/conselheiro-da-reserva-biologica-do-gurupi-no-ma-e-assassinado.html>, acesso em 22.09.2015.

LIMA, Débora Assumpção (2014). “A expansão da soja na fronteira agrícola moderna e as transformações do espaço agrário tocantinense”. Tesis de maestria. Instituto de Geociências. Universidade Estadual de Campinas.

MANÇANO, Fernandes B. (2009). “Brasil: 500 anos de luta pela terra”, Revista de Cultura Vozes, março (www.culturavozes.com.br/revistas/0293.html).

MARQUES, Marta Inez Medeiros (2002). “O conceito de espaço rural em questão” en la Terra Livre São Paulo Ano 18, n. 19, p. 95-112 jul./dez.

MARQUES, Marta Inez Medeiros (2008). “A atualidade do uso do conceito de camponês.” en la Revista NERA Presidente Prudente Ano 11, nº. 12 p. 57-67 Jan.-jun.

MARTINS, José de Sousa (1995). Os camponeses e a política no Brasil: As lutas sociais no campo no processo político. Vozes. Petrópolis.

MARTINS, José de Souza (1991). Expropriação e Violência: a questão da violência no campo. São Paulo, Hucitec.

MARX, Karl (1991 [1964]). Formações Econômicas Pré Capitalistas. São Paulo, Editora Paz e Terras S/A.

NÓBREGA, Mariana Leal Conceição (2015) “Enfrentando a Sucuri Verde: Resistência Camponesa e o Território de Uso Comum – O Caso das Comunidades Agroextrativistas na Amazônia Maranhense” Tesis de maestria. Campinas, Unicamp.

OLIVEIRA, Ariovaldo U., MARQUES, Marta I. (2004) (eds). O campo no século XXI. São Paulo, Editora Casa Amarela e Editora Paz e Terra.



PEIXOTO, Rodrigues (2014). “Índios e Camponeses: Antes, durante e depois da Guerrilha do Araguaia” en la Revista Territórios & Fronteiras, Cuiabá, vol. 7, n. 1, abr., p.48-70

SADER, Maria Regina C. de Toledo (1986). Espaço e Luta no Bico do Papagaio. Tesis de Doctorado. Departamento de Geografia. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo.

SCOTT, James C (2002). “Formas cotidianas de resistência camponesa.” en la Raízes, Campina Grande, Vol. 21, no. 01, janeiro a junho, p.10-31.

SHANIN, Teodor (2008). Lições Camponesas. In: Campesinato e Territórios em Disputa, Expressão Popular, 1º Edição, São Paulo, p. 23-47.

WARMAN, Arturo (1984). La Lucha en el Campo de México: Um Esfuerzo de Periodización. In: CASANOVA, Pablo González. (Org.). Historia Política de Los Campesinos Latinoamericanos. México, Siglo XXI Editores.



6. RECREANDO TERRITORIOS: ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIONES INDIGENAS Y CAMPESINAS EN LA LUCHA POR INCREMENTAR CONTROL SOBRE TIERRA Y RECURSOS NATURALES EN LA ERA MINERA

María Belén Noroña S
Universidad de Oregon, Departamento Geografía
mnorona@uoregon.edu

INTRODUCCION Y METODOLOGIA

El presente ensayo presenta un vistazo a importantes teorías territoriales generadas por geógrafos a lo largo de los últimos 50 años. Esto a fin de entender cómo estas teorías se ven reflejadas en estrategias usadas por el movimiento indígena ecuatoriano y las comunidades representadas por este en su lucha por acceder a tierra y recursos naturales. Además, se estudian estrategias recientes usadas por comunidades indígenas que buscan controlar territorio bajo circunstancias adversas en las que modelos económicos extractivos han traído una nueva ola de conflictos por desposesión de tierras en Ecuador y la región.

Tomando el caso de la comunidad indígena de Tzawata, se ilustra la creatividad de las comunidades en generar políticas de escala que permiten reforzar su identidad indígena y asegurar su subsistencia económica y organizativa. Incluso cuando la infraestructura organizativa e institucional de las organizaciones indígenas que por décadas ha permitido incrementar su participación en la toma de decisiones a nivel regional, nacional e internacional ha sido gravemente disminuida por la actividad



estatal. Las organizaciones de base logran diversificar sus estrategias generando nuevas oportunidades de relaciones socio-espaciales en alianza con actores e instituciones no tradicionales.

Estas estrategias emergentes apuntan a nuevas formas de entender procesos de territorialidad enfocando en aspectos que van más allá de la seguridad material de sus territorios y recursos.

Usando teorías alternativas que analizan la producción escalar del territorio en base a la seguridad material de su sobrevivencia, vemos una vez más que las luchas por tierras son a la vez procesos socio-políticos de territorialización que están en constante cambio.

El presente ensayo está compuesto por cuatro secciones. La primera, compara dos teorías territoriales que han sido fundamentales para explicar procesos de lucha por territorios durante las épocas corporativista y neoliberal en el Ecuador. La segunda, hace una revisión breve del éxito del movimiento indígena ecuatoriano en los últimos treinta años apoyando a comunidades a obtener reconocimiento político y acceso legal a tierras. Además, se explica cómo en los últimos diez años el modelo extractivista ha llevado al gobierno a dismantelar la infraestructura institucional creada por el movimiento indígena para canalizar los problemas de comunidades en situaciones de desventaja frente a procesos de despojo de tierras.

En la tercera sección sugiero que teorías territoriales que centran su atención en la capacidad de las poblaciones locales por controlar sus ámbitos de subsistencia son útiles para entender estrategias no tradicionales usadas por comunidades que, viéndose despojados de sus medios tradicionales de acceso a tierras buscan alternativas para asegurar su reproducción económica y reforzar su identidad. La cuarta sección explica la lucha de la comunidad Tzawata por legalizar la tenencia de



sus tierras ancestrales y muestra información empírica de estrategias alternativas que generan formas de control espacial que van más allá del control material del territorio.

Finalmente, las conclusiones hacen una revisión de la teoría y las estrategias por acceder a tierras en el Ecuador, y sugiere que el entendimiento teórico de procesos de territorialización es útil para comunidades indígenas y sus organizaciones al momento de generar estrategias de lucha por acceder y controlar tierras.

Importancia

Más allá de contribuir teóricamente al mejor entendimiento de los procesos de territorialización como producto de las luchas de minorías étnicas por tierra y recursos naturales en el Ecuador. El presente trabajo espera servir como puente entre los marcos teóricos y las realidades prácticas de organizaciones indígenas que buscan encontrar estrategias de resistencia y negociación en su lucha por tierras. Usando un formato acorde para las organizaciones indígenas de base, esta información se hará accesible a organizaciones educativas, comunidades y federaciones indígenas regionales en las provincias del Puyo y Tena en la Amazonía del Ecuador.

Metodología

La autora realizó trabajo de campo en la comunidad de Tzawata a lo largo de cuatro meses entre el 2013 y 2014, además ha mantenido comunicación continua con la comunidad en los últimos dos años completando 12 entrevistas estructuradas y semi-estructuradas entre el 2013 y la presente fecha. Además de entrevistas, se usó observación participativa y análisis de contenidos. La



investigación ha contado con el apoyo financiero del Instituto Pachaysana y continuará siendo financiado por Global Oregón durante el verano del 2016.

1. UNIDADES TERRITORIALES VERSUS ESPACIOS RELACIONALES

Los procesos de formación territorial son el resultado de prácticas, procesos sociales y discursos que producen y reproducen aquellas líneas imaginarias que definen un territorio o región. Aquellos procesos sociales son de carácter económico, político, social y cultural y se concretan a nivel de múltiples escalas espaciales haciendo que la formación territorial este en perpetuo proceso de ser (Murphy et.al, 2008). En América Latina, dichas prácticas y procesos sociales se entienden como el producto de luchas históricas entre el Estado, los pueblos e intereses económicos por incrementar su control sobre recursos y tierras. Donde los pueblos si bien es cierto han logrado incrementar su participación política, estos siguen subordinados económicamente (Bryan 2012, Acosta 2008, Gudinas 2011, Perreault 2003b y otros).

En el proceso de explicar las lógicas detrás de la formación de territorios y regiones, geógrafos se han planteado varias teorías que han sido importantes a lo largo del tiempo. Por un lado, a partir de los años 70 se le dio relevancia a la idea de territorios como espacios íntegros, homogéneos y delimitados por bordes (Keating, 1998). Dichos espacios respondían a necesidades políticas de representación de poblaciones con respecto al Estado. Ciertamente en el caso de luchas indígenas y campesinas por tierra en el Ecuador, esta forma de entender territorios se ajusta a necesidades de representación política y redistributivas entre dichas poblaciones (Harrison 2013, Yashar, 2005).



En Ecuador, el estado adopta un modelo de gobernanza corporativistas cuya intención era la de incorporar política y económicamente a las áreas rurales con altos índices de población indígena al aparato político estatal. Esto se consiguió con la Ley de Comunas de 1934 que fomentó la organización política de las comunidades indígenas y campesinas en sus territorios a fin de extender la presencia del Estado en ellas. A fin de que una comunidad sea considerada como actor político válido con deberes y derechos, debía primero ser reconocida legalmente como *comuna*, la misma que existía en un territorio específico (Breton, 1997). De esta manera las comunidades no solo que legalizaban la propiedad comunal de sus territorios, sino que a su vez adquirirían derechos y deberes frente al Estado. Así la lucha por tierras se convierte a la vez en una lucha por el reconocimiento de sus derechos indígenas.

Así mismo la Reforma Agraria de 1964 redistribuye y legaliza tierras entre cientos de comunidades, mientras que otras reciben tierras consideradas como baldías, mayormente ubicadas en la región Amazónica. Todas estas reformas legales requerían la organización política de las poblaciones en cuestión, quienes tomaron ventaja de esta oportunidad para organizarse a nivel local y generar instituciones propias (Yashar, 2005:61). Y aunque estas políticas corporativistas dan como resultado el inicio del movimiento indígena cuyo bastión de lucha ha sido el acceso a territorio y el derecho a la auto-determinación, es importante mencionar que estas políticas también presentaron graves problemas redistributivos. Por ejemplo, tierras distribuidas en la Amazonía fueron consideradas como baldías y fueron redistribuidas sin tomar en cuenta que existían poblaciones asentadas en ellas desde tiempos ancestrales, generando conflictos en la región (Benalcázar, 1971).



Como vemos en estos ejemplos, la formación de territorios y regiones en función de la necesidad del Estado por generar espacios de representación política entre las poblaciones fue y sigue siendo válida en la medida en que poblaciones étnicamente distintas siguen luchando por incrementar control sobre territorios y cuyo acceso no es posible a menos que el Estado a través de su aparataje valide e intermedie dicho acceso y control.

A pesar de la utilidad de esta teoría, la idea de territorio como unidades delimitadas por bordes ha sido muy criticada en el medio académico por ser positivista y rígido. Así, a partir de los años 90s, investigadores como Massey (1994), Allen y Cochrane (2007, 2010) y Amin (2004) entre otros explican que debido a procesos de globalización en donde flujos de información, capitales, personas e infraestructura pasan, traspasan, se configuran y reconfiguran sin importar la existencia de divisiones políticas; la idea de territorios como unidades delimitadas por bordes es insuficiente. En su lugar, estos sugieren que los espacios territoriales y regionales deberían ser entendidos como el producto de la interacción, conectividad y porosidad entre regiones y territorios. En donde dichos espacios se constituyen en relación unos de otros.

Amin (2004) por ejemplo explica que vivimos en un mundo relacional en donde la acumulación de capital y las prácticas de gobierno se enfocan en lograr controlar dichas redes de poder nodal que circulan a través de flujos generando diferentes escalas espaciales de poder (pg.36). Por lo tanto, el sugiere que lo importante es alinear dichas escalas de poder a favor de intereses propios sea en el ámbito político, económico o social. Más aun, Amin sugiere que quienes buscan controlar territorios deberían poner más atención en controlar la forma en que las políticas de escala se configuran. En otras palabras, es más importante buscar ejercer control sobre dichas redes



escalares, pues en realidad no existe un territorio que se puede identificar a través de bordes sobre el cual se pueda ejercer control material (pg.36).

Ecologistas políticos importantes como Bebbington (2004) de manera similar ha sugerido que la participación exitosa de comunidades en procesos de desarrollo económico - territorial tienen lugar cuando las comunidades buscan estrategias para controlar los procesos de modernización en lugar de resistirse u oponerse a ellas (pg.412). Perreault (2004a) por ejemplo muestra como Federación de Organizaciones indígenas del Napo (FOIN), en sus esfuerzos por mediar la relación entre el Estado, agencias de desarrollo y organizaciones indígenas internaliza discursos dominantes de desarrollo generados desde las instituciones de gobierno e instituciones no gubernamentales de desarrollo a lo largo de la década de los 70s y 80s (pg.590). Así las organizaciones indígenas usan dichos discursos desarrollistas a su favor legitimando sus demandas por territorio y expandiendo derechos indígenas (pg.590).

De acuerdo con Escobar (2001) la habilidad de las organizaciones indígenas en establecer redes y asociaciones entre individuos e instituciones operando a diferentes escalas espaciales; le ha permitido fomentar alianzas para asegurar recursos y apoyo político. Así, las organizaciones indígenas y sus bases hacen que sus necesidades y preocupaciones locales sean compartidas y apoyadas por actores operando a un sinnúmero de escalas. Neil Smith se refiere a esta habilidad de hacer que problemas locales tengan relevancia provincial, regional e internacional, la habilidad de *saltarse escalas* (1996).

El movimiento indígena ecuatoriano ha sido reconocido como uno de los más importantes a nivel de región en su lucha por incrementar su participación política en la vida del país (Lucero 2006,



Van Cott 2005, Yashar 2005, entre otros). Su éxito no solo se reconoce en su habilidad para generar redes y asociaciones de apoyo, saltándose escalas como diría Smith. Sino también en su habilidad para movilizar a las bases del movimiento y en la resistencia de sus organizaciones e instituciones a lo largo del tiempo (Chartock, 2011). En este sentido, la tendencia histórica muestra que el movimiento indígena ecuatoriano se ha consolidado políticamente alineando redes de apoyo a lo largo de varias escalas, permitiendo que comunidades indígenas obtengan mayor control sobre sus unidades territoriales. Por lo tanto, ambos enfoques territoriales son complementarios el uno del otro; pues como vemos en el caso del movimiento indígena, estrategias relacionales y asociativas son usadas a fin de consolidar control sobre unidades territoriales.

2. DEL NEOLIBERALISMO AL POS-NEOLIBERALISMO EXTRACTIVISTA

El Giro Territorial, sus contradicciones

Durante la década de los 90s y 2000s, conocida también como período neoliberal el movimiento indígena ecuatoriano se consolida como organización política y orgánica donde comunidades indígenas se organizan a nivel local y regional para luego ser representados por la Confederación de Organizaciones Indígenas del Ecuador (CONAIE) que actúa como su representante a nivel nacional. Durante este período, el movimiento indígena tiene éxito apoyando a cientos de comunidades en obtener reconocimiento político para acceder legalmente a tierras y recursos.

Esta tendencia no solo es importante en Ecuador sino en toda la región, pues gobiernos neoliberales facilitan y regularizan el acceso a tierras entre poblaciones indígenas, afroamericanas y campesinas. A esto se le conoce como el *Giro Territorial* y aunque este proceso logra empoderar a los pueblos y sus organizaciones, este ha sido duramente criticado. Académicos como Hale



(2005), Bryan (2012) y Escobar (2001) explican que demandas por tierras fueron usadas por gobiernos neoliberales como mecanismo de regularización de recursos naturales a la vez que permitieron disminuir tensiones entre el estado y comunidades que buscaban asegurar su subsistencia. Y a pesar de que a través de reformas legales las comunidades acceden a tierra, dicha redistribución no logra desafiar las relaciones socio-espaciales de poder existentes pues las comunidades y sus territorios siguen subordinadas a fuerzas externas de mercado (Bebbington 2012, Offen 2003).

Autores como (Zimmerer 1991) y (Perreault 2003b) muestran a través de casos de estudio que a pesar del reconocimiento político y el acceso que las poblaciones indígenas han logrado con respecto a tierras, servicios básicos y programas de desarrollo; estos siguen siendo insuficientes al asegurar el control material de sus territorios. Esto se debe a que las comunidades tienen poco control sobre presiones económicas externas generadas por el Estado y/o los mercados, en donde “la idea de propiedad es entendida a través de la visualización del capital en el paisaje” (Perreault 2003b:111). En otras palabras, la propiedad viene acompañada de la idea de que recursos como tierra tienen que ser económicamente productivos a fin de mantener el orden social existente (Bryan, 2012).

En este sentido, el movimiento indígena ecuatoriano logra incrementar su poder político durante el período neoliberal, a la vez que continúa batallando por incrementar su autonomía con respecto al uso económico de sus recursos naturales. En este sentido podemos encontrar ciertas contradicciones, pues a fin de acceder a poder político, como se explica anteriormente, el movimiento indígena se involucra en procesos económicos dominantes, así como en procesos desarrollistas a fin de legitimar sus demandas y su acceso a recursos. A la vez, el movimiento



indígena viene insistiendo en la necesidad de que se reconozca el carácter de auto-determinación de los pueblos para definir sus formas de vida de acuerdo a sus propias visiones. Visiones que por lo general difieren de los modelos económicos dominantes de los cuales participan (Gudinas, 2011).

Andolina (2003) resume de manera extraordinaria las contribuciones políticas del movimiento indígena. A través de movilizaciones, protestas y levantamientos multitudinarios, este ha logrado sentar a la mesa de negociaciones al gobierno en varias ocasiones. Además, a lo largo del período neoliberal ha logrado forjar alianzas con diversas organizaciones civiles y no gubernamentales entre las que cuenta la iglesia católica, organizaciones políticas de izquierda y centro izquierda, grupos conservacionistas y de derechos humanos e inclusive la población civil. Con estos apoyos el movimiento indígena logra influir en las Constituciones de 1998 y en la del 2008. Esta última por ejemplo recoge varias de sus aspiraciones por generar alternativas al modelo económico neoliberal (Acosta, 2008; Cicariello-Maher, 2013).

Entre las aspiraciones más importantes reflejadas en la última Constitución está la incorporación del concepto del *Buen Vivir* en el artículo 14, que puede ser interpretada como el derecho de las comunidades a vivir en un medio ambiente sano y en equilibrio que garantice la sustentabilidad de sus poblaciones en relación a sus recursos naturales (Breton et.al, 2014). Adicionalmente se incorporaron derechos a la naturaleza a fin de proteger los recursos naturales de procesos extractivos y de degradación ambiental. Finalmente, se reivindican y extienden los derechos indígenas a territorios y formas de gobierno propios. Por ejemplo, el artículo 57 garantiza el derecho de las comunidades indígenas a mantener posesión de sus tierras ancestrales y el acceso a ellas de manera gratuita incluso cuando estas ya han sido alienadas en el mercado. El mismo



artículo garantiza el carácter inalienable, inembargable e indivisible de sus tierras, las mismas que están exentas el pago de tasas e impuestos. Además, este artículo prevé mecanismos de consulta previa a comunidades en cuyos territorios se encuentren recursos no renovables y cuya explotación pueda afectarlos cultural y ambientalmente.

Lamentablemente estas conquistas sociales han sido limitadas por la adopción de políticas extractivas y mineras, en las que el gobierno se alejó de sus promesas por implementar los cambios sociales previstos. Y en su lugar se volvió más autoritario y represivo, desmantelando las redes de apoyo socio-espaciales que se habían generado en décadas pasadas como producto de las luchas del movimiento indígena (Becker, 2013; Cicarriello-Maher, 2013). Sin aquellas redes de personas e instituciones que viabilizaban acceso a recursos económicos y de conocimiento, los problemas por tierras frente a la actividad minera se han vuelto sumamente agudos.

Post-neoliberalismo extractivista

A partir de la década de los 90s gobiernos como Ecuador, Bolivia, El Salvador, Perú, Colombia y Brasil le abren las puertas a las industrias extractivas a una velocidad y escala nunca antes vista (Bebbington, 2012:1154). A este nuevo periodo se le conoce como periodo post-neoliberal, y ha estado marcado por una nueva ola de despojos de tierra y tensiones entre comunidades indígenas, afroamericanas y campesinas. En donde se ve afectada la habilidad de las comunidades por controlar y acceder a tierras, así también se ve afectada la calidad de su medio ambiente. (Perreault, 2013).

La agudización de las protestas por parte de comunidades indígenas y campesinas, así como la criminalización de la protesta social en el Ecuador ponen de manifiesto la vulnerabilidad de las



comunidades a las fuerzas externas de mercado y los procesos de acumulación generados por políticas extractivas en la última década.

En este sentido está claro que procesos anteriores que habían logrado reformas legales para la titulación y demarcación de tierras incluyendo los avances de la Constitución del 2008 tienen poco peso frente a procesos de acumulación económica en donde productividad equivale a seguridad territorial (Blomley, 2005; Perreault, 2004b). Esto pone en entredicho la legitimidad de la propiedad comunal, así como la legitimidad de los derechos de propiedad comunal sobre los territorios y recursos.

El gobierno ecuatoriano se ha opuesto abiertamente a la protesta social. Hasta el 2011, 286 conflictos en torno a acceso a tierras y calidad de vida por parte de comunidades y movimientos medio ambientales fueron registrados sin respuesta positiva por parte del gobierno (Martí I. Puig y Bastidas, 2012). En el 2015 un reporte generado por la Federación Internacional de Derechos Humanos reporta que “las disputas territoriales que pretenden ser neutralizadas a través de la criminalización de líderes comunitarios y defensores de derechos humanos, tiene una raíz común ligada a la (in) seguridad de la tenencia de la propiedad” (Faro et.al: 36). El informe además explica que, a fin de llevar a cabo expropiaciones de tierra o actividades mineras en tierras comunales, el gobierno manipula los medios administrativos y legales existentes. Así quienes se oponen son criminalizados, detenidos y juzgados.

3. ESPACIOS DE SUBSISTENCIA Y ESPACIOS DE APOYO

Bajo las condiciones adversas mencionadas, poblaciones que se enfrentan a procesos extractivos en los que no pueden recurrir a los medios previamente establecidos para su participación política



en la toma de decisiones, viven en alto riesgo de perder control parcial o total sobre sus territorios. Varias comunidades ya han sido desalojadas a la fuerza de sus espacios de vida, mientras otras se ven forzadas a negociar. Por otro lado, muchas otras comunidades siguen resistiendo en la medida que las presiones sobre sus recursos naturales son menos urgentes para los intereses estatales y de mercado. Muchas de estas comunidades se encuentran generando estrategias novedosas con organizaciones y actores no tradicionales. Dichas estrategias como veremos no apuntan solamente a la lucha por la ocupación material de sus territorios, sino que enfocan formas comunales de asegurar su subsistencia.

A fin de entender mejor dichas estrategias, es útil hacer uso de las teorías generadas por Kevin Cox en 1998. Este autor explica que, en lugar de entender la producción social de los espacios territoriales a través de la formación y control de escalas de poder, dichas escalas pueden tomar formas distintas a las escalas tradicionales²⁸. Cox, explica que las relaciones de poder escalares pueden entenderse en dos espacios distintos llamados '*espacios de dependencia*' y '*espacios de compromiso*' y estos pueden ser vistos como dos escalas distintas pero complementarias. Para facilitar el análisis y tratando de ser precisa en la traducción del inglés al español, así como en la aplicación de dichas escalas al presente trabajo, yo voy a llamarles '*espacios de subsistencia*' y '*espacios de apoyo*' respectivamente.

Espacios de subsistencia:

Los espacios de subsistencia son aquellos en los que las “relaciones sociales están fijadas en un espacio específico del cual dependemos para lograr acceder a intereses esenciales y que no pueden

²⁸ Por escalas tradicionales Cox se refiere a la idea de espacios organizados a nivel local, regional, nacional, etc.



ser sustituidos por otros espacios”; además, los espacios de subsistencia presentan condiciones específicas para la sobrevivencia material y el sentido de trascendencia (Cox 1998: .2). Por lo tanto, los espacios de subsistencia son aquellos de los cuales dependemos para nuestra subsistencia o sobrevivencia económica. En el caso de las comunidades indígenas y campesinas los espacios de subsistencia son aquellos territorios de los que dependen directamente para sobrevivir, esto asumiendo que dichas comunidades generan actividades productivas en dichos territorios como principal fuente de subsistencia.

Viendo de cerca las estrategias usadas por comunidades que luchan por asegurar su control sobre territorios y recursos bajo condiciones adversas como el caso que presento a continuación; sugiero que las prácticas socio-comunitarias basadas en la confianza y reciprocidad entre miembros de las comunidades son prácticas sociales que aportan materialmente a la sobrevivencia de la comunidad y que por lo tanto pueden ser consideradas como parte de los espacios de subsistencia.

Por ejemplo, entre las estrategias de sobrevivencia de las comunidades existen prácticas como las mingas (trabajo comunitario voluntario en beneficio de uno o de todos), el préstamo de la mano de obra agrícola y la repartición de los frutos de la producción agrícola comunitaria entre varias familias. Estas son estrategias materiales de sobrevivencia basadas en el trabajo comunal voluntario, a la vez que son prácticas socio-espaciales que tienen lugar en relación a un territorio. Ambos, territorio y trabajo comunal voluntario permiten la producción y reproducción de las comunidades. Por lo tanto, las comunidades indígenas y campesinas que sobreviven de sus territorios podrían definir sus espacios de subsistencia más allá del espacio físico del territorio y sus frutos. Las comunidades generan espacios de subsistencia cuando generan valor en base al



trabajo voluntario y relaciones sociales basadas en la reciprocidad y compromiso. Esta distinción es bastante importante cuando estudiamos estrategias alternativas para acceder a tierras y recursos.

Espacios de apoyo:

Cox (1997) explica que la producción del espacio, y a su vez la producción del territorio gira alrededor de la manera en que diferentes actores en la sociedad se organizan a fin de asegurar las condiciones para la continuación de la existencia de sus espacios de subsistencia. Para lograrlo, dichos actores tienen que relacionarse con otros centros y redes de poder social. En el proceso en el que generan relaciones y compromisos con estos centros y redes, dichos actores generan espacios de apoyo. Por lo tanto, según Cox, la producción social del espacio es el resultado de la necesidad de asegurar control sobre espacios de subsistencia, y dicho control se logra a través de las relaciones generadas en los espacios de apoyo.

Como se explica anteriormente, las comunidades y organizaciones indígenas a lo largo de sus procesos de organización política han aprendido a *saltarse escalas*. En otras palabras, ellos buscan generar suficientes redes y asociaciones con diferentes actores a fin de asegurar espacios de subsistencia. Jones (1998) además explica que estrategias como las que menciona Cox están circunscritas a cambiantes circunstancias políticas, económicas y sociales y que por lo tanto las formas en que los diferentes actores se comportan para asegurar espacios de subsistencia está en constante proceso de ser (pg.26). Por estas razones, es difícil categorizar y generalizar el concepto de escala y estrategias escalares por controlar territorio. Así las estrategias usadas por las organizaciones indígenas y campesinas también están en constante cambio. Y aunque se pueden



identificar tendencias a lo largo del tiempo, estas estrategias son elásticas y pueden cambiar rápidamente según las necesidades.

4. ESTRATEGIAS EMERGENTES: EL CASO TZAWATA

Ubicada en el cantón Carlos Julio Arosemena, provincia del Napo, esta comunidad sobrevive de agricultura de subsistencia y de los productos que obtienen del pequeño bosque secundario ubicado en su territorio. Complementan su economía participando de trabajo asalariado eventual en plantaciones cercanas.

A pesar de que la comunidad tiene presencia ancestral en el área (Duche, 2012) no es sino hasta el 2011 que la comunidad legaliza su existencia política como comuna. A través de este reconocimiento legal, una población de 340 personas aspira legalizar 627 hectáreas que según ellos fueron ilegalmente incorporadas en el mercado durante los procesos de distribución de tierras baldías que tuvieron lugar durante la Reforma Agraria.

Según registros del entonces Instituto Nacional de Colonización del Ecuador, a través de su departamento Administrativo de Tierras, en 1958 se adjudica 227 hectáreas a un propietario privado vía compra-venta. Además, se adjudican 400 hectáreas consideradas como “baldías” a la Misión Redentorista sin tomar en cuenta que existía una población en dicho territorio. A partir de 1982 las 627 hectáreas se venden como una sola hacienda, alienándose varias veces en el mercado hasta que en el 2004, la compañía Merendon del Ecuador compra la propiedad a fin de explotar yacimientos auríferos²⁹.

²⁹ Registro de la propiedad, Cantón Carlos Julio Arosemena Tola. Historial de dominio, 8 Octubre del 2010.



Las operaciones de extracción auríferas que tenían lugar a lo largo de la llanura del río, obliga a la comunidad a reubicarse en las partes altas en donde el promedio de tierra por familia era de seis metros cuadrados, haciendo imposible llevar a cabo actividades agrícolas de subsistencia. La decisión de dar inicio a una lucha por tierras empieza en el 2010 cuando las mujeres de la comunidad cansadas de vivir en un espacio de ínfimo de tierra y preocupadas por los procesos de contaminación ambiental convencen a los varones de la necesidad de recuperar el territorio de manera legal.

Tomando ventaja de un cese temporal de operaciones por parte de la compañía, que en su momento se encontraba llevando a cabo trámites legales para la obtención de nuevos permisos de operación, la comunidad decide re-ocupar las llanuras del río Anzu que en su momento se encontraban ocupadas por maquinaria de la compañía. El 15 de marzo del 2010 la ocupación se lleva a cabo de manera material, la comunidad rellena espacios previamente excavados en el proceso de extracción de oro a lo largo del río, construye una casa comunitaria con materiales del lugar y empieza a cultivos comunitarios. Meses más tarde, la compañía destruye y quema las plantaciones e infraestructura levantada por Tzawata con ayuda de la policía local y seguridad privada. Debido a esto, la comunidad decide reubicar a 20 familias y sus hogares a la entrada de la comunidad y a lo largo del río a fin de monitorear quién ingresa a lo que ellos consideran ser su territorio ancestral.

A través de las reuniones comunitarias, la población empezó a generar un discurso que explicaba su presencia en el área y justificaba las medidas que habían tomado. A la vez, la comunidad entendía su posición de vulnerabilidad con respecto a la compañía minera. Sabían que era cuestión de tiempo antes de que las autoridades locales las desalojaran del lugar. Además, les preocupaba que su existencia como grupo indígena no tenía reconocimiento político y por lo tanto sus con



respecto a recursos y tierra eran inexistentes. Además, aunque la comunidad veía necesario el reconocimiento legal de un territorio, esta no tenía idea del funcionamiento del marco legal que regía el tema de tierras en el país.

La situación de Tzawata ilustra perfectamente las condiciones de desventaja en las que muchas poblaciones se encuentran al momento de iniciar procesos para acceder a tierras y recursos. En Tzawata por ejemplo solo una minoría de la población había terminado sus estudios primarios poniendo en evidencia su falta de conocimiento con respecto a los procesos administrativos y legales que rigen las lógicas de la propiedad en el país.

Por estas razones, la comunidad busca apoyo y consejo en la infraestructura organizativa e institucional del movimiento indígena. Así los líderes de Tzawata buscan asesoramiento en la FOIN y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Amazonía (COFENAIE). Estas ayudan a Tzawata con una serie de contactos de personas e instituciones que les permite acceder a asesoría educativa, técnica y política. De esta forma, Tzawata participa en una serie de talleres para la organización política indígena, además que reciben el apoyo técnico y representación de abogados de la CONAIE a lo largo del 2010 y el 2011.

Como podemos notar, esta comunidad usa inicialmente estrategias tradicionales accesibles a poblaciones indígenas. En donde usan la infraestructura organizativa existente para saltarse escalas a fin de incrementar su control sobre unidades territoriales. El primer paso fue acceder al reconocimiento político de la comuna indígena, el mismo que es otorgado por la organización indígena de desarrollo CONDEMPE (Consejo de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador). Tan pronto obtienen reconocimiento político buscan que sus derechos indígenas sean aplicados tal



como reza el artículo 57 de la Constitución. Así, luego de largos trámites administrativos y peritajes realizados en el territorio, la Defensoría del Pueblo declara las 627 hectáreas como propiedad en litigio legal y restringe la posibilidad de compra o venta de la misma³⁰ hasta que el conflicto se resuelva.

Sin embargo, aunque la comunidad logra el apoyo y acompañamiento de organizaciones indígenas con mayor experiencia y peso político, la represión de la protesta y los intentos de desalojo por parte de la compañía minera apoyados por la fuerza pública y el ejército ya se hicieron sentir entre los pobladores de Tzawata. Así el 6 de Julio del 2010 llega un grupo de policías a fin de desalojar a las familias asentadas en las áreas explotadas. Luego, el 6 de julio del mismo año, el grupo de ejército IWIA 63 (grupo de selva No.17) ingresan a través del bosque, evitando la entrada por carretera y por lo tanto evitando ser vistos.

La comunidad ha resistido estas provocaciones haciendo uso de medidas de resistencia física en el territorio, en donde han recibido a las fuerzas policiales con filas de mujeres y niños al frente, mientras que los hombres se han armado con lanzas; estas más que armas se usan como instrumentos simbólicos por el derecho indígena al territorio. El encuentro con el ejército por otro lado se resolvió con la presencia oportuna de las autoridades de Tzawata quienes le dieron el encuentro al grupo del ejército, el mismo que se retiró después de varias conversaciones.

Sin embargo, como ya se ha visto en otros casos a lo largo del país, dependiendo de la importancia de las operaciones mineras, el ejército ya ha llevado a cabo desalojos usando la fuerza (Bayón y

³⁰ Defensoría del Pueblo del Ecuador, oficio 14 de Julio, 2011 manda notificar a notarías y registradores de la propiedad del Cantón que dicha propiedad no puede alienarse en el mercado hasta que el litigio se resuelva.



Wilson, 2015)³¹. Además, decenas de líderes comunitarios han sido apresados por la policía nacional y sentenciados por el sistema de justicia (Faro et.al 2015)³².

Más aún, como menciono anteriormente, los logros del movimiento indígena generando redes institucionales y asociaciones políticas a diferentes escalas también han sido disminuidos por el aparato estatal. Con esto, aquellas teorías relacionales donde la idea de territorio se refleja en la habilidad del movimiento indígena por controlar redes y asociaciones escalares deja de ser efectiva pues dichas redes son desmanteladas.

Por ejemplo, el decreto ejecutivo 739 reforma el reglamento para el funcionamiento de las organizaciones civiles y no gubernamentales³³, incrementando el rol del Estado en procesos de autorización, regulación y control de dichas organizaciones. Así, el Estado decide si las organizaciones pueden o no existir, y define qué actividades pueden o no llevarse a cabo bajo medidas arbitrarias. Así, cerca de 16 organizaciones internacionales fueron forzadas a dar por terminadas sus operaciones, pues según el gobierno estas no cumplieron con los requisitos para operar o sus objetivos no fueron autorizados por el Estado ya que desarrollaban actividades que comprometían la paz pública, o sus actividades interferían con la seguridad nacional entre otras (Reyes, 2011). La mayoría de estas organizaciones canalizaba fondos, información, asistencia técnica, y generaban espacios de organización política en temas ambientalistas, indígenas, derechos humanos y de acceso a tierras.

³¹ Uno de los casos más relevantes es el desalojo a la fuerza de 36 familias en la comunidad de Tundayme a fin de concesionar tierras a la empresa Ecuacorriente para explotación de cobre.

³² Dirigentes de las comunidades de Junín en Ítag, San Pablo de Amalí en Bolívar, dirigentes del pueblo Shuar en Morona Santiago, líderes comunitarios de la ciudad del Puyo entre otros han sido apresados y juzgados por delitos de terrorismo, rebelión y obstrucción del orden público.

³³ Decreto Ejecutivo 739, Registro Oficial 570 de Agosto 21 del 2015.



Así mismo, se ha cerrado arbitrariamente al CONDEMPE, organización que canalizaba fondos internacionales para el desarrollo de pueblos indígenas y afro-ecuatorianos y en su lugar se encuentra organizando una nueva institución que cumpliría las mismas funciones, pero ya no estaría influenciado por la CONAIE, sino que estaría bajo el control gubernamental (Chuji, 2009)³⁴.

Ya que muchas de las organizaciones y asociaciones indígenas habían obtenido reconocimiento legal a través del CONDEMPE, entre ellas Tzawata, hoy esta y otras comunidades se encuentran en el proceso de llevar a cabo los trámites administrativos respectivos a fin de obtener nuevo reconocimiento legal. Lo cual pone en el limbo a muchas comunidades que como Tzawata no saben si son legalmente reconocidas como comunidades indígenas o no, hasta que la nueva institución gubernamental legalice su estatus.

Finalmente, debido al debilitamiento de las redes asociativas generadas por el movimiento indígena, Tzawata ha perdido el apoyo económico y técnico de la CONAIE, organización que se encuentra librando batallas políticas con el gobierno y ya no puede apoyar con personal que continúe brindándoles asistencia administrativa y jurídica.

Bajo estas circunstancias, la dirigencia de la comunidad está altamente preocupada por la carencia de estatus político como comuna indígena, y por lo tanto temen por sus derechos indígenas, entre ellos el derecho a su tierra ancestral. Además, cabe mencionar que la comunidad se ha dado cuenta que, aunque tuvieran reconocimiento político y propiedad comunal sobre su territorio, el control del mismo estaría sujeto a intereses de mercado, e intereses mineros. Tomando en cuenta que en el

³⁴ Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad. Julio 28, 2014. Asamblea Nacional:
<http://www.asambleanacional.gob.ec/es/contenido/ley-organica-de-los-consejos-nacionales-para-la-igualdad-1>



Ecuador los recursos del subsuelo le pertenecen al Estado, la comunidad tiene claro que las necesidades de las minorías étnicas en la era post-neoliberal están subordinadas a lo que el gobierno llama intereses nacionales y beneficio colectivos por sobre los intereses de grupos minoritarios.

Por lo tanto, la comunidad reconoce que su lucha por construir territorio en las condiciones actuales podría esfumarse de un momento a otro, o en su lugar podría consolidarse en la medida que las circunstancias puedan cambiar a futuro. Pensar en el peor caso escenario, dado el ambiente de conflictividad ha llevado a la comunidad y sus líderes a reflexionar sobre la importancia del territorio más allá de su existencia material como un recurso de subsistencia.

La información empírica que he recogido muestra que la comunidad ha puesto ingentes esfuerzos en los últimos años a fin de nutrir relaciones socio-espaciales comunitarias que tienen lugar en asociación a un territorio. Yo sostengo que al nutrir dichas relaciones socio-espaciales la comunidad entiende dichas relaciones como claves en la sobrevivencia de la comunidad. Estas serían tan importantes como lo es acceder a un territorio material, donde territorio y relaciones socio-espaciales comunitarias son complementarios. Sin embargo, en caso de la pérdida parcial o total de un territorio, la comunidad aún tendría acceso al espacio de subsistencia creado a través de dichas relaciones socio-espaciales.

La información empírica a la vez muestra que al mantener dichas relaciones socio-espaciales forjadas en prácticas de reciprocidad y compromiso; así como en la afirmación de rasgos indígenas como es la práctica del idioma Kichwa la comunidad fomenta rasgos de identidad indígena que no solo contribuyen a su subsistencia económica sino también a su subsistencia identitaria y por lo tanto a sus derechos indígenas.



Antes de describir las estrategias usadas por Tzawata a fin de asegurar dichas relaciones socio-espaciales; es importante mencionar que el conjunto de normas, prácticas, redes y tipos de asociaciones que fortalecen las relaciones dentro de un grupo en términos de confianza y responsabilidad. Y que se formalizan a través de instituciones y organizaciones han sido teorizados ampliamente bajo términos como *capital social* (Bebbington, Perreault 1999; Durston 1999; Bebbington et.al, 2004). Este término fue usado y difundido durante el periodo neoliberal a fin de entender la importancia de dichas relaciones. Debido a que el presente artículo enfoca en cómo las estrategias comunitarias y de movimientos sociales reflejan teorías de formación territorial, discusiones sobre capital social y su relación con procesos de territorialización son importantes, pero quedan fuera del alcance del presente trabajo.

Espacios de subsistencia: fortaleciendo el tejido comunitario

La necesidad de Tzawata por generar espacios de apoyo alternativos a fin de controlar sus espacios de subsistencia les ha llevado a buscar alianzas con organizaciones trabajando en las ramas de educación y las artes. Así, la comunidad está involucrada en nuevas áreas como las de la educación internacional, educación justa, arte para el desarrollo y turismo comunitario. Estas actividades difieren totalmente de los programas y proyectos tradicionales en los que la comunidad participaba anteriormente a fin de mantener su lucha por tierras.

De hecho, además de las actividades de subsistencia tradicionales como la agricultura, son estas nuevas actividades alternativas las que le permiten a la comunidad acceder a un modesto pero importante fuente de ingresos con el que actualmente costean gastos administrativos y jurídicos relacionados con la legalización de la comuna bajo los nuevos parámetros establecidos por la ley.



Así mismo, son estos ingresos los que les permite costear el apoyo técnico y legal de abogados privados.

Por otro lado, la amistad de la comunidad con estas nuevas organizaciones, así como su participación en estos proyectos generan lazos de apoyo con poblaciones geográficamente diversas, estudiantes universitarios nacionales e internacionales, y voluntarios y turistas extranjeros quienes a través de estos proyectos y programas crean lazos de simpatía y apoyo con la comunidad abriéndole paso a nuevos contactos a nivel internacional.

Por ejemplo, festivales como los de “Amazonía Indomable” tuvieron lugar en Tzawata en el 2014, donde un promedio de 500 artistas y delegaciones de varias provincias del Ecuador se dieron encuentro a fin de promover el derecho indígena al territorio y mostrar su oposición a las industrias extractivas usando arte. Así una mezcla de géneros como el reggae, hip hop, metal, música indígena, teatro y danza se dieron encuentro en el festival, atrayendo a centenares de personas de la región³⁵.

Además, Tzawata ha establecido relaciones con universidades nacionales para generar proyectos turísticos, por el momento la comunidad ha inventariado atractivos turísticos y ha organizado actividades recreativas para visitantes nacionales. Para esto, la comunidad ha construido infraestructura básica con materiales del sector como áreas de picnic a lo largo del río, senderos ecológicos e incluso cabañas provisionales para la estadía. También, han generado toda una retórica en relación a la importancia del territorio como espacio no solo de sustento material, sino

³⁵ El festival del 2014 fue organizado por la Comuna Amazónica en coordinación con Tzawata.



como espacio para la reproducción cultural justificando la lucha indígena por tierras, la misma que se transmite a todos los visitantes que llegan al sector.

Así también trabajan con una organización no gubernamental nacional que mantiene lazos directos con universidades en los Estados Unidos. A través de esta, la comunidad ha participado en procesos de educación justa, en la que miembros de la comunidad y estudiantes internacionales aprenden juntos sobre justicia social, y desarrollo económico usando metodologías que desafían visiones desarrollistas dominantes. Estos proyectos educativos a la vez generan fondos pequeños para proyectos locales. Finalmente, la comunidad ha logrado generar contactos con profesionales nacionales y académicos internacionales, entre los que me sumo a fin de apoyar su causa dentro y fuera del país.

Como nos podremos imaginar, la organización de estas nuevas redes y espacios de apoyo requiere invertir grandes cantidades de tiempo en procesos organizativos, así como en la entrega del trabajo voluntario de todos quienes colaboran juntos para la construcción de infraestructura provisional, mantenimiento de senderos, cultivos comunitarios, cocina comunitaria, improvisación de espacios de aprendizaje en situ, programación de calendarios, tareas entre otros. Actividades que no solo que aseguran el acceso a espacios de subsistencia, sino que normalizan las prácticas de reciprocidad y compromiso como propias de la identidad indígena.

Así mismo, en el último año y medio, la comunidad ha iniciado un proyecto de fortalecimiento del idioma Kichwa pues temen que en caso de no lograr reconocimiento político y eventualmente acceder derechos territoriales; el idioma materno sería uno de los rasgos más importantes a fin de



mantener su calidad como pueblo indígena y por lo tanto ejercer derechos indígenas consagrados en la Constitución.

CONCLUSIONES

Las estrategias de lucha por tierras adoptadas por Tzawata en el 2010 reflejan el uso del aparato institucional generado por la CONAIE a lo largo de décadas de lucha. Así mismo, su accionar sugiere que Tzawata se benefició del uso de redes y asociaciones creadas por organizaciones indígenas regionales con más experiencia y trayectoria política. En donde Tzawata ve necesario asegurarse un territorio a través del reconocimiento político y acceso legal a una unidad territorial de 627 hectáreas. Como vemos, teorías territoriales generadas durante las épocas corporativista y neoliberal son importantes para explicar estrategias usadas por Tzawata y organizaciones indígenas como la CONAIE y COFENIAE en procesos por acceder a tierras. En este sentido vemos que el aparato institucional del movimiento indígena institucionaliza su habilidad por saltarse escalas a fin de ejercer control material sobre un territorio.

Por otro lado, podemos ver que bajo las condiciones adversas descritas durante el período post-neoliberal, esta comunidad no solo que pierde acceso a los medios tradicionales de protesta y participación política. Sino que también advierte que su acceso legal a tierras comunitarias no le asegura el control económico de las mismas. Bajo estas circunstancias, Tzawata genera nuevas asociaciones y redes con actores no tradicionales que le permiten no solo generar pequeños ingresos económicos para seguir adelante con su lucha por tierras; sino que también le ha permitido identificar que las relaciones socio-espaciales basadas en la reciprocidad y compromiso son valiosas al momento de asegurarse un espacio de subsistencia. En este sentido los espacios de



apoyo generados con organizaciones educativas y culturales son coherentes con los esfuerzos de la comunidad por asegurar su espacio de subsistencia.

Finalmente, es importante mencionar que este ejercicio por entender teorías de formación territorial en función de estrategias por acceder y controlar tierras y recursos naturales es de gran importancia para las comunidades indígenas y sus organizaciones. Las mismas que pueden usar teorías académicas a fin de clarificar sus propios procesos comunitarios y organizativos. Más aún, el hacer esta información disponible a las comunidades puede generar diálogos valiosos entre las comunidades y académicos que buscan contribuir a procesos de justicia social.

BIBLIOGRAPHY

Acosta, Alberto. 2008. *Bitácora constituyente: todo para la patria, nada para nosotros*.

Quito: Abya-Yala

Allen, John, y Allan Cochrane. 2007. “Beyond the Territorial Fix: Regional Assemblages, Politics and Power”. *Regional Studies* 41 (9): 1161–76. doi:10.1080/00343400701543348.

———. 2010. “Assemblages of State Power: Topological Shifts in the Organization of Government and Politics”. *Antipode* 42 (5): 1071–89. doi:10.1111/j.1467-8330.2010.00794.x.

Amin, Ash. 2004. “Regions Unbound: Towards a new Politics of Place”. *Geografiska Annaler: Series B, Human Geography* 86 (1): 33–44. doi:10.1111/j.0435-3684.2004.00152.x.



Andolina, Robert. 2003. “The Sovereign and Its Shadow: Constituent Assembly and Indigenous Movement in Ecuador”. *Journal of Latin American Studies* 35 (4): 721–50. doi:10.1017/S0022216X03006965.

Bayón, Manuel y Wilson, Japhy. 2015. Tundayme: el despojo minero avanza. *Plan V*:

<http://www.planv.com.ec/historias/sociedad/tundayme-el-despojo-minero-avanza>.

Visitado Julio 22, 2016.

Bebbington, A., S. Guggenheim, E. Olson, y M. Woolcock. 2004. “Exploring Social Capital Debates at the World Bank”. *Journal of Development Studies* 40 (5): 33–64. doi:10.1080/0022038042000218134.

Bebbington, Anthony. 2004. Movement and Modernization, Markets and Municipalities:

Indigenous Federations in Rural Ecuador. In Richard Peet and Michael Watts, eds.,

Liberation Ecologies. 2nd ed. New York: Routledge.

———. 2012. “Underground political ecologies: The second Annual Lecture of the Cultural and Political Ecology Specialty Group of the Association of American Geographers”. *Geoforum*, Themed issue: Spatialities of Ageing, 43 (6): 1152–62. doi:10.1016/j.geoforum.2012.05.011.

Bebbington, Anthony, y Thomas Perreault. 1999. “Social Capital, Development, and Access to Resources in Highland Ecuador*”. *Economic Geography* 75 (4): 395–418. doi:10.1111/j.1944-8287.1999.tb00127.x.



Becker, Marc. 2013. “The Stormy Relations between Rafael Correa and Social Movements in Ecuador”. *Latin American Perspectives* 40 (3): 43–62. doi:10.1177/0094582X13479305.

Benalcázar, Carlos. 1971. *Abolición del trabajo precario en la agricultura: El IERAC por dentro*. Quito: ed.Olmedo

Blomley, Nicholas. 2005. “The Borrowed View: Privacy, Propriety, and the Entanglements of Property”. *Law & Social Inquiry* 30 (4): 617–61. doi:10.1111/j.1747-4469.2005.tb01142.x.

Bretón, Víctor. 1997. *Capitalismo, reforma agraria y organización comunal en los Andes: una introducción al caso ecuatoriano*.

Bretón, Víctor, David Cortez, y Fernando García. 2014. “En busca del sumak Kawsay. Presentación del Dossier”. *Íconos - Revista de Ciencias Sociales* 0 (48): 9. doi:10.17141/iconos.48.2014.1206.

Bryan, Joe. 2012. “Rethinking Territory: Social Justice and Neoliberalism in Latin America’s Territorial Turn”. *Geography Compass* 6 (4): 215–26. doi:10.1111/j.1749-8198.2012.00480.x.

Chartock, Sarah. 2011. “How Movement Strength Matters: Social Movement Strength and the Implementation of Ethnodevelopment Policy in Ecuador and Peru”. *Studies in Comparative International Development* 46 (3): 298–320. doi:10.1007/s12116-011-9090-3.

Chuji, Mónica. 2009. El cierre del CONDEMPE: Otro ejemplo del racismo y autoritarismo del president Correa. *Llacta*: <http://www.llacta.org/notic/2009/not0127a.htm>



Ciccariello-Maher, George. 2013. “Constituent Moments, Constitutional Processes”. *Latin American Perspectives* 40 (3): 126–45. doi:10.1177/0094582X13476001.

Cox, Kevin. 1998. “Spaces of Dependence, Spaces of Engagement and the Politics of Scale, or: Looking for Local Politics”. *Political Geography* 17 (1): 1–23. doi:10.1016/S0962-6298(97)00048-6.

De los Reyes, Che. 2011. In Ecuador, closure of 16 foreign NGOs and Omen for other international groups?. Devex:

[https://www.devex.com/news/in-ecuador-closure-of-16-foreign-ngos-an-omen-for-o
ther-international-groups-75569](https://www.devex.com/news/in-ecuador-closure-of-16-foreign-ngos-an-omen-for-other-international-groups-75569). Visitado Julio 22, 2016.

Duche, Carlos. 2012. Tesis: Estudio Antropológico de la Hacienda Ila. Quito: Universidad Salesiana.

Durston, John. 1999. “Building Community Social Capital”. *CEPAL Review* 69: 103–18.

Faro, Alexandre; LeBlanc, Alexa; Murcia, Diana. 2015. Criminalización de la protesta social frente a proyectos extractivos en Ecuador. Quito: Federación Internacional de Derechos Humanos

Gudynas, Eduardo. 2011. “Buen Vivir: Today’s Tomorrow”. *Development* 54 (4): 441–47. doi:10.1057/dev.2011.86.



Hale, Charles R. 2005. "Neoliberal Multiculturalism". *PoLAR: Political and Legal Anthropology Review* 28 (1): 10–19. doi:10.1525/pol.2005.28.1.10.

Harrison, John. 2013. "Configuring the New Regional World": On Being Caught between Territory and Networks". *Regional Studies* 47 (1): 55–74. doi:10.1080/00343404.2011.644239.

Jones, Katherine T. 1998. "Scale as Epistemology". *Political Geography* 17 (1): 25–28. doi:10.1016/S0962-6298(97)00049-8.

Keating, Michael. 1998. *The New Regionalism in Western Europe: Territorial Restructuring and Political Change*. Cheltenham, UK; Northampton, Mass: EElgar.

Lucero, José Antonio. 2006. "Representing 'Real Indians': The Challenges of Indigenous Authenticity and Strategic Constructivism in Ecuador and Bolivia". *Latin American Research Review* 41 (2): 31–56.

Massey Doreen. 1994. A global sense of place. In *Space, Place and Gender*. Minneapolis: University of Minnesota.

Marti I Puig, Salvador, y Cristina Bastidas. 2012. "Have Protests Changed? Current Political Mobilization in Bolivia and Ecuador". *ICONOS. Revista de Ciencias Sociales*, núm. 44: 19–33.

Murphy, A.; Entrikin, N; Paasi, A; Macleod, G; Jonas, A; Hudson, R. 2008. Bounded vs.

Open Regions and beyond: Critical perspectives on regional worlds and words. Association of American Geographers Conference, panel discussion transcript. Boston.



Offen, Karl. 2003. "Narrating Place and Identity, or Mapping Miskitu Land Claims in Northeastern Nicaragua". *Human Organization* 62 (4): 382–92.

Perreault, Thomas. 2003a. "'A People with Our Own Identity': Toward a Cultural Politics of Development in Ecuadorian Amazonia". *Environment and Planning D-Society & Space* 21 (5): 583–606. doi:10.1068/d339.

Perreault, Thomas. 2003b. "Making Space: Community Organization, Agrarian Change, and the Politics of Scale in the Ecuadorian Amazon". *Latin American Perspectives* 30 (1): 96–121.

Perreault, Thomas. 2013. "Dispossession by Accumulation? Mining, Water and the Nature of Enclosure on the Bolivian Altiplano". *Antipode* 45 (5): 1050–69. doi:10.1111/anti.12005.

Smith, Neil. 1996. "Spaces of Vulnerability: The Space of Flows and the Politics of Scale". *Critique of Anthropology* 16 (1): 63–77.

Van Cott, Donna. 2005. *From Movements to Parties in Latin America: The Evolution of Ethnic Politics*.

Yashar Debora. 2005. *Contesting Citizenship in Latin America: The Rise of Indigenous Movements and the Postliberal Challenge*. Cambridge; New York: Cambridge University Press.

Zimmerer, Karl S. 1991. "Wetland Production and Smallholder Persistence: Agricultural Change in a Highland Peruvian Region". *Annals of the Association of American Geographers* 81 (3): 443–63. doi:10.1111/j.1467-8306.1991.tb01704.x.



7. LA REIVINDICACIÓN TERRITORIAL EN LA CUMBRE AGRARIA, CAMPESINA, ÉTNICA Y POPULAR COMO ALTERNATIVA A LA HEGEMONÍA EXTRACTIVISTA

Carlos David Rodríguez Velásquez
Aspirante a Magíster en Sociedades Rurales Universidad de Caldas
cadarove@gmail.com

RESUMEN

En el panorama actual de reactivación de los diálogos de paz entre el gobierno nacional y las FARC-EP, el problema de la tierra y de los territorios en Colombia cobra especial relevancia como una de los principales ejes que han sustentado la permanencia del conflicto armado interno.

La falta de acceso y la poca seguridad de la tenencia de la tierra son dos de los problemas más graves que han enfrentado las poblaciones rurales campesinas, indígenas y afrodescendientes en el país, pues en el mundo rural se ha consolidado un acaparamiento de tierras y dinámicas de despojo



desde la época de la colonia. La lucha por el acceso y el reconocimiento material del territorio como derecho ha sido históricamente el contenido principal de las reivindicaciones de los “movimientos sociales rurales”, representativos de las ruralidades diversas que hacen presencia en el campo colombiano. A pesar de lo agudo e incluso violento que ha resultado el conflicto por la tierra, muy pocos han sido los avances, destacando quizás lo obtenido por los pueblos indígenas con la obtención de autonomía relativa sobre los territorios que han logrado reconocimiento.

Adicionalmente, la etapa actual del capitalismo soportado en el modelo extractivista ha generado y acentuado riesgos y problemas para las diferentes ruralidades que hoy se identifican “en resistencia” al modelo, así como para los territorios, y en ese contexto histórico surge la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular como alternativa de movilización social aglutinadora de sectores heterogéneos de movilización social que confluyen en la defensa territorial y en las resignificancias del territorio como paradigma de oposición a la economía extractivista, entre otras.

En ese orden de ideas, se estudiarán las diferentes significancias y apuestas de defensa territorial que convergen en el escenario de la Cumbre, particularmente la ONIC, ANZORC Y PCN para así comprender cómo concepciones y visiones diferentes como la indígena (ONIC), la afrocolombiana (PCN) o la campesina (ANZORC) encuentran puntos en común hacia la movilización colectiva en oposición al modelo extractivista, y explorar si se enmarcan estas luchas comunes, con sus particularidades, en los discursos de la emancipación.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN



Enmarcar un estudio en el cuestionamiento de cómo ha sido la oposición a una etapa o forma del capitalismo, que es el extractivismo, exige inicialmente una aproximación clara y detallada del fenómeno como tal. Resulta importante entonces desarrollar el concepto de “extractivismo”, comprender cómo ha llegado el modelo económico mundial a esta etapa, de dónde surge y cómo ha sido su adopción en el contexto latinoamericano y particularmente colombiano. Esto, en razón a que es una etapa reciente, en sus primeros momentos de aplicación y conceptualización, razón por la cual muchos de los actores en los territorios en disputa y despojados, aún no comprenden ni complejizan, paso inicial para la oposición al mismo.

De esta manera, se intentará comprender el por qué surgen, a escala global, voces que se oponen a su ejecución y a sus discursos y posiciones, identificando riesgos que afectan a la naturaleza, el territorio, los seres humanos y no humanos. Interesa entonces conocer esas voces, esos argumentos que no sólo están propugnando el cambio de modelo económico, sino que están planteando nuevas alternativas y discursos.

En este marco, resulta importante un estudio general sobre cómo se ha comenzado a plantear y a ejecutar el modelo extractivista en Colombia, cuáles son sus perspectivas, aliados y problematizaciones principales, para poder conocer efectivamente qué aspectos de la economía actual pueden enmarcarse como parte de la etapa extractivista del capitalismo, y principalmente, en qué momentos y lugares su aplicación ha derivado en conflictos territoriales con lenguajes de valoración diferentes sobre el territorio.

Así, a través de esta aproximación práctica y teórica, que permite problematizar la agudización de los conflictos territoriales, se halla entonces que quizás una de las experiencias más visibles y emblemáticas en el país que, entre otras cosas, está planteando oposición social y movilización



contra las consecuencias de este modelo, es la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, que a través de la reivindicación territorial ha logrado converger actores completamente heterogéneos del mundo rural colombiano en una agenda común de reivindicación.

Se hará entonces un estudio de los antecedentes de la Cumbre, su composición de organizaciones y movimientos, particularmente de actores rurales y políticos, sus apuestas, planteamientos y plataformas. Una de las problematizaciones es que si bien la Cumbre es un escenario coyuntural y reciente, quienes la componen y los objetivos de lucha de esas organizaciones, se corresponden con la problemática rural desde décadas atrás. Estas organizaciones son representativas en gran medida de las diferentes ruralidades que resisten en el país, desde una perspectiva de clase diferente al latifundista, el agroexportador o extractivista, agrupando a indígenas, campesinos, afrocolombianos y trabajadores urbanos y rurales sin tierra.

Con el anterior ejercicio, se logra hacer una diferenciación con otros movimientos sociales que desde la ruralidad coexisten en el momento actual, como las “Dignidades Agropecuarias”, que más allá de plantear alternativas al modelo económico, social y político o al extractivismo, plantean exigencias para la inclusión de sectores rezagados por la economía neoliberal a las dinámicas productivas y al desarrollo del capital, sin perspectiva de clase y con permisión incluso de la acumulación de tierra o el agronegocio.

Vistas estas diferencias, es que se da prelación entonces al espacio de la Cumbre, pues en él es que se identifica inicialmente alternativas al modelo de desarrollo y a la explotación, en los términos que plantea Arturo Escobar en su teorización del posdesarrollo y los discursos de la transición. Se explorará entonces si desde la reivindicación de la defensa territorial que realiza la Cumbre y las organizaciones que la componen, se plantean otras formas discursivas, teóricas, epistemológicas y



de cosmovisión diferentes al extractivismo y al capitalismo tal cual lo conocemos.

ANTECEDENTES

Para abordar el interrogante del “extractivismo” como sugiere Gudynas³⁶, partimos de la base de que existen diferentes formas de “extracción” o apropiación humana de los recursos o atributos de la naturaleza. En ese orden de ideas, no nos referimos a extractivismo como cualquier forma de apropiación de la naturaleza, sino a *un tipo particular de extracción de recursos naturales, en gran volumen o alta intensidad, de los cuales el 50 % o más es destinado a la exportación, como materias primas sin procesar o con un procesamiento mínimo. Incluye tanto las fases de explotación, como la exploración, descubrimiento, cierre y abandono de los sitios de apropiación.*³⁷

Como se puede evidenciar en esta definición, estamos hablando de un fenómeno que si bien no es nuevo, tiene unas particularidades que lo identifican como un fenómeno contemporáneo y del capitalismo actual, entre las cuales identificamos las siguientes y que lo diferencian de las anteriores formas de extracción de recursos naturales:

1. **Se enmarca en una dinámica de capitalismo global:** A diferencia de la economía de colonia, que despojaba para acumular recursos de la naturaleza en beneficio de una

³⁶ Extracciones, Extractivismo, Extrahecciones. Ver: <http://www.extractivismo.com/documentos/GudynasApropiacionExtractivismoExtraheccionesOdeD2013.pdf> GUDYNAS, 2013.

³⁷ IBID.



economía céntrica, en este caso encontramos economías dominantes múltiples, con diversidad de actores y de intereses, los cuales incluso superan a los Estados en la determinación de los intereses y en las prioridades. Si bien la materialidad de la operación es local, la organización en el sentido político y económico es global, y dado el altísimo flujo de recursos del nivel global, se hace muy difícil para las comunidades locales e incluso para los gobiernos ejercer un control.

2. **Dependencia de la Economía Financiera:** El valor o prioridad que se le otorga a las materias primas ya no se encuentra exclusivamente en su valor propio, sino que convergen nuevos escenarios para la determinación de una extracción, que tienen que ver con las leyes del mercado internacional, que determinan los momentos y las prelacións, así como los valores de exportación.
3. **Relación de Dependencia:** los fundamentos de las economías extractivistas se enmarcan en la persistencia de las relaciones de dependencia de los países latinoamericanos en particular. Es decir, la acumulación se da en detrimento de los territorios sometidos, en el escenario de poder global, a las potencias dominantes capitalistas, esto a pesar del surgimiento de nuevos gobiernos progresistas.
4. **Materialidad sin procesar o bajo procesamiento:** Como se indicó, con el extractivismo la “materialidad”, o la materia que se explota, consiste en materias de la naturaleza sin procesar o poco procesadas, encontrando entonces que cuando las economías dependientes o latinoamericanas se han enfocado en el extractivismo, se han supeditado otros sectores de



la economía como las industrias, los servicios, la tecnología o la adjudicación de valor agregado, razón por la cual se establece por algunos autores como neocolonialismo.

5. **Ampliación del Panorama Material:** De manera general, se ha identificado como práctica extractivista clásica la de la minería, o extracción de material e insumos directamente del suelo y del subsuelo, como materia prima o como riqueza directa. A esta extracción, suele sumársele la extracción de hidrocarburos y productos combustibles y derivados del petróleo, que constituyen una de las principales ejemplificaciones de las economías basadas en el extractivismo. Sin embargo, de manera contemporánea encontramos otros sectores previamente no considerados, como es el caso de los monocultivos de agronegocios de la exportación, los cuales también son intensivos y de alto volumen, destinados para la exportación principalmente, y son materias poco procesadas o sin procesar, como la soja, que en el contexto actual se podría catalogar como economía extractivista a pesar de que inicialmente se considerara como sistema agroalimentario..

6. **Alto Impacto Ambiental y Afectación de “Bienes Comunes”³⁸:** Por primera vez, el desarrollo y las dinámicas del capital están poniendo en entredicho la supervivencia misma de la especie humana, al poner en riesgo los bienes comunes como el agua, el aire, y los ecosistemas críticos de los cuales depende la vida en el planeta. Igualmente, dada la envergadura y la capacidad de explotación, el agotamiento y consumo de los recursos no

³⁸ Territorios en Disputa. Despojo capitalista, luchas en defensa de los bienes comunes naturales y alternativas emancipatorias para América Latina. Bajo Tierra Ediciones. 2014.



renovables cada vez está más cerca del punto de inflexión, por lo cual las alternativas se hacen cada vez más pertinentes y necesarias.

Como puede apreciarse, el extractivismo se enmarca en el capitalismo como referente económico y político, y hace parte entonces de una estrategia de acumulación de capital que privilegia las grandes inversiones y capitales sobre las sociedades locales y sobre los territorios.

Como se ha indicado, el fenómeno extractivista se ha enmarcado en una dinámica global de dominación³⁹, en la cual el sur del continente americano, así como el continente africano y parte del asiático, se han clásicamente encontrado en una situación de subordinación y dependencia, o en lo que algunos llaman explotación del sur⁴⁰ por el norte. Esta dependencia ha trascendido la economía e incluso desde el inicio de la vida republicana de los países suramericanos, ha existido una relación de dependencia y subordinación a las directrices de las potencias dominantes y a sus postulados económicos.

Esta situación fue una constante incluso hasta entrado el siglo XX, y tuvo un quiebre con la influencia socialista de la revolución cubana y los procesos de transformación que le sucedieron, como el caso del ascenso al poder de Salvador Allende. Sin embargo, estos procesos revolucionarios o reformistas fueron duramente reprimidos por la potencia hegemónica norteamericana, por lo que en el continente se impuso la postura económica direccionada por los organismos adscritos o dominados por la principal economía capitalista: la estadounidense.

³⁹ Harvey, David. 2004

⁴⁰ De Sousa, Escobar, entre otros, epistemologías del sur y posdesarrollo.



Sin embargo, la fuerte movilización social del continente hizo que a pesar de que se sostuvieran las relaciones de dominación y subordinación, se incentivara un discurso desarrollista, introducido en el continente por la CEPAL, el cual, con múltiples observaciones y errores, logró diversificar las economías latinoamericanas y obtener avances en sectores adicionales a los de las materias primas. Así, desde mediados del siglo XX se incrementó la expansión urbana y obrera, la creación de industrias y manufacturas que amplia incidencia lograron en dinámicas de cambio de paradigma hacia los servicios y los valores agregados, superando así la dependencia a los recursos naturales y logrando algunos niveles de producción para el consumo nacional y una creciente aunque tímida participación en la economía internacional.

Fiel a las directrices hegemónicas, en el continente suramericano se adoptaron las transformaciones y directrices emanadas del consenso de Washington, las cuales, entre otros aspectos, lograron la apertura de los mercados y la libre competencia, que en condiciones absolutamente divergentes, llevó a la quiebra o falta de estabilidad de economías no extractivas. Por ese motivo, finalizando el siglo XX e iniciando el siglo XXI, hay un resurgir o reorientación de las posturas extractivistas, pues se privilegia la industria de las potencias o economías centrales, y vuelven a ser necesarias, con una demanda cada vez más creciente, las materias primas no renovables o los recursos de la naturaleza.

Paralelo a esta reorientación macroeconómica, surge un movimiento social, popular y político en el contexto latinoamericano que logró un amplio ascenso y conquistó el poder en países como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, en los cuales diversos discursos de izquierda y progresistas comienzan a direccionar las políticas de estos países, generando críticas y tomando distancia del consenso de Washington y de los dogmas neoliberales.



A pesar de los profundos cambios que ha significado el viraje político a la izquierda de la mayoría del continente, en la materia que nos ocupa, podemos inclinarnos a decir que en estos países no se ha sustituido el modelo extractivista, y más bien se ha transformado a lo que llaman “neoextractivismo” (GUDYNAS, 2013).

Así, la diferencia de los países progresistas o de izquierda con los países de economías neoliberales y políticas conservadoras como Colombia, radica no en la sustitución del rol en la economía global, pues continúa un rol de dependencia, sino más bien en la forma en la que interviene y participa el Estado en la administración de las economías de extracción, y principalmente en la forma en la que se administran los recursos que se acumulan con estas prácticas. Es decir, los gobiernos progresistas privilegian una mayor participación del Estado en la extracción, y por lo tanto una mayor participación en los dividendos o la acumulación que de la actividad se deriva. Igualmente, se propende por que las entradas o el crecimiento económico que de la actividad extractiva se desarrolle, sean utilizados para el bienestar social y el privilegio hacia las clases excluidas, en un discurso desarrollista.

Las economías de estos países de gobiernos progresistas siguen en gran medida dependientes de formas de apropiación por extractivismo, razón por la cual la mayoría de sus efectos negativos en términos ambientales y sociales, así como las características del mismo, se siguen presentando. Sin embargo, de manera reciente han surgido críticas a este modelo, con alternativas como el Buen Vivir en el Ecuador o los derechos de la madre tierra consagrados en la constitución boliviana, que sin duda han abierto el debate hacia la insostenibilidad de la perpetuación del modelo extractivista y como crítica a la relación de subordinación que esta acarrea.



Las particularidades del caso colombiano resultan bastante problemáticas, y la tensión entre el extractivismo y la naturaleza y las comunidades locales se hace cada vez más evidente y conflictiva.

Como es sabido, los gobiernos colombianos, incluso en este nuevo momento latinoamericano de alternativas de izquierda y progresistas, han estado históricamente alineados con las posturas tanto políticas como económicas de Washington y del gran capital inter y transnacional. Es por este motivo, que tanto el libreto desarrollista de la CEPAL, como la apertura económica y el consenso de Washington, han sido aplicados al pie de la letra, con las consecuencias sociales y de conflictividad que cada vez son más evidentes.

Es así como en el país las posturas de privilegio de las economías extractivistas son propiciadas por las administraciones e incluso se han diseñado políticas públicas en su servicio⁴¹, y al momento se encuentra el país al borde de una explosión de conflictividad en razón a que gran parte del territorio nacional fue entregado en concesión o está en proceso de ser concedido y asignado al capital transnacional para la explotación extractivista, no sólo la que identificamos como clásica, de hidrocarburos o de minería, sino transformación de estas hacia prácticas cuestionadas como el fracking, o la gran minería a cielo abierto.

Los impactos que se identifican pueden ser catalogados como multidimensionales, es decir, se identifican impactos en múltiples dimensiones y miradas, como los aspectos ambientales al realizar

⁴¹ Basta recordar el pilar del gobierno de Álvaro Uribe, de la “confianza inversionista”, que no era otra cosa que gavelas e incentivos al capital transnacional extractivista para la implementación de proyectos en el territorio.



estas prácticas en ecosistemas frágiles (páramos, zonas de reserva forestal, parques nacionales, entre otros), así como cuando la práctica extractivista es sobre los llamados bienes comunes, es decir, iniciativas de extracción de agua, creación de hidroeléctricas, cambio u modificación de los cauces de los ríos, bonos de carbono y economización extractiva del aire.

Otra de las dimensiones de esta problemática tiene que ver con la transformación y la focalización, es decir, se focalizan los incentivos y las políticas a estas prácticas extractivistas, en contraposición de la utilización sostenible del territorio a través de la agricultura o de la economía campesina o tradicional. Esto hace evidente una tensión que permanece creciente, pues como hemos indicado previamente, hace parte de una estrategia global que involucra recursos enormes, pero se lleva a cabo en contextos locales, en los que precisamente esas sociedades, gobiernos locales y formas organizativas no tienen la oportunidad de incidir o de competir u oponerse a esos grandes procesos de extracción. Adicionalmente, hay que agregar que estas dinámicas han sido impuestas por medio de estrategias de violencia estatal y para estatal, la cual ha propiciado el despojo y vaciamiento de los territorios, sobre los cuales luego se traslapan los intereses del capital transnacional.

Sin embargo, y a pesar de la diametral desventaja y posición desigual, en Colombia se viene activando y acrecentando un fuerte movimiento de oposición al extractivismo tal cual hemos descrito, en una realidad sin precedentes, que reúne elementos de la mayor diversidad, y que incluso han estado en ocasiones en posiciones contrapuestas⁴². Son ejercicios que surgen precisamente desde lo local, en donde se lleva a cabo o se pretende llevar a cabo la extracción masiva extractivista, pero que utilizan elementos de movilización global y solidaria, que han logrado

⁴² Como el caso de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular.



articularse cada vez más a procesos y organizaciones continentales o globales (caso Vía Campesina, de la cual hacen parte ya organizaciones colombianas), y que plantean precisamente la necesidad de alternativas diferentes a esta extracción.

MARCO CONCEPTUAL

Este estudio se basa principalmente en los elementos teóricos desarrollados por el profesor Boaventura de Sousa Santos en su construcción académica que versa sobre la emancipación social, los movimientos sociales y las epistemologías del sur. Toman relevancia estas construcciones teóricas, pues desde las epistemologías del sur global, se da valor a los elementos discursivos ajenos a la “modernidad”, se comprenden realidades y racionalidades divergentes, alternativas, que se escapan incluso a la lógica del capitalismo. Bajo esta perspectiva, se le asigna validez a posturas como las emanadas desde la Cumbre, que cuestionan la “obligatoriedad” del modelo de capitalismo extractivista, y se retoman otras racionalidades.

En igual modo, se retomarán los desarrollos conceptuales sobre la economía capitalista en su fase de extractivismo y neoextractivismo, desarrollado por Eduardo Gudynas, Maristella Svampa, Alberto Acosta, Norma Giarraca, Miguel Teubal, quienes observan el fenómeno desde una perspectiva latinoamericana, crítica de la dogmática capitalista tradicional y se cuestiona el modelo como imposición hegemónica, relacionada entonces con la hegemonía desarrollada también por Boaventura de Sousa Santos.

Para el estudio de las formas de comprensión del territorio en las diferentes organizaciones que componen la Cumbre, se tendrá como fundamento lo desarrollado por el profesor brasileiro



Fernando Mancano para la comprensión y complejización del concepto de territorio como relación de poder, el cual se ajusta a la perspectiva trazada en el Proyecto pues observamos precisamente que los conflictos territoriales entre la visión extractivista y las visiones que se oponen a ella, son disputas de relaciones de poder.

Por último, si bien la Cumbre no es un movimiento social ambientalista per se, utilizaremos la dinámica de comprensión de los movimientos sociales ambientalistas trabajada por el profesor Isaías Tobasura, con el fin de poder hacer un paralelo entre las formas y dinámicas identificadas por el profesor Tobasura que hacen parte del movimiento social ambiental, y la Cumbre, como movimiento social diverso y amplio en contraposición al extractivismo.

OBJETIVOS

Objetivo General: Analizar los puntos de encuentro de la agendas de las organizaciones constituyentes de la cumbre agraria con respecto a la defensa del territorio como estrategia emancipadora frente al avance del modelo extractivista.

Objetivos Específicos:

- Analizar las dinámicas del capitalismo extractivista en Colombia, sus ámbitos de ejecución y las tensiones principales que se ha derivado de su ejecución.
- Comprender y describir las diversidades que componen la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular frente a la reivindicación y defensa territorial, específicamente de la ONIC, ANZORC y PCN.



- Analizar las perspectivas de movilización social con perspectiva de defensa territorial que en territorios haya liderado la Cumbre y donde se hayan identificado conflictos territoriales derivados del capitalismo extractivista.

METODOLOGÍA PROPUESTA

La propuesta investigativa, como se podrá apreciar, pretende explorar cómo desde las ruralidades en resistencia, particularmente desde “el sur global” se vienen generando acciones colectivas de oposición al modelo de capitalismo extractivista, resignificando el concepto del territorio, el acceso y la defensa del mismo como una alternativa de emancipación desde América Latina.

En atención a lo anterior, de manera inicial se plantea que para el desarrollo de esta problemática, es necesario ubicarse en los enfoques críticos como posición teórica a través de la cual se observa el fenómeno, ya que se parte de la base de que el modelo de capitalismo extractivista que se pretende desarrollar, describir y comprender para estudiar las alternativas de oposición al mismo, hace parte de una ideología imperante y de una construcción sistémica que puede, y debe, ser transformada. Igualmente, se sustentan en teorías críticas las construcciones conceptuales que permiten observar las resignificancias del concepto de territorio y el potencial emancipatorio que tienen las ruralidades latinoamericanas que lo defienden.

Si bien se usará una metodología cualitativa para acercarse a comprender, por ejemplo, los diferentes conceptos que se tienen sobre el territorio desde los colectivos rurales, se dará prelación no al método, sino a los saberes sociales, campesinos, indígenas, populares, a aquellas



significancias que están permitiendo que emerjan alternativas de oposición concretas al modelo extractivista, superando así el culto al método para darle prelación a la transformación de una realidad que al ser descrita se identificará como nociva y susceptible de ser transformada.

De esta manera, se utilizarán herramientas para la observación de la realidad con perspectiva del sujeto, con la realización de entrevistas a líderes representativos de los diferentes sectores que componen la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. Así, se realizará una focalización a la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC-, la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina – ANZORC-, y el Proceso de Comunidades Negras –PCN-, para entender si el proceso de la Cumbre se enmarca en las posturas emancipatorias de defensa territorial que se describirán en el marco teórico, o si por el contrario corresponde a una experiencia de contexto y coyuntural exclusivamente.

En este orden de ideas, se diseñará una hoja de ruta de entrevista, que contenga parámetros indicativos de la aproximación teórica que se establece, es decir, que permita identificar en los entrevistados elementos comunes sobre la percepción territorial, que permitió la confluencia en el escenario de la cumbre a pesar de las enormes diferencias y divergencias históricas.

En razón a que la investigación versa sobre la comprensión del concepto territorial en un movimiento social específico, el tiempo en el que se enmarca es precisamente en el que surge y se constituye la Cumbre, con sus antecedentes inmediatos y de manera prospectiva hasta el momento actual. En ese orden de ideas, se estudiará la aproximación al concepto que desde cada componente de la cumbre se comprende el territorio, en lo corrido de la segunda década del siglo XXI (2010 – 2015), sin dejar de lado la comprensión del mandato agrario como antecedente principal.



Igualmente, en razón a que de manera reciente se falló a favor una demanda al Plan Nacional de Desarrollo que presentó la Cumbre, en la que entre otras cosas se suspendió la actividad minera en áreas de páramo y se reconoció autonomía a los entes territoriales para decidir sobre la misma actividad en los municipios, se analizará a través de un estudio jurisprudencial los avances también legales de la Cumbre frente al extractivismo.

BIBLIOGRAFÍA:

ESCOBAR, Arturo. La Invención del Desarrollo. UC.

GUDYNAS, Eduardo. 2013. Extracciones, Extractivismos y Extrahecciones. Observatorio del Desarrollo.

FUENTES López, Adriana Patricia. “Marcos Legales de Acceso a la Tierra: Caso Colombia”. Bogotá, Centro de Investigación y Educación Cinep/PPP, 2010.

MACHADO, Absalón. Visiones y Concepciones sobre el Problema Agrario en Colombia.

RINCÓN, Felipe. 2014. Consideraciones Teóricas de la Cuestión Agraria y Campesina y la Explotación del Trabajo Campesino por el Capital.

SANTOS, Boaventura de Sousa. Una Epistemología del Sur. La Reinención del Conocimiento y la Emancipación Social. CLACSO. 2005.

SVAMPA, Maristella. “Consenso de las Commodities” y Lenguajes de Valoración en América Latina. Nueva Sociedad. 2013.



TOBASURA A., I. Ambientalismo y ambientalistas. El ambientalismo criollo a finales del siglo XX 1ª ed. Universidad de Caldas serie cuadernos de investigación No 21 abril. 2006. Manizales Colombia.

MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO: DEFENSA DEL TERRITORIO Y LOS BIENES COMUNES NATURALES

SESIÓN 1

Hora: 10:30am - 1:00pm

Salón: A- 101

Responsables:

- **Coordinador(a) de mesa: María Rosario Rojas**
- **Comentarista: Luis Felipe Rincón**

8. LOS RÍOS QUE NOS UNEN. EL MOVIMIENTO ANTIREPRESAS EN MÉXICO

Mónica Montalvo Mendez⁴³

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco

momm85@gmail.com

⁴³ Antropóloga , actualmente estudiante del doctorado en Desarrollo Rural en la UAM-X y parte del colectivo Hijos de la Tierra; momm85@gmail.com.



La construcción de hidroeléctricas en México ha implicado grandes conflictos socio-ambientales, a pesar de eso y del rechazo de las comunidades que serían afectas por estas obras, las autoridades y empresas siguen promoviéndolas, como consecuencias se han formados articulaciones locales y regionales que a su vez , se han conformado como un movimiento nacional : Movimiento Mexicano de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos MAPDER.

El MAPDER nace en el 2014 y está integrado por movimientos, organizaciones, personas y colectivos. Es un movimiento social autónomo, no partidista, horizontal, que busca el consenso, el respeto, la solidaridad y la ayuda mutua, la vinculación entre grupos sociales y seres humanos. Actualmente el MAPDER incluye luchas en contra de la construcción de presas y en defensa de los ríos de por lo menos 13 estados del país: Sonora, Coahuila, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Veracruz, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, D.F.

Las presas no se construyen en un vacío, se construyen en un territorio determinado, donde existen diversas clases de relaciones en este espacio, no sólo entre los grupos que se asientan en él, entre éstos y las autoridades, sino con la propia naturaleza; por lo tanto, en la construcción de presas se disputan al menos dos concepciones de vida y territorio. Por un lado, la del capitalismo que considera que todo se puede mercantilizar y por lo tanto tener precio (en este caso, el territorio, el agua y la vida); y, la otra concepción es de las comunidades quienes afirman que su vida, historia, identidad y dignidad no tienen precio.

Por lo cual el objetivo de esta ponencia es presentar el proceso de la conformación del MAPDER y analizar a mas de 10 años de su nacimiento cual es el contexto actual que se enfrenta las



comunidades que son parte de el , como las enseñanzas que han dejado en relación a la defensa del territorio.

En el dictamen final los jurados de la pre audiencia “Presas, derechos de los pueblos e impunidad”, de la Mesa de Devastación Ambiental del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México que se llevó en Temaca (Jalisco) en el 2012 , mencionaron que las represas son un modelo de desarrollo excluyente que privilegia las necesidades de energía y agua de las grandes empresas por sobre las vidas de personas y pueblos, la dignidad y los derechos. Además de que existe una práctica de las instituciones que se vuelve modelo y patrón, basada en la falta de información, ausencia de consultas abiertas, democráticas y alternativas.

La importancia del movimiento y de las redes que forman no sólo radica en la lucha que han llevado en casos concretos, sino que han puesto en el debate las afectaciones sociales que se generan por la construcción de presas, el tipo de modelo energético, el intento de privatización de agua y los impactos del cambio climático.

Bibliografía

Arach Omar Angel (2015) Guerrero del Antropoceno. Movimiento sociales frente a la expansión destructiva Athenea Digital

Bartolomé Miguel y Alicia Barabas (1990). “La presa Cerro de Oro y el Ingeniero El Gran Dios” Universidad Nacional Autónoma de México y Consejo Nacional para la Cultura y las Artes-Instituto Nacional Indigenista (UNAM-CONACULTA-INI).



Castro, Gustavo (2005). “El movimiento social en Mesoamérica por la defensa de los recursos naturales” en Observatorio Social de América Latina (OSAL) año IV no. 17, mayo-agosto.

Claudia Composto y Mina Lorena Navarro (Compiladoras) (2014) Territorios en disputa. Despojo capitalista, luchas en defensa de los bienes comunes naturales y alternativas emancipatorias para América Latina.-1ª ed.- México, D. F.: Bajo Tierra Ediciones.

Cernea, Michael (2002). “Riesgos de empobrecimiento y reconstrucción: Un modelo para el desplazamiento y la relocalización de poblaciones” en revista Antropología No. 5, Argentina: Universidad Nacional de Misiones.

Comisión Mundial de Represa (2000). Represas y desarrollo: Un nuevo marco para la toma de decisiones en www.dams.org

Kopas Jacob y Puentes Riaño Astrid (2009). Grandes represas en América ¿Peor el remedio que la enfermedad? Principales consecuencia ambientales en los derechos humanos y posibles alternativas. México: Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).

Mc Cully, Patrick (2001). Ríos silenciados. Ecología y política de las grandes represas. Proteger Ediciones.

Martínez Alier, Joan (2006). El ecologismo de los pobres: conflictos ambientales y lenguajes de valoración. Barcelona: Icaria.



Maltos Sandoval, Mario Héctor (1995). La Comisión Federal de Electricidad y el desplazamiento involuntario de población ¿Unanueva política? Relación de lo acontecido en la PH Aguamilpa. Tesis de Antropología Social. México: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa.

Montalvo Méndez, Mónica (2010). Nos agarraron verdes. El proceso de negociación por la construcción de la presa el Cajón 2010. México: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa.

9. BOOM BIOETANOLERO Y (RE)CONCENTRACIÓN DE LA TIERRA EN EL PERÚ: LUCHAS SOCIALES EN UN CONTEXTO NEOLIBERAL

Laura Tejada⁴⁴
Universidad de Bern
laura.tejada@cde.unibe.ch

Stephan Rist⁴⁵
Universidad de Bern
stephan.rist@cde.unibe.ch

Más de 40 años después de la reforma agraria, el Perú está viviendo un nuevo proceso de concentración de la tenencia de la tierra. Desde el «fujimorato» fueron promulgadas una serie de políticas neoliberales de tierras, aguas y energías, que marcaron el inicio de una expansión masiva de inversionistas etanoleros en la costa norte. Las más recientes reformas en el sector hídrico

⁴⁴ Centre for Development and Environment (CDE) at the University of Bern, Governance of Land and Natural Resources, laura.tejada@cde.unibe.ch

⁴⁵ Centre for Development and Environment (CDE) at the University of Bern, Governance of Land and Natural Resources, stephan.rist@cde.unibe.ch



facilitaron el acceso a grandes volúmenes de agua por parte de las empresas etanoleros, reduciendo el acceso y la disponibilidad de recurso. Resulta para los pequeños agricultores una transformación del sistema agro-ecológico y del régimen de producción alimentaria, en el cual los principales cultivos son hoy en día destinados al mercado de exportación. Los efectos de este proceso de concentración de la tierra son percibidos por las comunidades rurales en forma de una transición, donde pasan a ser «peones» en sus tierras en vez de ser propietarios. Las familias campesinas también perciben que la gobernabilidad rural cada vez es más débil, ya que el Estado está cada vez más ausente, dejando al sector privado asumir un rol cada vez más protagónico en la gobernanza del desarrollo local y regional. Consiguientemente se pueden observar varias formas de resistencia a la expansión de la agroindustria.

Usando datos cualitativos de dos estudios de caso en el Valle del Chira, esta contribución examinará luchas sociales en un contexto neoliberal. Para conseguir este objetivo, analizaremos la transformación agraria que está viviendo el Valle del Chira a la luz de la idea de la gran transformación (Polanyi 1944). Dadas las semejanzas estructurales entre la crisis de los 1930s y el neoliberalismo de hoy, vamos a argumentar a favor de una «segunda gran transformación», donde la mercantilización de la naturaleza, el trabajo y el dinero está en curso y se va intensificando aún más con la llegada de grandes empresas agroindustriales. Esto resulta en una mayor independencia del sector económico del control social, lo cual es resistido por actores campesinos, ONGs y representantes de la iglesia. Para McMichael (2009) la situación actual puede entenderse como expansión del «régimen alimentario corporativo», por la creciente incorporación de pequeños agricultores del sur global a las cadenas de valor de empresas agroindustriales. El modelo de la «agricultura para el desarrollo» proclamado por el Banco Mundial, es contrarrestado por un



movimiento creciente que lucha por la soberanía alimentaria. Sin embargo, en el Valle del Chira identificamos una respuesta política mucho más compleja, que solamente espera que el Estado actúe en su favor. Basado en la re-actualización de estrategias de diversificación productiva, la cooperación y las políticas cotidianas (Kerkvliet, 2009), mostramos que mejor se puede entender las luchas contra la concentración de tierras como resultado de un «movimiento triple» (Fraser 2013), que busca combinar las tendencias de la mercantilización y aquellas que abogan por la protección social por parte del Estado, en una perspectiva de su propia agenda de emancipación.

Palabras claves: Cambio agrario; luchas sociales; concentración de tierras; neoliberalismo; Peru

Bibliografía

Fraser, Nancy (2013): A Triple Movement. New Left Review. Vol. 81 May-June. Disponible online: <http://bev.berkeley.edu/ipe/Triple%20Movement-NLR31505.pdf>

Kerkvliet, T.B., Everyday politics in peasant societies (and ours). Journal of Peasant Studies, 2009. 36(1): p. 227-243.

McMichael, Philip (2012): The Land Grab and Corporate Food Regime Restructuring. In: Journal of Peasant Studies 39 (3-4), S. 681–701.

Polanyi, Karl (1944): The Great Transformation. The Political and Economic Origins of Our Time. Second edition. Boston, Massachusetts: Beacon Press.



10. UNA APROXIMACIÓN AL DRAMA MINERO EN ZACATECAS

Sergio Elías Uribe Sierra⁴⁶
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
seuscritico@88gmail.com

El modelo de acumulación implantado en la formación social mexicana ha intensificado el interés y los intentos de las grandes corporaciones y empresas en alianza con instituciones gubernamentales por arrebatar los bienes naturales a comunidades y pueblos, configurando ciertos modelos de despojo y destrucción de los territorios campesinos, los cuales tienen características y formas particulares debido a las modalidades de apropiación por el tipo de bienes naturales que son expropiados y a los arreglos para ejercer los bienes de control y dominación (Rodríguez, 2016).

Ahora lo que requieren los intereses del capital son tierras para la construcción de unidades habitacionales en las periferias de las ciudades y para megaproyectos de infraestructura; agua para las presas hidroeléctricas y para abastecer a los centros urbanos; suelos para las plantaciones agroindustriales; paisajes y playas para los desarrollos turísticos; concesiones para la extracción de minerales, petróleo y gas; viento para los aerogeneradores y patentes para la apropiación de germoplasma y biodiversidad (Rodríguez, 2016).

⁴⁶ Estudiante del Posgrado en Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. Correo electrónico: seuscritico@88gmail.com.



Bajo ese contexto, este ejercicio tiene como objetivo general hacer una aproximación a la problemática que se vive en el ámbito rural de Zacatecas, sobre todo, haciendo énfasis en el drama minero que se desarrolla en el estado. Dicho drama es el resultado de la ofensiva extractiva, que a su vez, pone a discusión los alcances del desarrollo y el progreso, en contraste con los impactos que el nuevo modelo minero causa en los territorios campesinos.

El drama expresa la articulación de conflictos entre las empresas mineras (apoyadas por los gobiernos en sus diferentes niveles) y las comunidades donde se localizan los yacimientos. Estos conflictos incluyen posicionamientos distintos en torno al imaginario de desarrollo, que a su vez pone en cuestión el control y uso del territorio a través de la imposición de territorialidades⁴⁷ diversas por parte de los actores hegemónicos, esta circunstancia en algunos casos agudiza la contradicciones capital-trabajo, elemento que sigue siendo pieza fundamental en el proceso de acumulación de las empresas mineras.

En este trabajo se da un esbozo de algunos conflictos que se han identificado en el Estado (poniendo a consideración de manera transversal conceptos como extractivismo, territorio, territorialidad y resistencia) sometiendo a análisis algunos problemas identificados dentro del drama minero en Zacatecas, poniendo el foco en el municipio de Mazapil.

Para obtener información respecto a los planteamientos que se han establecido, echamos mano de una revisión bibliográfica sobre algunos trabajos previos realizados en torno a la temática

⁴⁷ Carlos Walter Porto Goncalves (2002) citado en Escobar (2014) entiende la territorialidad como la identidad territorial que surge a partir del proceso de territorialización que es el acto de apropiación del espacio. Por su parte Carlos Rodríguez (2016) considera que la territorialidad es un proceso de imposición de las formas territoriales que un grupo de actores trata de realizar de acuerdo con su historia, intereses, correlación de fuerzas y modos de vida. En este trabajo, partimos de la idea que plantea Rodríguez, a partir de que expresa una dialéctica entre actores que tratan de imponer distintas formas territoriales.



minera, además de una revisión hemerográfica sobre notas referentes a las diferentes conflictividades que se han presentado. Se recurre también a los apuntes que se han rescatado en el diario de campo, ya que desde hace algún tiempo hemos acompañado diferentes procesos en conflicto, a través de la investigación participante⁴⁸ y el trabajo etnográfico. Este ejercicio se enmarca dentro la perspectiva del enfoque crítico y busca aproximarnos al entendimiento del drama minero en Zacatecas bajo una dialéctica entre los actores hegemónicos y subalternos.

Palabras clave: drama minero, extractivismo, desarrollo, desarrollo local.

Referencias

Araya, M. (2011) “La antropología social desde la investigación participativa junto a las parteras del COMPITCH”. *En conocimientos y prácticas políticas: reflexiones desde nuestras prácticas de conocimiento situado (Tomo II)*. Chiapas, Ciudad de México, Ciudad de Guatemala y Lima CIESAS, UNICACH, PDTG-UNMSM.

Escobar, A. (2014). *Sentipensar con la tierra, nuevas lecturas sobre el desarrollo, territorio y diferencia*. Ediciones AUCLA.

Rodríguez, C. (2016) *Geopolítica del desarrollo local. Campesinos, empresas y gobiernos en la disputa por territorios y bienes naturales en el México rural*. Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. México D.F. Ed. ITACA.

⁴⁸ Proceso de acompañamiento político desde un trabajo de investigación participativo, bajo el cual se pueden construir modos específicos de relación con los sujetos históricos, mediante el diálogo y el espacio recurrente de comunicación que fomenta la retroalimentación de saberes, reconociendo esos otros saberes y enmarcando un compromiso ético-político (Araya, 2011: 129-130).



SESIÓN 2: EXPERIENCIAS DE TERRITORIALIZACIÓN Y LUCHA POR LA TIERRA DE PUEBLOS ÉTNICOS

Hora: 10:30am - 1:00pm

Salón: A- 102

Responsables:

- **Coordinador(a) de mesa: Alberto Alonso-Fradejas**
- **Comentarista: Manuel Vega**

11. DISPUTANDO LOS RESGUARDOS PARA SUPERARLOS: MÁS ALLÁ DE CONFLICTO ARMADO, EL MULTICULTURALISMO Y SUS LÓGICAS DE LA EXCLUSIÓN EN LOS TERRITORIOS ÉTNICOS

Juan Felipe Hoyos García.
Doctorado en antropología-Universidad Estatal de Campinas, CEPEI⁴⁹
juanfelipehoyos@yahoo.com

Con esta ponencia pretendo reflexionar sobre los presentes y los posibles futuros de los territorios étnicos frente al conflicto armado, su reconfiguración tras los acuerdos de paz y la aplicación de los dispositivos transicionales. Basado en una investigación en curso sobre la construcción de gobierno en medio del conflicto armado por parte del pueblo indígena Awá, propongo que las

⁴⁹ Centro de Pesquisa em Etnologia Indígena, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, UNICAMP.



prácticas de las autoridades indígenas para generar gobierno dentro de sus territorios pretenden no sólo recuperarlos frente a otros actores que los disputan -como los grupos armados y terceros ocupantes-, sino que su forma de resolver conflictos podría representar una superación de las concepciones tradicionales de territorio étnico como territorio de exclusión. En esa medida, podríamos imaginar formaciones de gobierno que superen las lógicas multiculturales.

Para ello, comenzaré por exponer brevemente el trayecto que ha tomado una de las organizaciones indígena Awá durante los últimos 7 años, cuando en el 2009 las Farc cometió una masacre en el resguardo Tortugaña Telembí, municipio de Barbacoas. Esa trágica situación generó, sin embargo, una fuerte movilización de las autoridades Awá, una avalancha de cooperación internacional y ayuda humanitaria, y a mediano plazo una transformación del campo político Awá en la región, que desembocó en el actual proceso de re-territorialización de la organización. Por este proceso me refiero al retorno de las autoridades de la organización regional –con gran capacidad de *gestión* pero con pocos y sobreintervenidos puntos nodales ligados a los territorios- al *gobierno* de conjuntos menores de resguardos llamados zonas o unidades territoriales. En ese proceso los líderes Awá de la zona Telembí generaron estrategias para re-disputar el control de los resguardos a los grupos armados. Para ello, reconfiguraron estrategias políticas Nasa, lenguajes y prácticas humanitarias, accionaron mecanismos institucionales de reparación y restitución para su zona, e iniciaron procesos de fortalecimiento histórico-cultural, todo lo cual paulatinamente ha reposicionado su autoridad y fortalecido los vínculos dentro y entre comunidades. Resaltaría la creación y fortalecimiento de la guardia Awá, que ha desembocado en protocolos comunitarios de protección frente a riesgos del conflicto armado, comisiones para recuperación de cuerpos, retenidos y reclutados por grupos armados, las comisiones de negociación con los mandos de



dichos grupos, la medicina tradicional asociada a la cura de las enfermedades de la selva y del conflicto armado, y más recientemente, la reconstrucción histórica de la zona por parte de los mayores y líderes.

Pero las complejas dinámicas del conflicto armado han dejado otros efectos en los territorios. Ocupantes de otras regiones han llegado desde más de una década a los resguardos, dedicados principalmente al cultivo de coca. Este proceso generó ciclos de ventas y arrendamientos de tierra dentro de los mismos resguardos, en algunos casos promovidas por los armados. Sin embargo, las autoridades Awá de la zona no han aplicado mecánicamente la concepción del resguardo como territorio exclusivo de una comunidad indígena. Contra la idea generalizada de los “saneamientos” como condición esencial de la constitución y recuperación de resguardos, han optado por identificar las diferentes situaciones de esos ocupantes, los cuales tienen múltiples perfiles. Distinguiendo el tiempo de ocupación, la creación de vínculos familiares y organizativos, el reconocimiento de las mejoras y la disposición a respetar la autoridad indígena, han generado un esquema de reconocimiento de derechos diferenciados para los ocupantes, que brindan la posibilidad a algunos de ellos de permanecer en el resguardo, a otros de estar por un número acordado de años, mientras unos pocos, quienes no reconocen la autoridad del resguardo, son obligados a salir. Estos procesos se han realizado en asambleas que reúnen autoridades indígenas, pobladores awá, ocupantes y representantes de instituciones como observadores y garantes en el territorio.

Un esquema así, que están comenzando a replicar en las diferentes zonas donde tienen ocupaciones, representa una opción a las lógicas de la exclusión tanto de los conflictos armados como del multiculturalismo. En los conflictos armados los opositores son derrotados, excluidos, y los resguardos se conciben como territorios de exclusión: Un territorio, una etnicidad, una cultura,



unos derechos específicos para quienes en ellos viven. Lo que muestra la estrategia Awá es que en el territorio en disputa tal lógica de la exclusión no es operante para resolver conflictos. Como se puede ver, en este caso no es la especificidad cultural ni la diferencia étnica lo que establece los límites al resguardo. Es ante todo el ejercicio de la autoridad, la cual, mientras sea reconocida, permite la multiplicidad de sujetos, identidades y formas de vida. Ello nos llevará a atender a la producción de formas de gobierno que reconocen derechos que desbordan los territorios étnicos, pero que no ponen en entredicho la autoridad que de ellos y hacia ellos emana a través de sus poblaciones. También resalta el carácter poroso de los territorios, potenciando redefiniciones que rechacen el carácter unitario, sólido e inflexible de sus representaciones. Si múltiples territorios vecinos aplicaran estos principios incluyentes en lugar de principios excluyentes, se sentarían las bases para futuros ordenamientos territoriales que superen las contradicciones que ha producido el multiculturalismo al hacer compulsoria la relación entre identidad y territorio.



12. DE LO COMUNITARIO COMO TERRITORIO A LOS TERRITORIOS COMUNITARIOS. EMERGENCIA Y CREACIÓN DE UNA NUEVA TERRITORIALIDAD

Marcela Cecilia Marín⁵⁰

**Centro de Investigaciones Facultad de Filosofía y Humanidades y Universidad Nacional de Córdoba
marcecimarin@gmail.com**

Desde una perspectiva sociodiscursiva y bio(tánato)política, nos focalizamos en el avance del modelo megaminero en la cordillera, meseta y costa de la provincia patagónica de Chubut, Argentina. Indagamos sentidos en disputa atribuidos a rozamientos, cruzamientos, toques, modos de hacer lazo entre intervenciones comunitarias e intervenciones territoriales, en el marco de una asimétrica conflictividad social por el avance de este modelo extractivo en la provincia.

Por qué preguntarnos por lo comunitario en el escenario actual de (des)/(re)territorialización de la megaminería. Nuestra hipótesis de lectura propone pensar “lo comunitario” como un territorio (in)material en disputa asimétrica que aparece tensionándose en la tríada *Para- Con- Entre. Lo comunitario*, en tanto territorio (in)material, habita en *una* “tensión de territorialidades” (Porto Goncalves, 2015) entre los territorios de explotación y los “territorios en resistencia” (Zibechi, 2008).

⁵⁰ Licenciada en Letras Modernas. Doctoranda en Letras, dirigida por la Dra. Mirta A. Antonelli. Cuenta con beca interna doctoral Conicet. (2012-2017), realizada en el marco del equipo de investigación dirigido por la Dra. Mirta Alejandra Antonelli *Dispositivos hegemónicos y construcción de neomapas en la Argentina actual*. Radicado en el Centro de Investigaciones Facultad de Filosofía y Humanidades (CIFYH) Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Código del proyecto: 05/ F 604. Equipo en red e Integrante del proyecto general, en red nacional, dirigido por Dra. Svampa, Maristella. PIP CONICET 2012-2014 GI 11220110100157 SOCIOLOGIA Y DEMOGRAFIA “Actores, disputas y modelos de desarrollo en la Argentina contemporánea” e Dirección de contacto: marcecimarin@gmail.com



El territorio (...) es un concepto y una categoría geográfica, un objeto de método y de teoría por tanto, no es a-teórico. Es importante reafirmar que “es un espacio apropiado, hecho espacio para una cosa propia, en fin, es instituido por sujetos y grupos sociales que se afirman por medio de él. Así, hay, siempre, múltiples multiterritorialidades.” (Porto Goncalvez, 2006: 5) *El territorio no es una técnica, mucho menos una noción cerrada, acabada, determinada. No puede ser naturalizada, instrumentalizada, aparejada. El sentido de uso de este concepto en lo político tiene en esencia la libertad.* (Fernandes, 2009, 13. Cursivas en el original.)

Esta reflexión se inicia con nuestra lectura del planteo de Cristina Corea, Elena de la Aldea e Ignacio Lewcowicz (2003). Lo comunitario ha proliferado en esferas de de representación donde esta adjetivación forma parte de una inversión estratégica desplegada por las empresas, el Estado y los Think Tanks utilizada como herramienta de cálculo y gestión de conflictos para volver concurrentes los objetivos extractivos de cada yacimiento, bajo retóricas de intereses compartidos, con las poblaciones que habitan las “zonas de influencia” próximas a los territorios devenidos zonas de explotación. En este sentido, lo comunitario se extiende bajo la forma de líneas verticales descendentes.

Por otra parte, pensamos la emergencia de lo comunitario como un modo singular y rizomático de co-crear territorios *entre* heterogeneidades disponibles y posibles. En efecto, nombramos esta territorialidad afectiva, que nace como resistencia y creación de los movimientos socioambientales y/o movimientos socioterritoriales frente a la amenaza desterritorializadora que presenta el avance del neoextractivismo megaminero, *Territorio Comunitario*. Este territorio (In)material, intermitente, discontinuo y heterogéneo abre la posibilidad de (re)crear otros *repartos de lo sensible*



(Ranciére: 2010). Esta territorialidad produce líneas horizontales y reticulares así como líneas de fuga que le permiten desterritorializarse y reterritorializarse en otro plano de inmanencia.

En estas páginas queremos volver a pensar los términos que com-ponen, disponen y configuran este concepto: territorio y comunitario (que comporta una reflexión en torno a la comunidad⁵¹ pero que no hemos profundizado en ella para este trabajo). Nuestra propuesta es un modo de establecer un con-tacto entre ellas, un toque, una línea, el debate paradigmático entre el neo-extractivo progresista y las alternativas al extractivismo.

⁵¹ Nuestra investigación en curso recupera los modos de pensar la comunidad en el debate filosófico contemporáneo: la comunidad como declaración (“hay la comunidad” ya que sólo somos en el “con”) (Blanchot, Derrida, Bataille, Agamben, Nancy, Esposito) y la comunidad como producción, como deseo común en espinosismo contemporáneo. A su vez, recuperamos los planteos acerca de la comunidad en la sociología (Tonnies, Bauman)



13. DESARROLLO HEGEMÓNICO Y RESISTENCIA CAMPESINA EN EL ESTADO DE HIDALGO

José Arturo Herrera León⁵²

**Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco
Arturo9970@hotmail.com**

En la siguiente ponencia se retoman distintas categorías centrales para el análisis de la resistencia campesina en Hidalgo. En el primer apartado, nos acercamos al problema del desarrollo desde su configuración ideológica y su disputa. Este acercamiento permite retomar elementos centrales para comprender conformaciones geográficas e históricas y la relación que existe a diferentes escalas locales y globales en la producción del espacio y la conformación de los grupos hegemónicos. Finalmente, retomo la problemática sobre el modo de vida campesino, desglosando una serie de elementos culturales, económicos y sociales que permiten especificar desde dónde y con qué elementos resisten los actores sociales en las comunidades rurales. Sobre todo nos interesa enumerar brevemente la diversidad de relaciones sociales y con la naturaleza de los campesinos y otros actores subalternos como parte central de la resistencia en la disputa por el desarrollo.

Palabras clave: Desarrollo, actores sociales, hegemonía, resistencia campesina

El desarrollo hegemónico

Si deconstruimos el concepto de desarrollo, podemos ver que va aparejado de la idea de progreso. Para Ricardo Ávila (2007), la idea de progreso se afianza en occidente a mediados del siglo XIX, aunque nace desde el siglo XVI, se fortalece en los dos últimos siglos, por los avances de la ciencia

⁵² Estudiante del Posgrado en Desarrollo Rural (UAM-Xochimilco).



y su correlato en la técnica, la economía, política y moral (Ávila, 2007:176). El progreso en la esfera social está vinculado al crecimiento económico y la riqueza material separados de otros aspectos de la vida en sociedad como la ética, las economías de subsistencia y los ámbitos comunales. Así, el concepto de desarrollo no existe sólo sino que va con su par semántico de crecimiento económico.

A partir de esta visión, se instauró la concepción de sociedades desarrolladas y subdesarrolladas y el crecimiento y la modernización se convirtieron en un objetivo a alcanzar por todas las naciones.

En este sentido, autores como Sachs (1996) y Esteva (1996) insisten en la vaciedad del concepto de desarrollo⁵³ y en la defunción del mismo, sin embargo no sólo la idea no ha desaparecido sino la articulación con gobiernos, que no sin ironía, se postulan como progresistas, es una ideología hegemónica, persistente y vigente:

El desarrollo es todavía un sueño anhelado pero también combatido: una idea que se despliega, para enseguida recibir críticas y cuestionamientos, se adapta, y se reconfigura bajo una nueva versión que se presenta como superación de la anterior, pero que vuelve a sumirse en la crisis al poco tiempo (Gudynas, 2012:39).

Como lo plantea el autor, la idea de desarrollo es muy resistente no solo porque se postula desde los grupos en el poder sino porque también es reclamado por los movimientos y las comunidades: todos quieren tener acceso al desarrollo. En este sentido Žižek tiene razón cuando señala: “Toda universalidad hegemónica tiene que incorporar por lo menos dos contenidos particulares: el

⁵³ Contrario a lo que proponen estos autores, la misma vaciedad del concepto de desarrollo es lo que le da su fuerza como articulación de discursos y prácticas heterogéneas en disputa por los actores sociales.



contenido particular autentico y su distorsión, generada por las relaciones de dominación y explotación”. (Žižek, 2011:198).

El desarrollo imperante opera a través de instituciones y de un discurso, es decir, se articula en prácticas e ideas que se han expandido globalmente hasta convertirse en una forma de pensar y sentir (Escobar 2005; Gudynas, 2012). Las reivindicaciones de los pueblos y sus alternativas, se generan ante el desarrollo como mito o ideología que expresa la aspiración del progreso de la modernidad occidental (Gudynas, 2012).

La pregunta de Rist (2006) sobre dónde radica la fuerza del discurso del desarrollo y su capacidad de seducción, se responde desde la ilusión de la ideología hegemónica como método para acabar con la pobreza en todas partes. El desarrollo histórico, desde su génesis, se ha organizado a través de creencias y subjetividades para reproducir un orden social. Los aparatos ideológicos – empresas, instituciones de gobierno, organismos internacionales, etc.- insisten sobre el apego a la mitología del desarrollo, donde las contradicciones y el conflicto se diluyen o tratan de ser diluidos.

Desde este punto de vista para Wallerstein (2010), no se puede hablar de desarrollo de la sociedad sino es el sistema mundo el que se desarrolla. Para Wallerstein (2010:118) esto implica cuestiones subjetivas y objetivas: “Es el cumplimiento de todos nuestros deseos libidinosos; es el placer y poder combinados, o más bien, fusionados. Hay deseos dentro de todos nosotros; lo que la economía mundo capitalista ha hecho como sistema histórico es hacer socialmente legítimos por primera vez esos deseos. ¡Acumulen, acumulen! Es el lema del capitalismo”.

Ahora bien, como el autor sostiene, aunque el desarrollo tiene connotaciones en la mentalidad de las personas generadas por el capitalismo histórico, la cuestión no es psicológica sino social, y



existen diferencias marcadas en términos de clase y geográficas. El proceso de larga duración del sistema histórico capitalista, ha traído una transformación en las fuerzas de producción y ha beneficiado al estrato medio a lo largo del tiempo, lo cual no significa un beneficio real de la mayoría de la población a nivel mundial (Wallerstein 2010).

El desarrollo del sistema mundo presenta fuertes contradicciones que afectan a las poblaciones locales al menos desde la mitad del siglo XX. Esto ha traído una reducción a nivel mundial de campesinos que producen bienes primarios como alimentos y una urbanización mundial desbocada que aún avanza a galope: “En este proceso estamos muy cerca de agotar los suministros de mano de obra barata que han existido hasta ahora. Se han alcanzado los límites; casi todas las familias se encuentran como mínimo semiproletarizadas.” (Wallerstein, 2010:126).

Así, el desarrollo no es un concepto neutral, es el medio por el cual los grupos dominantes engloban una serie de acciones –prácticas y discursos-, mientras los grupos subalternos tratan de redefinir su dirección y significado. El desarrollo lejos de estar bien definido en sus objetivos y resultados, expresa la lucha social y la confrontación de distintos actores con interpretaciones diferentes y particulares que definen la orientación de la transformación social. De igual forma, el desarrollo depende de un contexto donde se van construyendo alternativas, desde el espacio socio cultural y los proyectos a futuro que los propios actores definen desde su territorio.

Reconociendo esta base ideológica, las alternativas propuestas por los pueblos campesinos e indígenas cuestionan desde sus prácticas y saberes. Así, el debate sobre el desarrollo vuelve a estar en el centro de la discusión (Gudynas 2012). Desde los pueblos indígenas existen conceptos que se traducen en discursos y prácticas, como el *sumak kawsay* de los pueblos indígenas de Ecuador o el *suma qamaña* en Bolivia. Si bien estas propuestas son contra hegemónicas en el sentido de que



buscan cuestionar a esa particularidad del pensamiento occidental que se concibe como universal, son los actores sociales los que con su acción, luchan por el reconocimiento de sus derechos, la defensa de su territorio y en suma, otra forma de vida.

Desde los márgenes, los pueblos y comunidades ponen en entre dicho todo el andamiaje ideológico del desarrollo al menos en dos sentidos: uno que tiene que ver con el resurgimiento de saberes y prácticas negadas; y otro sobre la crítica de la modernidad como base ideológica del desarrollo y proyecto civilizatorio de occidente. Por ello, la impronta de los movimientos sociales de base, el conocimiento local y el poder popular en la resistencia al desarrollo, son parte central para comprender los procesos actuales (Escobar, 2007).

En este sentido, romper con la monocultura de occidente y la razón metonímica que se pretende universal como parte que trata de abarcar el todo (Santos, 2006) permite dar cuenta de la disputa por el desarrollo. Existen entonces, una multiplicidad de experiencias, las cuales se producen como no existentes por el discurso hegemónico. Esto abre un campo de visibilidad ante la negación de prácticas y conocimientos subalternos. La lucha, resistencia y forma de organización de los campesinos e indígenas del Valle del Mezquital ante el despojo de sus recursos y la desarticulación de su modo de vida, se da en este conflicto por la generación de alternativas encubiertas por el discurso de la modernización y el progreso. Estas luchas ponen en evidencia la cara perversa del desarrollo pero sobre todo desmitifica a éste como el único camino.

Las relaciones de dominación que ejerce este modelo impulsado por instituciones, en el ámbito nacional, local e internacional, potencializa el conflicto y lleva a los actores sociales a emprender



acciones colectivas para defender prácticas y dinámicas bajo procesos complejos basados en la cultura y el lugar.

En este sentido, el desarrollo “resulta de una disputa, de una lucha entre los grupos que intentan imponer su hegemonía y grupos y actores sociales que se resisten desde sus espacios locales porque tienen otra perspectiva de cómo organizar la sociedad y la economía” (Rodríguez, 2009:5). Así, existen dos elementos a destacar en el paradigma del desarrollo: como resultado de una disputa donde intervienen una heterogeneidad de actores sociales y segundo, la importancia de los espacios locales para disputar esta articulación hegemónica.

Para salir del desarrollo empero, no existen recetas o soluciones fáciles y aún el posdesarrollo, es un horizonte más que una realidad concreta. Desde lo que nos proponemos comprender sobre los actores sociales en las comunidades indígenas campesinas del Valle del Mezquital, es relevante esta disputa al enfatizar la pluralidad de acciones que se están llevando a cabo y la negativa a universalizarlas como un pensamiento único. Así, la resistencia viene dada desde el lugar y situación histórica y coyuntural de los pueblos que la disputan:

No existen grandes alternativas que puedan aplicarse a todos los lugares y a todas las situaciones. Pensar en alternativas bajo la modalidad del desarrollo sostenible, por ejemplo, es ubicarse dentro del mismo modelo del pensamiento que produjo el desarrollo y lo sostuvo. Debemos resistirnos al deseo de formular alternativas en el nivel macro y abstracto (Escobar, 2007:362).

Las alternativas, se encuentran en las prácticas y formas de resistencia que los pueblos entablan ante los grupos de poder dominantes. Es desde el lugar y la relación entre las comunidades y el desarrollo hegemónico donde las alternativas se vislumbran: “desde sus manifestaciones específicas en lugares concretos” (Escobar 2007:373). En el caso de las comunidades del Valle del



Mezquital, es posible visibilizar la disputa por el desarrollo, entre otros elementos, desde su matriz cultural y territorial donde las prácticas y la apropiación del espacio por parte de los actores sociales son parte estructurante de este proceso.

El desarrollo hegemónico en tiempo de megaproyectos

El 23 de enero de 2011 amanece gris en el Valle del Mezquital. En el municipio de Santiago de Anaya se instala la primera piedra de la trituradora y Procesadora de Materiales Santa Anita propiedad de Carlos Slim, considerado uno de los hombres más ricos del mundo. El personaje que la inaugura es el exgobernador Miguel Ángel Osorio Chong, ahora secretario de Gobernación de la República Mexicana. Uno de los hombres de confianza del actual presidente y de los más poderosos en el estado de Hidalgo.

Como si surgiera de las entrañas de la tierra, amanece de la noche a la mañana lo que después sería conocido como cementos Fortaleza, que incluso patrocina al equipo de fútbol Pachuca. Ya pocos se acuerdan de las dificultades que tenían los tuzos para ascender y ocupar un lugar en la primera división. Hoy Hidalgo se vende como una entidad próspera y en paz. Slim y Osorio Chong, socios del club de fútbol, son la viva representación del éxito económico y la habilidad política; al menos así lo quieren aparentar.

No es la primera vez, ni parece ser la última por el momento, que el ahora secretario de gobernación inaugura una empresa de alguna corporación. Ya tiene su buen rato haciéndolo. En 2006, inauguró la planta tóxica en Zimapán y ante la oposición de los campesinos que finalmente lograron cerrarla, mando un fuerte desplegado policiaco, reprimiendo a hombres, mujeres y niños por igual. Sin embargo, fue una lucha campesindia que implicó accedieran al poder local los que conformaron el



movimiento *Todos somos Zimapán*. Fue una digna batalla ganada, no como la de aquí de Santiago de Anaya que aunque igual de digna, fue una batalla perdida.

Hoy el denominado grupo hegemónico, ejerce el poder que los viejos caciques ya hubiesen querido. Incluso existe un dicho popular que señala “ellos no son de Hidalgo, Hidalgo es de ellos”. Es verdad, la alianza entre empresarios y gobierno es tan estrecha que diferenciarlos es complicado.

El llamado grupo Hidalgo es el más poderoso del que se tiene memoria en tierra de caciques. Es un grupo hegemónico⁵⁴, en el sentido que le da Gramsci (2013), como aquel grupo que ejerce el poder para generalizar un tipo de cultura y prácticas basados en la dominación por medio del consenso y la violencia.

Ya en el Plan Nacional de Desarrollo (2001-2006), el gobierno federal anunciaba la implantación de la planta de desechos tóxicos en Zimapán perteneciente a la empresa Abengoa- Befesa de capital español. El entonces gobernador Núñez Soto oriundo de Actopan anuncia en Chapantongo, en el año 2002, la planta de confinamiento de la Empresa Mexicana de Reciclaje A.C como objetivos del “Proyecto Hidalgo”. Ese par de palabras se van a repetir hasta la fecha, pero lo que resalta es

⁵⁴Un concepto igualmente interesante lo encontramos en Raymond Williams: “La hegemonía constituye todo un cuerpo de prácticas y expectativas en relación con la totalidad de la vida: nuestros sentidos y dosis de energía, las percepciones definidas que tenemos de nosotros mismos y de nuestro mundo. Es un vívido sistema de significados y valores –fundamentales y constitutivos- que en la medida en que son experimentados como prácticas parecen confirmarse recíprocamente” (Williams, 2007:120).



la estrecha alianza que empezaron a tener gobierno y empresas privadas, nacionales y trasnacionales.

Existen a este respecto interesantes aportaciones de estudiosos sobre el tema como Carlos Rodríguez (2015), Víctor Toledo (2015), Maristella Svampa (2011), sobre esta alianza corrupta entre corporaciones y gobiernos en todos los niveles. Una modalidad que incluso se le llama “acumulación por corrupción” (Rodríguez, 2014).

En el año 2007 los exgobernadores Murillo Karam, Núñez Soto y Osorio Chong, se les acusa de apoyar al empresario Jesús Martínez, cuyas inversiones crecen como la espuma ante lo que se denomina “Megaproyecto Tuzo” (Proceso, 1517), el cual aparte de fútbol tiene que ver con todo un complejo de infraestructura en la zona de mayor renta en la capital. Algunos personajes de partidos de oposición lo denuncian como el líder del PAN, por lo cual fue amenazado de muerte, sobre todo cuando señaló la colusión entre gobierno y empresarios.

Los ejemplos podrían seguir, por la cantidad de empresas como casinos, hospitales, centros nocturnos, empresas dedicadas a la construcción e infraestructura que se adjudican a la casta política. Lo cierto es que cuando entra como inversionista Carlos Slim al club Pachuca, el panorama cambia pues se convierte en el principal competidor empresarial en el ámbito de espectáculos deportivos y uno de los principales inversores en infraestructura en Hidalgo.

Como ha mostrado Pablo Vargas (2011), el crecimiento sin planeación y desaforado, ha implicado problemas sobre todo en ciudades como Pachuca y Tula. Al expandirse la mancha urbana por la dinámica inmobiliaria, los que la llevan de perder son los campesinos.



Es de más decir que los grupos subalternos, no se han quedado cruzados de brazos, pero sigamos tratando de comprender al grupo hegemónico en el Hidalgo bárbaro y su modelo de desarrollo. Porque a estas alturas el lector preguntará qué tienen que ver los campesinos de los alrededores de Pachuca con los del Valle del Mezquital, siendo que los separan unos sesenta kilómetros de distancia.

El anuncio de la construcción del aeropuerto de la ciudad de México en la zona metropolitana de Pachuca y el anuncio de la construcción de una nueva refinería en el año 2009, eran parte de los hilos de esta telaraña. Esto hasta el momento no se ha llevado a cabo, pero sí implicó el que campesinos se quedaran sin tierras ante las promesas de empleo. Ante la opacidad con las que se lleva a cabo este robo de tierras, queda hacerle caso a lo que señalan los funcionarios: “el proyecto PLATAH va aún sin aeropuerto”, y es que tanto dinero invertido no se puede desperdiciar.⁵⁵

En la cuenca lechera de Tizayuca, se está llevando a cabo este megaproyecto que será un centro de distribución y acopio de mercancías de todo el país. La cual cuenta con una planta potabilizadora que dotará de 150 litros por segundo al parque industrial, pero como se menciona en la página de la Secretaría de Economía, aunque se proveerá de agua de los pozos de la zona metropolitana de Pachuca, se realizarán nuevas perforaciones en el acuífero Actopan-Santiago de Anaya, el cual es el más importante del Valle del Mezquital, “para no afectar a los ciudadanos de la capital”.

⁵⁵ “Si bien, en el Plan Nacional de Infraestructura se consideró una partida para un aeropuerto 2 ese dinero podría destinarse para la infraestructura de PLATAH” dijo el gobernador Francisco Olvera
<https://hidalgo.quadratin.com.mx/principal/Tras-perder-aeropuerto-proyecto-PLATAH-es-el-plan-B-de-Olvera/>



En este sentido, la mano visible del mercado es la que dicta los parámetros de crecimiento urbano, pues las principales capitales de la entidad como Pachuca y Tula, presentan los mayores índices de crecimiento poblacional y de casas de interés social. Grupos empresariales como ARA, casas Geo, han encontrado un fructífero negocio ante la constante migración de ciudadanos provenientes de la ciudad de México. Si bien el negocio inmobiliario después de la debacle financiera tuvo uno de sus mayores descabros, en esta región todo siguió viento en popa.

La cementera Carso-Elementia cuenta con dos plantas, una en Santiago de Anaya y otra en Atotonilco de Tula. Esta corporación, busca competir con Cemex, Cruz Azul y otras cementeras, por lo que ya existen 50 puntos de venta, pues cementos Fortaleza –como es el nombre comercial- ya tiene sucursales en puntos estratégicos, mientras la región se convierte en la principal productora de cemento del país.

En este sentido, las inversiones en el mercado de cemento, son con la finalidad de fortalecerse en ramas consideradas altamente rentables como la construcción de edificios, cadenas comerciales y vivienda. Por otra parte, Elementia es una transnacional con presencia en más de 43 países, con empresas en el sector agropecuario, petroquímico y de construcción, entre otros. Juntos, el grupo



Carso-Elementia, buscan el control del 5% de la producción de cemento, principalmente en los estados de Guerrero, San Luis Potosí, Michoacán, Querétaro, Morelos, Puebla y Distrito Federal.

La andanada del nuevo modelo de despojo, se agudiza con el actual gobierno del Estado buscando incrementar las inversiones de capital nacional y extranjero denominando a la entidad como “El nuevo Polo de Desarrollo Industrial de México”. De acuerdo con la visión gubernamental y empresarial, debido al crecimiento de la ciudad de México y del Distrito Federal, existe una planeación estratégica para hacer frente al impacto que esta dinámica tiene, sobre todo en el Valle de Tizayuca, el Valle del Mezquital y el Altiplano o región pulquera.

En efecto, desde al menos cinco años la dinámica de estas tres regiones se interrelacionó de manera más acuciante sobre todo por la construcción de la carretera arco norte, la cual se diseñó para transportar mercancías del golfo al pacífico sin necesidad de pasar por la zona metropolitana de la ciudad de México.

En lo que respecta a otros megaproyectos, existe la ampliación de 235 km del gaseoducto Tamazunchale que, desde el año 2012 atraviesa Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí. Mientras el gasoducto Tuxpan-Tula recorre alrededor de 250 kilómetros de longitud afectando a municipios de Veracruz, Puebla e Hidalgo sobre todo del Valle de Tulancingo, Pachuca y el Valle del Mezquital. También existe el puerto seco de Atotonilco de Tula, que será en los próximos años, el centro de distribución de mercancías más grande de Latinoamérica.

El llamado proyecto Pachuca, busca procesar los residuos mineros de la capital del estado y depositarlos en el municipio aledaño de Epazoyucan. En lo que respecta al fracking, o fractura hidráulica se encuentran principalmente en la sierra de Tenango y la Huasteca cuya afectación



abarca a 49 municipios, 22 en Puebla, 18 en San Luis Potosí y 21 en Hidalgo. Como dice el actual secretario de Economía, se han preparado por mucho tiempo para recibir este tipo de inversiones.

Con el empuje neoliberal, el presupuesto para el estado de Hidalgo empieza a decaer en la época de los 80, sobre todo a lo concerniente al bienestar social como la salud y la vivienda, a pesar de que en ciudades como en Tula y Ciudad Sahagún, se da el fuerte financiamiento a la industria, a lo largo de la década de los ochenta, empieza su debacle, sobre todo en las tres principales ciudades como Pachuca, Tula y Ciudad Sahagún, perdiendo su fuerza como “polos de desarrollo industrial”. En Sahagún se cierran fábricas como la Renault o DINA, y se privatizan empresas como mármoles del Valle del Mezquital, al tiempo que se desmantelan los instrumentos de organización y resistencia de los trabajadores como sindicatos y organizaciones campesinas.

A pesar de que la casta política recalca constantemente que el crecimiento de la entidad es mayor al de la media nacional, las condiciones de marginación de la población van en aumento, por lo que precisar las características que este modelo tiene, nos permitirá comprender este proceso⁵⁶.

Hemos descrito brevemente los principales megaproyectos en el Estado de Hidalgo, lo cual tiene consecuencias para una gran parte de las comunidades campesinas e indígenas. La destrucción y contaminación de sus territorios para miles de personas es una realidad cada día más palpable, ante el saqueo de sus recursos.

⁵⁶Según el Índice de Desarrollo Humano, Hidalgo ocupa el lugar 26 en el país, con una marginación considerada alta, y según datos del CONEVAL el 15% de su población se encuentra en pobreza extrema y 40% en pobreza moderada alrededor de sus 84 municipios. En los indicadores de salud, educación, infraestructura y servicios, está por debajo de la media nacional. En la cuestión de ingresos de la población económicamente activa, el 38% sobrevive con dos salarios mínimos o menos y el 29 % de la población es considerada con problemas de pobreza alimentaria.



Es a partir de la década de los noventa cuando el área metropolitana de la Ciudad de México, vuelca sus miras a otros estados como Hidalgo y Querétaro, mientras que ciudades como Tizayuca, empiezan a resentir el crecimiento desordenado en los ámbitos urbanos.

La resistencia social ante el despojo

El estado de Hidalgo es un escenario de constantes tensiones entre diferentes actores que mantienen lógicas de producción y reproducción social contrapuestas. Relaciones sociales desde distintos ámbitos en la vida comunitaria y con la naturaleza, estructuran la manera en que resisten los campesinos haciendo uso de diferentes aspectos territoriales y culturales que les permite generar respuestas ante el desarrollo hegemónico que existe en la región.

Tabla 1: Principales resistencias y negociaciones ante los megaproyectos

Resistencias y negociaciones	Demanda	Proceso
"Tejados de Villa", asociación de 86 ejidatarios	Negociación para ser incluidos en los trabajos y apertura de negocios	Petición de los pobladores para tener trabajo
Asociación por el Bien Común de Epazoyucan	Suspensión de las actividades de desecho de residuos	Mesas de diálogo con autoridades y movilización constante de los pobladores
Movimiento Indígena Santiago de Anaya,	Cancelación de la cementera, consulta	Reclamos y negociaciones de los afectados por la empresa



Ayuntamiento de Atotonilco	pública y cumplimiento de las leyes	
Movimiento en Defensa de las Aguas Negras	Negativa a la privatización	Movilizaciones y redes con otros movimientos y actores como partidos
Ayuntamiento de Atotonilco y Organizaciones Civiles	Cumplimiento de las leyes y de las normas ambientales	Ante la nula respuesta se han frenado los trabajos de la tratadora
Rechazo de ejidatarios de Ixmiquilpan, Tula, Atotonilco	Cancelación del Gasoducto, reparación de daños y contra el despojo de sus territorios	Cancelación en algunas comunidades e indemnización de ejidos afectados
Rechazo de ejidatarios de Ixmiquilpan	Reparación de daños y negociaciones en la construcción	Movilización y cancelación en algunas comunidades
Comunidades de Puebla, Veracruz e Hidalgo organizados en la defensa de su territorio	Cancelación definitiva de la fractura hidráulica	Movilización y alianzas constantes para detener la fractura hidráulica.

Fuente: elaboración propia



Esta disputa de intereses está relacionada a la apropiación que hacen los actores subalternos de los recursos vitales para su subsistencia. Para los campesinos de la constante defensa de sus recursos naturales, así como la negociación ante las instituciones gubernamentales, engloban una perspectiva distinta de lo que los gobiernos y empresas tratan de impulsar

Como muestra el esquema siguiente, la disputa por el desarrollo entre campesinos y empresas nacionales y transnacionales tienen lógicas distintas en su forma en cómo se articulan. Los órdenes de gobierno e instituciones por un lado actúan como mediadores de demandas populares y por otro intentan favorecer la lógica del capitalismo agroindustrial y urbano.

Así, existe una dicotomía entre intereses: por un lado la tendencia del capital para apropiarse de los recursos naturales y en el otro extremo, comunidades campesinas que disputan esa lógica extractiva desde ámbitos de organización comunitaria, regional y redes que logran conformar a nivel nacional e incluso internacional.

La tensión y disputa por el desarrollo se expresan desde el ámbito ambiental, pues en la actualidad Hidalgo es escenario de enfrentamientos constantes en contra del despojo de suelos y aguas.

Si bien no existe la formación de una clase campesina que se articula regionalmente y enfrenta estos procesos de despojo, aunque incipiente, existe una constante movilización que plantea otros intereses distintos a los del desarrollo hegemónico. Estas luchas también se definen en algunos casos por la identidad indígena como eje articulador de las distintas demandas campesinas, lo que finalmente ha permitido una conciencia desde elementos culturales e históricos compartidos. Reivindicaciones que son de larga duración y que se confrontan en los últimos treinta años ante un modelo de despojo, pero donde también los actores sociales inscriben sus intereses desde recursos



materiales y simbólicos que les permite organizarse bajo otra lógica para la apropiación de su espacio

Vemos entonces que los actores sociales realizan acciones con diferente intencionalidad para beneficiarse de bienes o recursos que les permite su reproducción social como grupo. Este proceso implica un cambio en las leyes y políticas de las instituciones gubernamentales que favorecen el interés privado en contra de los intereses comunitarios, de esta forma también se da una tensión dentro de los gobiernos municipales y estatales para incidir en la dirección que toma el modelo de desarrollo. Prueba de ello es la constante movilización de ejidatarios que buscan apropiarse de sus recursos desde distintas perspectivas y lógicas pero que responden a un beneficio colectivo.

Así, el elemento local ha consolidado gobiernos en el municipio que han dado pie a que entre la oposición y gane espacios de poder y donde no los ha ganado, otra forma de confrontar a este poder se ha ido gestando desde la resistencia de las comunidades y su constante movilización por lo que las demandas ciudadanas para una mayor participación cobran relevancia en la configuración estatal, a pesar del acendrado control político de los grupos de poder.

Si bien existen condiciones a nivel global que inserta esta entidad como periférica dentro de las relaciones de producción, son los propios actores sociales los que la reconfiguran y la disputan desde sus luchas y acciones. También la unidad doméstica campesina se articula a estas problemáticas globales, tanto por las exigencias de acumulación y explotación capitalista contrapuesta a otra lógica de base comunitaria para la obtención de recursos, por lo que se entablan disputas no siempre abiertos pero que articulan otra forma de desarrollo. Esta forma de



organización también ha tenido repercusión en el posicionamiento de las demandas de las comunidades.

Bibliografía

Ávila, Ricardo (2007), *Sobre el progreso y el desarrollo*, Colección estudios del hombre, Universidad de Guadalajara, México.

Bartra, Armando (2008), *El hombre de hierro. Los límites sociales y naturales del capital*, Ítaca, México.

_____ (2010), *Campesindios. Aproximaciones a los campesinos de un continente colonizado*. No. 248. "Revista Memoria", <<http://boliviaagraria.net/2011/05/17/campesindios-de-armando-bartra/>>

_____ (2013), "Preámbulo: la modernidad bárbara", en *El México Bárbaro del siglo XXI*, Carlos Rodríguez y Arturo Cruz (coords.), UAM/Xochimilco, pp. 9-35.

Brenna, Jorge (2012), "Espacio y Territorio: Una Mirada Sociológica", en Eugenia Reyes y Álvaro López, *Explorando territorios. Una visión desde las ciencias sociales*, Universidad Autónoma Metropolitana, México, pp 81-106.

Dussel, Enrique (2014), *16 Tesis de economía política. Interpretación filosófica*, Siglo XXI, México.

Echeverría, Bolívar (1997), "Benjamín. Mesianismo y Utopía", en *Aproximaciones a la Modernidad*, UAM/Xochimilco, México.



Escobar Arturo (2010), *Una Minga para el postdesarrollo: lugar, medio ambiente y movimientos sociales en las transformaciones globales*, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima.

_____ (2007), *La invención del tercer mundo*. Fundación editorial el perro y la rana, Caracas, Venezuela.

Esteva, Gustavo (1996), *El diccionario del desarrollo: una guía para el conocimiento como poder*. PATREC, Perú.

Gudynas, Eduardo (2012), "Debates sobre el desarrollo y sus alternativas en América Latina: Una breve guía heterodoxa", en *Más allá del desarrollo*, Fundación Rosa Luxemburg, México.

Harvey, David (2007), *Espacios de esperanza*, ediciones AKAL, Madrid.

Martínez Alier, Joan (2011), *El ecologismo de los pobres. Conflictos socioambientales y lenguajes de valoración*. Icaria editorial, Barcelona España

López Levi, Liliana (2012), "Pensar el espacio: Región, Paisaje, Territorio y Lugar en las Ciencias Sociales", En Eugenia Reyes, Álvaro López, *Explorando territorios. Una visión desde las ciencias sociales*, Universidad Autónoma Metropolitana, México, pp 20-48.

Ortiz, Pedro (2013), *Conocimientos campesinos y prácticas agrícolas en el centro de México, Hacia una antropología plural del saber*, UAM/Iztapalapa, México.

Porto- Goncalves (2006), *El desafío ambiental*, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, México.

Rodríguez, Carlos (2009), *La disputa por el desarrollo regional: movimientos sociales y constitución de poderes locales en el oriente de la Costa Chica de Guerrero*, UAM, México



Toledo, Víctor (2003), *Ecología, espiritualidad y conocimiento (de la sociedad del riesgo a la sociedad sustentable)*, Universidad Iberoamericana Iberoamericana, México.

Sachs, Wolfgang, (1996), *El diccionario del desarrollo: una guía para el conocimiento como poder*. PATREC, Perú.

Wallerstein, Immanuel (2010), *Impensar las ciencias sociales: límites de los paradigmas decimonónicos*, Siglo XXI, México.

Zizek, Slavoj (2012), *El sublime objeto de la ideología*, Siglo XXI, México.



14. WE NEVER STOPPED BEING PAÏ: A CASE STUDY OF LAND RECLAIMED BY THE PAÏ TAVYTERÃ GUARANI IN PARAGUAY

Cari Tusing
PhD Candidate in Anthropology, Latin American Studies minor, University of Arizona, USA. MA in Historia y Memoria, Universidad Nacional de La Plata, Argentina. My research is possible with support from the IAF Grassroots Fellowship, the Tinker Foundation, the Fulbright-Hays DDRA, and the NSF DDIG.
ctusing@email.arizona.edu

Five years ago this was all forest, beautiful woods (ka'aguy porã) all around.
We could cross over to hunt game there. Now it is just a soy field.
-Karai Marcelino, Guarani leader, Amambay, Paraguay

Introduction: Northern Paraguay, An Edge Case

Northern Paraguay may be best known for the Curuguaty Massacre, where campesinos and police were killed in a confused, violent land eviction. In the resulting uproar, then-president Lugo Fernández was ousted in a parliamentary coup. The People's Army of Paraguay (EPP in Spanish)⁵⁷ is also said to carry out kidnappings in this area near the Brazilian border up until recently—the Paraguayan Army's special forces (Fuerzas de Tarea Conjunta or FTC) say that they have since

⁵⁷ The EPP is allegedly a radicalized campesino group that has taken up arms, which can be traced back to the Ligas Campesinas and liberation theology from the Catholic Diocese of Concepcion. There is a splinter group called ACA which supposedly operates with the same 'terrorist' methods, mainly kidnapping and ransoming. A general recently removed from the Paraguayan Army's special forces (FTC) has gone on public record to say Paraguay's own FTC are in fact paramilitary forces. In effect he claimed many acts attributable to the EPP are in fact FTC authored. My research does not delve deeper into these conflicts.



moved elsewhere. Yet kidnappings and killings still occur in the area, mainly due to local conflicts and drug trafficking violence. These headline-grabbing events are serious indeed, but they also obscure dramatic changes in the economy and landscape in Northern Paraguay, where the industrial soy and cattle frontier is transforming the rural sphere. The focus on the ‘terrorist’ and organized campesino struggle for land further obscures land lost by the indigenous Guarani, who are doubly dispossessed by agroindustry and campesino colonies.

As Karai Marcelino laments in his opening quote, soy farms are encroaching on his people’s lands, eliminating important food sources, limiting mobility, polluting groundwater and cutting off access to lands where they once hunted game. As agroecologists, the Guarani practiced shifting horticulture, hunting, and gathering (Reed, 1997). Today the few lands that the Guarani have titled remain as forest “islands” surrounded by GMO soy farms and cattle ranches (Melià et al., 2008) as the industrialized frontier moves north into the Amambay and Concepción regions.

The edge case of Concepción and Amambay, as Michel Pollak (2006) calls “limit-situations,”⁵⁸ reveals what is hidden and naturalized in the rhythms and spaces of the everyday as the soy and cattle frontier re- and dis-orders current land tenure (de Certeau, 1984; Lefebvre, 2004). Rupture in everyday life not only disrupts current lives but also invokes reflection on the past and future. In this way, everyday subjects in a limit situation such as the Guarani are central witnesses to the changing landscapes and key motors of contestation of dispossession.

The Amambay and Concepción regions of Northern Paraguay are not only a limit-situation in the sense of experiential change but also in the sense of a physical boundary-situation. The

⁵⁸ “Situaciones límite” in the Spanish translation of the text. Here I believe that Pollak is invoking Jasper and Heidegger’s definition of the limit-situation in the philosophy of experience.



confrontation and hybridization of Guaraní, Portuguese, and Spanish language and social relations in material conditions of rural, industrial, commercial and non-capital modes of production are located here in Paraguay along the Brazilian border. There are two main Guaraní groups in the area, the Mbya Guaraní and the Paĩ Tavyterã Guaraní, who are experiencing land dispossession. Studying this porous border lays bare struggles over territory, narrative, and potential configurations of everyday life in the region. In my ongoing research in the area, I have found that rural people are eager to talk about their struggles for land despite tensions with large landholders. This paper presents part of my dissertation research after 6 months in Concepción and Amambay, two neighboring regions in northern Paraguay on the border with Brazil. I have worked in the area for shorter periods of time since 2013, carrying out participant observation, collecting oral histories, and archival research with and on the Guaraní. In this current study, I present my initial analysis of an on-going case study of Paĩ Tavyterã Guaraní (Paĩ) land recovery at the juncture of Concepción and Amambay. I am compiling this study through a series of interviews with local Paĩ Tavyterã religious and political leaders who gave me access to their land records, land titles, and newspaper clippings. I interviewed local NGO actors and the remaining missionary in Paraguay. I consulted the rural land bureau's (INDERT in Spanish) maps of the campesino colony where the mission was founded. I was also granted access to NGO files on the legalization process and consulted missionary reports and letters archived online.

This paper moves through time historically to relate 1) the founding of an evangelical mission in Northern Paraguay and the double-dispossession of Paĩ Tavyterã, 2) the evangelization and resistance of the Paĩ, and 3) how the Paĩ Tavyterã recovered this land from the mission. Through these three instances, I argue 1) the Paraguayan state, landed elites, military, and religious groups



aligned to support indigenous assimilation, 2) the Pañ did *not* assimilate, and 3) that interpersonal relationships and shared knowledge between the Pañ, missionaries, and NGO representatives were key to the Guaraní reclaiming their land. First, however, I provide historical context for land dispossession and land use change in Northern Paraguay.

Land, Environment, and Livelihood Changes in Paraguay

Land ownership in Paraguay is among the most unequal in Latin America and the world⁵⁹, where 1% of the largest landholders own 77% of land (Hetherington, 2012). Despite this land inequality, 44% of Paraguayans live in rural areas (World Bank, 2013). The current material inequality must be understood historically. Post-independence in the early 19th century, Paraguay's 'Supreme Dictator for Life', Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia imposed economic isolation and developed Paraguay's industry internally, parceling up the country with economic and agricultural zones of production. Land without an owner was state land. After his death, the subsequent father-son Lopez dictatorships opened the country to foreign commerce, a period that was interrupted by the Triple Alliance War. The war devastated the country—some 60% of its entire population died and almost 40% of national territory was lost⁶⁰. The subsequent Colorado governments sold huge tracts of land to foreign companies (CAFE, Industria Paraguaya; see (Folch, 2010)) and foreign nationals (Carlos Casado, Clarence Earl Johnson for ex.) in part to address war debt (Whigham and Potthast, 1999: 186).

⁵⁹ Paraguay's land Gini index was estimated 0.93 where 1.0 indicates a complete concentration of land: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1990 World Census of Agriculture: International Comparison and Primary Results by Country (1986-95) United Nations, 1997.

⁶⁰ These numbers are part of a heated scholarly debate. Despite differences, all scholars agree that the war had a devastating impact on Paraguay's population and gender ratio. I have chosen statistics that seem to represent a middle-of-the-road between a cluster of different calculations, which are also supported by the post-war census.



While large tracts of land were grabbed by foreign hands after the Triple Alliance war, many Paraguayans still carried out subsistence agriculture on small-holder farms with staple crops of manioc (yucca/cassava), beans, corn, squashes, and peanuts. Cotton was grown as a surplus, cash-crop when possible. Until the 1970s, most of Paraguay's agriculture was not mechanized. This changed as outer regions were at once opened to small-holder colonization and gifted to elites. Under the long Stroessner dictatorship⁶¹, Paraguayan elites grabbed large tracts of "ill-gotten land" (Hetherington, 2011; Kleinpenning, 1987; Pastore, 1972) as Stroessner gave land and largess in order to curry political favor (Folch, 2013; Riquelme, 2013). As mechanized production of soy, cotton, and wheat was introduced, thus land concentration became more attractive to military and party elites.

The rural poor were increasingly affected by this concentration of land ownership as previously underworked haciendas were consolidated. Campesinos and indigenous people were removed from land they had worked for years without title. In 1963, Stroessner decreed a rural colonization law as a safety valve for the growing unrest over rural land grabs (Telesca, 2004). Yet the beneficiaries of the law were mainly Brazilian transnationals (*Brasiguayos*) with extensive farming experience and access to Brazilian capital. In fact, *Brasiguayos* hold 12% of all land in Paraguay, and it is mainly concentrated along the border (Glauser, 2009).

The Brazilian transnational farmers (*Brasiguayos*) along the border grow soy on large, industrial farms; as Paraguay's top export, soy farming is a major component of the Paraguayan economy. This small country is ranked the 4th largest soy exporter in the world (FAO-UN, 2011), and growth

⁶¹ Alfredo Stroessner Matiauda was president and military dictator of Paraguay from 1954-1989 and member of the Colorado Party.



in soy production has surpassed predictions. For example, the maximum projected limit of soy production was 2.4 million hectares by 2014 (FAO-UN, 2007). Within this limit, the FAO⁶² projected that soy mono-cropping would *not* harm Paraguayan food security. However, actual soy production had eclipsed 3 million hectares by 2013 alone (FAO-UN, 2014). Displacing semi-subsistence farmers has resulted in growing food insecurity. Further complicating the landscape, cattle ranching is one of Paraguay's industries. Buffel grass (pasto colonial) and guinea grass (pasto de guinea) are fast-growing and fast-spreading forage plants⁶³ that smother open fields, complicating small-holder agriculture (Horqueta, 2016).

Industrial agriculture and large-scale ranching are clearing Paraguay's portion of the Atlantic forest, which has been reduced to a mere 7% of its original 1.7 million km² size (Richards et al., 2012; Terborgh, 1992). The expansion of the soy frontier and subsequent deforestation of the Atlantic forest has impacted rural wellbeing for both campesino and indigenous peoples (Bravo and Centurión Mereles, 2010; Galeano, 2012). Paraguay's powerhouse Brasiguayo soy production is supported by GMO soy varieties and pesticide use (Bravo, 2010; Fassi, 2006; Hatzmann, 1985; Palau, 2004). The World Health Organization classified glyphosate, the main pesticide used for GMO soy, as a probable carcinogen (IARC-WHO, 2015). High levels of soy production and pesticide use have negative health implications on rural Paraguayans. Social scientists have denounced the poverty, food insecurity and poisonings from pesticides in both indigenous and campesinos communities resulting from industrial agriculture and commercial ranching in rural Paraguay. Few industrial farms respect environmental regulations and some openly threaten rural

⁶² FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations

⁶³ See (Vasquez-Leon and Liverman, 2004) for a study of how the narrative of 'buffel grass as invader' is complicated by how it supports small holder or marginalized farmers, and how the economy influences decisions of conservation and exploitation in Northern Mexico.



people through police harassment (Bravo and Centurión Mereles, 2010; Codehupy, 2014; Fogel and Riquelme, 2005; Guanes de Laino, 1993; Hetherington, 2012; Palau, 2004; Pereira Fukuoka et al., 2012). In this context, the small-scale agriculture that is giving way to industrial production impacts not only livelihoods but also environmental and public health.

Jaka'ay ha jaje'e: Drinking mate and talking around the fire

We sit in the kitchen around a low fire in the cool, early morning. Karai⁶⁴ Nicolás Duarte, his wife Ña Saturnina, their oldest son, an NGO colleague Teresa, and I are drinking mate. Ña Saturnina leisurely serves us each in turn. We sip the hot tea filtered through a metal straw, the water grass-green from the yerba and other pohã (medicinal herbs.) Our mate session stretches out over a few hours as we chat in the form of a semi-structured interview.

The evening prior Teresa and I had stopped by to ask Karai Nicolás if we could talk about how they recovered their land from the mission. His son received us while we waited for his father to come back from gathering firewood (ojepe'a). We amused each other by practicing pronouncing my full name after he asked me to write it out for him. Teresa also gave him advice on how to pick up his new ID card which an employer had taken away. When Karai Nicolás arrived, we chatted about the boyhood rite of passage ceremony (mitã pepy) taking place in the community. Teresa mentioned that she and I had been looking over documents from their land legalization and that I had asked her questions about the process. I told him that I remembered our conversations from 2013 about how they recovered their land, and that I wanted to write the history of how it happened. He leaned back, rubbed his legs and adjusted his ball cap over his thick shock of hair while he grinned. He said there were many stories to tell from that time, from when they arrived to when

⁶⁴ Karai is an honorific like "Señor" in Spanish or Mister in English. Women are usually given the honorific "Ña" which a contraction of "Señora".



they were able to recover the land. He started to reminisce, but it was late and we arranged with him to come back in the morning. He told me to remember my notebook to write things down. He said he usually started drinking mate around 4am and he'd expect us any time after that.

The next day we arrive late by Paĩ standards, long after dawn had broadened into morning, around 7am. I tuck a package of mate I'd brought into a space on the table. Ña Saturnina begins to cebar (serve mate in a round). In what follows I interweave Karai Nicolás' narrative with other interviews and documentary information to examine first the context of his family's entrance to the mission, then Paĩ Tavyterã practices in mission life, and finally Karai Nicolas' recounting of their land reclaimed.

I. Paĩ Tavyterã Dispossession and the Misión Norma

On March 7, 1974 when Nicolás Duarte was 14 years old, his father died of mba'asy po'i (tuberculosis). Bereaved, his mother took his family to the tekoha⁶⁵ of Sapukai where his maternal uncle lived. There they heard about an evangelical mission that was providing land and six months of supplies to Paĩ Tavyterã who accepted the gospel. The mission had started about 10 years prior, and various Guaraní families lived there already. On May 15, 1974 his family moved to the mission.

Looking back, Karai Nicolás marks three different stages of land tenure. In his ancestors' time (yma), land was like any other natural resource—it could not be owned. Then the war tore through the region, and large estancias and fazendas (estates) carved up land which was kept as prestige and potential capital (Geisler, 2015), mostly underexploited, up until the Stroessner dictatorship.

⁶⁵ A tekoha is the place where the correct and good way of Guaraní life can be carried out. From teko (reko/heko): way of life/customs, and the suffix -ha denoting place.



Thus the first wave of dispossession occurred as rural people were enclosed on estates. They remained as seasonal labor sources and otherwise they were able to carry out their livelihoods without much harassment. Yet while the Paĩ and other rural people maintained actual possession and occupation of the lands, they were legally dispossessed of title as land passed to Paraguayan elites, foreigners, and/or the state.

The third and current stage of land grabbing Karai Nicolás identifies started in the 1960s as land was fenced off, colonized and industrialized. Smaller plots are consolidated into larger and larger plots, many times led by foreign owners and companies. In this industrialized accumulation by dispossession (Harvey, 2009), far more land is needed and far less manual labor was required. The Paĩ were thus evicted from their lands in a second wave of dispossession, that of physical removal. As opposed to the campesino population in the area, it appears the Paĩ became a surplus population who were not used for wage labor (Li, 2010)—only sporadically did they participate in the wage labor market and were paid in supplies if that, or simply in meals. Borrás Jr. and Franco suggest that a land grab becomes a “double whammy” (2013: 1731) when poor people are dispossessed and their labor is not needed. The Paĩ’s situation reached emergency levels in the 1960s and 70s in Northern Paraguay as this double-dispossession (first de jure then de facto) exposed the Guarani to disease and hunger.

In this context, Karai Nicolás explains that joining the Misión Norma was a way to stave off emergency. Leaning forward, he draws a map in the dirt between his cracked leather boots. In addition to providing 6 months of foodstuffs to incoming families, the mission divided up land into 10-20 hectare plots for each family. They were expected to become self-sufficient by farming their land, and the mission provided seeds, technical support, and machinery. The mission had a hospital,



a church, a school, and a workshop filled with tools. Karai Nicolás shakes his head remembering all the tools he had access to through the mission. If the family failed to provide food, he noted, the children still received support from the mission while the parents went hungry.

The missionaries' letters back to their Pentecostal brethren in Norway evince an ambivalent support from the Paraguayan dictatorship. In an early letter, Anna Strømsrud (1968b) says there was little state support for indigenous people. Measles were rampant in the communities to the point that 7 children were buried in one day (1968b). In the same letter, however, she notes that she obtained a promise of 1,000 hectares to found the mission (see also (ABC Color, 1968)), and she signed the deed on almost 900ha on June 7, 1972 (Strømsrud, 1972). As she lobbied for help, she wrote that some officials, though gracious when talking to her, would prefer the Guarani to disappear into the forest at very least, if they do not first disappear completely from disease.

Indeed, the mission's project to educate and convert the Guarani aligned with the Department of Defense and the NGO Paraguayan Association of Indigenistas' (API) plan to solve "the indigenous problem"⁶⁶ (Bejarano, 1975). In the first anthropological journal publication in Paraguay, API president Bejarano outlines the grave issues that indigenous Paraguayans confronted: they are expelled from lands where their ancestors lived for centuries only to be expelled again from others, and it is no simple task to present themselves to the authorities to seek justice for their losses. (In 2016 these problems persist.) This problem, he argued, could only be solved by incorporating indigenous people through assimilation to Paraguayan society. The Institución Nacional del Indígena (INDI) is the government agency created for this purpose.

⁶⁶ Under the military dictatorship, indigenous people were considered a 'problem' to be handled by the Ministry of Defense. Bejarano's proposal of a separate institution was implemented, and Institucion Nacional del Indígena (INDI) is now part of the Ministry of Education and Culture.



The mission removed the ‘problem’ of displaced Paĩ in the area by concentrating them on mission lands and attempted the assimilation project through schooling and prayer. The missionaries were aware of how closely their project aligned with the military and landed elite. Missionary Alf Igland records Anna’s wry words when he visited: “ ‘Many of these landowners were excited when they realized I would take care of the Indians. They got an opportunity to get rid of them from "their" areas, the land the government had taken from the native Indians and sold to strangers,’ says Anna Strømsrud” (Igland, 1973). In 1975 missionary Lars Fjørland reports that Anna has received a Medal of Honor in March of the same year for her mission work from the Ministry of Defense (Fjørland, 1975). High military brass, the Norwegian ambassador, and various Norwegian and Swedish missionaries attended the ceremony where she was commended for her work educating and proselytizing. Fjørland writes that Señora Anna felt that she did not deserve honors as she was fulfilling her duties just as any missionary would. Her letters are both poignant and chilling to read—as she battles wholeheartedly for the Paĩ’s survival by providing food and health services, she also attempts to indoctrinate them and eradicate their spiritual practices.

The mission was a non-state and non-corporate actor attempting to safeguard the Paĩ, yet through religious indoctrination reproduced the same end-goal of assimilation. Borrás Jr. and Franco identify three general types of land grab oppositions: “poor people versus corporate actors, poor people versus the state, and poor people versus poor people” (2013: 1730). In this case, the Paĩ had to consolidate opposition to both state and corporate actors aligned with a religious, non-state actor.

II. Paĩ Tavyterã Practices in Mission Life

Despite the mission’s attempts at converting them, Karai Nicolás tells me they never stopped being Paĩ. I ask him what he means. We never stopped living our way (ore reko / Paĩ reko), he explains.



This is despite the heterogeneous make-up of the missionized Paĩ. The mission brought together families from different tekoha, who were therefore not related. Usually a tekoha is made up of a large, extended family. In the mission, each family was given a plot of land, fenced off from their neighbors by nuclear families. This living arrangement is quite different from how the community's land is organized now.

Karai Nicolás points to their religious beliefs, ceremonies, and food practices as key to why they never stopped being Paĩ. Far from the mission house and church at the front of the property, they built an oy jekutu (oga guasu, or sacred house) from bamboo and thatch. Cultivating sacred crops for everyday and ritual consumption, they planted avati morotĩ (white corn) to make kaguĩ (chicha). This corn requires specific prayers at different stages of growth, for example to safeguard it from flies and worms (Melià et al., 2008). Karai Nicolás emphasized that they continued the mitã pepy (boyhood coming of age ritual involving lip piercing) and avatikyry (new corn naming festival) even though he said the missionaries had prohibited their practice.

When I speak with a Paraguayan former missionary, Cándido Figueredo, he explains that he allowed the Paĩ to continue their “baptism”, or mitã pepy while he was in charge of the mission. During our conversation I attempt unsuccessfully to have him elaborate on the mission's reactions to Paĩ religious practices. Finally, I reframe my question to inquire if it was a problem that the Paĩ drank chicha as Pentecostals abstain from alcohol. It was a tremendous problem, he acknowledges and quickly continues to say the Paraguayan employed by the missionaries, Joel Bogado, did whatever the missionaries asked of him. He said how much Anna Strømsrud loved the Indians and said she had a very hard time in Paraguay trying to help them as best as she knew how. In her zeal to protect them, the mission was closed off to non-indigenous people and the gate kept locked.



Ostensibly no one entered without permission from the missionaries. It was private property.

In a 1968 missive titled “Screaming need for more missionaries: Forest Indians must hear the gospel”, Strømsrud (1968a) recounts witnessing a mitã pepy for the first time, decrying the lip-piercing as an act of cruelty and lamenting the young boys’ intoxicated states from chicha. Karai Nicolás remembers how angry Señora Anna became when she caught them carrying out their ceremonies. She called the police to threaten them and break up the ceremony. The kocho (a hollowed tree trunk used to store chicha) was upended and the chicha spilled. Karai Nicolás said everyone was very angry, but they didn’t retaliate. The second time it happened, however, Nicolás remembers they were so angry that they broke all the windows of Señora Anna’s Land Rover. She called the local police and had them all arrested and taken to jail. The police treated the leaders very poorly. This is the only instance of violence that Karai Nicolás shared with me; however, the mission was formally denounced for repressing traditional indigenous beliefs to the InterAmerican Institute of Human Rights in the 1970s (Stavenhagen and IIDH, 1986).

Dr. Hugo Medina Huerta affirms that the situation was very serious. He worked with the Pañ as a medical doctor providing health services such as vaccinations, but became involved in their land legalization through the NGO Servicios.⁶⁷ The mission was a head-on crash with Pañ spirituality, he tells me, and yet the Pañ continued to enter the mission. The Pañ joined because they were pushed off their lands and people were dying from infectious disease. There was talk of publicizing the Pañ’s situation as ethnocide. He explains that they were in the mission despite the fact that their religion was forbidden, and despite the violence. He thinks that they were tortured, or at very least that the mission used corporal punishment. He alleges that there were even deaths.

⁶⁷ NGO Servicios Profesionales Socio-Antropológicos y Jurídicos



Despite the gravity of the situation, the Paĩ held out hope that they would be able to keep the lands. Paĩ prayer can be directed to achieving specific ends, and Dr. Medina Huerta explains that the Paĩ told him “Oñembo’e omoĩha haguã” (We pray in order to scare them away). The various personal issues and health crises that the missionaries and their families suffered in the following years pushed many to leave the mission and the country. To the Paĩ, this served to support the power of these prayers. The failure of the mission and personal issues of those involved were seen by the Paĩ as an inevitability of going against the correct way of life.

Ex-missionary Cándido Figueredo notes that there was never a massive conversion among the Paĩ. Every year they carried out their rites.⁶⁸ When I spoke with applied anthropologist Beate Lehner of Servicios, she did not remember any Paĩ who preached the evangelical gospel; rather, she rubbed her fingertips together and said if they were baptized it was likely a matter of economics. In his interview, Cándido said that the few Paĩ who were baptized were likely “strategic Christians.” Going to church services incurred benefits such as access to machinery and seeds. Karai Nicolás also remarked that some Paĩ were baptized Christian. The Paĩ Tavyterã children were schooled in the mission church and taught to read and write; young Nicolás was one of their strongest students (Medina Huerta, 2016). Nevertheless, despite the imposed private land tenure, schooling, church services, and baptism, Karai Nicolás said when the opportunity came to recover the land (or grab back), everyone supported the decision.

III. Land Reclaimed

Our yerba mate is washed out, and there is no more flavor in the herb. Ña Saturnina has brought

⁶⁸ From the NGO Servicios’ health survey in 1992, applied anthropologist Beate Lehner writes that the Paĩ had begun their rituals again, and the most recent mitã pepy was two years prior in 1992. This matches Cándido’s and Karai Nicolás’ stories if we assume that perhaps while Señora Anna was on the mission they ceased carrying out their rituals or hid them, but once Cándido took over as director, he did not actively oppose their practices.



manioc roots from outside and puts on water to boil. As we talk, she interjects only to affirm names or to prompt his memory when Karai Nicolás asks. A pile of roots between her feet, Ña Saturnina deftly chips off the outer skin with her machete, sending it flying. A chicken pecks at the rising pile of chips, and she shushes it away. She submerges each tuber in water to wash it, and plunks it in the pot to boil. I ask Karai Nicolás how they found out about the Ley 904/81, which defines how the state must title community property for recognized indigenous communities.

The Pañ knew that the missionaries owned the land, but they maintained hope that they would go back to Norway. Servicios had held an aty (meeting) and workshop in a community nearby in Bellavista on the Ley 904/81, and they heard about the law from those leaders (mburuvicha) (Lehner, 2016). When Karai Nicolás was still a teen, Dr. Medina Huerta remembers the older leaders telling him that if the missionaries ever left, they wanted him to help them recover the land. In 1979 NGOs were already in talks with the government to craft the law, so he told them if they could hold on, in 1981 the law would be ratified. From there, they would be able to legalize the possession of land that had always been theirs, essentially pulling the rug out from under the mission.

Dr. Medina Huerta points to his field training alongside applied anthropologist Dr. John (Juan) Wicker as lessons learned on supporting Guarani land claims. The key to supporting Guarani communities is twofold: 1. Consolidate the community. This means supporting their spiritual practices above all through the religious leaders (tekomburuvicha) as they carry out prayers and rites. This also implicates the economy, as well as health and education, as they are all entwined in the norms of Pañ spirituality (teko). 2. Hold onto the land. Physical occupation of the land is 90% of the struggle, and therefore Dr. Medina Huerta explains that it is fundamental to stay on the land



and avoid dispersion. A *de facto* occupation maintains a space for the Pañ reko (way of life). The role of Servicios and other NGOs according to Dr. Medina Huerta is to support the communities in their land claims, which he believes is the only pathway to autonomy. The community ties persist without land because they are at once kinship ties, but communities without land are unable to unite into a tekoha because they have no place-tie to carry out their ceremonies and livelihoods.

In order to mediate land conflicts, Dr. Hugo Medina Huerta explains that they seek dialogue with land owners and attempt to meet with them in person. They try to shield the Guarani from aggression and pressure to leave through administrative judicial procedures, such as a protective order (un amparo) or an injunction (prohibición de innovar). In this way the people stay on their land while the judicial order suspends changes, including evictions. In the meantime, they work with the landowner to make an official offer to the Institución Nacional del Indígena (INDI) to sell their land. Once purchased, the land is titled as a communal property in the community's name. Suing a landowner is a last resort. On the other hand, he explains, other NGOs treat landowners as the enemy and start with a lawyer, a lawsuit, and a police report. This has led other NGOs to insinuate Servicios complicity with landowners, yet in this case it helped expedite the land transfer process in favor of the Pañ.

Karai Nicolás lays out the steps they took to claim land through Ley 904/81: 1. Possession (the Pañ could show that they lived on mission lands). 2. Personería jurídica (legal personality) must be recognized by the INDI. The community elects 4 political leaders to represent them, and an INDI representative goes to the community to ratify its existence. It then registers the legal presence of the community with or without land and the leaders as their legal representative. 3. Land survey and file request for adjudication. 4. Receive land title. These steps appear very straightforward, yet



the process can be bogged down at each stage through bribe-seekers, land owners refusing to sell, police harassment, leadership corruption, and overall bureaucratic foot-dragging.

I ask how they decided to fight for their land. Karai Nicolás says that he and the other leaders, including his brother, went house to house to talk to the approximately 40 families. Then in their aty (community meeting), they elected the four political leaders to represent them as legal personality. In this case, the NGO Proyecto Pañ Tavyterã and then NGO SAI⁶⁹ submitted the paperwork of legal personality at the mission. In April 1989, the four leaders Nicolás Duarte, Amado Duarte, Aurelio Cabrera, and José González and lawyer/anthropologist Ana Maria Fernández de Valdéz as their legal representave (apoderado legal) requested leadership recognition from the INDI (Duarte et al., 1989). In July, the INDI went to three communities to verify leadership. In his report to the INDI, Ignacio Almirón A. (Almirón A., 1989) and his driver Oscar Amarilla arrived at the mission to ask after the indigenous community. The un-named missionary who received them said that he had no notion of the indigenous community's existence. The INDI official proceeded to read him the names of the four political leaders, and the missionary said they lived on the mission, and that he was very surprised that Ana María [Fernández de] Valdéz had met with the Pañ without first alerting the responsible missionaries. He said he would go the INDI himself in Asunción to resolve the matter. By the next month, however, Cándido Figueredo wrote to the NGO Servicios on behalf of the Misión Norma to request their assistance in transferring legal title to the Pañ (Figueredo, 1989). What caused this rapid about-face?

My initial working hypothesis was that Paraguayan missionary Cándido Figueredo's everyday

⁶⁹ SAI is Servicio de Apoyo Indígena, not to be confused with Servicios Profesionales Socio-Antropológicos y Jurídicos. Both NGOs have members who worked on the original Proyecto Pañ Tavyterã founded by the Grunbergs which ended in 1988.



interactions with the Paĩ led him to support their claims. As Goodwin, Jasper, and Polletta (2001) argue, affective relationships and alliances are often crucial to achieving change through collective movements. The Paĩ's community movement to unseat the missionaries required unlikely allies within the mission itself who would be willing to transfer or sell the land. Unlike the other Norwegian missionaries who spoke Spanish and struggled with Guarani, Figueredo is a native Guarani speaker. I thus hypothesized that Figueredo's interactions with the Paĩ may have been more intimate and personal than his colleagues'. Indeed during our interview, Figueredo showed nuanced understandings of the Paĩ reko (way of life) and recalled a few stories about some of the Paĩ. However, Beate Lehner (Lehner, 2016) informed me that Cándido lived away from the indigenous people in the mission house, and that his housekeeper and cook (also Paraguayan and a Guarani speaker) showed much more sympathy for the Paĩ and their campaign to win back their land.

What appears to be vital to Cándido's support was his relationship with Dr. Hugo Medina Huerta of Servicios. The Paĩ approached Dr. Medina Huerta and Servicios in order to help them legalize their land possession, this despite having carried out the two prior steps with NGO SAI and Ana María Fernández de Vasquéz.

Karai Nicolás watches Ña Saturnina poke at the manioc to see if it has softened. Why did you switch, asks my NGO colleague Teresa, who at that time worked in the office at Servicios. There she had received Cándido's letter requesting their involvement in the land transfer. And what did Ana María say? She continues, knowing her well. Ana María was furious with me! (Ana María ipochy chendie!) Karai Nicolás laughs and pulls a quick grimace. He explains that she had never told them about reclaiming their land. If she'd said something, we wouldn't have changed, he



clarifies. But we wanted to make sure we'd be able get our land back, and we knew that we could working with your father (Teresa's father, Balbino Vargas) and Dr. Hugo. So we talked to Dr. Hugo and he talked to Cándido, and that's how we got our land back.

Dr. Medina Huerta and Cándido Figueredo are both from the city of Pedro Juan Caballero, and Cándido remembers going to school with Dr. Medina Huerta's brother-in-law. With Cándido as director of the mission, Dr. Medina Huerta took the opportunity to talk with him. He says that he spoke with him frankly, that it had been a mistake to evangelize the Paï and it had gone badly. However, he said that Cándido had the opportunity to make it right and to do good by them. He asked if he loved them, and Cándido replied that of course he cared for them. Dr. Medina Huerta explains that Cándido had a difficult path to walk between the Guarani on one hand and his Norwegian wife and colleagues on the other.

In our interview, however, Cándido (Figueredo, 2016) does not name his interpersonal relationships with the indigenous people as his primary motivation. When I ask him why he decided to support the Paï's claims, he tells me that the Norwegian government development aid (NORAD) was financing much of the Misión Norma's projects. When NORAD came to oversee progress, they disapproved of the mission's goal of assimilation. The purpose of the development money was to foster indigenous self-sufficiency, and Cándido tells me he leveraged this argument with the Norwegian missionaries to push toward leaving as the funding ran out. Many of the missionaries were extremely unhappy with him, he tells me, but his argument worked.

He explained that his relationship with Dr. Hugo Medina Huerta helped make the land transfer happen. This relationship was strong despite the dislike he voiced for Dr. Medina Huerta's brother. Hugo and Luis Huerta Medina are brothers and doctors who both worked with the indigenous



people during this time period. Dr. Hugo tells me that the NGO where Dr. Luis worked followed the strategy of lawsuits and legal fights, and Dr. Luis was part of the NGO that secretly supported the Pañ in receiving their legal personality. I ask Cándido Figueredo about the brothers. They are so different it's like they come from different mothers, Figueredo exclaims.

I never got along with Luis. He'd come sneaking into the mission and go straight back to talk to the Pañ. But Hugo! That man is my brother. I am honest with people, and he tells you what he thinks. He's quite the character as I'm sure you know. Let me tell you.. one night I had gone to bed and I was alone. And I kind of turned over and felt a presence against my back, and I was really confused. I turned over and there was Hugo, sound asleep! I woke him up and said what are you doing here! And he said, I was driving late and I came in through the window because I was really tired. I didn't want to wake you. I ate all the food in the kitchen.

He breaks into laughter. Dr. Hugo tells me that he didn't know all of the legal steps to transfer the land, but he told Cándido if he gave him his word, he would talk to Balbino Vargas of Servicios to transfer the land. They set a meeting and Vargas arrived with a bundle of papers in hand in order to explain the legal process. Yet the formal meeting never happened—Dr. Hugo, Vargas and Figueredo hit it off, talking about life, telling jokes, and they went out on the town instead. Teresa received the letter requesting Servicios' involvement from Figueredo in August on behalf of the mission. As we wrap up our interview, Cándido tells me he is not in touch with the Pañ community, but the few times he drives by, he thinks to himself, there is a community that I helped win their land back. He echoes Dr. Hugo's sentiment from the frank conversation they'd had over 25 years ago: It was something that was born badly, he says, but in the end it came out well, and I had the opportunity to help.



The official land title was not completed until 1994, but in 1989 the Pañ knew that Figueredo and Servicios would work with them transfer the land. The land surveyed and titled ended up as 984 hectares, as the Misión Norma donated the hospital to the regional government. Karai Nicolás tells me they had a ceremony for the title transfer. They also took down all the wire fencing around the individual family lots. He quickly sketches the plots again in the dirt between his feet and then sweeps the lines away. We went back to our way as Pañ (Pañ haicha) he says. None of the land is divided up anymore; it's all ours, together.

Conclusion: On Grabbing Back

Current scholarship in peasant and agrarian studies focuses on the boom in “land grabbing” as large tracts of land in Global South countries are snapped up by elite and foreign investors for large-scale farming and/or extractive industry (Borras Jr. et al., 2011; De Schutter, 2011; Peluso and Lund, 2011; Ross et al., 2014). In Latin America, land grabs occur not only from overseas actors such as China (de LT Oliveira, 2014), but also between South-South neighbors like Brazil and Paraguay (Borras, Jr. et al., 2012). Scholars have called for studies to: 1. Situate land grabs in long-term histories of dispossession (Edelman et al., 2013); 2. Pay attention to relationships between land grabbing and gender (Schroeder, 2000); 3. Examine the role labor and livelihoods play in the grabs (Li, 2011); 4. Interrogate research epistemologies and data collection (Edelman, 2009, 2013; Oya, 2013; Scoones et al., 2013); and 5. Integrate views from elites and the dispossessed.⁷⁰ These methodological and theoretical considerations inform a historical materialist approach to understanding land dispossession that seeks to understand the particular historical, political and

⁷⁰ See the Journal of Peasant Studies special issues on Land Grabs: Volume 42, Issue 3-4, 2015: Global land grabbing and political reactions 'from below'. And Canadian Journal of Development Studies Special Issue Volume 36, Issue 2, 2015: “Elites and Global Land Deals”



economic constellation of hegemonic relations (Mitchell, 1990).

This paper has addressed some of the calls above in order to further understandings of land grabbing. Borras Jr. and Franco use the typologies of “poor people versus corporate actors, poor people versus the state, and poor people versus poor people” (2013: 1730) as a starting point to tease out the complexities of land-grabbing mechanisms. I have shown that non-state and non-corporate actors such as religious missions can play an integral role in facilitating dispossession. This case study examined the role of a Pentecostal Norwegian mission in particular, yet the Catholic Church played a similar role in the area. The Pañ also took refuge on Church lands, and when the Church opened them up to campesino colonization, they were newly displaced (Medina Huerta, 2016).

This paper drew upon different voices and sources to incorporate views from elites and the dispossessed. The main narrative frame is that of Karai Nicolás, however, I also incorporated missionary Cándido Figueredo’s interview as well as letters from his fellow missionaries. Finally, I also wove in the role of NGOs, particularly Servicios (Dr. Hugo Medina Huerta, Balbino Vargas, Beate Lehner, and Teresa Vargas) to show that affective ties were significant to negotiating the transfer of lands back to the Pañ. Though this case study begins in 1968 with the founding of the mission and ends in 1994 with the transfer of title, I also situate the study in the longer history of land grabbing through Karai Nicolas’ analysis of the three different periods of tenure and through the history of land use change, foreignization of land ownership, and its impacts on rural people. Further study is required to analyze other initial findings that include the changing role of labor/livelihoods and gender in the context of land grabs. It appears that reclaiming land under communal ownership has affixed the Pañ in place on ever-smaller portions of land. This coupled



with the clearing of the forest has led to men losing their hunting grounds. Wage labor (changa) takes men away from their communities for months at a time, yet NGOs are working with men in order to improve agricultural practices. It appears that women are no longer the primary agriculturalists because these NGO interventions seek to keep men in the community. These statements are preliminary and are an open call for additional research.

Bibliography

ABC Color (1968) *Mision Evangelica Noruega 1968*. (consulted July 2016: http://www.pymisjon.com/Guarani/ee_abc_1968.htm)

Almirón A. I (1989) *Informe del Viaje realizado a las Colonias Indígenas de Guyra Keja, Yrapey, y Tapyi Keu*. INDI.

Bejarano RC (1975) *Solucionemos nuestro problema indigena con el I.N.D.I.: [Institucion nacional del indigena*. Asunción: Paraguay : Toledo.

Borras, Jr. SM and Franco JC (2013) Global Land Grabbing and Political Reactions ‘From Below’. *Third World Q.* 34(9): 1723–1747.

Borras, Jr. SM, Franco J., Gomez S, Kay C and Spoor M (2012) Land grabbing in Latin America and the Caribbean. *J. Peasant Stud.* 39(3/4): 845–872.

Borras Jr. SM, Hall R, Scoones I, White B and Wolford W (2011) Towards a better understanding of global land grabbing: an editorial introduction. *J. Peasant Stud.* 38(2): 209–216.

Bravo AL (2010) *Los señores de la soja: la agricultura transgénica en América Latina*. Ciudad de Buenos Aires: CLACSO : Ediciones CICCUS.

Bravo AL and Centurión Mereles HF eds (2010) *Avance de la agricultura transgénica: Impactos socioculturales y económicos en comunidades campesinas e indígenas del Este paraguayo, entre la*



pervivencia y el ocaso. In *Los señores de la soja: la agricultura transgénica en América Latina*.

Ciudad de Buenos Aires: CLACSO : Ediciones CICCUS

Codehupy (2014) *Situación de los derechos a la tierra y al territorio de los pueblos indígenas en el Paraguay*. Asunción, Paraguay: Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay.

de Certeau M (1984) *The practice of everyday life*. Berkeley: University of California Press.

de LT Oliveira G (2014) Chinese and Other Foreign Investments in the Brazilian Soybean Complex. *Sustain. Dev.* 12(3): 245–260.

De Schutter O (2011) How not to think of land-grabbing: three critiques of large-scale investments in farmland. *J. Peasant Stud.* 38(2): 249–279.

Duarte N, Duarte A, Cabrera A, González J and Fernández de Valdéz AM (1989) *Solicitud de Personería Jurídica*.

Edelman M (2009) Synergies and tensions between rural social movements and professional researchers. *J. Peasant Stud.* 36(1): 245–265.

Edelman M (2013) Messy hectares: questions about the epistemology of land grabbing data. *J. Peasant Stud.* 40(3): 485–501.

Edelman M, Oya C and Borras, Jr. SM (2013) Global Land Grabs: historical processes, theoretical and methodological implications and current trajectories. *Third World Q.* 34(9): 1517–1531.

FAO-UN (2007) *Future expansion of soybean 2005-2014: Implications for food security, sustainable rural development and agricultural policies in the countries of Mercosur and Bolivia*.

Food and Agriculture Organization of the United Nations.

FAO-UN (2011) *EXPORTS: Countries by commodity. Soybeans*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.



FAO-UN (2014) *FAO Stat Production of Crops 2013*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Fassi MC (2006) Paraguay, un territorio en disputa: el avance de la soja transgénica y la resistencia campesina al modelo que implica. *Periferias Rev. Cienc. Soc. B. Aires* 10(13): 47–67.

Figueredo C (1989) *Solicitud Apoyo Transferencia y Titulación de Propiedad*.

Figueredo C (2016) *Misión Norma en Yby Yau*.

Fogel RB and Riquelme MA (2005) *Enclave sojero: merma de soberanía y pobreza*. Asunción, Paraguay: Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios.

Folch C (2010) Stimulating Consumption: Yerba Mate Myths, Markets, and Meanings from Conquest to Present. *Comp. Stud. Soc. Hist.* 52(1): 6–36.

Folch C (2013) Surveillance and State Violence in Stroessner's Paraguay: Itaipú Hydroelectric Dam, Archive of Terror. *Am. Anthropol.* 115(1): 44–57.

Førland L (1975) *Medal of Merit to Anna - 1975*. (consulted July 2016: http://www.pymisjon.com/Guarani/anna_1975_medalje.htm)

Galeano LA (2012) Paraguay and the expansion of Brazilian and Argentinian agribusiness frontiers. *Can. J. Dev. Stud. Can. Détudes Dév.* 33(4): 458–470.

Geisler C (2015) Trophy lands: why elites acquire land and why it matters. *Can. J. Dev. Stud. Rev. Can. Détudes Dév.* 36(2): 241–257.

Glauser M (2009) *Extranjerización del territorio paraguayo*. Asunción: BASE Investigaciones Sociales.

Goodwin J, Jasper JM and Polletta F (2001) *Passionate politics: emotions and social movements*. Chicago: University of Chicago Press.



- Guanes de Laino R (1993) *Familias sin tierra en Paraguay*. Asunción, Paraguay: Ñanduti Vive : Intercontinental Editora.
- Harvey D (2009) The ‘New’ Imperialism: Accumulation by Dispossession. *Social. Regist.* 40(40)
- Hatzmann K (1985) Estructura y procesos de desarrollo espacial en la agricultura campesina de Itapúa (S.E. Paraguay): bajo la influencia de la producción mecanizada de soja. *Rev. Paraguaya Sociol.*(64): 139–159.
- Hetherington K (2011) *Guerrilla auditors: the politics of transparency in neoliberal Paraguay*. Durham [NC]: Duke University Press.
- Hetherington K (2012) Paraguay’s ongoing struggle over land and democracy. *NACLA Rep. Am.* 45(3)
- Horqueta (2016) *Land Use, Community, Family*. interview, campesino
- IARC-WHO (2015) *Evaluation of Five Organophosphate insecticides and herbicides*. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer, World Health Organization.
- Igland AK (1973) *New hope for Indians*.
- Kleinpenning JMG (1987) *Man and land in Paraguay*. Amsterdam, Netherlands; Providence, R.I., U.S.A.: CEDLA ; Distributed by FORIS Publications USA.
- Lefebvre H (2004) *Rhythmanalysis: space, time, and everyday life*. London; New York: Continuum.
- Lehner B (2016) *Misión Norma*. interview, NGO Servicios
- Li TM (2010) To Make Live or Let Die? Rural Dispossession and the Protection of Surplus Populations. *ANTI Antipode* 41: 66–93.
- Li TM (2011) Centering labor in the land grab debate. *J. Peasant Stud.* 38(2): 281–298.



Medina Huerta DH (2016) *Misión Norma en Yby Yau*.

Melià B, Grünberg G and Grünberg F (2008) *Los Pañ-Tavyterã etnografía guaraní del Paraguay contemporáneo*. Asunción: Ceaduc : Cepag.

Mitchell T (1990) Everyday Metaphors of Power. *Theory Soc.* 19(5): 545–577.

Oya C (2013) Methodological reflections on ‘land grab’ databases and the ‘land grab’ literature ‘rush’. *J Peasant Stud J. Peasant Stud.* 40(3): 503–520.

Palau T (2004) *Capitalismo agrario y expulsión campesina: avance del monocultivo de soja transgénica en el Paraguay*. Asunción, Paraguay: Universidad Católica : CEIDRA : Intermon Oxfam : Union Europea.

Pastore C (1972) *La lucha por la tierra en el Paraguay*. Montevideo: Editorial Antequera.

Peluso NL and Lund C (2011) New frontiers of land control: Introduction. *J. Peasant Stud.* 38(4): 667–681.

Pereira Fukuoka M, Doughman R and González J (2012) *Agresiones al derecho a la alimentación: situación en comunidades campesinas e indígenas*.

Pollak M (2006) *Memoria, olvido, silencio: La producción social de identidades frente a situaciones límite*. La Plata: Al Margen Editorial.

Reed RK (1997) *Forest dwellers, forest protectors: indigenous models for international development*. Boston: Allyn and Bacon.

Richards P., Myers R., Swinton S., Walker R. and Adding Insult to Injury: Climate Change SS and the Inequities of Intervention (2012) Exchange rates, soybean supply response, and deforestation in South America. *Glob. Environ. Change* 22(2): 454–462.



Riquelme M (2013) Toward a Weberian Characterization of the Stroessner Regime. In Lambert P and Nickson RA (eds) *The Paraguay Reader: History, Culture, Politics* The Latin American Readers. Duke University Press

Ross AR, Shiva V and Chomsky N (2014) *Grabbing Back: Essays Against the Global Land Grab*. New York: AK Press.

Schroeder RA (2000) 'Re-claiming' land in The Gambia: gendered property rights and environmental intervention. *Prod. Nat. Poverty Afr. Prod. Nat. Poverty Afr. Ed Vigdis Broch-Due Richard Schroeder - Upps. Nord. Afr.:* 268–294.

Scoones I, Hall R, Jr SMB, White B and Wolford W (2013) The politics of evidence: methodologies for understanding the global land rush. *J. Peasant Stud.* 40(3): 469–483.

Stavenhagen R and IIDH (1986) *Derecho Indígena y Derechos Humanos en América Latina VII. VIOLACIONES A LOS DERECHOS INDÍGENAS*. IIDH.

Strømsrud A (1968) (a) *Screaming need for more missionaries - 1968*. (consulted July 2016: http://www.pymisjon.com/Guarani/anna_1968.htm)

Strømsrud A (1968) (b) *The Indians must be helped!*

Strømsrud A (1972) *Letter from Paraguay -South America's heart*.

Telesca I (2004) *Ligas agrarias cristianas 1960-1980: orígenes del movimiento campesino en Paraguay*. Asunción, Paraguay: Centro de Estudios Paraguayos Antonio Guasch : Teko Pyahu.

Terborgh J (1992) Maintenance of Diversity in Tropical Forests. *Biotropica* 24(2): 283.

Vasquez-Leon M and Liverman D (2004) The Political Ecology of Land-Use Change: Affluent Ranchers and Destitute Farmers in the Mexican Municipio of Alamos. *Hum. Organ.* 63(1): 21–33.



Whigham TL and Potthast B (1999) The Paraguayan Rosetta Stone: New Insights into the Demographics of the Paraguayan War, 1864-1870. *Lat. Am. Res. Rev.* 34(1): 174–186.

World Bank (2013) *Rural Population (% of total population) 1980-2014*. World Bank.

15. DINÂMICAS ESTATAIS E PROCESSOS DE MEDIAÇÃO: AS LUTAS TERRITORIAIS DE QUILOMBOLAS EM ITAPECURÚ MIRIM - MA

Cíndia Brustolin

NO HAY INSTITUCIÓN

cindiabrustolin@gmail.com

As relações entre comunidades negras e os direitos territoriais no Brasil tem se constituído historicamente em situações de exclusão. E, nesse processo, é preciso entender que o estado brasileiro e as possibilidades instaladas de processos de mediação entre os grupos negros e as esferas institucionais contribuíram em demasia para a configuração do cenário de desapossamento atual. Primeiro, o Estado Brasileiro, entendendo aqui as distintas esferas que o compõem e legislações instituídas, como as Leis de Terras, ou as políticas de colonização e ocupação de espaços, acabou favorecendo a perda de terras pelas comunidades negras. As exigências burocráticas para “fazer os papéis”, ter a segurança jurídica conferida pelo título de propriedade, pela demarcação de terras, pela regularização de situações de apossamento o de compra de terras



para requerer as escrituras, representaram frequentemente a necessidade de relações de mediação fortemente assimétricas. Agrimensores que fizeram medições de terras de famílias ou grupos negros, bem como advogados empenhados em regularizar, em vários momentos ou situações, ficaram na memória das famílias negras pela apropriação indevida de grande parte de suas áreas (ver Picadinha-MS, Santa Rosa dos Pretos-MA, Morro Alto-RS, etc.) (Barcellos, 2002: 118)..

A história de Santa Rosa dos Pretos, Itapecurú Mirim (MA), revela que o testamento da doação de terras realizada pelo Barão de Santa Rosa, Joaquim Raimundo Nunes Belfort, ao seu filho com a forra América Henriques e aos seus ex-escravos que continuavam trabalhando em suas terras, em 1898, foi fortemente guardado pelos descendentes. Os papéis passaram de geração, pela mão dos mais velhos da comunidade a quem caberia ainda permitir ou não a instalação de novas famílias na área. As terras das famílias negras descendentes dos escravos do Barão de Santa Rosa não foram regularizadas e parte delas foram perdidas no processo demarcação e requisição de documentos. Mais tarde sobre essas terras instalaram-se fazendeiros e estruturas logísticas de grandes empreendimentos, como a estrada de Ferro da Vale e o escoamento de ferro das minas de Carajás no Pará. Uma das questões que se propõe para discussão, nesse trabalho sobre a luta dos quilombolas de Santa Rosa dos Pretos, é que o não reconhecimento de direitos territoriais aos grupos negros não serão sanados apenas com a institucionalização de direitos territoriais específicos, como o artigo 68 do ADCT da Constituição Federal de 1988. Os atos de desconsideração (o não reconhecimento moral) e as dinâmicas próprias que se estabelecem em ritos procedimentais no Brasil fortalecem lógicas de poder que continuam colocando em desvantagem esses grupos. Dessa forma, o reconhecimento fica a mercê da instalação de vigorosos e violentos processos de mediação que dêem curso às "dinâmicas orfãs" que se instalam.



O campo do trabalhos proposto vem sendo realizado desde novembro de 2014 e conta com o apoio do CNPq. Já foram entrevistadas lideranças da comunidade e analisados procedimentos administrativos.

d) Direitos estatais e dinâmicas órfãs: referencial teórico

Os últimos séculos se distinguem pela crescente homogeneização dos sistemas políticos, com a expansão para outros continentes de formas políticas que se gestaram na Europa. Os modelos de governo circulam e as relações internacionais propiciam a formação de um código comum para os atores do sistema internacional e, como destacam Badie e Hermet (1993), o resultado mais evidente desse processo é mundialização da palavra estado.

No processo de importação, a forma estrutural do estado sofre diversos ajustes na sociedade importadora. Badie e Hermet (1993) evidenciam que as estruturas de Estado precisam ser problematizadas a partir de uma lógica externa, que sustenta as relações de dependência e submete seu funcionamento às exigências internacionais, e uma dinâmica interna, que dá conta de lógicas tradicionais de poder. As estruturas resultantes desse processo não dão lugar a uma ação estatal que dê seguridade e previsibilidade as ações, próprias da constituição da legitimidade que permite concentrar o monopólio da força que sustenta o centro de poder estatal. Instalam-se dinâmicas não previsíveis, não assentadas claramente na legitimidade legada, dinâmicas órfãs.

A formação de uma organização governamental híbrida, indica que não são apenas os preceitos formais de constituição do estado (e a violência simbólica legítima) e sua classificação do sujeito universal, portanto, que precisam ser repensadas, mas a rarefação do poder público e o constante reascendimento de lógicas neopatrimoniais. Todo um processo de valoração da “pessoa” incide



sobre a caracterização da objetividade das provas, por exemplo, num processo judicial, que se apresentam como universalidades.

A objetividade apresentada pelo “papel”, pela “medição”, na requisição do direito de propriedade só faz sentido quando atrelada à valoração dos sujeitos, de sua palavra (daquele que dispensa apresentações), motivo pelo qual as demais formas de apropriação territorial, mesmo quando travestidas por testamentos ou matrículas, são permeadas por processos de desconfiança e de desvalorização, o que permite sua relativização constante. Relações de reciprocidade assimétricas e valoração dos sujeitos são acionadas na formulação das certezas administrativas e jurídicas.

Torna-se necessário refinar a análise atentando para dimensões específicas desse espaço social: a dos limites institucionais nos procedimentos públicos. Está em jogo no reconhecimento de direitos aos grupos quilombolas facetas de um poder que não precisa se apresentar como legítimo, não precisa se instaurar sob um regime universal. Mesclam-se situações legítimas com ilegítimas, explodindo constantemente protestos pelo descabimento dos ritos, pela demora injustificada nos processos, pela não legitimação em diversas ações ditas públicas, ou seja, pela explicitação sistemática da indignidade do poder.

É preciso focar a constituição de espaços de mediação em esferas fracamente institucionalizadas com abismos entre códigos jurídicos instituídos e outros. Centrar nessas lógicas e práticas sociais, na perspectiva de Wolf, é dar conta da complexidade dessas sociedades e "pode fornecer uma compreensão incomum das funções de uma sociedade complexa através de suas disfunções" (Wolf, 1956b). Wolf salienta a importância de centrar o estudo no processo de mediação ao considerar possível que as sociedades complexas do mundo se diferenciem menos na organização formal de seus sistemas econômicos, legais e políticos do que no caráter de seus grupos interpessoais



suplementares. Os mediadores seriam centrais nas "uniões e sinapses cruciais das relações que ligam os sistemas locais ao todo mais amplo", tendo como função relacionar "os indivíduos orientados para a comunidade" como os "orientados para a nação" (Wolf, 1956b, 1078).

e) Os processos e os protestos: alguns apontamentos como resultados

A possibilidade de abertura de diálogo com a nação, para os quilombolas, tem se constituído especialmente a partir de enfrentamentos e denúncias abrangentes. A execução dos direitos reconhecidos na Carta Constitucional requer desses grupos muito mais do que "peças técnicas", ou que dêem conta do procedimento administrativo interno ao INCRA. Requer que "façam andar" os procedimentos, a partir da inserção e do apoio de atores sociais que dominam os códigos estatais, mas principalmente, no Maranhão, a partir de atos políticos e protestos sociais. As ocupações do prédio do INCRA, o fechamento de estradas, a permanência sobre os trilhos do trem "da Vale", a greve de fome constituem etapas mais que necessárias aos ritos estatais no reconhecimento fundiário das terras de quilombos e em outras situações sociais em que grupos reivindicam direitos territoriais.

A luta pela afirmação de direitos aos quilombolas, só a princípio, tende a instalar processos de mediação mais simétricos, do que as tentativas dos grupos negros no passado colonial de reconhecer direitos territoriais, que permitam instrumentalizar as demandas locais para o espaço legítimo da controvérsia ou traduzir códigos estatais para os grupos locais. Se no passado ter um testamento favorável ou conseguir titular as terras não era sinônimo de garantia de direitos territoriais. No presente, contar com uma série de dispositivos jurídicos ou com um artigo legal na lei maior do país, como o artigo 68 do ADCT da Constituição Federal de 1988, não tem significado



garantias. As possibilidades de alguma garantia continuam a ser geradas no exercício de uma pressão exacerbada, da inserção na luta por direitos.

O território étnico do quilombo de Santa Rosa dos Pretos foi o palco dos recentes protestos realizados por cerca de 30 comunidades quilombolas nos trilhos da Vale do Rio Doce, em Itapecurú Mirim. O motivo central das reivindicações consistiu no andamento dos processos de titulação de terras de diferentes comunidades quilombolas no Maranhão.

A argumentação desenvolvida nesse trabalho é de que processos de mediação violentos orquestram os processos de reconhecimento. Ora atos de resistência dos quilombolas contra processos de violência localizados, ora a necessidade dos quilombolas fazerem protestos sociais para impulsionar o Estado a andar. Quilombolas que passam a atuar nesse espaço precisam "se fazer respeitar" para que os processos andem, como diz uma das lideranças: quando entro no INCRA não sabem mais como me atender ou o que me dizer (todo mundo se recolhe). Os quilombolas para se constituírem em sujeitos de direitos na maioria das vezes precisam colecionar: acampamentos, amarrações, caminhadas, etc. Trata-se da força para a execução da pesada arquitetura administrativa que deveria andar sem "os empurrões" na titulação das terras de quilombos. A ocupação dos Trilhos do Trem da Vale resultou numa agenda de negociações. No caso da Comunidade Quilombola de Santa Rosa dos Pretos, ficou acordado com representantes que a presidente Dilma assinaria os decretos de desapropriação das áreas particulares que incidem no território da comunidade.

Como lidar com um processo administrativo que possui etapas que não tem prazo para acontecer, determinados atos administrativos podem levar um ano, dois anos. A possibilidade de constituir



uma ação mais efetiva concretiza-se ainda para os quilombolas no parar “a ordem normal das coisas”

f) Referências bibliográficas

BADIE, B. HERMET, G. Las dinâmicas huérfanas. In: _____ Política Comparada. México: Fondo de Cultura Económica, 1993, p. 180-212.

BARCELLOS, D. M. de. et al. Comunidade negra de Morro Alto: historicidade, identidade e territorialidade. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2004.

LUCCHESI, Fernanda. Relatório Antropológico de Identificação do Território Quilombola de Santa Rosa (MA). Brasília: INCRA, 2008.

PORTO-GONÇALVES, C. W. O Campo se Manifesta A Questão (da Reforma) Agrária. In: Relatório Conflitos por Terra CPT, 2014.

WOLF, E. Guerras Camponesas no Século XX. Global, 1984.

_____. Aspectos of group raltion in a complex society. American Antropologhist. Mexico, 1956.

1 Professora do Departamento de Sociologia e Antropologia – UFMA. Grupo de Estudo Modernidade, Meio Ambiente e Desenvolvimento (GEDMMA-UFMA). Pesquisa financiada pelo CNPQ.



JUEVES 25 DE AGOSTO: EXPERIENCIAS DE AUTONOMÍA CAMPESINA

SESIÓN 1

Hora: 10:30am - 1:00pm

Salón: A- 101

Responsables:

- **Coordinador(a) de mesa: Juan Guillermo Ferro**
- **Comentarista: Gustavo Montañez**
- **Relatoría: Mateo Pulido**

16. DESPUÉS DEL RESCATE, SIGUE LA LUCHA: REDES CAMPESINAS EN TIERRAS RESCATADAS DE LATIFUNDIO EN VENEZUELA

Ana Felicien
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IVIC



En los últimos diez años, la implementación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (LTDA) ha sido una de las políticas agrícolas con mayor relevancia en términos políticos y organizativos. Tierras manejadas bajo latifundio, fueron rescatadas con el objeto de aumentar su capacidad productiva y contribuir con la seguridad y soberanía alimentaria, influyendo este proceso incluso en la modificación misma de la ley.

Así, la LTDA se ha reformado en tres oportunidades a partir de la evaluación del proceso de ocupación de tierras con el objeto de cambiar la definición de latifundio. En el 2001 latifundio era definido como toda porción de terreno rural, ociosa o inculta, que exceda de cinco mil hectáreas (5.000 has) (Ley de Tierras y Desarrollo Agrario 2001); y en el 2010 pasó a ser definido como *“extensión de tierra que supere el promedio de ocupación de la región o no alcance el rendimiento idóneo del 80%. El rendimiento idóneo debe responder a la vocación agrícola de la tierra y la capacidad de uso agroproductivo de acuerdo a los planes y políticas del ejecutivo nacional, en el marco de un régimen que favorezca el bien común y la función social”*. Estos cambios además de considerar el criterio de extensión, consideran a producción agrícola y su vinculación a la planificación nacional como elementos para caracterizar el latifundio, reconociéndose así más allá de la superficie que ocupa este modo de tenencia, las formas de ocupación que están determinadas por las tecnologías utilizadas y en general todas las relaciones sociales que moldean la producción.

Como rasgo general, la implementación de las políticas públicas en las tierras rescatadas ha orientado la producción de alimentos en estos espacios para la satisfacción del consumo nacional, y a la producción de rubros para el procesamiento agroindustrial (por ejemplo maíz, arroz, sorgo),



al mismo tiempo que esta política de rescate de tierras se posiciona en la escena nacional desde el discurso de la reivindicación de la identidad campesina.

Los rescates fueron impulsados por una importante movilización social de personas sin tierra con procedencias diversas, tanto del campo como de la ciudad, esta movilización fue configurando una identidad colectiva a nivel nacional que se empezó a reconocer como el *movimiento campesino* por los distintos actores involucrados en este proceso: instituciones, terratenientes, y sociedad en general. Así el movimiento campesino, fue rescatando tierras e iniciando un proceso de producción con acompañamiento institucional.

Según lo reportado en la literatura, al ocupar las tierras rescatadas, una serie de programas institucionales promovieron e impulsaron el inicio de la producción en estos espacios, sólo por mencionar algunos tenemos: el programa vuelta al campo, la misión vuelvan caras, Misión Agrovenezuela, entre otros. Los agricultores se organizaron bajo la figura de cooperativa principalmente, a las cuales fueron otorgados créditos agrícolas orientados a la producción de materias primas para el procesamiento agroindustrial en empresas estatales. Además del crédito, también se implementaron programas de acompañamiento técnico y de beneficio social para las comunidades involucradas. Los espacios rescatados, se fueron estructurando como nuevas unidades de producción denominadas fundos, y en estos fundos un entretendido de esfuerzos institucionales y de las organizaciones cooperativas recién creadas fueron iniciando, después del rescate, la fase productiva.

Por mencionar un ejemplo, con el programa de *Fundos Zamoranos*, programa que fue bandera del Instituto Nacional de Tierras (INTI), se constituyeron unidades cooperativas con acompañamiento



interinstitucional de diferentes organismos del sector agropecuario. Para el año 2008, había 84 unidades que manejaban 450.000 hectáreas con 443 cooperativas y 6.631 asociados (Vielma y Marín, 2008; García Lobo y Higuerey Gómez, 2005; y Rojas López, 2014). Todos estos esfuerzos han sido claves para el establecimiento de una estrecha relación entre los espacios rescatados de latifundio y las instituciones públicas agrarias, y se han orientado al sostenimiento de los circuitos de producción y consumo nacional.

A pesar de estos esfuerzos, el saldo no ha sido el esperado. Se ha reportado que la mayor parte de las iniciativas de cooperativas creadas han fracasado, muchas se han disuelto y sus miembros en buena parte han regresado a ciudad, y los rendimientos promedios obtenidos han sido muy variables encontrándose en ocasiones por debajo de los alcanzados en promedio a nivel estatal, y la tierra aún sigue concentrada en pocos propietarios (Enríquez y col, 2015; Rodríguez Rojas 2010, Delahaye, 2012; Vielma y Marín, 2008). Y cabe destacar que desde la implementación de la LTDA, han ocurrido numerosos los hechos de violencia contra los ocupantes de las tierras rescatadas, en la forma de sicariato, criminalización a través de medidas judiciales, arrestos, etc (Wilpert, 2014 y Lavelle, 2014).

Algunos autores han señalado diversos elementos que podrían determinar estas limitaciones en las iniciativas de vuelta al campo, Page (2010) por ejemplo, plantea que uno de los principales obstáculos de este proceso de re-ruralización ha sido la transferencia de las técnicas, conocimientos ecológicos, ritmos y rutinas del trabajo agrícola necesarios para consolidar estos espacios. Ngo y Brklacich (2014) señalan pocas habilidades para la agricultura, financiamiento inaccesible y la existencia de mercados poco desarrollados podrían ser algunas de las razones por las cuales las iniciativas de vuelta de al campo no han funcionado.



Surge la importancia entonces de analizar desde diferentes perspectivas los aspectos que están incidiendo en el proceso productivo, más allá de los elementos técnicos, que nos permitan ampliar la mirada hacia sobre estas tierras rescatadas y contribuir con la comprensión de las distintas dimensiones de la transformación del espacio y de los sujetos sociales involucrados. Para ello, proponemos analizar que pasa con los espacios rescatados y el movimiento campesino después del rescate, y como se va reconfigurando la movilización social, ya no para alcanzar el acceso a la tierra sino para iniciar la producción de alimentos a partir de un modelo de desarrollo agrícola determinado.

Con respecto a esto, tomamos como un marco referencial central la propuesta de Van der Ploeg (2014) quien señala que la trayectoria del desarrollo agrícola, o desarrollo de las fuerzas productivas, es un aspecto crucial para el debate sobre soberanía alimentaria y la necesidad de producción de alimentos. Este autor sostiene que los sistemas agroalimentarios se ubican a lo largo de un gradiente dado principalmente en función a: la *industrialización* que avanza en el control empresarial que centraliza la producción y consumo de alimentos, y la *recampesinización* que comprende un movimiento cualitativo donde la creación de autonomía y el alejamiento de las actividades productivas del mercado van definiendo esta cualificación, y una lucha por la subsistencia ante el control de los mercados y la dependencia de los sistemas agrícolas a estos mercados para mantener su producción (Van der Ploeg 2010).

En este trabajo tomaremos como marco referencial, la propuesta de *recampesinización* para mirar el proceso que ocurre dentro y entre los fundos, más allá de la relación con las políticas públicas agrícolas, dado que el enfoque que ha predominado en el análisis de los espacios rescatados de la latifundio, principalmente ha hecho énfasis en la interacción entre la política agrícola y estos



espacios a escala nacional, abordando muy poco la dinámica interna de estos espacios rescatados y las relaciones entre ellos.

Para complementar este enfoque, incorporamos también dos elementos que consideramos relacionados con la trayectoria de recampesinización: la capacidad de agenciación de los agricultores con tierra, y la construcción de sentido de lugar.

Con respecto a la capacidad de agenciación, este planteamiento nos permite por un lado, comprender a los agricultores como agentes activos de la transformación y el rol de las organizaciones campesinas como actores políticos que construyen coaliciones estratégicas, y por otro lado permite considerar también la dinámica sociopolítica como moduladora de oportunidades y limitaciones, teniendo en cuenta que esta dinámica es multiescalar y que la diversificación de los modos de vida es una estrategia que permite construir un portafolio de capacidades y actividades en un esfuerzo por garantizar la supervivencia (Nygren, y Myatt-Hirvonen 2009). Para Wolford (2003) este es un aspecto clave para la acción social colectiva de movimientos sociales que luchan por el acceso a la tierra, señalando en el caso del movimiento sin tierra de Brasil, que una vez alcanzado el acceso a la tierra, estos actores logran tener mayor disponibilidad de recursos que pueden apoyar las acciones del movimiento en el ámbito jurídico y político, pero que este aspecto es un reto clave para garantizar la continuidad del movimiento, que en ocasiones puede volverse víctima de su propio éxito particularmente cuando se trabaja por el acceso a un bien tangible y concreto como la tierra.

Con respecto a la construcción de sentido de lugar, como concepto se ha incluido en algunos estudios sobre procesos de vuelta al campo. Este enfoque plantea estudiar o abordar los procesos



que moldean la identidad de lugar, el apego y el sentido de comunidad, considerando el contexto social y ambiental que ejerce una influencia importante en estos elementos mencionados, ya que los individuos usan su entorno para situar su identidad, es decir, el contexto ambiental y social tiene una importancia simbólica en la definición de la identidad (Ngo y Brklacich 2014)

En este trabajo abordaremos los fundos rescatados de latifundio del estado Yaracuy impulsados por el movimiento campesino y caracterizaremos las estrategias de los agricultores para la organización de la producción, así como el papel de estas estrategias en la construcción de sentido de territorio en las tierras rescatadas. Para ello fueron seleccionados participativamente con el movimiento campesino las unidades a caracterizar en función a la importancia que tienen para la organización, determinada por los factores de manejo, diversificación, ubicación. En estos espacios entrevistamos a actores clave vinculados a las experiencias productivas y observación participante durante las 20 visitas de campo realizadas a 10 fundos.

Yaracuy un pequeño estado de grandes rescates.

Yaracuy ubicado al centroccidente del país y de los de menor extensión del país con 7.100 km² que representan el 0,77% del territorio nacional (INE, sf), ha sido un territorio referente de la lucha por tierra a nivel nacional desde la década de 1960, luchas que fueron retomadas con la aprobación de la LDTDA (Lavelle, 2014); aquí movimientos campesinos han ocupado las tierras rescatadas principalmente bajo la figura de cooperativas, y han iniciado un proceso de diversificación productiva de estos espacios rescatados (fundos).

Las tierras estaban ocupadas principalmente con caña de azúcar y ganadería en formas bastante precarias, y desde el rescate se han venido transformando en sistemas de producción en



diversificación con el cultivo del maíz principalmente, rubro prioritario para el consumo nacional. De este rubro, se han alcanzado importantes metas de cosecha como en el año 2013, cuando se alcanzaron rendimientos máximos de 4.500 kg ha⁻¹, ubicando al estado como el cuarto productor nacional de este rubro, aportando a los silos del estado más de 80 millones de kilos de maíz blanco, correspondientes a unas 25.000 ha que fueron sembradas con financiamiento público (Pino, 2013)

Tejiendo redes campesinas para producir:

Posterior al rescate, surgen nuevas articulaciones campesinas entre los fundos rescatados y entre estos fundos y comunidades campesinas aledañas. Este proceso configura un nuevo entretejido campesino, centrado el mejoramiento de las condiciones para la producción desde pautas tecnológicas propias que se orientan a la búsqueda de autonomía. Este nuevo entretejido significa entonces un cambio importante en la capacidad de agenciación del movimiento campesino, en el cual podría decirse que la estrategia de la beligerancia política, pasa a un segundo plano, para realizar mayores esfuerzos en las actividades productivas, construcción de alianzas técnico-institucionales y para la comercialización de los alimentos cosechados.

En los testimonios, se reconoce que la conformación de las cooperativas agrícolas a lo interno de cada fundo significó en términos organizativos una acción en los esfuerzos a lo interno de las cooperativas agrícolas, y una disminución de las acciones como movimiento campesino, así la idea: *cada quien está trabajando en su fundo*, expresa una desmovilización de la dimensión política en términos de acceso a la tierra y agenciación a escala nacional, pero a la vez significa una mayor agenciación en lo local y comunitario a partir de este nuevo entretejido de los fundos y cooperativas.



La diversificación de la producción es un objetivo central de estas redes, para ello se han concentrado acciones en: mejorar la capacidad de riego, conservar la agrobiodiversidad y generar autonomía en el manejo de las semillas de rubros claves para la diversificación y, pronosticar el clima para la planificación de la siembra. Como elemento transversal que acompaña este proceso, se están reintroduciendo una serie de prácticas reconocidas localmente como sustentadas en el conocimiento local campesino e innovaciones agroecológicas. Con la retoma de estas prácticas se va dibujando una nueva identidad vinculada a una nueva categoría de lugar, *el campesinado en los fundos rescatados*.

Con respecto a la diversificación, es importante señalar que esta viene ocurriendo por iniciativa de los mismos agricultores. Ya que el crédito público financia solo tres rubros (maíz y leguminosas). En los espacios caracterizados se registraron 28 cultivos en total que abarcan además de maíz (*Zea mays*), leguminosas como quinchoncho (*Cajanus cajan L. Millsp*) caraota y frijol (*Phaseolus vulgaris L*), tubérculos como batata (*Ipomoea batatas*) y yuca (*Manihot esculenta*), hortalizas como auyama (*Cucurbita maxima*) y aji (*Capsicum baccatum*) frutales y otros rubros. Los entrevistados argumentan como principal objetivo de la diversificación, el manejo de los riesgos asociados los cambios en las precipitaciones y la dependencia de los ingresos a un solo cultivo. Esto diversifica la oferta local de alimentos y ha permitido establecer vínculos con la comunidad para el intercambio solidario y comercialización de alimentos sin intermediarios. Esta diversificación de ingresos se traza como una ruta para alcanzar la autogestión de estas unidades productivas.

Recampesinización en las tierras rescatadas



La ocupación de las tierras rescatadas más que un mero proceso productivo, está significando además un proceso generador de una nueva identidad a partir de la cual los procesos productivos se van delineando y dando paso a la diversificación de la producción, creando así una serie de nichos o nuevos espacios para la producción, distribución y consumo que tributan a escala local a través de las redes locales, y nacional a través de la distribución orientada al mercado nacional por parte de las instituciones. Esta doble agenciación hacia lo local y hacia lo nacional, podría considerarse como una estrategia de supervivencia del movimiento campesino, que les permite continuar con el vínculo institucional que contribuye con el reconocimiento de estos espacios a escala nacional, pero que también contribuye con el mejoramiento de condiciones locales para el acceso a los alimentos, transformando estos espacios rescatados, anteriormente monocultivos de caña o ganadería, en espacios que proveen alimentos a las comunidades aledañas, a partir de lo cual se logra un reconocimiento de las tierras rescatadas en el entorno inmediato.

Estas acciones sugieren que está ocurriendo un proceso de recampesinización que avanza hacia la generación de autonomía en aspectos claves para la productividad de las tierras rescatadas de latifundio, desde el cual se reconocen también las limitaciones del modelo convencional de producción de alimentos, que con un alto requerimiento de insumos y maquinarias, y una baja diversidad, se reconoce como un modelo con muchas dificultades para que pueda ser sostenido en el tiempo.

Por ello, aquellos espacios que han implementado esta estrategia de recampesinización, se reconocen hoy como espacios exitosos, razón por la cual las estrategias campesinas que han logrado dibujar este modelo alternativo deben ser consideradas en el diseño de las políticas públicas relacionadas con los fundos rescatados de latifundio.



Para finalizar podemos decir que las tierras rescatadas, surgen como categoría territorial, a partir de la implementación de la ley de tierras por parte del movimiento campesino y de las instituciones del estado que participaron en este proceso, y dada su importancia en el ámbito agroalimentario, es necesario profundizar el estudio de estos espacios para dar luces en la definición de políticas públicas orientadas a reimpulsar la producción agrícola en aquellos espacios que no han sido exitosos.

Principales referencias bibliográficas:

Delahaye, Olivier. 2012. Los derechos de propiedad sobre la tierra agrícola en Venezuela: problemática y planteamientos recientes. *Revista Alcance (Edición Especial)*

Mision ¡Vuelvan Caras!. *La Revista Venezolana de Educación (Educere)*, Meridad, v. 9, n. 28, p. 41-43, marzo 2005. Disponible en <http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-49102005000100010&lng=es&nrm=iso>. accedido en 24 feb. 2016.

Gregory, Wilpert. 2014. Chávez's Legacy of Land Reform for Venezuela. Tenth Anniversary Conference of the Foundation for Agrarian Studies, "On Agrarian Issues," Kochi, January 9–12, 2014

Jaimes, Edgar; Mendoza, José G., Ramos, Yalitz Y Pineda, Neida. 2002. Propiedad de la tierra y la seguridad agroalimentaria de Venezuela. *Interciencia* 27:12:656-663.



Lavelle, Daniel. 2014. A Twenty-first Century Socialist Agriculture? Land Reform, Food Sovereignty and Peasant–State Dynamics in Venezuela. *Jrnl. of Soc. of Agr. & Food*, Vol. 21, No. 1, pp. 133–154

Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. 2001. República Bolivariana de Venezuela.

Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. 2001. República Bolivariana de Venezuela. Modificación del año 2010.

Ligia Nathalie García Lobo y Ángel Alexander Higuerey Gómez Análisis Comparativo de las Cooperativas y Sociedades Anónimas del Sector Agrícola desde la perspectiva de la Rentabilidad según la Legislación Venezolana *Revista Venezolana de Economía Social / Año 5, N° 10 (2005)* Pp. 38-63

Macías, M., León, M., Soto, E., Avilán, Luis y Gutiérrez, M. 2009. Aproximación al comportamiento climático en la zona citrícola de Yumare, estado Yaracuy, Venezuela. 356-363p. *Revista UDO Agrícola* 9 (2).

Mujica Martínez, Carmen Teresa. 2012. Rol protagónico de la mujer rural en la promoción de la agroecología como perspectiva sustentable y sus factores limitantes en el Núcleo de Desarrollo Endógeno Aracal, estado Yaracuy de la República Bolivariana de Venezuela. Encuentro territorios en movimiento hacia el crecimiento sustentable con inclusión social realizado en Quito Ecuador 5 -7 junio 2012.

Nygren, A. y Myatt-Hirvonen, O. 2009. ‘Life here is just scraping by’: livelihood strategies and social networks among peasant households in Honduras. *The Journal of Peasant Studies* 36:4 827–



854

Ngo, M. y Brklacich, M. 2014. New farmers' efforts to create a sense of place in rural communities: insights from southern Ontario, Canada.

Page, T. 2010. Can the State Create Campesinos?: A Comparative Analysis of Venezuelan and Cuban 'Repeasantization' Programmes. *Journal of Agrarian Change*. 10(2), 251-272.

Pino, Angel. 2013. Rnv Yaracuy: Plan de cosecha "Hugo Chávez" arrima 80 mil toneladas de maíz
Consultado en: <http://www.rnv.gob.ve/yaracuy-plan-de-cosecha-hugo-chavez-arrima-80-mil-toneladas-de-maiz/>

Rodríguez Rojas, José Enrique. 2011 La ley de tierras y los cambios estructurales en la agricultura moderna venezolana. *Revista Derecho y Reforma Agraria Ambiente y Sociedad* 37: 95-124

Rojas López, José. 2014. *Revista Derecho y Reforma Agraria, Ambiente y Sociedad* 40: 93-119

Van der Ploeg Jan. 2010, Nuevos campesinos, campesinos e imperios alimentarios. Editorial Icaria. España. 430pp.

Vielma, M. y Marín, C. 2008. Sistemas de Producción de Maíz Cooperativistas en el Estado Yaracuy, Venezuela *SCIENTIA UNELLEZEA*. 3:1: 9 – 23, Venezuela.



17.LA ZONA DE RESERVA CAMPESINA (ZRC) DE HECHO EN EL SUMAPAZ; TERRITORIALIDAD, RESISTENCIA Y LUCHA

Isabela Castellanos
Grupo de Investigación “Tierra Digna”
dannaigomez63@unisalle.edu.co

“Para sembrar la paz hay que aflojar la tierra”
Darío Fajardo

1. Introducción

En esta investigación se aborda las Zonas de reserva campesina (ZRC) como territorios autónomos, soberanos y dignos, que surgen a partir de las movilizaciones agrarias en donde para su comprensión, se retoman elementos como: las causas estructurales del conflicto y papel del campesinado en la lucha por la tierra desde la experiencia organizativa del Sumapaz y nuevas construcciones de identidad a través de los territorios, comprendiendo que históricamente dicho territorio ha sido un escenario importante de luchas políticas y agrarias. De esta forma es preciso comprender como este documento busca visibilizar el proceso político de constitución de la ZRC que ha venido desarrollando Sintrapaz⁷¹ y la resistencia agraria como una forma de subvertir las lógicas del modelo de acumulación capitalista.

⁷¹ Sindicato de trabajadores agrarios del Sumapaz.



1.2 Abstract

This paper addresses the peasant reserve zones (CRZ) as territories peacebuilding, in which the structural causes of conflict and the role of the peasantry in the struggle for land are taken up, from the organizational experience of Sumapaz, within order to visualize the political process of constitution of the CRZ has been overtaken by SINTRAPAZ. It is based on the theory criticism as epistemological basis and qualitative research is broken down in order to understand the constructed social context and validated by the same subjects, tools as were used: the documentary record, participant observation and semi-structured interviews to collect information

2. Problema

La tierra y las construcciones sociales y culturales del territorio ha sido uno de los factores fundantes del conflicto armado, social y político por el cual atraviesa el país, es por ello que la propuesta de investigación emerge no solamente con el fin de develar los conflictos por la tierra de forma histórica, sino, en el marco del reconocimiento de las luchas, resistencias y alternativas de los procesos organizativos del Sumapaz, a partir de la constitución de la ZRC como una iniciativa agraria, popular y reivindicativa.

3. Objetivo general

- Identificar los elementos que han permitido la gestación de -ZRC-del Sumapaz, en la lucha por la autogobernabilidad territorial desde las comprensiones agraristas del Sumapaz.

3.1 Objetivos específicos

- Identificar los actores políticos incidentes en el territorio
- Reconocer las acciones populares de la lucha por la la tierra
- Visibilizar el proceso de la -ZRC- de hecho, en el Sumapaz.



4. Papel del Trabajo Social y las ciencias sociales en los territorios-procesos organizativos

Las ciencias sociales estudian los fenómenos de la realidad en contextos específicos, y, son insumo importante para la comprensión de la relación sujeto-entorno, en este sentido y arguyendo el criterio del reconocimiento de los sujetos campesinos, es importante develar las relaciones de poder y las formas organizativas desde las cuales se posicionan políticamente el campesinado en el Sumapaz.

El Trabajo Social es una disciplina que lucha por la justicia social, en ese sentido es preciso acotar que el aporte de la profesión a la investigación se fundamenta desde la intervención en lo comunitario retomando el enfoque de derechos como criterio esencial para la dignificación del campesinado y su proceso histórico, el acceso a la tierra, el derecho a la organización y participación. Lo anterior en términos de materializar la democracia como compromiso ético político en la profesión.

5. Referencias teóricas desde el marco categorial.

“Todo viene de la tierra, y todo vuelve a la tierra; luego, sólo la tierra merece que se luche heroica y desesperadamente por ella, hasta vencer o morir en su demanda”

Erasmó Valencia⁷²

Este proceso investigativo retoma el enfoque crítico con la finalidad de dar cuenta de la lucha de clases en el sentido que reconoce las desigualdades sociales y el antagonismo desde la

⁷² Líder agrario del Sumapaz, que ayuda a consolidar de la mano de Juan de la Cruz Varela el movimiento de resistencia civil, que sería referente de lucha social por la tierra.



confrontación social, política y económica, así mismo aborda categorías claves como: la organización social, los actores políticos y la lucha social.

En primera instancia la organización social es la categoría macro que será clave para entender las formas y concepciones sobre el territorio y el establecimiento de luchas comunes, así mismo la organización refiere a “la acción mediante la cual un grupo define sus estructuras y al mismo tiempo la actividad estructurada. Cuando dentro de un grupo empiezan a diferenciarse y jerarquizarse propósitos, tareas, funciones, relaciones, estamos ante el nacimiento de una organización social” (Torres, 2002).

La “Organización designa al mismo tiempo la acción mediante la cual un grupo definen sus estructuras y al mismo tiempo la actividad estructurada. Cuando dentro de un grupo en su proceso de «organizarse... Empiezan a diferenciarse y jerarquizarse propósitos, tareas, funciones, relaciones, estamos ante el nacimiento de una organización social” (Torres, 2002).

Ahora bien, la organización social se conforma por un grupo de individuos que se identifican con determinados intereses y deciden actuar en común con el propósito de defenderlos y resolver de manera colectiva problemas compartidos y de esta manera las organizaciones sociales son instrumentos de la acción colectiva, puesto que dentro de estas cabe la posibilidad de negociación con diversos actores de la sociedad y el Estado.

El concepto de “Acción Colectiva” emerge con el fin de comprender al conjunto de personas que desatan luchas por el poder, control o destino de los recursos naturales, que buscan incidir o transformar elementos establecidos que los dominan. Estas acciones proporcionan una identidad, nuevas perspectivas de sociedad, creencias, valores y autonomía. (Torres, 2002). Además, Mauricio Archila plantea “Que las acciones sociales colectivas están orientadas a enfrentar



injusticias, desigualdades o exclusiones, es decir que denotan conflicto y que tienden a ser prepositivas; todo ello en contextos históricos determinados” (Torres, 2002)

Desde la sociología funcionalista el término de acción colectiva no busca la transformación del sistema, sino más bien adaptarse a él, por medio de los mecanismos de integración social. De esta manera “Se identificó la acción colectiva como un tipo de conducta social por fuera de los valores, normas e instituciones predominantes” Esta perspectiva muestra el concepto desde una conducta anómala de sociedad ya que no se relaciona directamente con las normas, valores e instituciones que los dominan. Además, estas conductas catalogadas como peligrosas cuentan con capacidad de alterar el orden social y por ello es necesario el control de esta conducta a través de medios de represión y alienación. (Torres, 2002).

Por otro lado, los interaccionistas se oponen a la perspectiva funcionalista mencionando que la acción social no es una conducta desviada que busque alterar el orden social, sino que por el contrario busca integrarse a él; es una conducta normal dentro de las dinámicas de una sociedad. Por otra parte, Brunner plantea que la acción colectiva al no estar ligada ni determinada por los valores, normas e instituciones dominantes convergerán en nuevas formas y relaciones dándole paso a una sociedad que favorezca los cambios culturales y sociales.

El concepto y la perspectiva de movimiento social están trazados por estos fundamentos ideológicos y filosóficos donde la objetividad, el entendimiento y estudio de los hechos históricos, como el determinismo, inciden en el desarrollo y enfoque de este concepto. De esta manera la acción social quedo concebida desde el reduccionismo, teoría que busca la reducción a problemas de conocimiento.



La imagen clásica de movimiento social se construye a partir de una mirada empírica y superficial, puesto que permite ver solo la inmediatez desconociendo las dinámicas internas y propias de las organizaciones sociales. (Torres, 2002). Seguidamente es crucial comprender el criterio de organización comunal como eje fundamental para algunos pueblos, es decir lo comunal entendido como los aspectos ancestrales, saberes populares y el pensamiento individual articulado a las luchas sociales. (Escobar, 2016)

Para comprender mejor la acción colectiva, los movimientos sociales, las organizaciones sociales e identificar que estos conceptos pueden variar o configurarse dependiendo de las condiciones de su contexto. En primer lugar mencionaremos brevemente los aportes de la tradición norteamericana y europea o el paradigma de la identidad que contribuye para la construcción del concepto movimientos sociales y organización social, recalcando su sentido intersubjetivo. (Torres, 2002)

Sumado a lo anterior, los actores políticos son un elemento fundamental, del cual existe una definición concreta que confrontamos y frente a la cual optamos por construirla, En este sentido retomamos el actor como; “Condensadores de historicidad y agentes de concreción de futuros posibles” (Zemelman y Valencia, 1990) con lo anterior es preciso resaltar que actor individual es un agente que se constituye de manera histórica y que busca generar una transformación social desde la utopía en términos de construir nuevas formas de relación posibles. Ahora bien, sumado a lo anterior, la categoría de político puede entenderse en el marco de la voluntad colectiva, la cual su vez incide en la toma de conciencia activa en el marco de la necesidad histórica (retomando a Gramsci) es decir desde el reconocimiento propio de los sujetos, entendiendo su relación con el mundo y el sistema hegemónico, asumiendo una postura desde la intencionalidad y racionalidad, en la cual se identifican dos elementos; desde la subversión y crítica al sistema y desde la



apropiación del legado cultural, social y económico del capitalismo. Nuestra intervención se centra en los agentes transformadores que se enmarcan en el primer elemento, el cual configura el criterio de análisis entorno a “la liberación, que supone el potencial subversivo y emancipatorio de aquellos que se ubican en la posición de la subalternidad (o de la exclusión)”. (Retamozo, 2010).

La definición de territorio se retoma desde la construcción realizada en la cartilla de ZRC, la cual plantea el territorio como un espacio de conciencia de derechos con identidad campesina, donde los campesinos viven trabajan y cultivan. Conviven con inter relación de dimensiones sociales, culturales, económicas y políticos de las comunidades. (ANZORC, 2011)

Por último, la categoría de lucha es construida desde el reconocimiento de los sujetos y su actuación en los procesos; en donde es preciso entender las exigencias y reivindicaciones en torno a aspectos claves como: Acceso a la tierra, dignidad, soberanía, reconocimiento de las prácticas ancestrales, alternativas que subviertan el modelo económico imperante, entre otras. También se visibiliza la emergencia del movimiento campesino como elemento sintetizador desde la construcción histórica la identidad y la cultura campesina.

5. Metodología

El método usado es la investigación cualitativa y el tipo de investigación implementar es la investigación acción, considerándola pertinente debido que logra recoger las percepciones de la comunidad, se ha venido trabajando con la organización de base Sintrapaz, y, las técnicas de recolección de la información utilizadas son: la revisión documental, la observación participante y no participante, y, la entrevista semiestructurada considerando a la vez fundamental hacer un



reconocimiento del territorio como primera instancia con la finalidad de reconocer el significado que este tiene para la organización y la comunidad en general.

Para el análisis de la información se retomarán las siguientes categorías las cuales se pueden observar en la figura uno.

Matriz de categorías de análisis (figura uno)

MATRIZ CATEGORIAL			
Objetivo general:			
Identificar los elementos de la organización social Sintrapaz que han permitido la gestación de la Zonas de Reserva Campesina del Sumapaz, en la lucha por la auto gobernabilidad de la tierra.			
Objetivo Específicos	Categoría	Participantes	Técnicas de recolección de información.
1. Reconocer las acciones populares de lucha por la tierra	Configuración del conflicto en el territorio del Sumapaz.	Líderes y miembros de la comunidad pertenecientes a la organización Sintrapaz.	Observación participante. Entrevistas semiestructuradas.
2. Identificar los actores	Proceso organizativo de Sintrapaz		Taller de validación.



políticos involucrados en la organización.		Comunidad del territorio de San Juan de Sumapaz.	
3. Visibilizar las motivaciones e intereses de los actores.	Proceso organizativo de Sintrapaz	Equipo de investigadores.	
4. Rescatar la percepción de la comunidad sobre el sindicato.	Acciones colectivas por la auto gobernabilidad de la ZRC del Sumapaz.		

6. Resultados de la investigación

La investigación se realizó en dos momentos, el primero fue la revisión documental y el segundo momento fue la investigación acción la cual como se mencionó con anterioridad se llevó a cabo con la organización Sintrapaz y se realizó con observación participante, entrevistas entre otras técnicas. Implementando documentos brindados por la organización. Estos documentos se han contrastado con los elementos brindados por parte de la organización en el Sumapaz lo cual nos ha



dado una visión amplia a partir de la construcción de saberes tal y como lo plante Paulo Freire; el cual busca por medio del dialogo lograr un acercamiento entre lo académico y la vida cotidiana por medio de las experiencias, con la finalidad de articular experiencias transformadoras a partir no solo de las similitudes si no a su vez las diferencias, para lograr no solo un proceso reflexivo si no una movilización de acciones para la transformación (Freire,1994).

Teniendo en cuenta que una de las principales causas estructurales del conflicto es la lucha por la tierra, se considera necesario reconocer como los campesinos se han organizado en defensa del territorio, creando estrategias de lucha y resistencia para afrontar los efectos del modelo de acumulación capitalista por despojo. La tendencia histórica del proceso de acumulación constituye un factor esencial para caracterizar relaciones de causalidad y persistencia del conflicto social y armado, (Estrada, 2015) lo que referencia de forma histórica la pésima distribución de la tierra, entendiendo que los grandes monopolios y poderes productivos han acaparado la tierra y han instaurado en ellas formas de desarrollo asociadas al capitalismo y al modelo de desarrollo neoliberal.

Actualmente el 42,3 % de las tierras destinadas para producción agropecuaria, en un 80% es decir el 33,8 millones de hectáreas (MMha) está dedicado para la ganadería extensiva. Mientras que el 20% de la tierra está destinada en mayor proporción (7,1 MMha) a cultivos de café, palma, caña de azúcar en su mayoría para exportación y solamente 1,4 millones es dedicado para agricultura de consumo interno. (Red nacional de forjadores y forjadoras de paz , 2016) Además es vital mencionar que 0,4 % de la población posee el 46% de la tierra, lo cual nos constituye como uno de los países más desiguales del mundo después de Haití y Honduras. (Justo, 2016) Con un índice gini de 0,55 según la CEPAL; estimando la riqueza de la población más acaudalada con base en los datos de pagos de impuestos. (El Tiempo, 2016).

Lo anterior permite visibilizar las propuestas de las organizaciones campesinas con relación a la soberanía del territorio como vía política de las reivindicaciones de lucha por la tierra. Este



argumentó da sustento de cómo la organización Sintrapaz a llevado a cabo un proceso desarrollando acciones de lucha y resistencia que van encaminadas a lograr una soberanía territorial.

Resaltando como la identidad campesina es un elemento articulador en la lucha por la soberanía del territorio y hace parte de ese entramado mayor que son los procesos campesinos, constituidos desde la resistencia. De esta manera vislumbrar la importancia de los referentes ideológicos en la lucha por la tierra y la constitución autónoma del territorio, donde históricamente se ha mantenido la resistencia como forma consecuente de continuar el legado de los antecesores y precursores del movimiento agrario en el Sumapaz. Por otra parte, la figura de ZRC permite entrever la forma de autoridad y autonomía territorial como construcción política, y conforma un paso inicial para gestar una reforma agraria que salde la deuda histórica del Estado con las comunidades agrarias.

El proceso de configuración de la ZRC campesina del Sumapaz es un interés que nace por parte de los habitantes de la zona, los cuales buscan un territorio soberano no solo para ellos, si no también para las generaciones que vienen; el proceso como se ha mencionado a lo largo de todo el documento ha sido liderado por la organización Sintrapaz. Es claro que el poder ha presentado una serie de barreras que no han permitido que esta se instaure de manera legal por lo cual es una ZRC constituida con acciones de hecho.

En el proceso se puede observar que las acciones no solo han aportado a el proceso de configuración de la ZRC si no que además, aporta a el desarrollo de las relaciones sociales en la comunidad.

Las acciones sociales colectivas tal y como lo plantea Torres “están orientadas a enfrentar injusticias, desigualdades o exclusiones, es decir que denotan conflicto y que tienden a ser prepositivas; todo ello en contextos históricos determinados” (Torres, 2002). Lo cual para el caso



específico del Sumapaz es un elemento que se ha venido desarrollando con los líderes comunitarios gremiales, barriales y locales de Sintrapaz.

Sintrapaz ha sido un sindicato protagonista en el territorio del Sumpaz debido a las acciones de resistencia que han desarrollado con la bandera de defender el mismo; Darío cuenta como ha sido este proceso y como las acciones de resistencia se han heredado de generación en generación.

“...También somos gente que hemos mantenido la rebeldía ante la injusticia, y de eso también nos sentimos orgullosos, y es algo que también se ha heredado de nuestros viejos, de nuestros abuelos, de nuestros padres. Entonces, no comemos entero, ósea, (silencio) somos desconfiados también una parte porque dicen que los de clima frío somos como así, como desconfiados pero otra parte es por lo que nos ha tocado sufrir, todo lo que nos ha tocado vivir... Entonces por todas esas cosas, pues la verdad es que uno se siente orgulloso de vivir en este territorio”. (Dario, 2016)

El contexto en el Sumapaz ha permitido desarrollar una serie de dinámicas donde, teniendo en cuenta la lucha constante por la defensa del territorio autogobernabilidad y soberanía, el sindicato ha venido teniendo banderas de lucha tales como, la contraposición frente al ecoturismo ambiental, donde a pesar que en el año 1974 parques lo declara como parque natural, lo que implicaría que la comunidad Sumapaceña tuviese que retirarse del territorio a abandonando el páramo y permitiendo el deterioro del mismo, el sindicato le hizo frente a este proceso. Lo que permite ratificar los planteamientos de Torres, donde la acción colectiva se deriva del desequilibrio en el sistema social donde se encuentran diversas formas de acción social que no están ligadas a la institucionalidad basadas en las creencias que definen su acción social (Torres, 2002). Lo que ha logrado el sindicato no solo ha sido por acciones de resistencia sino también como ellos lo manifiestan por la autorregulación.



“Por ejemplo, aquí en nuestro territorio y que sabemos que hay estudios de eso, estudios serios de los páramos de los parques naturales intervenidos este es el mejor conservado y eso no es gratis, es porque nosotros como organización hemos regulado nuestras conductas.” (Dario, 2016)

Las acciones durante el proceso en histórico de defensa del territorio han permitido que el sindicato logra un reconocimiento frente a la comunidad no solo como reguladores sino también a su vez como garantes de los derechos de los habitantes del territorio, debido al interés del estado en el mismo; vale la pena aclarar que este interés no se da con el fin de beneficiar a los habitantes.

“Nuestro territorio a pesar de ser tierras no tan fértiles, porque la verdad es que no son tan fértiles, tiene mucha riqueza natural especialmente el agua seguramente que otros y por lo tanto digamos que la actualidad en el mundo si ya las guerras se están empezando a dar no tanto por el petróleo si no por el agua entonces a nosotros nos tienen los ojos encima por eso, eso explica también por qué tan militarización para nosotros es claro”. (hugo, 2016)

Lo que implica tener presente las acciones desarrolladas por parte del sindicato, se generan teniendo en cuenta como el estado implementa una serie de medidas en primer lugar para tomarse el territorio, teniendo en cuenta sus riquezas y fuentes hídricas y, en segundo lugar, el proceso de militarización ha permitido una vulneración de derechos, donde el sindicato en defensa de la comunidad ha decidido tomar acciones para defender el territorio no solo por medio del apoyo a las movilizaciones sociales como un mecanismo de defensa y participación comunitaria en pro de la defensa de los derechos humanos.

“La movilización social es prioritaria y digamos que ojala este pueblo pues como que tome consciencia de la necesidad de movilizarnos, pues porque es un pueblo como muy indolente, como muy conformista, ósea que tampoco como tiene memoria, porque los gobernantes aquí nos manipulan, compran consciencias...” (Beto 2016).



Las acciones de resistencia que buscan beneficiar a la comunidad se dan en defensa contra la violación de los derechos humanos y la protección de los recursos naturales, con los que cuenta el páramo de Sumapaz. Donde acciones pequeñas y transformadoras en contra de las acciones hegemónicas del modelo han sido la implementación de los cultivos orgánicos y las semillas nativas; ya que las grandes elites quieren intervenir para condicionar al trabajador campesino a utilizar por medio de la implementación de las semillas transgénicas.

En la investigación se realizaron dos tipos de entrevistas con la finalidad de cumplir los objetivos, dónde una de estas era para los integrantes del sindicato y la comunidad con la finalidad de identificar como son las acciones de visibilización del sindicato, donde si bien es claro el respeto que tiene el sindicato, debido a que lo consideran como un ente regulador fundamental, es claro que algunos habitantes mencionan que algunas veces los procesos realizados en la comunidad que la benefician, no logran llegar a todos los habitantes del páramo lo que no permite ver que faltan canales de comunicación. Un caso claro que se logra identificar en las entrevistas son las acciones de visibilización frente a la construcción del plan de desarrollo para que aporte a la configuración de la ZRC.

Por lo que los retos que tiene el sindicato según nuestra percepción es mejorar la manera en que comunican la información a la comunidad buscar otro método que sea más efectivo con el fin que no se tergiverse con la comunidad. El sindicato debe incentivar el cuidado de los recursos naturales y así mismo extender la invitación a la juventud a que se empodere de las riquezas naturales que tiene tanto el territorio como nuestro país Colombia en donde sepan aprovechar los mismos pues este es un país rico en recursos y diversidades naturales lo cual va a permitir que exista más adelante una equidad que permita generar soberanía, desarrollo y progreso para todos.



Visibilizar los principales logros o acciones incidentes del mismo. Entre los logros encontrados se pudo ver que Sintrapaz es la máxima organización siendo así el ente que controla, regula, y sanciona en la ZRC del Sumpaz que se encuentra constituida de hecho; según lo analizado cuando existe algún conflicto o problema de medicación la organización es la encargada de ser la mediadora y de utilizar la pedagogías necesarias para solucionar los conflictos según las normas de convivencia.

“Sanción se les comete las sanciones, pero pues la idea no es estar peleando con la comunidad si no pues realizar el arreglar el error que se comete la comunidad y es lo que ellos hacen y pues tratan en solucionar los problemas de la comunidad.” (Santiago, 2016).

Este fenómeno se ha presentado debido al abandono por parte del estado pues no se encuentra cerca en el territorio la alcaldía local y correjiduría lo cual fue generando la necesidad de organizarse para controlar, regular y sancionar la convivencia con el fin de generar un ambiente sano para el buen desarrollo de los habitantes de la ZRC. Siendo.

“Los asuntos les dan como una solución a cada problema, delegan los personajes para que hagan ese ese arreglo digamos con alguien de acá de la localidad que este cometiendo un error o que lo haya cometido pues para cómo llamarle una atención es como algo que siempre se ha venido haciendo siempre hay sanciones pero es o sea es el sindicato es como si fuera la policía.” (Santiago, 2016)

Así el sindicato Sintrapaz un referente que ha abanderado a la comunidad hacia la lucha y consecución de sus ideales de progreso: Económicos, culturales, políticos y sociales, pero también acompañando y asesorando en la toma de decisiones que beneficien o afecten a la comunidad; por medio del empoderamiento de la comunidad, incentivando a la participación y el apoyo de movilizaciones sociales

“Digamos que es la trayectoria del sindicato, ósea ha sido la organización no que ha tenido más cobertura, porque la organización que tiene más cobertura es la organización comunal, tiene juntas comunales en todas



las veredas, pero la organización más reconocida del territorio es el sindicato agrario, ... tanto para las instituciones como para el campesinado, entonces las instituciones acuden pues con toda certeza al sindicato para planear cosas, para pedir permiso para ejecutar un proyecto... bueno... y el campesinado también para la solución de sus problemas, para las quejas, para las dolencias, para todo, entonces acude generalmente al sindicato.” (Dario, 2016)

Podemos analizar que es necesario concientizar y ampliar la formación de derechos humanos y de tal manera generar procesos de empoderamiento y participación ciudadana en pro de la defensa de los derechos humanos para que estas violaciones a los derechos no se queden impunes. Sin dejar de un lado la defensa a las riquezas naturales que posee el páramo de Sumapaz ya que este es catalogado como el páramo más grande del mundo y por lo mismo posee una gran riqueza hídrica la cual ha sido motivo de disputa y conflicto durante mucho tiempo; un ejemplo de esto fue el querer implementar una hidroeléctrica y el ecoturismo pero gracias a la intervención oportuna del sindicato y la comunidad se pudo frenar a tiempo este proyecto que no traía beneficios sino daños para este gran paramo.

Donde se manifiesta como la vulneración de derechos comienza por la educación de sus jóvenes y la falta de garantías existentes.

“El hecho de que no nos construyan una universidad aquí, una sede de la universidad, es una forma también de propiciar el desarraigo, los jóvenes terminan el bachillerato y se tienen que ir a la ciudad y después de estar en la ciudad muy pocos son los que regresan, los otros se quedan allá teniendo una vida en la ciudad”. (hugo, 2016)

Crucial comprender el criterio de organización comunal como eje fundamental para algunos pueblos, es decir lo comunal entendido como los aspectos ancestrales, saberes populares y el pensamiento individual articulado a las luchas sociales. (Escobar, 2016). Según el análisis de las fuentes en el proceso de triangulación nos podemos dar cuenta que es el interés individual de



sentido de pertenencia del territorio el que ha permitido desarrollar acciones en colectivo en el caso del sindicato, fortaleciendo a su vez los procesos comunitarios; dando la pelea que no termina por la defensa de los derechos no solo de los habitantes del territorio, sino también del territorio y sus requisas.

Es este reconocimiento el que ha permitido que la comunidad apoye y respeta a la organización generando así confianza para la implementación y construcción del plan de desarrollo, teniendo en cuenta que se genera una sub organización encargada de la producción sana y sin químicos a pequeña escala, es esta misma ASOSUMPAZ la encargada de liderar el proceso de construcción del plan desarrollo. Con la finalidad de cumplir todos los requisitos exigidos el INCODER.

Donde los habitantes del Sumapaz, realizaron un solicitud oficial de una ZRC para el año del 2011, allí se incluyeron 16 de las 28 veredas, estas veredas son las del Corregimiento de San Juan, en la cuenca del rio Sumapaz y cuenta con 14 veredas, dos centros poblados y cuatro asentamientos menores y el corregimiento de Nazareth de sus 9 veredas, tan solo dos de estas formaran parte de la Zona, aportando estas dos veredas 3566.11 Ha. a la Reserva Campesina estas serán las veredas de Ánimas y Sopas, la propuesta abarca 25318 hectáreas; lo cual representa aproximadamente el 15.8% del total de la superficie del Distrito Capital y el 21% de la Bogotá rural. (INCODER, ASOSUMAPAZ, SDDE, & FDLS, 2014)

Lo cual es un respuesta clara en torno a la lucha por la tierra en Colombia y América Latina, la lucha a sido larga y aun no termina, lo mencionan los habitantes y lideres sindicales; cada día tienen nuevas batallas como las que enfrenta con las multinacionales y el interés de la construcción de la



hidroeléctrica y los intentos de desalojar la zona con la finalidad de dar entrada al ecoturismo donde manifiestan que significado tiene el territorio y las construcción que se realizan a partir del mismo.

“Un territorio que fue como la semilla de la lucha por la toma de la tierra a nivel nacional, pues ósea se inició la lucha por la toma de la tierra aquí, y eso irradia, digamos a otras regiones del país, seguidamente Viota, o pues más o menos en conjunto Viota y Sumapaz, y luego se inició en el Tolima, en Antioquia, en todas partes..”

una lucha que no termina en Colombia y es que ver como el derecho a la tierra el territorio y a la autogobernabilidad debe ser colectivo.

Es claro que en Colombia este es un tema detonante en la actualidad y lo ha sido siempre, el problema es cuando olvidamos que no es solo una lucha de los campesinos que cultivan y habitan el territorio, si no que es una responsabilidad y compromiso de todos.

“el campesinado ha buscado diferentes formas de preservación, una de ellas ha sido la de constituir una ZRC, eso indica que esa ley, que se la gana el movimiento agrario en el país, y particularmente el campesinado, nos proteja del embate que se propone en un Estado neoliberal un Estado burgués, que sería el desocupar todo un territorio que nos obligaron a ocupar hace 150 años y por supuesto dejarlo para los grandes negocios” (fundación parcela y cultural campesina, 2016)

bibliografía

Bravo, A. M. (2014). *Fragments de la historia del conflicto armado*. Bogotá.

Dario. (2016, 04 29). (I. R. Isabela Gomez, Interviewer)

Efiagricola. (2013, FEBRERO). LA EFICIENCIA ECONOMICA DE LOS GRANDES, MEDIANOS Y PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRICOLAS COLOMBIANOS. LA EFICIENCIA ECONOMICA DE LOS GRANDES, MEDIANOS Y PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRICOLAS COLOMBIANOS. Bogotá, Colombia, Colombia.



El Tiempo. (2016, Marzo 28). La desigualdad en Colombia es mayor de lo que se piensa. *El Tiempo*.

Escobar, A. (2016). Desde abajo, por la izquierda y con la tierra. *El Pais*.

Estada, J. (2015). *Acumulacion capitalista, dominacion de clase y rebelion armada*. Bogota: Comision Historica del Conflicto y sus Victimas.

Estrada, J. (n.d.). *Las reformas estructurales y la construcción del orden neoliberal en Colombia*.

fundacion parcela y cultural campesina. (2016). *el fogon* . Bogota : Bogota Humana.

Gobierno, S. D. (2014, Octubre 14). *Mi localidad*. Retrieved from Mi localidad:
<http://www.sumapaz.gov.co/index.php/mi-localidad>

hugo. (2016, 04 29). (I. R. Isabela Gomez, Interviewer)

INCODER. (2013). *Pensar la tierra*. Colombia.

INCODER, ASOSUMAPAZ, SDDE, & FDLS. (2014). *PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ZONA DE RESERVA CAMPESINA DEL SUMAPAZ*. Bogotá D.C: Bogotá Humana.

Justo, M. (2016, Marzo 9). *BBC*. Retrieved from
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160308_america_latina_economia_desigualdad_ab

Leongómez, E. P. (2015). *Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia*. Bogota D.C: Comision Historica del conflicto y sus victimas.

Molano, A. (2013, Julio). *Pensar la tierra*.

Molano, A. (2015). Fragmentos del conflicto. *Informe de la comisión histórica del conflicto y sus victimas* .

Red nacional de forjadores y forjadoras de paz . (2016, Abril 10). *Youtube*. Retrieved from
<https://www.youtube.com/watch?v=PDZRVaqA0TU>



Santiago. (2016, 04 29). (I. R. Isabela Gomez, Interviewer)

Secretaría distrital de cultura, recreación y deporte y la fundación parcela cultural campesina.

(2016). Un sindicato para la paz. *El fogón revista cultural sumapaceña*, 27-28.

Torres, A. (2002). Movimientos Sociales, Organizaciones Populares y Constitucion de Sujetos Colectivos. In A. Torres, *Movimientos Sociales, Organizaciones Populares y Constitucion de Sujetos Colectivos* (pp. 24-25). Bogota D.C: Ediciones Hispanoamericanas Ltda.

Torres, A. (2002). *MOVIMIENTOS SOCIALES, ORGANIZACIONES POPULARES Y CONSTITUCION DE SUJETOS COLECTIVOS*. Bogota D.C, Bogota D.C, Colombia: Ediciones Hispanoamericas Ltda.



18. ENTRE LAS VÍAS DE HECHO Y LAS DE DERECHO: ORDENAMIENTO TERRITORIAL CAMPESINO COMO PROPUESTA DE REFORMA AGRARIA

Valentina Montealegre Melo⁷³
Universidade Federal de Uberlândia
valentina08@gmail.com

João Cleps Jr⁷⁴
Universidade Federal de Uberlândia
jcleps@ufu.br

PROBLEMA

Los conflictos entre las diferentes formas de ordenamiento territorial rural son las consecuencias espaciales más relevantes de la reestructuración productiva del capital en Colombia actualmente. Esta problemática está asociada a una estructura de la tenencia de la tierra concentrada y desigual, a la existencia de un conflicto social y armado como expresión de una marcada lucha de clases y a un modelo de acumulación basado en la ilegalidad asociada al narcotráfico y la minería,

⁷³ Magíster en Geografía Agraria de la Universidade Federal de Uberlândia. Integrante Colectivo Agrario Abya Yala y Laboratorio de Economía, Espacio y Poder, LE2P, Universidad Nacional de Colombia. E-mail: valentina08@gmail.com

⁷⁴ E-mail: jcleps@ufu.br



configurando un cuadro de dependencia estructural en la dialéctica de la relación centro-periferia de América Latina.

Ante ese panorama, buscamos presentar diversas formas de ordenamiento territorial por parte del campesinado colombiano como constitutivas de la espacialización de la lucha por la tierra, en tanto que emergen como propuestas ante la fallida reforma agraria emprendida por el gobierno colombiano, cuyas consecuencias en el ordenamiento territorial ambiental, en la colonización de la frontera agrícola y en la resolución de conflictos armados se desarrollaron bajo la tensión entre las vías *de facto* y las vías de derecho.

El campesinado como sujeto principal en la lucha de clases en Colombia, se espacializa a partir de formas propias de ordenamiento territorial y mecanismos asociados tanto a las vías de hecho como las vías de derecho, en respuesta a las contrarreformas agrarias realizadas a lo largo del siglo XX. Por lo tanto, las diferentes formas de Ordenamiento Territorial Campesino serían propuestas de reforma agraria.

OBJETIVOS

- Analizar las diferentes reformas agrarias en Colombia a la luz del modelo de acumulación capitalista y la expansión del capitalismo en Colombia.
- Comprender las especificidades de las formas de ordenamiento territorial en Colombia como propuestas del campesinado en la construcción de una reforma agraria, desde la Ley 160 de 1994 hasta la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular en 2014.
- Sistematizar diferentes experiencias de ordenamiento territorial como expresiones de autonomía y reproducción campesina, a partir de las vías de hecho como de las vías de derecho.

REFERENCIAS TEÓRICAS



El Materialismo Histórico Dialéctico (MHD) emerge como un método que se propone la transformación de la realidad a partir de la dialéctica entre teoría y praxis, colocando en esa relación una condición en la cual el sujeto está implicado en el objeto de estudio.

Entendendo o concreto como sendo a síntese de múltiplas determinações, pode-se inferir que o pensamento é um ato de construção estreitamente relacionado com o processo de construção histórica - o *concreto* em pensamento. O movimento geral, particular → singular e singular → particular → geral, (a tríade/escalar categorial) é que nos permite chegar mais próximo do *real concreto*, munidos conceitualmente (concreto em pensamento), onde a cada movimento, o concreto em pensamento é ponto de partida para a “leitura” e compreensão do real concreto. (THOMAZ, 1991, p 25).

Ya desde la geografía, por parte de Neil Smith (1988) conseguimos entender que el sistema territorial orientado por el modelo de acumulación capitalista, se desarrolla a partir de una dialéctica de la diferenciación y ecualización geográficas:

Da forma pela qual é comumente utilizado, "o desenvolvimento desigual" refere-se não simplesmente à Geografia do capitalismo, mas também às diferentes taxas de crescimento entre os diferentes setores da economia capitalista. Ao equiparar aqui o desenvolvimento desigual com a sua expressão particularmente geográfica, não há nenhuma tentativa de negar outros aspectos do processo. Isto é feito para compensar o nítido descuido para com a dimensão espacial do desenvolvimento capitalista e enfatizar, na prática, a conclusão tirada no capítulo anterior, de que a desigualdade espacial não tem sentido algum, exceto como parte de um todo que é o desenvolvimento contraditório do capitalismo (SMITH, 1984, p 151).

Para entender las particularidades del modelo de acumulación en el caso colombiano en una relación dialéctica de centro perifería, tomamos como referencia a la Teoría Marxista de la Dependencia. El diálogo hecho por Ruy Mauro Marini (1978), Theôtonio Dos Santos (1978), Marisa Amaral (2012), Fernando Correa e Rodrigo Castelo (2012), Thiago Camarinha (2013) con las categorías propias de esta teoría, permitirán entender cómo la guerra acentuaría esa dependencia



hecho el análisis aplicado a las siguientes categorías: la transferencia de valor a las economías centrales a partir de una determinada composición orgánica media del capital y mediante una economía política de la guerra - basada en la industria bélica como fusión del capital industrial y financiero, dinero público para gastos de Defensa y el despliegue del sub-imperialismo brasileño en la forma militar así como en la expansión industrial; y la superexplotación de la fuerza de trabajo, mediante la creación de un ejército industrial de reserva producto del desplazamiento forzado a partir de la violencia – y su derivación como consecuencia de las contrarreformas agrarias.

De ese modo, la relación entre reforma agraria y ordenamiento territorial confluye en la reproducción ampliada del capital realizada en la perifería, pero que representa una reproducción ampliada de la dependencia.

De otro lado, los aportes de Ruy Moreira (2003; 2009) se constituyen como elementos para entender el espacio como contradicción. La lucha de clases por la disputa de un proyecto de ordenamiento territorial se evidencia en la autonomía dentro de este modelo. Es una disputa expresada en el régimen jurídico político y en el manejo de los recursos y su administración pero también en la autonomía como mecanismo de consciencia de clase del campesinado.

METODOLOGÍA

Las fuentes de información de este estudio se dividen en fuentes documentales, producto del análisis bibliográfico hecho; y las fuentes primarias, estas últimas derivadas del trabajo de campo que a su vez se dividió en dos partes, de acuerdo con el desarrollo del concepto de Ordenamiento Territorial Campesino.

RESULTADOS FINALES



La importancia de pensar el espacio desde la lucha de clases es esencial para entender que ninguna lucha se desactiva. Por el contrario, se enraíza en un continuo de resistencia y luchas, expresados a lo largo de la historia en diferentes formas territoriales de contención y avance del capitalismo, pero también en formas de ordenar el territorio desordenándolo, en una apropiación que deja marcas en el tiempo y espacio.

La Constitución de 1991 materializó un nuevo "pacto social". En esta nueva reestructuración, las políticas de distribución de tierras tuvieron como objetivo la "etnización de la cuestión de la tierra" al regularizar la propiedad de las tierras a las comunidades indígenas con las Entidades Territoriales Indígenas, que permitieron la el manejo autónomo de los recursos transferidos por el Estado y también con los Territorios Colectivos Negros a las comunidades negras, ubicadas en la cuenca del Océano Pacífico y de la que unos años más tarde serían expulsadas para dar paso a un éxodo continuo a partir de la implementación de megaproyectos como la palma de aceite y la minería a gran escala.

Los resultados de la reconfiguración de la capital son evidentes en la política pública, entendiéndolas como una expresión del bloque dominante del Estado, pero también como resultado de las luchas sociales del campesinado. Por lo tanto, aunque el Estado fragmenta el espacio rural para facilitar la acumulación de capital a partir de numerosas divisiones territoriales que también fragmentan el espacio de reproducción social del campesinado, este, en el proceso de toma de conciencia de clase y auto-identificándose como una mezcla de varias comunidades indígenas y negras, desarrolla ejercicios políticos de soberanía y autonomía territorial, expresados en mecanismos de organización y planificación del territorio.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS



CHAVARRO, William. Sintaxis de condiciones agrarias, el origen agrario de la subversión y reacción. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Rural).PUJ. Bogotá: 2009. 35 p.

ESTRADA, Jairo (ed). Capitalismo criminal, Ensayos críticos, tomo 3. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 174 p.

_____, Jairo. (ed). Territorios campesinos: la experiencia de las zonas de reserva campesina. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia; Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (INCODER). 2013. 257 p.

FAJARDO, Darío. Notas sobre el minifundio en Colombia: su marco histórico y espacial. Revista Maguaré. N° 2, p. 155-176. 1984.

_____. Para sembrar la paz, hay que aflojar la tierra: comunidades, tierras y territorios en la construcción de un país. Universidad Nacional de Colombia: Bogotá. 2002. 193 p.

_____. Propuesta para algunos contenidos del proyecto de la ley orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) referidos en especial a asentamientos humanos y sector agrario. Red de Estudios de Espacios y Territorio. Espacio y Territorios. Razón pasión e imaginarios. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 2003.

LEGRAND, Catherine. Colonización y protesta campesina en Colombia: 1850-1950. Traducción de Hernando Valencia G. 1ª edición. Bogotá: Ed. Universidad Nacional, 1988. 285 p.

LEFEBVRE, Henri. La renta de la tierra. 1ª ed. México: Editorial Tlaiualli. 1983.

MARTINS, José de Souza. Os camponeses e a política no Brasil. Petrópolis, Vozes, 1981.180 p.



MARINI, Ruy Mauro. Las razones del neodesarrollismo (respuesta a FH Cardoso y J. Serra).

Revista Mexicana de Sociología, p. 57-106, 1978.

MOLANO, Alfredo. Vídeo Coca. Disponible na página web: <http://otramerica.com/mapas/donde-nace-la-coca/3261>.

RESTREPO CORREA, Andrés. Macarena, de la colonización de frontera a las fronteras de la colonización. Documento preparado para a CNMH. 2015. Inédito.

OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino. Geografia agrária: perspectivas no início do século XXI.

MARQUES, Marta Inêz M. (org). O campo no século XXI território de vida, de luta e de construção da justiça social. São Paulo: Ed. Casa Amarela e Ed. Paz e Terra, 2004.

_____, Ariovaldo Umbelino. Modo capitalista de produção Agricultura e Reforma Agrária. São Paulo: Labur ed, 2007. 184 p.

PALACIOS, Marco. ¿De quién es la tierra? Propiedad, politización y protesta campesina en la década de 1930. 1ª ed. Bogotá: FCE / Universidad de los Andes, 2011. 255 p.

PAULO NETTO, José. Introdução ao estudo do método de Marx. 1ª edição. São Paulo: Expressão Popular, 2011. 64 p.

RESTREPO, Darío. Procesos de descentralización en Bolivia y Colombia, 1980 – 2005. Una propuesta de economía política espacial comparada. Tesis (Doctorado en Historia). Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 2014. 749 p.



19. “EL ESTADO SOMOS NOSOTROS”: PRÁCTICAS ORGANIZATIVAS COMUNITARIAS DE LA ZONA RURAL DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ, COMO MATERIALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LOCAL EN COLOMBIA

Diana Marcela Moreno Guerra⁷⁵
Universidad de los Andes
dianamorenoguerra@gmail.com

Analizar los procesos de resistencia y generación de acciones alternativas desde la organización social en torno a la defensa de sus territorios, nos lleva a explorar las múltiples y variadas formas que asumen las respuestas de la población, frente a determinadas acciones u omisiones públicas cuyos resultados por lo general distan de ser intervenciones necesarias, adecuadas y socialmente construidas. Ante el abanico de posibilidades de resistencia que pueden llegar a asumir las comunidades, este documento centrara la mirada en la manera en que se desarrolla la construcción del estado⁷⁶ a nivel local en una municipalidad intensamente afectada por el conflicto armado como lo es San Vicente del Caguán en el departamento de Caquetá (Colombia).

⁷⁵ Universidad de los Andes, Grupo Interdisciplinario Antropolítica, dianamorenoguerra@gmail.com

⁷⁶ A lo largo del texto me referiré al “estado” en lugar del “Estado” en la medida que se trata de un proceso de construcción histórica en la que confluyen diferentes actores, pero que tradicionalmente se ha asumido como una idea “superior” que organiza y encauza las relaciones sociales, desconociendo por esta vía la existencia de otras ideas o



Tomo como punto de análisis y propuesta de resistencia la formación del estado a nivel subnacional, porque este ejercicio implica superar nociones modélicas que estandarizan la experiencia estatal y homogenizan la observación de los procesos sociales, culturales, políticos y económicos que subyacen a la propia construcción del estado y que dan casi por sentado que el estado es una imposición vertical que proviene de los centros de poder nacional que se desenvuelve sin mucha dificultad en las provincias o regiones, desconociendo que como proceso relacional incentiva diversas respuestas de la población en todas las escalas.

Y es que la concepción predominante de lo que se entiende por estado parte de representarlo como un ente cosificado, monolítico, universal y homogéneo, garante del orden público a través del monopolio de los medios de la fuerza física, la violencia y la ley dentro de un territorio con fronteras delimitadas. Esta noción, en la cual el estado aparece ajeno a interferencias externas o internas en su desenvolvimiento, desconoce por completo que éste en lugar de una entidad, está constituido por variados procesos cotidianos y mediado por múltiples, diversas y complejas relaciones sociales, las cuales a su vez hacen parte de un desarrollo histórico dinámico, diferenciado regionalmente, particularmente en el caso colombiano. Tales diferencias regionales, que se expresan en los ámbitos geográfico, económico, social, político y cultural, determinan una forma igualmente diferenciada de ordenamiento y prácticas organizativas locales. En la mayoría de los casos éstas configuran una institucionalidad alterna o complementaria a la del estado central, como parte de los efectos de la representación de este último en la vida local, al tiempo que determinan la forma en que se articulan con las agencias estatales en el interminable proceso de formación estatal.

formas organizativas. Para ampliación de esta discusión ver Bolívar (2011) en lo referentes a la producción discursiva del estado y quien retoma a Bourdieu en el análisis de las estructuras cognitivas estatalizadas.



En el caso de la región del Caguán, objeto de esta investigación, las diferencias espacio-temporales de colonización y asentamiento de sus pobladores, junto con las políticas adelantadas por el gobierno central en diferentes momentos, han sido claves en la caracterización generalizada de ésta como una zona marginal, en la que prevalece la “ausencia del estado” y en la que el dominio político-militar de las FARC-EP configura órdenes autónomos, ilegales y opuestos al estatal. Precisamente, esta caracterización convertida en lugar común, es la que pretendo debatir a la luz de los hallazgos en campo, para demostrar la idea de que la experiencia estatal regional, lejos de ser un ejemplo fallido o débil de la configuración del estado, es la expresión de las condiciones que el propio estado construye para su propia reproducción, la cual a su vez se configura como proceso de resistencia local y como experiencia de autonomía campesina.

La creación de una institucionalidad alterna como expresión de la formación del estado a nivel local

Una de las vías para entender la formación del estado como proceso de resistencia social, es el análisis y comprensión de la institucionalidad específica que se crea en las regiones y localidades en la medida que el estado se va consolidando. La institucionalidad, entendida de manera amplia como el conjunto de prácticas y reglas revestidas de significado en el que se enmarcan las entidades públicas y privadas, la normatividad y en general los arreglos formales e informales a que llegan los agentes que intervienen y hacen posible la acción organizativa (político-administrativa) de una localidad, explican y justifican el comportamiento, roles, identidades, pertenencias, propósitos comunes y creencias ocasionales y normativas de una comunidad (Pérez, E. 2000; Contraloría, 2002; Urcuyo 2010). Sin embargo, las manifestaciones de institucionalidad que se van desarrollando en la escala local, tradicionalmente han sido desconocidas desde el nivel central del



poder nacional, el cual, desde la comodidad del centro administrativo de la capital de la república, se ha autodenominado como el lugar principal de enunciación desde el cual se deciden las formas que debe asumir la organización estatal al bajar de la escala nacional a la regional, la local y la micro-local.

Este desconocimiento pasa por alto que el estado y su institucionalidad, en todas sus escalas, se encuentra enmarcado por las condiciones socio-históricas de configuración poblacional, por las identidades políticas de los habitantes, por su filiación cultural, los intereses económicos, las posibilidades técnicas y políticas con que cuentan tanto los administradores locales como los pobladores en general, y por el grado de intervención de los actores armados en cada una de las regiones, situación que hace que las formas que asume el estado en las diferentes regiones y localidades deba ser repensada como el producto de un proceso histórico y dinámico, el cual se va ajustando a las condiciones cambiantes del entorno, y determina estrategias de adaptación a las variables estructuras económicas, sociales y políticas impuestas por el modelo general de desarrollo (Pérez, E. 2000; Bolívar, 2011).

La anterior reflexión explica la importancia de evitar la tendencia a la esencialización y reificación del concepto de estado, debido a que es a través de las formas de actuar, los rituales y las interacciones entre actores sociales que se construyen los imaginarios, nociones y prácticas organizativas que constituyen el estado, razón fundamental para preguntarnos no por los mecanismos por los cuales se conformó el estado en un determinado territorio en una escala específica, sino por cómo las diferentes prácticas, interacciones y relaciones sociales definen y construyen escenarios públicos de organización y administración política y poblacional.



En esta dirección, el propósito del presente documento es analizar el proceso de estructuración de estas prácticas organizativas en el municipio de San Vicente del Caguán, localidad situada al norte del departamento del Caquetá en Colombia. Esta es una localidad de tradición política liberal en su casco urbano, con identidades políticas de izquierda en gran parte de su zona rural y con una fuerte presencia de la guerrilla de las FARC-EP, que le disputa el control territorial al ejército nacional (Vásquez, 2013). El estudio pone atención en las tensiones que se presentan entre los tres principales actores locales (pobladores, representantes del estado central y la guerrilla), las cuales derivan en relaciones conflictivas, antagónicas, de subordinación, resistencia o cooperación. No obstante, debo aclarar que privilegiaré el análisis en cuanto a la forma en que los pobladores responden cotidianamente a dichas tensiones y relaciones, teniendo en cuenta que estas relaciones varían según el contexto temporal, al tiempo que confluyen en la estructuración de un tipo específico de prácticas organizativas institucionalizadas en lo local. Se trata de analizar la conformación de lo que podría asumirse como “estado local” y su institucionalidad tanto en el fortalecimiento o debilitamiento de los procesos comunitarios y de los municipios como entes político-administrativos autónomos, pero especialmente de la importancia de la estructura organizativa campesina como mecanismo de diferenciación, autoprotección y reconocimiento.

Por tratarse de una zona de persistente presencia del conflicto armado, que ha servido de escenario de anteriores procesos de paz entre la guerrilla y el gobierno nacional, la región del Caguán ha sido asociada y señalada ante la opinión pública nacional como zona de control exclusivo y de retaguardia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). Se ha construido un estereotipo de la región centrado en la presencia guerrillera, la “ausencia del estado” y la economía de la coca. Dicho estereotipo ha sido la base de la excusa más común para



afirmar que esta es una región periférica e ilegal que se resiste a ser insertada en el orden político y económico del estado central. Esta concepción generalizada ha hecho que recaiga sobre los pobladores de San Vicente del Caguán en general, y los habitantes de las zonas rurales en particular, así como la mayoría de sus líderes sociales y políticos, el estigma de ser las bases sociales de la insurgencia, plegados y sometidos a sus designios y con poca autonomía frente al actor armado, situación que no se compadece con la realidad socio-política que se vive, llena de matices inmersos en una dinámica en la que confluyen procesos de escala nacional, regional y local, los cuales al cruzarse entre sí determinan un particular relacionamiento de la población con su entorno, frente al estado central y con el mismo actor armado.

Esta lectura estigmatizada principalmente de las regiones apartadas del centro político nacional, genera tipos específicos de organización local y de relaciones entre los actores que en ella intervienen. El tipo de órdenes y de relaciones que se van conformando no solo son producto del proceso colonizador exclusivamente, sino que interviene también la gestión estatal por acción (impulso a la colonización) u omisión (desprotección poblacional por violencia política y económica). Este maniobrar incide decididamente por sus efectos en la organización social y en las prácticas y lenguajes asociados con la construcción del estado en las regiones. Así, las prácticas y órdenes que se van gestando en las zonas de colonización no pueden verse ni analizarse como simples mandatos ilegales ajenos al ordenamiento general del estado, sino como el resultado del tipo de interacciones y prácticas que el mismo estado ha desarrollado en las zonas de colonización, y por el propio carácter complejo del proceso de configuración regional.

En esta dirección, retomo el trabajo de Veena Das y Deborah Poole (2008) quienes proponen como estrategia analítica, reflexionar acerca de cómo las prácticas y políticas de la vida cotidiana en áreas



consideradas como los márgenes del estado (el Caguán puede considerarse una de dichas áreas), moldean las rutinas de regulación y disciplinamiento que constituyen aquello que llamamos “el estado”. Para adelantar esta tarea, las autoras plantean la realización de un riguroso ejercicio etnográfico como herramienta privilegiada para rastrear e identificar el tipo de prácticas que constituyen el estado en espacios caracterizados por la teoría política comparada como “nuevas naciones”, “estados fracasados”, “débiles” o “parciales”, invitando a repensar los límites entre el centro y la periferia, lo público y lo privado, lo legal y lo ilegal, no como estudios de estados o regiones malogradas, sino como las formas particulares en que las modalidades de gobierno se expresan según sus posibilidades (2008:20).

Aclaran las autoras que el estado visto desde esta perspectiva en las regiones, no debe ser entendido como la captura de prácticas exóticas, sino bajo la comprensión de que dichos márgenes y lo que sucede en ellos son supuestos necesarios del estado. Esto va orientado en la misma línea de Margarita Serje (2011), quien plantea que las consideradas regiones “remotas” o “periféricas” han sido categorizadas de esta forma con el propósito de darle sentido a la nación. Para el caso del municipio de San Vicente del Caguán, esa categorización o asignación de identidad como zona marginal, conflictiva, guerrillera, en la que la mayoría de los procesos o experiencias organizativas adelantadas por las comunidades, especialmente la rural, han sido estigmatizados como ilegales o de carácter subversivo, no es más que el efecto material por el cual se expresa ese ejercicio de construcción del “otro” según los intereses de quien lo nombra, y el ejercicio puntual de dominación que busca justificar su precariedad en lo social y prioridad en lo militar, desconociendo las particularidades y posibilidades que el mismo ordenamiento nacional permite.



Parte de esos efectos de construcción del otro desde el estado central colombiano, de las acciones u omisiones en las regiones por parte de este último y del tipo de respuesta de ese “otro” poblacional, son rastreables a partir del proceso colonizador mismo, en el que tiene lugar una confrontación de identidades -propias y asignadas- producto de las modalidades de colonización. Así puede analizarse como gran parte de la población sanvicentina, especialmente la ubicada en la cabecera municipal al igual que la mayor parte del actual departamento del Caquetá, posee una identidad política liberal que es producto del dominio político del partido liberal en la región. Este dominio se inicia con el influjo de migrantes liberales provenientes del vecino Huila, y con la formación de las élites caqueteñas tras la consolidación de las grandes haciendas ganaderas de las familias Lara (entre los años 30 y 60) y Turbay (años 60 hasta el 2000). Gracias al capital económico, político y cultural que lograron asegurar, estas élites consiguieron la autonomía total del Caquetá frente a las élites huilenses ante las cuales estuvieron subordinadas hasta mediados del siglo XX. Fue por esta vía que consolidaron el poder político liberal en la región.

Sin embargo, este poder se vio desafiado –desde la concepción de los liberales- por los núcleos poblacionales que se originaron a partir de la colonización armada en la zona montañosa del alto Caguán. Estos grupos caracterizados por gentes con identidades políticas de izquierda y formas organizativas orientadas principalmente por la matriz comunista, fueron considerados como amenazas del orden liberal, debido a que no se articularon al territorio siguiendo la direccionalidad de ocupación que imponía la expansión hacendaria, la cual obligaba al movimiento migratorio forzado de campesinos pobres a ubicarse en zonas cada vez más alejadas. Por el contrario, colonos como los de El Pato entraron en disputa por los terrenos incluso desde mucho antes de la experiencia armada y adelantaron procesos organizativos de autogestión. Esta situación, sumada a



su experiencia previa de autodefensa campesina y posteriormente a la cercanía geográfica y política con el movimiento guerrillero, hizo que estos migrantes fueran excluidos de los espacios del ejercicio del poder y las decisiones locales y regionales al ser vistos como ilegales, lo que serviría para reforzar su proceso organizativo autónomo.

Este proceso de formaciones sociales distintas que coexisten prácticamente en el mismo espacio geográfico, pone en juego diversos tipos de interacciones y fuerzas en los que salen a flote las tensiones, reconocimientos y señalamientos mutuamente contruidos. Así, los actores con mayor poder terminan imponiendo categorías de exclusión-inclusión sobre los otros, según sus propios intereses. Es decir, quienes asumen el poder político en lo local, "...pueden construir nuevas categorías de persona incluidas en la comunidad política pero a las que se les niega membresía en términos políticos" (Das y Poole, 2008:28).

De esta forma se incluye en el discurso y se excluye en el accionar, por ejemplo si se piensa en el caso de la elaboración e implementación de políticas públicas que atañen a las zonas marginales. También se puede incluir en el discurso e incluir en el accionar pero de forma que no se tengan en cuenta las verdaderas urgencias de los pobladores de los márgenes, pues no son considerados sujetos políticos en igualdad de condiciones al resto de la sociedad, o son considerados como sujetos de acciones especiales por su "condición de ilegales" o su identificación como subversivos. Esto fue lo que ocurrió con la declaratoria de zona roja y posteriormente de zona especial de orden público que trajo consigo la implementación de planes militares (PNR, Plan Colombia, Patriota y más recientemente el de Consolidación) en el Caguán: "El asunto es que no es que su membresía política sea simplemente negada, sino que los individuos son reconstituidos a través de leyes



especiales en poblaciones sobre las cuales nuevas formas de regulación pueden ser ejercidas” (Das y Poole, 2008:28).

Otro aspecto que atañe a la colonización como parte de los efectos del estado en las zonas marginales, es el hecho de que el proceso colonizador en sí mismo va generando entre los pobladores migrantes la necesidad apremiante de construir un ordenamiento mínimo en la medida que el crecimiento poblacional lo requiere. A medida que la población se va asentando y su número aumenta, los lazos de sociabilidad primaria son insuficientes para la solución de problemas que requieren de un tipo de organización más jerarquizada en el que la subjetividad de los actores influya menos y se tenga como punto de partida unos parámetros comunes básicos. Esta situación y sus concomitantes embriones de organización social, nuevamente, no pueden ser analizados bajo el lente de algo que está por fuera del estado o es ilegal, sino como el resultado de la dificultad del estado de mantener el control de zonas recién colonizadas y que necesitan unas formas mínimas de ordenamiento para mantener la convivencia. Lo interesante para el caso de estudio, es que varias de las actuales formas organizativas –como las Juntas de Acción Comunal- se mantienen prácticamente iguales desde el proceso colonizador, fortaleciéndose con el tiempo y creando niveles “superiores” de organización, pero no con la intención de suplantarlo al estado central, sino de garantizar un mínimo de orden.

Los procesos organizativos que se encuentran en estas localidades no pueden leerse como simples ejercicios de poder ilegal o de prácticas y espacios que no son parte del estado, o cuya presencia se explica por la ausencia de ese mismo estado. Estos responden a las urgencias propias de las sociedades en expansión y jerarquización, a la precariedad del estado-aparato para cubrir todas las demandas a través de sus entidades, pero fundamentalmente a las condiciones de exclusión que el



mismo estado, como actor y proceso, ha construido a partir de su despliegue de poder y dominación con el que genera relaciones con profundas asimetrías políticas y económicas. Son estos factores los cuales determinan nuevas posibilidades de relacionarse y la emergencia de sistemas complementarios a los modelos nacionales.

De otro lado, no son ilegales porque los ordenamientos comunitarios que allí se crean, a pesar de tener un vínculo cercano a las experiencias orientadas por la guerrilla, son independientes y la población ha decidido “blindarlos” ajustándose a la legalidad vigente para ganar en autonomía y en el reconocimiento del carácter de sujetos políticos por un lado; pero también por el reconocimiento y respeto que tienen del ordenamiento legal nacional, del cual no desean sentirse excluidos sino todo lo contrario, obtener su reconocimiento como parte de ese ordenamiento estatal.

De igual forma, no pueden analizarse como experiencias por fuera del sistema estatal ya que esto implicaría decir que hay un “adentro” del estado o que existe “algo”, a la manera de una entidad concreta, que determina unos límites del estado con lo que se puede comparar las prácticas cotidianas comunitarias, versión que es precisamente la que pretendo debatir siguiendo el llamado de Philip Abrams (2000 [1977]), quien afirma que el estado no se expresa en instituciones conclusas, unificadas, racionales, necesarias y separadas de la sociedad, sino como un hecho social históricamente construido donde su existencia se presenta de manera dual como idea (representación) y sistema (burocracia). De esta manera, las JAC de la zona rural como organizaciones de primer nivel y las Asociaciones ambientales al igual que la Asojuntas como procesos de segundo nivel vistas como experiencias organizativas y modelo alternativo de estado (de las que hablaré más adelante), son vivencias que a la manera de hechos históricos orientadas



por varios actores, representan el estado en el Caguán y se convierten en focos de diseminación de una legibilidad estatal –diversa y asimétrica- y unas formas de gobernanza encarnadas por diferentes acciones burocráticas.

En esta misma dirección, Michael-Rolph Trouillot (2011:151) afirma que al no tener fijeza institucional o geográfica, los efectos y representaciones del estado van más allá de las instituciones gubernamentales o nacionales, lo que hace necesario enfocar el análisis en los múltiples sitios donde son reconocibles los procesos y las prácticas estatales, es decir, en algo más abierto al estudio por medio de estrategias etnográficas. Resalta este autor que "[s]i nos enfocamos en los efectos del Estado a través de la experiencia vivida de los sujetos podemos construir una etnografía [d]el Estado desde la base. Podemos descubrir cuándo y cómo se logran esos efectos, sus condiciones de producción y sus límites" (Trouillot, 2011:167). De esta manera, el estado no se encuentra en las instituciones concretas en las que se suele pensar o relacionar –Alcaldía, Concejo municipal, Caja Agraria, Incora-Incoder y demás en la zona de estudio-, no porque estas instituciones no hagan parte del estado, sino porque son solo una parte del proceso histórico de formación estatal en la región. Son las relaciones de la población organizada con estas entidades las que van formando un continuum que se va transformando según el contexto espacio-temporal, las que a su vez les asigna una serie de atributos, características y funciones a las experiencias propias de cada localidad.

Así, en cuanto a los alcances de los acuerdos a los que van llegando los diferentes actores que hacen parte del establecimiento y consolidación social de las poblaciones colonizadas y de su proceso de asentamiento permanente, se van estableciendo unas funciones mínimas de seguridad y control que inicialmente asumen las JAC como organización de base, las cuales se han ido extendiendo a labores de dotación y mantenimiento de infraestructura, gestión de proyectos comunitarios y



diálogo e intermediación de la población con entidades oficiales, constituyéndose de esta manera en un poder local reconocido con capacidad de producir efectos de identificación, espacialidad y legibilidad, en la medida que se constituyen bajo unas subjetividades colectivas específica, estrechamente ligadas a su ubicación geográfica, que por razón de su crecimiento poblacional deben garantizarse sus propias regulaciones.

Lo anterior sin embargo y de manera insistente, no significa estar por fuera del ordenamiento nacional, pues tanto las JAC como las organizaciones de nivel superior que se crean en las localidades, se conforman y actúan según las posibilidades que la misma ley les otorga, procurando adaptarse a las normas legales existentes. Tampoco pueden ser vistas como amenaza interna, en la medida en que no buscan subvertir el orden nacional preestablecido, sino tratar de acercarse a él por medio de las mismas herramientas que el estado les otorga. Por esta razón, estos sitios no pueden verse como simples moradas del atraso, de desorden, de lo corrupto y lo ilegal, sino que deben analizarse como sitios en donde la ley y las prácticas estatales son colonizadas y adaptadas a otras formas de regulación que emanan de las necesidades apremiantes de las poblaciones, con el fin de asegurar su supervivencia y como resultado de las efectivas oportunidades socio-económicas con que cuentan los pobladores, quienes a través de acciones consideradas como “informales”, adelantan prácticas creadoras de ordenamientos. (Das y Poole, 2008; Roitman, 2004).

Estos ordenamientos son la manifestación de la capacidad de los márgenes a adaptarse a circunstancias extremas, complementando o apoyando las funciones que en su totalidad no alcanzan a cumplir las entidades oficiales, pero de las cuales estas últimas logran obtener beneficios que refuerzan la noción del estado central. Este es el caso del aumento en el cobro del impuesto



predial por parte del IGAC a los campesinos de la zona rural de San Vicente, un aumento basado en la valorización derivada de la construcción de una carretera que fue hecha por la comunidad y no por el estado. Se configura así una pluralidad de regulaciones que no debe entenderse como una simple oposición binaria entre el estado y los márgenes, sino como procesos fundamentales del funcionamiento del estado.

Así mismo, el análisis de la producción cultural propuesto por Gupta y Sharma (2014) en el que la observación cuidadosa de las costumbres de los diferentes actores que conforman de manera directa e indirecta las prácticas estatales, al igual que de los ciudadanos en general, permite superar las clasificaciones que normalizan implícitamente a los estados e instauran al modelo democrático liberal occidental, como el tipo ideal con el cual han de ser comparados los demás estados (Gupta y Sharma, 2014; Tilly, 1992). Al suspender esta clasificación y dejar de lado la comparación por tratarse en todos los casos de procesos culturales y experiencias históricas diversas, se supera la dicotomía de la existencia de estados fuertes o débiles, fallidos o ausentes. Este enfoque va más allá de los parecidos formales y funcionales, y destaca el contexto histórico en el resultado del desenvolvimiento estatal.

Algo de la historia decisiva en el proceso de configuración local en San Vicente del Caguán

San Vicente del Caguán fue fundado el 27 de septiembre de 1898 en uno de los campamentos de la compañía cauchera que los hermanos Perdomo Falla establecieron sobre el río Caguán, en el lugar que conectaba Puerto Rico (Caquetá) con Algeciras (Huila) y donde se asentaban las brigadas de sirgueros. El poblado que inicialmente se organizó como una de las estaciones de comercialización del caucho, generó el impulso del estado por crear diferentes unidades administrativas hasta marzo de 1950, año en el que mediante decreto 963 del Ministerio de



Gobierno, el Caquetá se convierte en Intendencia y San Vicente del Caguán se constituye como municipio (Artunduaga, 1984; Sinchi, 2000; Alcaldía de San Vicente del Caguán, 2012; Vásquez, 2013).

Entre 1950 y 1953 hizo su aparición la violencia bipartidista en el noroccidente caqueteño, especialmente en las zonas de Guacamayas, El Pato, el Guayabero, Balsillas y San Vicente. En Guacamayas, bastión liberal, el pueblo fue asolado en 1950 por bandas armadas, mientras que San Vicente fue quemado en su totalidad en 1951 por la policía, situación que llevo a que los pobladores decidieran armarse como guerrillas liberales. La zona de El Pato y Balsillas, que inicialmente sirvió como refugio de cuadrillas de bandoleros, se convirtió posteriormente en fortín de las autodefensas campesinas gracias al proceso de las Columnas en Marcha comandadas por el “Mayor Richard” que provenían de Marquetalia, Villarica y Sumapaz, y que venían migrando luego de la arremetida militar del gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957). Esta colonización armada, dirigida por las autodefensas comunistas⁷⁷, expulsó por la fuerza a las guerrillas liberales establecidas en la región, extendiendo su influencia a Guacamayas, San Vicente del Caguán, Puerto Rico y Cartagena del Chairá en Caquetá (Artunduaga, 1984; González, 1992; Castillo et al, 1995; Sinchi, 2000; Vásquez, 2013).

A pesar de que el proceso de la colonización armada pretendía abrir espacios de asentamiento para los campesinos y grupos de colonizadores, de modo que pudieran salvaguardarse de la violencia bipartidista y conformar un proceso social autónomo de autogestión comunitaria que lograra

⁷⁷ Posterior a la Operación Maquetalia que dio origen a las Columnas en Marcha, “la autodefensa [campesina] no fue liquidada, sino que se transformó en guerrilla rodada y en inmenso movimiento campesino de respaldo a esa guerrilla” (Briñez, 1998:48).



superar la inadecuada intervención estatal⁷⁸, la represión militar continuó y se concentró en aquellas zonas donde la guerrilla pretendió transformarse en movimiento agrario bajo la tutela de las guerrillas comunistas. Esta situación desató las más grandes acciones de exterminio contra estas zonas, denominadas como “Repúblicas Independientes”, siendo bombardeadas durante el gobierno de Guillermo León Valencia entre 1962 y 1965, en el marco del Plan LASO (Latin American Security Operation)⁷⁹. Debido a los continuos ataques militares y a la represión constante por parte del gobierno central, los cuales se extendieron durante los años setenta y ochenta (e incluían el excesivo control de la movilidad poblacional y del ingreso de las remesas de víveres, pero no así de la garantía de la seguridad de los ciudadanos y sus bienes), el movimiento guerrillero contó desde sus inicios a nivel regional con la simpatía de amplios sectores campesinos⁸⁰, hecho que coincide con lo que sucede aun hoy parcialmente en la localidad. En el municipio puede oírse todavía a la población señalar el papel central que juega la guerrilla de las FARC-EP como proveedor de seguridad regional, papel que se ha visto potenciado durante coyunturas como la Zona de Despeje (1999-2002) creada durante los diálogos de paz entre el movimiento insurgente y el gobierno de Andrés Pastrana, así como en los meses posteriores de retoma militar del ejército una vez terminada la Zona de Distensión (ZD) a partir de febrero de 2002, hecho que se adelantó

⁷⁸ “Las autodefensas campesinas [se caracterizaban] por la organización colectiva del trabajo, la existencia de una estructura social que proveía en forma comunitaria los servicios sociales que el Estado no suministraba, entre ellos la educación, salud y seguridad comunitaria básica...” (Sinchi, 2000:46)

⁷⁹ Dicho hecho dio origen a la conformación de la primera conferencia guerrillera del Bloque Sur en 1964 en Marquetalia y dos años más tarde a la segunda conferencia que dio origen a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-FARC (Arango, 1984; González, 1992; Castillo et al, 1995; Sinchi, 2000; Alcaldía de San Vicente del Caguán, 2012).

⁸⁰ Una entrevista realizada por Alberto Valencia y publicada en un texto de 1995 expresa al respecto: “Esta era una de las regiones azotadas por los cuatrereros y abigeos; hoy se llevaban tres o cuatro reses, mañana uno o dos mulas, uno iba y ponía el denuncia y nada pasaba eso era perder el tiempo. Cuando los “muchachos” llegaron fueron limpiando esto de ladrones y cuatrereros; cuando ocurría un robo no era sino avisarles y a los pocos días aparecían las reses y los ladrones muertos. Así acabaron con el robo en toda esta región; era cierto que uno pagaba una cuota de acuerdo a lo que tenía, pero podía dormir tranquilo. Mire, yo dejaba la plática allí afuera y nunca le paso nada”. (Valencia en Castillo et al, 1995:209).



a sangre y fuego y que permitió el ingreso de paramilitares a la región, repelidos posteriormente por la guerrilla.

Este poder alterno que han construido las FARC en la región, es la consecuencia de una intervención estatal que privilegió el accionar bélico antes que el social. Si a esto le sumamos la crisis del modelo colonizador dirigido por el estado y la desprotección de la población ante el ingreso de nuevos actores armados como los narcotraficantes y sus bandas paramilitares, lo que vemos es la emergencia de redes de solidaridad no estatales dentro de las comunidades campesinas, mediante las cuáles dichas comunidades tramitan y ejercen su vida social y le hacen frente a la poca legitimidad con que cuenta el estado, debido a su inadecuada e inoportuna intervención local (Pulecio y Pulecio, 1999).

Otro factor decisivo en la precaria legitimidad del estado en los niveles subnacionales, tiene que ver con las transformaciones institucionales promovidas por el gobierno central para potenciar el sector rural. Para mediados del siglo XX, la aparente intención de generar una reforma rural con la expedición de la Ley 135 de 1961 o ley de reforma agraria –que dio vida al INCORA-, se vio limitada desde su nacimiento al no estar dirigida a adelantar procesos de redistribución de la propiedad y de transformación de la estructura agraria. La implementación de la Ley 135 se circunscribió al desarrollo una política agraria centrada en la colonización de tierras baldías y en la ampliación de la frontera agraria, como primera solución en el logro de la equidad social en el campo y solo de manera marginal, en la redistribución de la propiedad al interior de la frontera (Fajardo, 1997; Ramos, 2001; Moreno, 2013a).

Al respecto, como señala Fajardo, la expansión de la frontera como política agraria no necesariamente estuvo acompañada por la ampliación del estado como sistema de relaciones



políticas, lo que condujo a que los vacíos y/o precariedades institucionales en estas nuevas áreas rurales de Colombia, fueran cubiertos o solventados por los poderes regionales o por las mismas comunidades locales, en un ejercicio de configuración de su propia organización territorial. Como asegura Machado (2004), “bajo determinadas condiciones económicas y sociales han llevado a la formación de una nueva sociedad, en una frontera en la que está ausente el Estado. Este vacío comienza a llenarlo los gérmenes de organizaciones que traen los colonos: el germen de un nuevo Estado” (p.162).

A los efectos de la inadecuada institucionalidad rural promovida desde el gobierno central, se suman nuevamente hechos de violencia adelantados por el propio estado en 1980 sobre la zona de El Pato, los cuales además de tener un alto costo en vidas en la población civil, evidenciaron la grave problemática social en la que se encontraba la región noroccidental del Caquetá y demostraron el poder organizativo de los campesinos de la zona rural. Se trata de los segundos bombardeos de El Pato, efectuados por el ejército nacional que derivó en el desarrollo de la *Marcha de la Vida* como reacción y protesta de los habitantes de El Pato⁸¹.

⁸¹ Luego de los primeros bombardeos ocurridos en 1964, que llevaron prácticamente a la desocupación de los poblados afectados, en 1972 se inicia un paulatino retorno de los colonos sobrevivientes, quienes vuelven a sentir nuevamente la presión militar del ejército ya que se instaló una base militar en el sector de Balsillas en 1979. El establecimiento de los militares trajo consigo una nueva ola de señalamientos a los campesinos de pertenecer a la guerrilla o de ser auxiliares de ésta, circunstancia que justificó una serie de actos violatorios de los derechos humanos que llegaron a su máxima expresión con el bombardeo en agosto de 1980 de una pista aérea construida en 1962 en la vereda Las Perlas, Bajo Pato que facilitaba el mercadeo de productos agrícolas. Según el texto de Briñez de 1998, “[El ejército adelantaba] exigencia de salvoconductos para impedir la libre movilización o negación de los mismos para algunos pobladores con el fin de obligarlos a abandonar la región, vedándoles así el derecho a la titulación de tierras que en ese momento adelantaba el Instituto Colombiano de Reforma Agraria; malos tratos verbales; sindicaciones indiscriminadas contra hombres y mujeres de ser guerrilleros o auxiliares de la guerrilla, amenazas de muerte, detenciones, torturas, desapariciones; requisas a remesas o mercados durante los cuales los militares destruían los víveres que los colonos habían adquirido en Neiva para su subsistencia, llegando en muchos casos al extremo de mezclar la sal y el azúcar con el propósito de inutilizar estos ingredientes necesarios para la alimentación.” (Briñez, 1998:53). Esta situación llevó a que los campesinos se organizaran y movilizaran en una marcha hasta la ciudad de Neiva denominada *La Marcha de la Vida* en contraposición a la *Marcha de la Muerte* de los bombardeos en los años sesenta. Su objetivo no era adelantar un éxodo definitivo de la región como en la primera experiencia de la incursión militar, sino realizar una movilización



El ataque violento llevado a cabo durante el gobierno del presidente Turbay Ayala contra una parte de la población rural de San Vicente del Caguán y la resistencia ejercida por los pobladores, además de dar inicio al *Festival anual del Retorno* con el que los campesinos conmemoran los hechos y refuerzan su identidad cultural como pateños, fue la oportunidad precisa para una reorganización social de base. Reunidos en sus JAC, los pobladores decidieron abanderar un proceso que les permitiera reorganizar las zonas rurales, ganar mayor reconocimiento y representatividad ante el estado local y nacional, mejorar sus condiciones sociales básicas y superar el estigma de ser Repúblicas Independientes que los vinculaba directamente como miembros de la insurgencia. Este proceso se concretó en el proyecto piloto que dio vida al Comité Coordinador de Juntas de Acción Comunal del Pato-Balsillas conformado en 1984, el cual se consolidó con la creación de la Asociación Municipal de Colonos del Pato-AMCOP y la configuración y reconocimiento estatal de la Zona de Reserva Campesina de El Pato-Balsillas.

Posteriormente con la llegada a la presidencia de la República del conservador Belisario Betancur (1982-1986) se creó una gran expectativa en el Caquetá tras la promulgación de la Ley 35 de 1982 o ley de Amnistía⁸², cuyo avance fundamental fue el reconocimiento de que las causas de la violencia y el conflicto armado en Colombia eran las condiciones objetivas y subjetivas de exclusión, en otras palabras, que se encontraban estrechamente relacionadas con la inequitativa estructura de la tenencia de la tierra (Quintero, J.C., 1988; Castillo et al, 1995)⁸³. En aquel momento

que los hiciera visibles ante el gobierno departamental, denunciar ante la opinión pública el genocidio contra ellos y exigir al gobierno nacional la desmilitarización de la zona.

⁸² La ley 35 junto con los decretos complementarios (Decreto 2109 de 1983 y 1094 de 1984) autorizó al gobierno nacional para hacer asignaciones, traslados presupuestales y contratar empréstitos internos y externos para organizar y llevar a cabo programas de rehabilitación, dotación de tierras, vivienda rural, crédito, educación, salud y creación de empleos a través del INCORA y la instauración del Plan Nacional de Rehabilitación –PNR- creado en 1983.

⁸³ Sin embargo, esta ley fue criticada a nivel nacional ya que ponía como sujeto principal de la política sólo a las familias asentadas en las regiones sometidas al enfrentamiento armado y seleccionadas por el PNR, al igual que a quienes en virtud de la amnistía se incorporaran a la vida pacífica y al amparo de las instituciones legales, dejando por



y como parte de los acuerdos alcanzados entre la guerrilla de las FARC y el gobierno en La Uribe-Meta, los frentes 14 y 15 de esa organización subversiva que hacían presencia en la zona del Caguán permitieron el surgimiento de organizaciones locales e incentivaron el trabajo organizado de todos los grupos poblacionales, generando una nueva experiencia dentro del proceso colonizador en la región (Castillo et al, 1995:222).

No obstante, la tregua que se pactó entre los actores en negociación fue utilizada por los carteles del narcotráfico para invadir zonas del Caguán e incrementar la producción de coca, situación que significó un desestímulo a la implementación de proyectos productivos legales en la medida que los márgenes de ganancia no eran comparables a los alcanzados con la coca en plena bonanza, hecho notorio especialmente en los Llanos del Yarí y en el medio y bajo Caguán. De igual forma, como señala Vasquéz (2013), el PNR restringió su acción en el departamento a unas inversiones limitadas a obras públicas y a la ejecución de unos proyectos de cooperativas agrícolas con algunos amnistiados del M-19, ubicándose muy lejos de las dimensiones que las FARC le había impreso a la propuesta.

Entre tanto las FARC, a raíz del proceso de deterioro de las negociaciones, comenzaron un período de fortalecimiento y desdoblamiento de frentes como estrategia de confrontación a la guerra sucia que se vivía, logrando tener un amplio dominio territorial en Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo. En 1990, el 9 de diciembre, cuando se adelanta la votación de la séptima papeleta por el cambio constitucional durante el gobierno de Cesar Gaviria, se ejecuta el bombardeo contra Casa Verde en La Uribe-Meta sede del secretariado de las FARC y punto central de las conversaciones de paz.

fuera al resto de campesinos pobres al delimitar su ejecución a zonas de colonización, regiones de enclave y zonas deprimidas, desconociendo el avance que significó el PNR en la conformación de sociedades regionales más estables y prósperas, como en el caso del Caquetá, al vincular en el plano de lo político y al ordenamiento institucional a algunas de las regiones en conflicto marginadas de la dinámica del desarrollo nacional.



Este evento conllevó a la declaratoria de “zona roja” de estos departamentos y un nuevo ciclo de violencia y exclusión para los campesinos de las zonas rurales, bajo la manida excusa de ser miembros o auxiliares de la guerrilla.

Así, la presencia guerrillera en aumento, su mayor relación con el negocio de la coca, el ingreso al sur del departamento de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia-AUC en cabeza de Carlos Castaño en 1997 y la crisis de legitimidad del presidente Ernesto Samper (1994-1998) producto del escándalo del Proceso 8.000, llevaron a que el gobierno nacional declarará al Caquetá, junto a otros cinco departamentos del sur del país, como “zona especial de orden público”. Esta circunstancia les permitió a las autoridades militares acometer nuevamente acciones de interdicción en la región contra sus pobladores y fumigaciones contra los cultivos ilícitos. Esto último y las nuevas prohibiciones a los campesinos, llevaron a los pobladores a manifestarse a través de amplias movilizaciones conocidas como las Marchas Cocaleras de 1996⁸⁴. Las protestas fueron el vehículo que utilizaron los campesinos para hacer visibles y exigir al gobierno nacional, la atención y reivindicación de temas estructurales como la salud, la educación y la interconexión vial para impulsar el desarrollo económico⁸⁵.

⁸⁴ En Caquetá se estimó que el número de manifestantes que se movilizaron fue de unas 78.000 personas, el más alto de los cuatro departamentos del sur que se movilizaron al respecto (Vargas, R. 1996).

⁸⁵ Entre las demandas formuladas durante el paro campesino, además de solicitar garantías y seguridad para los marchistas y la suspensión inmediata de las fumigaciones, el pliego de peticiones pretendía la condonación de las deudas crediticias de los agricultores con las entidades estatales; el fomento de transferencias tecnológicas para las comunidades campesinas de acuerdo con los programas agropecuarios de productos tradicionales existentes; la construcción, terminación y recuperación de la red vial que incluía la terminación de las carreteras troncales que los comuniquen con el interior del país y otros departamentos. En el ámbito jurídico y político, las peticiones se agrupaban en la revisión y modificación de la Ley 30 de 1986 que permitiera darles un tratamiento distinto al de narcotraficante a los pequeños cultivadores y a los cosechadores de coca. Igualmente solicitaban la derogación del decreto presidencial No.0871 del 13 de mayo de 1996 que estableció las “zonas especiales de orden público” y la priorización en el Congreso proyectos de ley que permitan la confiscación y expropiación de bienes de grandes narcotraficantes con destino a programas sociales y de rehabilitación. (Documento: Peticiones previas para el desarrollo normal de las negociaciones del paro campesino indígena de 1996, citado por Mestizo, 2001).



De esta manera, durante el proceso de las marchas cocaleras, empezaron a nacer propuestas desde la base social dirigidas a contrarrestar la ofensiva criminal sobre los pequeños y medianos productores. Así, empezó a plantearse la idea de la creación de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), dispuestas por el gobierno nacional en Ley 160 de 1994, como alternativa puntual para enfrentar la crítica situación de las áreas de ampliación de la frontera agraria, creándose formalmente en 1997, para el caso de San Vicente, la Zona de Reserva Campesina de El Pato-Balsillas impulsada por la ya existente Asociación Municipal de Colonos de El Pato-AMCOP. A pesar de la importancia de esta figura como expresión de desarrollo económico y reconocimiento político, la totalidad de las ZRC creadas en el país, así como las que estaban en proceso de conformación, se vieron estancadas durante los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), debido a la estigmatización de la figura jurídica misma y de las organizaciones que impulsaban aludiendo a argumentos ya conocidos: que la zona era bastión del terrorismo, noción en la que se enfatizaba tras los fallidos Diálogos del Caguán⁸⁶. Esto agudizó una vez más la represión y violencia contra la región.

A pesar del fracaso de los diálogos, la ZD permitió aprendizajes importantes en cuanto a la resolución de conflictos, la conformación de una policía cívica en el casco urbano, la construcción de infraestructura vial por parte de la guerrilla en conjunto con los campesinos, la propuesta de sustitución de cultivos ilícitos y el impulso de proyectos productivos.

En la integración de estos aspectos en aquel momento, las FARC llevaba la voz de mando al imponer sus normas sobre las leyes nacionales y las normas comunitarias en el territorio despejado,

⁸⁶ El proceso involucraba el despeje de cinco municipios ubicados entre el sur del Meta y el norte del Caquetá entre los que se encontraba San Vicente del Caguán.



creando una suerte de justicia guerrillera⁸⁷ que generó una aparente calma producto de un momento de seguridad jurídica, policial y militar que se vivió en la región a cuenta de la ZD y la claridad ante la existencia de una sola fuerza a la que debían cumplir (un único y principal interlocutor reconocido por todos, inclusive por el estado) y la cual era capaz de resolver –al menos en lo inmediato- algunos asuntos prioritarios de la comunidad. Esta calma se rompe tras el fin de los diálogos y la orden del ejecutivo de retomar la zona por la vía militar. Los relatos trágicos de los campesinos sobre esos bombardeos, selló trágicamente el final de un tipo de ordenamiento para dar paso a un nuevo periodo de incertidumbre.

Es a raíz de este contexto histórico, político y de violencia que los campesinos de la región han experimentado a lo largo de los años, y al tipo de políticas implementadas por el gobierno nacional y departamental, que los campesinos han aprendido a adaptarse a las circunstancias al tiempo que van desarrollando estrategias propias de resistencia y reclamo que les permita mayor visibilidad e inclusión en la sociedad mayor.

Procesos organizativos locales en San Vicente del Caguán como forma de resistencia y construcción alternativa del estado local

Según el plan de desarrollo municipal 2012-2015 “*¡El cambio está en marcha y usted hace parte de él!*”, San Vicente del Caguán contaba hasta mayo de 2012 con 287 veredas en su zona rural y cuatro zonas de planificación que agrupan 44 barrios en el casco urbano. En cuanto a la zona rural, objeto principal de esta investigación, las mencionadas veredas se encuentran organizadas según

⁸⁷ Al respecto, son bien conocidas y prolíficamente narradas por los habitantes, la experiencia de las “casas de justicia de las FARC”, las cuales fueron los espacios exigidos por el gobierno a la guerrilla para que los pobladores llevaran las quejas sobre los excesos que los subversivos cometían en desarrollo de la ZD. En la práctica, estas casas se convirtieron en juzgados de hecho donde la gente iba a poner denuncias por múltiples problemas (robo, maltrato intrafamiliar, corrida de cercas, separación de bienes, etc.) para que los guerrilleros les dieran solución, como una suerte de justicia guerrillera.



los criterios establecidos por el régimen municipal en inspecciones de policía, registrándose la existencia de un total de 14 inspecciones. No obstante esta organización formal, no todas las inspecciones cuentan en la actualidad con la autoridad del inspector de policía por falta de interés en la región, según afirman algunos líderes veredales; “porque los ‘tíos’ no dejan tener”, refiriéndose un funcionario a la negativa impuesta por algunos frentes de las FARC en algunas zonas; o por falta de presupuesto, según otros funcionarios. En total, solo cinco inspecciones cuentan con inspector.

Ante esta situación, la cual ha sido una constante en la zona rural, y ante la precaria presencia de las instituciones del “estado civil” -como los habitantes se refieren al estado colombiano— y lo obsoleto de algunas de esas instituciones, las comunidades han optado desde hace varios años por constituir sus propias entidades de organización y regulación. Para el caso de esta unidad administrativa, cuya organización en términos legales generales (en teoría) debe obedecer a los parámetros del régimen municipal, en realidad (en la práctica) los campesinos y comunidades indígenas han optado por configurar una estructura alterna comunal de organización por niveles que les ha resultado mucho más efectiva para la solución de algunas necesidades básicas, la resolución de problemas veredales y la comunicación e intermediación con la administración local, el estado central y las ong’s, mediaciones orientadas a elevar su calidad de vida y la consecución de recursos que potencien sus proyectos.

De esta forma, en un primer nivel, los habitantes tanto de la zona rural como del casco urbano se encuentran organizados en Juntas de Acción Comunal (JAC), las cuales son las unidades básicas organizativas establecida por el gobierno nacional desde el año de 1958 y que los campesinos y colonos de estas zonas consideran como el elemento primario de reconocimiento ciudadano.



Posteriormente, en un segundo nivel se encuentran las asociaciones campesinas, las cuales reúnen en su interior varias juntas comunales y tienen entre sus funciones principales, la organización y promoción social de la población reunida en las JAC, el impulso de proyectos productivos sostenibles con el medio ambiente, la resolución de problemas no zanjados por las juntas y la interacción con las entidades del estado. De este mismo nivel hace parte la Asociación de Cabildos Indígenas de San Vicente del Caguán-ACISC que reúne cuatro cabildos⁸⁸. En el tercer nivel se encuentra UNIOS, que es la Unión de Organizaciones Sociales, Agrarias, Ambientales de Derechos Humanos, Campesinas e Indígenas, organismo que congrega a todas las organizaciones sociales campesinas del municipio⁸⁹. Esta entidad comunitaria, se encarga de promocionar el desarrollo social comunitario a nivel municipal. UNIOS pertenece a su vez a Coordosac, Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales, Sindicales y Agropecuarias del Caquetá, que es la máxima organización social del departamento (Entrevista líder campesino).

⁸⁸ De este segundo nivel hacen parte las siguientes organizaciones: AMCOP, Asociación Municipal de Colonos del Pato con jurisdicción en la región de El Pato-Balsillas, la cual agrupa a 28 veredas; ASABP, Asociación Ambiental del Bajo Pato, que recoge el trabajo de 16 veredas; ASOATROG, Asociación Agropecuaria de Troncales y Guacamayas con 28 veredas; ASOCAMPO, Asociación de Juntas de Campo Hermoso que cobija 30 veredas; CORPOMIA, Corporación para el Desarrollo Veredal Minas Blancas-Picachos, con ocho veredas; ASOREGIONAL, con 23 veredas; CORPOADYARÍ, Corporación para el desarrollo de la región del Yarí con 53 veredas ubicadas en la parte plana del municipio; y dos organizaciones que por pertenecer a la zona de litigio entre San Vicente en el Caquetá y La Macarena en el Meta, quedaron registradas hasta el año 2012 en el municipio de San Vicente, momento en el que se circunscribieron a la entidad municipal de La Macarena, pero realizan acciones en ambas localidades: ASCAL-G, Asociación Campesina Ambiental del Lozada-Guayabero con 70 veredas organizadas en seis núcleos, y ASOPEPROC, Asociación de Pequeños Productores de la Cristalina del Lozada que reúne 26 veredas (ver tabla No.2). De estas organizaciones hace parte también la ACISC, Asociación de Cabildos Indígenas de San Vicente del Caguán y que agrupa cuatro cabildos del municipio: Banderas Reaibo, La Pradera (Guaritanama), Altamira y Yaguara II (Entrevistas 2015; Alcaldía de San Vicente del Caguán, 2012).

⁸⁹ UNIOS, cuya jurisdicción es el municipio de San Vicente y que agrupa a su interior además de las organizaciones de segundo nivel, a las Organizaciones de Mujeres, a la de Jóvenes y a las de producción económica, nació en 2001 con la idea de cumplir con cuatro ejes temáticos: 1. Calidad de vida; 2. Articulación de procesos organizativos; 3. Fomento de la educación sobre el estado y temas medioambientales y; 4. Movilización en defensa de derechos. Para su funcionamiento y financiación, UNIOS cuenta con un porcentaje de los “impuestos comunitarios” que se recogen por las JAC, además por las colectas de las organizaciones, las tiendas comunitarias y las rifas que realizan en la región. Sesiona en la misma casa donde funciona Caguán Vive que es una organización de Derechos Humanos del municipio.



Según me cuentan varios de los líderes comunales de diferentes veredas, este orden jerárquico así establecido si bien no fue creado en su totalidad con una fecha específica de “fundación”, por tratarse de procesos organizativos autónomos que se fueron relacionando entre sí en la medida que se iban encontrando en la similitud de sus experiencias, si tienen en común la influencia que en diferentes grados heredaron de la matriz comunista de los primeros años de colonización.

Cada uno de estos niveles organizativos tiene sus propias funciones en un espacio geográfico determinado y se articulan entre sí por la realización de trabajos compartidos en pro de la comunidad como por ejemplo la construcción y mantenimiento de las carreteras, la consecución o satisfacción de los servicios públicos como agua o electricidad, la construcción y dotación de escuelas y centros médicos, la promoción y protección del medio ambiente, la resolución de problemas entre vecinos, de linderos, etc., y según el nivel de la organización, funcionan como segunda o tercera instancia en la toma de decisiones que afectan a la comunidad, garantizando por esta vía la sana convivencia, la equitativa administración de recursos recaudados por ellos mismos para el auto-sostenimiento de la región y el fortalecimiento de un proceso de unidad comunitaria. En cuanto al apoyo para financiación y créditos para los campesinos de las diferentes veredas, las organizaciones no trabajan directamente ayudando al campesino de forma individual, sino a través de proyectos conjuntos dentro de las organizaciones.

Este tipo de formas organizativas, la de juntas, de organizaciones campesinas y de UNIOS, le ha permitido a los campesinos de la región, suplir algunas de las necesidades más apremiantes, como lo son los temas de seguridad y provisión de servicios básicos. En cuanto al funcionamiento de algunos de los comités específicos de las JAC y de las organizaciones en general, todos los líderes entrevistados de las diferentes subregiones coincidieron en la explicación que me brindaron frente



a la forma en que operan. Con relación al comité pro-carreteras, afirmaron que este interviene principalmente en vías terciarias y algunas vías primarias que ni la gobernación ni el gobierno nacional han intervenido, como por ejemplo la vía San Vicente-La Macarena, la cual comunica dos departamentos Caquetá y el Meta; o el caso de la vía Neiva-Balsillas-San Vicente, que comunica los departamentos del Huila y Caquetá. En cuanto a las vías terciarias o veredales, los campesinos mismos son los que se encargan del diseño para la apertura de la carretera y de su propia construcción.

Los niveles de organización jerárquica comunal aquí mencionados no se corresponden con las formas y niveles organizativos dispuestos en el régimen municipal (el estado oficial en lo local), pero eso no necesariamente significa que se encuentren en la ilegalidad, pues la población decidió registrar las organizaciones de los diferentes niveles para obtener personería jurídica y poder así contratar con entidades públicas y privadas; en este sentido, son la institucionalidad existente en lo local, una institucionalidad creada y fortalecida desde la base social y comunal.

Ordenamiento territorial campesino: relaciones asimétricas de poder

Las experiencias organizativas actuales de la zona rural de San Vicente del Caguán, señaladas hasta el momento y entendidas como prácticas y rutinas “administrativas” de ordenamiento, ilustran la complejidad de las interacciones que adelantan las comunidades, el estado central y los grupos armados (guerrilla de las FARC-EP en este caso) en regiones de conflicto armado, en el proceso de configuración del estado local. Los testimonios recogidos, la experiencia percibida en campo y el análisis histórico, me permitieron identificar que la configuración estatal en esta localidad responde no solo a las formas diferenciadas en que las decisiones, acciones u omisiones de los



diversos actores que ocupan el territorio se entrecruzan, sino por el tipo de poder efectivo que estos actores están en capacidad de desplegar.

Así, en el actual contexto de disputa política y militar entre el estado central y la guerrilla de las FARC-EP en la región del Caguán (disputa con la cual pretenden asegurar el control territorial de amplias zonas consideradas marginales), a pesar que la confrontación -al menos discursivamente- la adelantan estos actores para defender a las comunidades que allí habitan; ha llevado al permanente desconocimiento de dichas comunidades como sujetos políticos así como también de su poder de agencia⁹⁰. Este desconocimiento y desdén de la población, llevó a que estos últimos configuraran el sistema de autoridad⁹¹ y ordenamiento antes descrito y del cual también entraron a hacer parte activa tanto estado como subversivos.

Sin embargo, es necesario aclarar que tanto la efectividad de este sistema de ordenamiento y autoridad, como el papel que desempeñan cada uno de los actores que en él participan, además de estar mediados por los factores ya mencionados como son el proceso de poblamiento, el momento de llegada de los actores, las identidades políticas de los migrantes, colonos y pobladores antiguos; también y de manera decisiva están afectados por el poder real e imaginado que cada actor tiene en el territorio. De esta forma, unas son las posibilidades que el estado como actor⁹² -identificado

⁹⁰ En esta investigación retomo el término de “agencia” de la propuesta de Ana María Arjona quien lo define como la capacidad del individuo de tomar la decisión de actuar de una manera particular dado un conjunto (más o menos reducido) de alternativas. En este sentido, la agencia se contrapone a un enfoque determinista según el cual la voluntad no juega un papel importante en la acción ya que ésta está determinada por uno o varios factores estructurales. (Arjona, 2011:113).

⁹¹ Por sistema de autoridad asumo la propuesta de Arjona que lo define como “el conjunto de normas que regulan la interacción humana de una localidad dada. Dicho sistema puede variar en tres dimensiones: primero, el reconocimiento de las normas como válidas (o legítimas) por parte de los miembros de la comunidad; segundo, su eficacia (es decir, si son obedecidas por la mayoría); y tercero, su arraigo en la población.” (Arjona, 2011:127)

⁹² Sin dejar de insistir en que el estado no es una cosa ni un aparato sino un conjunto de procesos ligados a aparatos como señala Trouillot, hago referencia aquí al estado como actor de la forma en que comúnmente es reconocido por los ciudadanos, es decir, como un conjunto de instituciones particulares y específicas que interactúan con otros actores como lo son la guerrilla, las élites locales y la población.



por la ciudadanía en variados aparatos o entidades- puede ejercer sobre la población con su amplio poder económico, coercitivo y de adecuación institucional legal. Otras son las posibilidades de influir con que cuenta la guerrilla, si nos basamos en los objetivos del grupo a nivel local, su proceso de inserción local y en las prácticas resultantes del poder de las armas. Y finalmente, otras son las posibilidades de los habitantes desde su capacidad de agencia para potenciar la configuración regional según sus intereses y solidaridades sociales. Estas diferencias hacen que la interacción entre actores no sea homogénea, que las acciones que realicen –aunque versen sobre los mismos temas o asuntos- no puedan valorarse o evaluarse en pie de igualdad, ni tenga los mismos resultados o desenlaces en el territorio.

Es precisamente en este tipo de interacciones y de relaciones de poder asimétricas en el que puede identificarse la materialidad del estado. Es decir, es en esa disputa por el poder a través del despliegue de los poderes en contextos asimétricos con los que cuenta cada actor, como se va configurando el proceso reconocido como sistema estatal y que puede rastrearse en prácticas, procesos y efectos que pueden identificarse tanto en los sitios centrales de los gobiernos nacionales, como también en esferas o espacios particulares diferentes al gubernamental como menciona Trouillot (2011). Para el caso concreto de San Vicente del Caguán, los efectos del estado y las tensiones en las relaciones de poder que señalo, podemos rastrearlas a través del aparato organizativo que han constituido los campesinos de la zona rural y que derivan de su experiencia histórica como región marginal y de violencia.

El devenir histórico por el cual se conformó el actual entramado social en San Vicente del Caguán, hace que no todos los procesos organizativos de la zona rural puedan ser analizados y comprendidos de manera homogénea ni en el espacio ni en el tiempo, ni como un ejercicio simple



de imposición de modelos organizativos de la guerrilla sobre comunidades inermes. En esta dirección, es necesario observar con detenimiento lo que Nicolás Espinosa (2010 y 2012) ha denominado procesos enmarcadores, los cuales pueden entenderse como los elementos del contexto regional y las trayectorias políticas que sus habitantes han trasegado en la configuración del proceso colectivo de organización, participación y movilización social.

Así por ejemplo, puede decirse que los procesos enmarcadores que dieron paso a la conformación de las asociaciones antes mencionadas fueron, para el caso de AMCOP y ASABP, tanto las múltiples movilizaciones-desplazamientos producto de los ataques militares a los que fueron sometidos sus pobladores por parte del ejército nacional (Espinosa 2012), como también por el proceso de conformación de la ZRC y su establecimiento formal. Para el caso de ASCAL-G, fue el proceso colonizador reciente y la acelerada deforestación lo que llevo rápidamente a los campesinos a organizarse teniendo como punto común de unidad inicial, la protección del medio ambiente. Por su parte ASOPEPROC y CORPOADYARÍ, sus propuestas organizativas fueron resultado de las posibilidades económicas emergentes durante la coyuntura de los Diálogos del Caguán adelantados en el territorio. Para el caso de la ACISC, su proceso enmarcador estuvo encuadrado por la búsqueda de protección e impulso a los pueblos indígenas de la región. En cuanto a ASOREGIONAL, ASOCAMPO y ASOATROC, puede decirse que los mismos estuvieron relacionados con la grave situación de violación de los derechos humanos que vivieron los pobladores a mediados de la primera década del 2000, por la necesidad de las comunidades de las juntas aún no asociadas de organizarse para mejorar sus niveles de vida, y a la influencia decisiva que entró a tener el Movimiento Marcha Patriótica creado en el año 2010, que a mi modo de ver, recoge en parte las nuevas formas de ser y hacer política para una generación emergente de líderes.



Además de estos factores, es preciso recordar que los mismos responden a identidades políticas y culturales diferentes, se desenvuelven en áreas geográficas distintas y en comunidades con pobladores de orígenes diversos, aspectos que inciden en la interacción entre las mismas comunidades y con los demás actores regionales. De esta forma, mientras ASOATROG retoma la sedimentación de vivencias previas de una población que se creó y consolidó como cruce de caminos durante la bonanza cauchera desde finales del siglo XIX, y que desde los años 60, permaneció bajo el influjo del cacique liberal Hernando Turbay Turbay y su familia hasta el exterminio de esta por parte de las FARC en el año 2000; el proceso de AMCOP y ASABP responden a la experiencia colonizadora de los años cincuenta del siglo XX, de campesinos expulsados de la zona andina a causa de la Violencia y la exclusión económica, y que gracias a la colonización armada logran ubicarse en un área geográfica de similares características de las que provenían. Por su parte, ASCAL-G es producto de la expulsión de campesinos liberales de San Vicente del Caguán y de otros provenientes de diferentes zonas del país que en los años noventa llegan a colonizar la zona rural de La Macarena en búsqueda de mejores condiciones de vida. En esa época la zona rural de La Macarena era conocida como El Refugio. Por su parte, CORPOADYARÍ ejerce un nivel de influencia en áreas geográficas más selváticas que obligan a una economía y vinculación diferente a la de la región andina.

Son precisamente estos procesos enmarcadores de largo aliento los que dotan de sentido y significado la configuración de las distintas formas organizativas, tanto de juntas como de las asociaciones. De igual forma, son estos procesos los que junto con experiencias demarcadas coyunturalmente, van disponiendo el entramado de relaciones e interacciones que se van tejiendo entre los distintos actores que hacen parte del conjunto social. Por esta razón, no es posible afirmar



que el estado esté completamente ausente localmente o que exista un vacío de poder estatal, ni que la guerrilla imponga sus normas a la comunidad y esta obedezca sin reparo alguno por el temor de las armas. Tampoco es factible afirmar que la ausencia o vacío estatal sea producto de las ocupaciones o controles de hecho que los actores armados ilegales adelantan en el territorio, en este caso las FARC-EP, y de la dificultad del estado para confrontarlas.

Se trata más bien, de modelos combinados de ordenamiento y autoridad que en buena parte de las ocasiones se complementan o superponen en un proceso en el que los campesinos a través de la organización popular, se apropian y construyen sus propios mecanismos de regulación y legibilidad para hacer frente a estos mismos mecanismos diseñados e implementados por el estado central y que regularmente los desconoce a ellos como sujetos políticos. No se trata sin embargo de la construcción de un poder local campesino que vaya necesariamente en contraposición o en sustitución del poder del estado central, sino de la construcción de un ordenamiento local cuyo objetivo principal es mejorar las condiciones y calidad de vida de la población en una región de rápido crecimiento pero de poco reconocimiento, que busca con este proceso su reivindicación e inclusión como sujetos políticos en la vida nacional. A la postre estas dinámicas derivan en la consolidación del proceso de formación del estado a nivel local y en modelos alternativos de organización social.

Esta amalgama de ordenamientos puede verse reflejada en distintos ámbitos o espacios de la organización regional. En materia de seguridad por ejemplo, contrario a la concepción general, es donde parece evidenciarse con mayor regularidad la combinación “exitosa” –si puede llamarse así– de los diversos ordenamientos, al menos en tiempos de “normalidad” regional. Es decir, cuando ningún actor (estado, guerrilla o población) adelanta alguna acción extraordinaria y/o coyuntural



(bombardeos, hostigamientos, combates, marchas o paros campesinos) distinta a la de su trasegar habitual que modifique el “equilibrio” cotidiano en el territorio. En estas condiciones, los diversos modelos normativos o regulatorios parecen combinarse o acoplarse de maneras que a veces son incluso paradójicas pero efectivas⁹³.

En los relatos y entrevistas recogidos se puede observar que el poder está disperso en varios actores: el poder que tiene la guerrilla, el del estado y el de las organizaciones campesinas. En suma, este poder no es homogéneo en el municipio de San Vicente. Por ejemplo, en las zonas donde la identidad política liberal es más fuerte, como en el casco urbano y sectores circunvecinos, o en algunos sectores limítrofes como el municipio de Puerto Rico, donde existen áreas económicas de ganaderos más consolidados y la guerrilla no ha sido decisiva en su configuración social, estos pobladores son más reticentes a cumplir con las ordenes de las FARC-EP como también las decisiones de las asociaciones, a menos que sea la fuerza la que medie en la relación, circunstancia en la cual buscan la protección del estado y la fuerza pública. Caso contrario sucede en la zona montañosa del municipio, cuya historia ha estado enmarcada en procesos históricos de exclusión social y en formas de organización comunitaria y política de izquierda, lo que hace que la relación con la guerrilla sea más de negociación o cooperación⁹⁴ que de rechazo, sin que pueda decirse que sus pobladores son automáticamente la base social del movimiento armado o que estén en exclusiva sometidos a su poder militar. Es, más bien, una relación dinámica, cargada de matices.

⁹³ Un líder campesino del Pato me narró este tipo de experiencias de la siguiente manera: “En alguna ocasión, la guerrilla prohibió el tránsito por una carretera que comunicaba dos inspecciones entre las seis de la tarde y las seis de la mañana. Puso un letrero gigante a la entrada de la carretera para que todos se enteraran. Como a los dos días el ejército monto un retén al lado de la valla y puso una talanquera para que nadie pasara en las mismas horas que la guerrilla había prohibido el paso, que para garantizar la seguridad de la gente que pasaba por ahí. Mejor dicho, el ejército hacía cumplir el mandato que la guerrilla impuso (risas).”

⁹⁴ Utilizo el término cooperación en la forma que lo propone Ana María Arjona (2011) quien se refiere de esta forma a las distintas conductas que los civiles adoptan por cualquier motivo (no exclusivamente por simpatía ideológica o de cualquier tipo con los armados), pero que benefician a los grupos armados.



De esta forma, el problema de “obediencia” de la población hacia las juntas, las asociaciones y la guerrilla, más allá de tratarse del simple del uso de la violencia o de la coerción para hacer efectivo el cumplimiento de normas y disposiciones (el cual sin duda es un factor que no se puede obviar en la región), padece del mismo síntoma que la autoridad estatal: las variaciones en la percepción del nivel de legitimidad de la autoridad. Este nivel puede medirse por el grado de efectividad a la hora de resolver o solventar necesidades puntuales de una comunidad, proceso que puede haber requerido la complementariedad o el antagonismo en varios niveles organizativos. Por esta razón, es común encontrar entre líderes, pobladores y funcionarios municipales, opiniones diferenciadas frente al modelo de ordenamiento que se vive en la región.

Lo que debe observarse y analizarse en este tipo de experiencias de combinación de modelos de ordenamiento, es el tipo de estado que se va construyendo en lo local y que es el resultado de los procesos, interacciones y tensiones de los distintos actores que emplean poderes asimétricos. El no reconocimiento del desequilibrio de estas relaciones, conduce a la reiteración de lugares comunes donde se señala y estigmatiza a la población de estas localidades como comunidades organizadas por fuera de la ley, al tiempo que se les desconoce como interlocutores válidos para adelantar ejercicios de reclamación, propuesta y articulación de modelos autónomos de organización. Por el contrario, desde la perspectiva de estos mismos campesinos se demuestra su interés por su vinculación y construcción conjunta del estado al afirmar que: “todos somos estado, el estado somos el pueblo colombiano, (...) el estado somos nosotros, pero los gobernantes que gobiernan este estado son unos, pero todos somos estado y podemos construirlo”, razón con la que explican el tipo de ordenamiento que se desarrolla en la región, que no es producto de la fuerza,



sino del ejercicio consciente de su ciudadanía, una ciudadanía diferencial que no ha sido reconocida ni valorada social e históricamente.

Conclusiones

El análisis de la configuración estatal en el nivel local que tuvo como fuente principal de inspiración las prácticas y rutinas cotidianas que identifiqué en el municipio de San Vicente del Caguán, pone de presente lo inadecuado que resulta suponer al estado como un ente compacto y homogéneo que se desenvuelve por igual en toda la geografía nacional, así como también de lo inconveniente de afirmar que la actual situación local se deba a la “ausencia del estado” o la “cooptación” estatal y regional por parte de grupos armados al margen de la ley. El recuento conceptual, histórico y relacional que llevé a cabo de forma breve, esboza la complejidad de las interacciones entre actores, intereses y modalidades de acción que se desarrollan en los espacios subnacionales y que tienen como consecuencia el desenvolvimiento de tipos específicos y diferenciados de ordenamiento, los cuales no pueden considerarse como mecanismos u órdenes por fuera de la ley y del ordenamiento estatal, sino por el contrario, como efectos que desencadena la construcción del estado en el espacio local.

Hago referencia aquí a los efectos del estado en un doble sentido: como respuesta o consecuencia de las prácticas adelantadas por el estado central, y como funciones estatales que adelantan agentes no estatales. Es decir, en el primero de los casos me refiero a la forma en que el campesinado como grupo social responde a la inoportuna e inoperante intervención de agencias gubernamentales que solo ven adecuado y conveniente el desarrollo de políticas policivas y punitivas antes que sociales en la región. En el segundo caso, es como la organización campesina asume funciones y atribuciones propias del estado en cuanto a la creación de un ordenamiento que les ayude a mejorar



sus condiciones de vida e integrarse en mejores condiciones al conjunto nacional. En ambos casos sin embargo, no se puede pasar por alto las condiciones específicas en que se desenvuelven estos efectos, como tampoco el tipo de poder efectivo que cada actor local está en capacidad de desplegar.

En esta dirección, es importante señalar que el ejercicio de poder adelantado por el estado central en el Caguán, el cual ha girado en torno a la definición de una identidad regional contrapuesta a la nacional con el objetivo de justificar una intervención diferencial –centrada en el accionar militar–, es uno de los factores primordiales que ha dotado de significado social y político a las respuestas comunitarias que se tejen y son apropiadas por los pobladores. Así, la organización de base y el ordenamiento social campesino, el cual es más efectivo en la provisión de servicios y solución de problemas en lo cotidiano, es el mecanismo para contrarrestar el poder estatal oficial con miras a quebrar en parte el desequilibrio en las interacciones y poder negociar en condiciones más ventajosas a las acostumbradas de inferioridad y subordinación total impuestas desde el estado central.

Así mismo, la guerrilla al igual que el estado, ha sido en el Caguán un histórico y poderoso agente de cambio que ha impulsado transformaciones favorables en unas ocasiones y limitado e imposibilitado acciones campesinas o del estado en otras. No obstante, a diferencia de los agentes de gobierno, la insurgencia tiene en las condiciones de marginalidad regional y en la pérdida de legitimidad estatal, una estructura de oportunidad política para posicionarse en distintos espacios comunales. A pesar de esta aparente ventaja, la actividad insurgente no puede comprenderse ni como conducción ideológica ni imposición forzada de la experiencia campesina, pues se trata de esferas y actores diferenciados en el espacio local.



Es precisamente en la combinación entre los dispositivos organizacionales del estado, de la guerrilla y de los campesinos; en el poder asimétrico que cada actor está en capacidad de desplegar y en las tensiones que allí se generan; que se va construyendo el estado en lo local.

Por esta razón, es necesario analizar y reconocer la importancia de la estructura organizativa constituida desde la base campesina en el Caguán en varias direcciones: primero, como la capacidad de adaptación de los pobladores a circunstancias políticas, sociales y económicas adversas, pero no como una adaptación pasiva sino como un ejercicio propositivo de transformación en el cual hacen uso de sus acumulados colectivos de memoria y experiencia histórica de exclusión y resistencia. En segundo lugar, porque la conformación de estructuras propias les permite proyectarse con mayor autonomía frente al estado y los actores armados, a pesar de la asimetría de su poder, y poder posicionarse en mejores condiciones al momento de su integración al ordenamiento nacional y en el desarrollo del país. En tercer lugar, porque el mismo sistema campesino puede leerse como forma de bloqueo de las lógicas y estrategias, tanto del estado como de la guerrilla, de ocupar y ejercer control en el territorio. Es decir, a pesar que todo el aparato organizativo creado por los campesinos se entrecruza e interactúa con los modelos y estructuras estatales y guerrilleras, es también el mecanismo más concreto y efectivo de diferenciarse de los demás actores por un lado, al igual que les permite relacionarse con ellos en condiciones menos desfavorables por otro. Es en últimas, una estrategia de autoprotección dentro del propio territorio y de reconocimiento hacia afuera del mismo.

En el ejercicio del reconocimiento de estos procesos como características fundamentales de formación y adecuación del estado en el nivel local, el recuento histórico de poblamiento y consolidación social de la localidad, permitió observar como cada una de las acciones de los



agentes intervinientes, especialmente las del estado central, fueron fundamentales en el tipo de respuestas comunitarias, en el tipo de escenario que se conformó y en las relaciones que se establecieron. Teniendo esto de presente y de cara a la actual coyuntura de diálogos de paz, en el que la región del Caguán en particular se encuentra en el centro del debate por su histórica relación con la guerrilla, es indispensable profundizar en las estructuras sociopolíticas campesinas no como sistemas por fuera o al margen del estado (sistemas ilegales), sino como estrategias articuladoras de procesos diversos en cabeza de actores distintos con intereses opuestos (sistemas alternativos), capaces de integrar de hecho y no solo en el discurso, regiones marginales con experiencias eficientes y eficaces de largo aliento.

Bibliografía

Abrams, Philips. (2000 [1977]). Notas sobre la dificultad de estudiar el estado. *Journal of Historical Sociology* Vol.1 No.1, pp.79-98. Traducción Orlando Jaramillo Gómez

Alcaldía de San Vicente del Caguán (2012) *Plan de Desarrollo participativo 2012-2015: ¡El cambio está en marcha y usted hace parte de él!*.

Arango, Carlos (1984). *FARC veinte años. De Marquetalia a La Uribe*. Bogotá, Ediciones Aurora.

Arjona, Ana María (2011). Grupos armados, comunidades y órdenes locales: interacciones complejas. En *Hacia la reconstrucción del país: desarrollo, política y territorio en regiones afectadas por el conflicto armado*, ed, Fernán González, pp. 105-167. Bogotá, Odecofi-Cinep.

Artunduaga, Felix (1984). *Historia general del Caquetá*. Florencia, Caquetá: Tesorería Municipal de Florencia: Lotería del Caquetá.

Bolívar, Ingrid (2011). Prácticas disciplinarse y promesas de la etnografía: redescubrir el estado. En *La multiculturalidad estatalizada. Indígenas, afrodescendientes y configuraciones del estado*,



comp. Margarita Chaves, pp. 49-63. Bogotá, Colección Antropología de la modernidad. Instituto colombiano de antropología e historia – ICANH.

Bourdieu, Pierre (1994). *Espíritus del Estado. Génesis y estructura del campo burocrático*. En *Razones Prácticas*. Anagrama.

Briñez, Gustavo (1998). *Historia de la región de El Pato Caquetá, Colombia*. Santafé de Bogotá, Universidad Surcolombiana de Neiva, Trilce Editores.

Castellanos, Magdalena (1997). Incidencia de la colonización dirigida en el poblamiento del piedemonte caqueteño. En *Memorias del primer encuentro de investigadores del piedemonte amazónico*. Varios autores, pp.135-145. Florencia, OEA, Colciencias-ICFES e Instituto SINCHI. Universidad de la Amazonia.

Castillo, Elsy, Roberto Ramírez, Hernán Quintero, Fanny Sierra y Alberto Valencia (1995). *Los pobladores de la selva*. Tomo 2. Santafé de Bogotá, Instituto Colombiano de Antropología, Colcultura, PNR y Universidad de la Amazonia.

Contraloría General de la República (2002). *Modelo, política e institucionalidad agropecuaria y rural*. Bogotá.

Das, Veena y Deborah Poole (2008). El Estado y sus márgenes. Etnografías comparadas. *Cuadernos de antropología social No.27*, pp.19-52

Espinosa, Nicolas (2003). *A la otra orilla del río: la relación entre la guerrilla y los campesinos de La Macarena*. Tesis de Sociología, Departamento de Sociología, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

_____ (2010). *Política de vida y muerte. Etnografía de la violencia de la vida diaria en la Sierra de la Macarena*. Bogotá, Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH.



Espinosa, Nicolás, Eugenia González y Erika Ramírez (2012). Etnografía, territorio y conflicto armado. Metodología de una investigación sobre la construcción regional de los Llanos del Yarí (Caquetá-Colombia). *El Ágora U.S.B.* Vol.12, No.2, pp.329-348. Consultado el 16 de octubre en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1657-80312012000200004&script=sci_arttext

Fajardo, Darío (1993). *Espacio y sociedad. Formación de las regiones agrarias en Colombia.* Corporación colombiana para la amazonia – Araracuara. Santafé de Bogotá, Ediciones Antropos Ltda.

_____ (1997). *Colonización y estrategias de desarrollo.* Instituto Interamericano de Cooperación para la agricultura – IICA. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales – IEPRI. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

_____ (2002). *La tierra y el poder político: la reforma agraria y la reforma rural en Colombia.* Boletín FAO.

Gálvis, Fernando (2007). *El municipio colombiano. Introducción al derecho urbanístico municipal y territorial del siglo XXI.* Bogotá, Editorial Temis S.A. Cuarta edición.

González, José Jairo (1992). *Espacios de exclusión: el estigma de las Repúblicas Independientes, 1955-1965.* Bogotá, Cinep.

Gupta, Akhil, y Aradhana Sharma (2014). La globalización y los estados poscoloniales. En *Las burocracias. Una aproximación distinta a la manera en la que pensamos el Estado.* Autores Akhil Gupta, Aradhana Sharma, Michael Lipsky, Charles Wright Mills y Lina Buchely, pp. 97-178. Traducción Carlos Morales de Setián Ravina. Bogotá, Siglo del Hombre Editores, Universidad de los Andes, Pontificia Universidad Javeriana-Instituto Pensar.



Jaramillo, Jaime, Leonidas Mora y Fernando Cubides (1985). *Colonización, coca y guerrilla*. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Alianza Editorial Colombiana.

Joseph, Gilbert y David Nugent (2002). Cultura popular y formación del Estado en el México revolucionario. En *Aspectos cotidianos de la formación del estado. La revolución y la negociación del mando en el México moderno*, eds. Gilbert Joseph y David Nugent, pp.31-52. México, Ediciones Era.

Machado, Absalón (2004). *Estado del arte sobre la producción académica en el sector rural 1986-2003*. Proyecto Prospectiva de desarrollo rural y agrario para la paz en Colombia. Universidad Nacional de Colombia, Centro de Investigaciones para el Desarrollo, Colciencias-CIID. Consultado el 25 de septiembre de 2015, en: http://www.institutodeestudiosurbanos.info/dmdocuments/cendocieu/coleccion_digital/Mercado_Tierras_Rurales/Proyecto_Prospectiva_Desarrollo-Machado_A-2004.pdf

Mestizo, Carmen Alicia (2001). *Marchas cocaleras de 1996: Putumayo y Caquetá, ejemplo de tenacidad campesina*. Tesis de Derecho. Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

Moreno, Diana (2012). *Relación de resultados electorales del Caquetá*. Documento interno de trabajo, Cinep. Copia mimeografiada.

_____ (2013a). *Políticas agrarias e institucionalidad rural en Colombia*. Bogotá, Cinep. Copia mimeografiada.

_____ (2013b). ¿Paro agrario nacional o "paros" agrarios regionales?. *Revista Cien Días* No.80. Bogotá, Cinep.



_____ (2014). Procesos organizativos locales y regionales e institucionalidad: elementos a tener en cuenta en los acuerdos de paz. *Controversia* No.202, Cuarta etapa junio 2014, pp. 123-161.

Nugent, David (2007). Governing State. En *A companion to the Anthropology of Politics*, ed. David Nugent and Joan Vincent, pp. 198-215. Malden, MA, Blackwell Pub.

Pulecio, Jorge y Herminso Pulecio (1999). *Retos de la región amazónica para el desarrollo humano sostenible. El espacio de la sociedad civil*. Bogotá, Fundación Friedrich Ebert de Colombia, Fescol. Consultado el 7 de septiembre de 2015 en: http://www.ipes.gov.co/images/publicaciones/LIBRO_AMAZONIA_HERMINSO_Y_JORGE_PULECIO_2013_sin_resumen.pdf.

Perdomo, Gabriel y Mireya Quiñones (2011). *Colonos: hijos del desarraigo y la esperanza. Memorias de la colonización caqueteña años veinte al cincuenta del siglo XX*. Neiva, Bett Publicidad.

Pérez, Edelmira. Farah, M. A.; Rojas, M. (2000). *Reconstruir la confianza en Colombia: nueva institucionalidad en el sector rural*. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá.

Quintero, J.C. (1988). *¿Qué paso con la tierra prometida?. Aspectos históricos de tenencia de la tierra. Análisis comparativo de proyectos y leyes de Reforma Agraria en Colombia*. Centro de Investigación y Educación Popular. Bogotá.

Ramos, M. (2001) *Colombia Tierra y Paz. Experiencias y caminos para la Reforma Agraria. Alternativas para el siglo XXI 1961-2001*. Instituto Colombiano de la Reforma Agraria – INCORA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Bogotá.



Roitman, Janet (2004). Productivity in the Margins. The Reconstitution of State Power in the Chad Basin. En *Anthropology in the Margins of the State*, ed. Veena Das and Deborah Poole. Santa Fe, New Mexico, Oxford, School of American Research Press

Sayer, Derek (2002). Formas cotidianas de formación del estado: algunos comentarios disidentes acerca de la hegemonía. En *Aspectos cotidianos de la formación del estado*, comp. Gilbert Joseph y David Nugent. México D.F., Ediciones Era.

Serje, Margarita (2011). *El Revés de la Nación: Territorios Salvajes, Fronteras y Tierras de Nadie*. Bogotá, Ediciones Uniandes-Ceso.

SINCHI (2000). Caquetá. Construcción de un territorio amazónico en el siglo XX. Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, Sinchi – Ministerio del Medio Ambiente. Tercer Mundo Editores, Colombia.

Tilly, Charles (1992). Coerción, capital y los Estados europeos 990-1990. Madrid, Alianza Editorial.

Trouillot, Michael-Rolph (2011). *Transformaciones globales. La antropología y el mundo moderno*. Traducción: Cristóbal Gnecco. Universidad del Cauca. CESO – Universidad de los Andes.

Urcuyo, Constantino (2010). *Reflexiones sobre institucionalidad y gobernalidad democrática. Una visión desde el contexto centroamericano*. FLACSO, San José de Costa Rica.

Valencia, Alberto (1998). Caquetá: violencia y conflicto social. En *Conflictos regionales – amazonia y Orinoquia-*. Autores José Jairo González, Roberto Ramírez, Alberto Valencia y Reinaldo Barbosa, pp.131-153. Bogotá, Fescol – IEPRI.



Vargas, Lorenzo Andrés (2009). Ocupación y tenencia de la tierra en la región El Pato-Balsillas, San Vicente del Caguán: entre lo legítimo y lo legal. En *Ecología Política de la amazonia. Las profusas y difusas redes de la gobernanza*, ed. Germán Palacios, pp.253-269. Bogotá, ILSA-Ecofondo-Universidad Nacional de Colombia.

Vargas, Ricardo (1996). De la neocolonización a la guerra a las drogas. *Cien Días vistos por Cinep*. Vol.8, No.34.

Vásquez, Teófilo (2013). *Territorios, conflicto armado y política en el Caquetá: 1900-2010*. Tesis de grado para optar por el título en geografía. Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Geografía, Universidad de los Andes. Bogotá.

20. EL PAPEL DEL MOVIMIENTO SOCIAL EN LA PRODUCCIÓN DE IDENTIDAD CAMPESINA TERRITORIALIZADA. UNA APROXIMACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DE TERRITORIO AGROALIMENTARIO EN EL MACIZO COLOMBIANO



Maite Yie Garzón⁹⁵
Pontificia Universidad Javeriana
maiteyie@yahoo.com

En los últimos años, desde diferentes frentes, se viene reclamando el reconocimiento estatal de los campesinos como sujetos colectivos de derecho y la demarcación de sus territorios destinados a albergar una “economía y forma de vida campesina”. En el marco de las negociaciones actuales del gobierno colombiano con las Farc-EP y con el ELN, los representantes de estas dos guerrillas han puesto en la agenda de negociación el reconocimiento de la territorialidad campesina. Simultáneamente, dos importantes plataformas de articulación de organizaciones campesinas en Colombia como son Fensuagro y el Coordinador Nacional Agrario, ligados, respectivamente, a Marcha Patriótica y al Congreso de los Pueblos, vienen reclamando el reconocimiento de la territorialidad campesina, ya sea bajo la figura de “reservas campesinas”, en el primer caso, o de “territorios agroalimentarios”, en el segundo. Adicionalmente, la Cumbre Agraria, Étnica y Popular, una instancia de articulación de diferentes organizaciones de base rural que incluye a indígenas, afrocolombianos y el sector rural no marcado étnicamente reunido bajo una membresía “campesina”, incluyeron en su pliego de demandas el reconocimiento de la territorialidad

⁹⁵ Profesora de planta Departamento de Antropología, Pontificia Universidad Javeriana. En licencia de estudios. Estudiante del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Estadual de Brasilia, Unicamp (Brasil).

Miembro del Centro de Estudios Rurais (Ceres) - Universidade Estadual de Brasilia, Unicamp (Brasil); del Centro de Pensamiento Raiz-AL; y del Centro de Estudios Sociales y Culturales de la Memoria (CESYCME) de la Pontificia Universidad Javeriana –Bogotá.

Integrante de los grupos de investigación: *Movimientos, Ocupaciones y Estado* (MOVE), afiliado al Ceres, y del grupo de Historia cultural: *Prácticas, imaginarios y representaciones* (Universidad Nacional de Colombia, Universidad de Antioquía, Universidad de los Andes y Pontificia Universidad Javeriana)



campesina y vienen impulsando un Paro Agrario para inicios de junio destinado a promover esta y otras reivindicaciones. Finalmente, a mediados de abril de este año, el senador del partido de izquierda democrática Polo Democrático Alberto Castilla, presentó un proyecto de ley de reconocimiento de los campesinos y campesinas como sujetos colectivos de derecho, el cual se encuentra en armonía con la propuesta de Declaratoria de los Derechos de los Campesinos y otras personas trabajadoras del campo promovido por Vía Campesina ante la Unesco.

En el caso de las organizaciones campesinas, tales reclamos de reconocimiento de la territorialidad campesina cobran sentido bajo un modelo de desarrollo favorable al agro-negocio y a la minería a gran escala, la presión de grupos armados ilegales, y un sistema que otorga pocas herramientas jurídicas de acceso a tierra y de protección de sus territorios a aquellas poblaciones no diferenciadas étnicamente. En este escenario, el Coordinador Nacional Agrario (CNA), viene reclamando la adopción oficial de la figura de “territorios agroalimentarios”. Al mismo tiempo, los miembros de la dirigencia de las organizaciones que lo integran vienen socializando los contenidos de la propuesta entre los habitantes de las zonas donde tienen presencia. En este proceso, algunas luchas sociales y culturales son codificadas como luchas por la “soberanía” y por el “cuidado de la vida”, y las subjetividades políticas, cimentadas usualmente sobre identificaciones de clase o étnicas, se construyen en torno a nuevas modalidades de adscripción territorial.

En el suroccidente colombiano, región donde vengo trabajando, la construcción de un sujeto campesino territorializado tiene a las organizaciones sociales como uno de sus principales agentes. Una de ellas es el Comité de Integración del Macizo Colombiano – Cima, vinculada al CNA. Desde hace algún tiempo sus dirigentes vienen impulsando la construcción de un “territorio agroalimentario” que cobijaría una amplia región integrada por varios municipios del norte de



Nariño y del sur del Cauca. Dicha figura, desarrollada por el CNA en su IV y V Asamblea, incluye la conformación de autoridad campesina, de un plan de vida para el territorio agroalimentario y de una guardia campesina, y en el caso del CIMA, el fortalecimiento de la “economía propia” y de una “legislación propia”.

Teniendo en cuenta este escenario, esta ponencia parte de la pregunta por las formas en que, desde el movimiento social, particularmente desde el Cima, se está construyendo una identidad campesina territorializada entre quienes habitan dicha región, así como sobre su lugar en las luchas contra la implementación de grandes proyectos mineros en la zona. Para ello, me basó en una aproximación etnográfica a la producción de movimiento social enmarcada en mi trabajo de campo de un año y medio que incluye la realización de entrevistas a distintos miembros del Cima, observación etnográfica de sus encuentros y acciones colectivas, así como la participación directa en algunos espacios de discusión sobre su propuesta de construcción territorial.

Para ello, en la primera parte de la ponencia, exploraré algunas de las prácticas concretas que participan del proceso de construcción de territorio agroalimentario: a) la realización de Mingas por la Soberanía y la Armonización del Territorio, b) la conformación de una guardia campesina y c) la construcción de autoridad campesina.

En la segunda parte, analizó como la construcción de esa identidad campesina territorializada se liga a un proceso de sacralización del territorio y los elementos que lo componen. En diálogo con los análisis de Appadurai (1991) y de Callón (1998) sobre el proceso de construcción cultural de las mercancías, argumento que tal proceso de sacralización hace parte de un esfuerzo por contrarrestar el proceso de mercantilización del agua, los bosques, el suelo y el subsuelo, que pasa



por su producción como bienes no transables en tanto elementos de un entramado indisoluble e inconmensurable: el territorio.

Finalmente, en la tercera parte del texto, esta vez en diálogo con la noción gramsciana de hegemonía y la perspectiva de economía moral, argumentó que ambos procesos (la construcción de una identidad campesina territorializada y la sacralización del territorio) hacen parte de una disputa en torno a los criterios morales que definen la legitimidad de distribución, circulación y acceso a diferentes tipos de bienes. Planteo que, en el caso del CIMA, su reivindicación como verdaderos dueños del territorio se basa en un discurso que los posiciona como “guardianes de la vida” en una lucha agonística contra las multinacionales mineras, representadas como agentes de muerte, desgaste y destrucción.

Referencias bibliográficas

Appadurai, Arjun. "Introducción: Las mercancías y la política del valor." In *La vida social de las cosas. Perspectiva cultural de las mercancías*, by Arjun Appadurai, 17-88. México D.F.: Grijalbo, 1991.

Callon, Michell. "Introduction: the embeddedness of economic markets in economics." *The Sociological Review* 46, no. S1 (1998): 1-57.

Gramsci, Antonio. *Cuadernos de la Cárcel*. Vol. IV. México D.F. : Era, 2008.

Scott, James. *The Moral Economy of Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. New Haven and London: Yale University Press, 1976.

Thompson, E.P. *Costumbres en común*. Barcelona: Crítica, 2000.

—. *Ensayos para una historia radical*. Barcelona: Crítica, 2000.



—. La formación de la clase obrera en Inglaterra. Barcelona: Crítica, 1980.

**SESIÓN 2: EXPERIENCIAS DE TERRITORIALIZACIÓN CON ENFOQUE DE
GÉNERO Y JUVENTUD**

Hora: 10:30am - 1:00pm

Salón: A- 102



Responsables:

21. EL INTERCAMBIO DE SEMILLAS Y SABERES EN LA DEFENSA DEL TERRITORIO: LA EXPERIENCIA DE LA RED DE MUJERES RURALES DE COSTA RICA

Gloriana Martínez Sánchez⁹⁶
Universidad de Costa Rica
Glorym88@gmail.com

En Costa Rica la producción agrícola para la exportación, tal es el caso de la piña, el banano, el café y los cítricos, se ha concentrado principalmente en manos de empresas transnacionales o de latifundios de capital nacional, esta situación ha generado una constante tensión entre las dinámicas de la agroindustria y la producción campesina en el campo costarricense.

Según el censo agropecuario 2014, de la extensión total del país, el 47,1% es superficie agropecuaria (INEC 2015), lo que demuestra el peso del agro como forma de producción, pero también de la existencia del espacio rural, como espacio donde confluyen intereses económicos, políticos y sociales, y donde transcurren diversidad de conflictos frente a las nuevas formas de acumulación y desigualdad. Por un lado, en el espacio rural se reproducen y desarrollan las comunidades y culturas campesinas e indígenas y por otro lado existe un aumento en el peso de la agroindustria y por lo tanto del trabajo asalariado agrícola.

⁹⁶ Investigadora del tema de movimientos sociales y acciones colectivas del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. Estudiante de la Maestría Centroamericana en Sociología, Universidad de Costa Rica. Integrante de la Asociación Tinamaste. Licenciada en Ciencias Políticas, Universidad de Costa Rica. Correo: glorym88@gmail.com



En este contexto, la presente ponencia se propone relatar el proceso organizativo de la Red de Mujeres Rurales de Costa Rica frente a la imposición de las políticas agroindustriales que generan el acaparamiento y despojo de territorial de las comunidades campesinas e indígenas, así como la imposición de lógicas de producción industrial.

La Red de Mujeres Rurales agrupa cerca de 600 mujeres campesinas e indígenas de distintas zonas del campo costarricense, y es desde la propuesta organizativa que se generan resistencias y tejido social para la defensa de la autonomía y soberanía alimentaria. De igual forma, el resguardo de las semillas y de los conocimientos ancestrales, así como la defensa del agua y la tierra son elementos centrales que articulan a esta organización desde la diversidad de mujeres que agrupa. Por lo que desde los espacios comunitarios y la vida cotidiana de las organizaciones de mujeres, se construyen las resistencias y luchas de esta organización.

En particular esta ponencia se centrará en la experiencia de los intercambios de semillas, la cual consiste –generalmente- en encuentros y visitas colectivas a las distintas comunidades donde las mujeres comparten sus semillas criollas y sus conocimientos y formas de sembrarlas. Esto ha permitido un intercambio real –más allá de lo simbólico- de diversidad de semillas y conocimiento de producción, así como un mecanismo de diálogo que permite la defensa del territorio y la soberanía alimentaria.

Frente al despojo y amenaza de los territorios campesinos e indígenas, la Red de Mujeres Rurales plantea que una de las formas de defender la tierra es produciéndola. Por esta razón, se realizan los intercambios de semillas y producción en colectivo, como forma de afianzar esta defensa, particularmente en comunidades que se encuentran en procesos de recuperación y tomas de tierras.



Parte de las reflexiones organizativas apuntan hacia una producción libre de agroquímicos y de monocultivos, afianzando la defensa territorial y transformando las parcelas familiares y colectivas hacia una producción más diversa y autónoma.

Es necesario recalcar, que esta ponencia se enmarca en un proceso de acompañamiento de esta organización desde hace más de 6 años como integrante de la Asociación Tinamaste, lo cual me ha permitido conocer la organización y entenderla desde su praxis. Asimismo, esta ponencia parte de un análisis para el desarrollo del proceso tesis de investigación en la Maestría Centroamericana en Sociología de la Universidad de Costa Rica.

Esta ponencia surge a raíz del diálogo con la Red de Mujeres Rurales, por lo que desde la reflexión y análisis académico se sitúa a la experiencia organizativa, como un proceso válido para la construcción de estas mujeres como sujetas epistémicas. Por lo tanto, es una propuesta crítica y autocrítica en miras de la profundización del análisis, tanto desde los espacios académicos como organizativos, para la defensa del territorio.

22. DEFENSA DEL CUERPO- TERRITORIO EN AMÉRICA LATINA: RESISTENCIAS CAMPESINAS FEMINISTAS

Leticia Urretabizkaia⁹⁷
Universidad del País Vasco (UPV)
letiuski@hotmail.com

Janaina Strunzak⁹⁸
Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MST)

⁹⁷ Universidad del País Vasco (UPV), letiuski@hotmail.com

⁹⁸ Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MST), terrajana@gmail.com



terrajana@gmail.com

Zoe Brent⁹⁹

Instituto Internacional de Estudios Sociales (ISS)

brent@iss.nl

Resumen:

En los análisis y reivindicaciones en torno al territorio en América Latina podemos encontrar la dimensión del cuerpo-territorio de las mujeres desde diferentes organizaciones campesinas. Sin embargo, se encuentran pocos ejemplos académicos que tomen este hecho y estas organizaciones como referencia. Por ello, esta comunicación pretende ahondar en los vínculos entre la defensa del territorio y la defensa del cuerpo- territorio de las mujeres partiendo de las organizaciones que lo están llevando a cabo. Esto nos permitirá ahondar en particularidades importantes para analizar de manera conjunta diversas cuestiones como el control del territorio, el poder político, el desarrollo rural, la distribución de la riqueza, las conflictividades sociales y las dinámicas políticas que subyacen a estos procesos.

En primer lugar analizaremos los impactos negativos que se dan en la actualidad en los territorios campesinos teniendo en cuenta la centralidad del cuerpo- territorio de las mujeres como territorio campesino. La lógica del territorio en base al poder territorial y capitalista es particularmente importante para entender los procesos de acumulación de capital y resistencia en América Latina. Si entendemos que el poder territorial consiste en el control sobre lugares, personas y espacios socio- políticos y el poder capitalista se basa en el control sobre el dinero y los procesos de

⁹⁹ Instituto Internacional de Estudios Sociales (ISS), brent@iss.nl



acumulación (Arrighi, 1994 y Harvey, 2003), incorporar la dimensión del cuerpo territorio nos permite apreciar la manera en que ambos poderes atraviesan los cuerpos y espacios socio- políticos de las mujeres y determinan su posición secundaria en el acceso a los recursos y los procesos de acumulación. De igual modo, la idea de la ‘reestructuración territorial‘ que combina la lógica del capital con la lógica del territorio e introduce las dimensiones de análisis de los lugares físicos, espacios políticos y significados sociales (Holt Giménez, 2008) es útil para analizar la cuestión agraria en América Latina y también lo es para analizar la cuestión agraria desde las implicaciones de estas tres dimensiones para los cuerpos territorios de las mujeres. La reestructuración de lugares, espacios y significados se da a múltiples niveles y escalas. En este caso, centraremos el análisis en la lógica territorial de resistencia, en concreto de las reivindicaciones políticas en torno a este tema de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, inserta dentro de La Vía Campesina (CLOC- LVC), como referente internacional que vehiculiza y articula las reivindicaciones campesinas. Nos basaremos en la revisión de datos secundarios y literatura sobre el tema así como la observación participante y las entrevistas semi estructuradas con representantes de la CLOC- LVC y de las organizaciones en su seno que están construyendo un feminismo campesino popular en base a estas reivindicaciones.

En segundo lugar, presentaremos la Soberanía Alimentaria y su articulación con el feminismo campesino popular en construcción como propuesta campesina clave para solucionar los problemas territoriales presentados. La soberanía alimentaria consiste en tratar los alimentos y el territorio como bienes comunes de la humanidad, como derecho de todas las personas y deber de los Estados. Desde el punto de vista alimentario, se concibe la soberanía alimentaria como el derecho de todas



las personas a disponer de alimentos sanos y suficientes todos los días, adecuados a su cultura, clima y geografía; y, el derecho a tener las capacidades de producir sus alimentos, esto es agua, aire, semillas y territorio. Desde el punto de vista territorial, la soberanía alimentaria implica una reforma agraria, en base a la democratización del acceso y uso de la tierra asegurando los condicionantes para la producción y autonomía de las comunidades campesinas. Teniendo en cuenta el papel protagonista de las mujeres en la alimentación y provisión de alimentos para los hogares, su vínculo con el cultivo y cuidado de los bienes naturales que aseguran la alimentación de sus familias es innegable y por tanto también lo es su papel en las luchas para defender el territorio. Analizaremos cómo partir de este papel fundamental de las mujeres para asegurar una soberanía alimentaria y un territorio equitativo e inclusivo que ponga en el centro a todas las personas que lo habitan.

Una vez presentados los efectos negativos y las propuestas para mitigarlos, analizaremos las convergencias y tensiones con las que se encuentran las organizaciones que enarbolan la reivindicación del cuerpo- territorio de las mujeres al llevar a la práctica esta construcción del feminismo campesino popular dentro de la CLOC- LVC. Con todo, partiendo de las realidades específicas y particularidades de agentes no hegemónicos como son los movimientos sociales agrarios en la región y en particular las mujeres dentro de los mismos, esperamos aportar al debate en torno a las problemáticas territoriales en las Américas.

Palabras clave: Territorio, soberanía alimentaria, feminismo, La Vía Campesina, cuerpo-territorio.



23. FORMAÇÃO DAS CRIANÇAS SEM TERRA NA LUTA PELA TERRA

Márcia Mara Ramos¹⁰⁰

¹⁰⁰ Do Setor de Educação do Movimento Sem Terra; do Grupo de Pesquisa História, Sociedade e Educação no Brasil – HISTEDBR. Mestranda em Educação na Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP marciapterra@gmail.com



Universidade Estatal de Campinas (UNICAMP)
marciapterra@gmail.com

Esse trabalho tem por objetivo socializar a prática educativa que o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) vem desenvolvendo com as crianças Sem Terra no seio da luta pela terra no Brasil.

Tendo presente que o lugar da infância no sistema capitalista historicamente foi demarcado pelo trabalho, seja pela exploração infantil, ou de sua família, na atualidade o consumismo é mais um elemento que se contempla na relação entre trabalho e capital.

A educação que a burguesia até os dias hoje vem pensando e oferecendo para os filhos da classe trabalhadora através de ações política, sociais, culturais e econômicas tem como intencionalidade estabelecer uma relação de dominação, e hegemonia da ideologia burguesa na formação de indivíduos padronizados individualistas e competitivos. Tais características vêm demarcando um intenso processo de despolitização, de desmobilização social e perda da concepção da luta de classes.

A criança faz parte desse contexto que e não se separa do projeto hegemônico do capital e que na sua especificidade desde a inserção da criança pobre da classe trabalhadora na vida da família, na creche, na escola, no trabalho entre outros, o direcionamento para a sua formação está ligado à sociedade em que ela vive.

No Brasil segundo Alentejano (2014) “a concentração fundiária é talvez a principal marca histórica do campo brasileiro” e na atualidade se mantém e se intensifica com o agronegócio, projeto de agricultura do capital, que com a modernização expulsa os trabalhadores do campo e se tornou uma frente importante em defesa da agricultura de mercado. Nas pesquisas de Lamosa & Loureiro



(2014), destaca-se as parcerias com o Estado brasileiro na área da “*formação intelectual*” no campo da indústria cultural, da comunicação de massas e da educação ambiental - de professores, crianças, adolescentes e jovens nas escolas públicas.

A criança nesse contexto e especificamente as do campo, tem enfrentado diretamente as investidas do capital na agricultura e na sua formação escolar. E nesse contexto, uma das questões para refletir é de como o MST, através da luta pela terra tem feito ações contra-hegemônicas com as crianças dos assentamentos e acampamentos contrapondo a formação da pedagogia do capital na disputa pela infância da classe trabalhadora?

As concepções de infância que o MST foi construindo ao longo de seus 31 anos têm uma perspectiva histórica, dialética e crítica com base na realidade social. E sua prática educativa está vinculada ao pensamento da Pedagogia Socialista, no qual se compõe a própria construção da Pedagogia do Movimento Sem Terra. E na construção da prática o resultado em si não é o mais importante, mas o processo de construção coletiva de formação humana é o que dá significado ao trabalho educativo no MST.

O surgimento do MST no final da ditadura empresarial-militar, e início na redemocratização do país, foi fruto do processo de modernização conservadora da agricultura no Brasil que expulsou muitos trabalhadores do campo, resultando também de um processo histórico da concentração fundiária desse país. Mobilizados pelas Pastorais Sociais, igrejas luteranas, Comunidade Eclesiais de Base, Comissão Pastoral da Terra – CPT e sindicatos, os trabalhadores do campo (pequenos agricultores, meeiros, arrendatários, posseiros entre outros), reivindicaram sua permanência no campo e a distribuição da terra no Brasil. O MST surge nesse contexto e se consolida como organização nacional de camponeses no Brasil, em 1984. (FERNANDES & STEDILE. 1999).



O MST vai dar continuidade à luta pela terra e pela reforma agrária, bandeira central das Ligas Camponesas, como também ao debate provocado pela Comissão Pastoral da Terra (CPT) que estimula a oficialização da organização nacional.

O MST¹⁰¹ define o seu caráter e objetivos como movimento popular e político de organização dos trabalhadores do campo, definindo que *“somos um movimento de massas de caráter sindical e política. Lutamos por terra, reforma agrária e mudanças na sociedade”*. (MST, 2001, p.153). E tem como princípios o enfrentamento ao latifúndio da terra, o latifúndio da ignorância e o latifúndio do capital.

A educação no contexto da luta dos trabalhadores Sem Terra foi uma das frentes fundamentais para as crianças, jovens e adultos. Pois a educação para os filhos da classe trabalhadora historicamente está atrelada aos interesses das classes dominantes em cada período. Portanto, no caso das crianças do campo além da ausência de uma oferta, sua população permaneceu por muitos anos com a ideia de que quem vive no campo não precisa estudar. E se quiser estudar deve ir para a cidade.

A origem da pobreza e da falta de escolarização da criança brasileira tem um largo processo na história do país desde a colonização. O lugar da Infância da classe trabalhadora no capitalismo sofre as consequências sociais juntamente com a sua família. A relação da infância com o trabalho na fábrica, na gênese do capitalismo, como apontam os estudos de Lombardi (2010), vai apresentar a rigorosidades da disciplina, os maus tratos, as regras, a brutalidade e a violência estabelecida, como marcas profundas na formação da infância no capitalismo.

¹⁰¹ O MST está organizado em 24 Estados, nas cinco Regiões do país. São mais de 350 mil famílias assentadas, 120 mil famílias acampadas morando debaixo de barracos de lona preta ou palha nos acampamentos espalhados em diferentes estados do Brasil. Mais informação no site do MST www.mst.org.br



No caminho percorrido pelo MST nesses 31 anos de existência enquanto organização política, suas atividades educativas, têm proporcionado para as crianças, ações contra hegemônicas no combate à indústria cultural, da relação do trabalho como princípio educativo, da coletividade e da luta como referencia principal na formação das crianças. As crianças dos assentamentos e acampamentos da Reforma Agrária vinculadas ao MST possuem uma infância forjada nas condições concretas da vida, no imaginário coletivo e na cultura de seu grupo social. Presentes em todas as fases da luta pela terra e por uma vida digna, as crianças são compreendidas como protagonistas e construtoras, junto com adultos.

As crianças Sem Terra participam da vida do Movimento e vivem a coletividade e a auto-organização no seu processo de formação em relação ao trabalho que vai certamente ter outro sentido para sua vida. Para que as crianças fossem enxergadas no MST, as práticas educativas com elas foram determinantes para o processo e alguns instrumentos políticos e educativos foram forjados no contexto do conflito agrário:

A luta por *escolas* dentro das comunidades Sem Terra; as *jornadas e Mobilizações Infantis* que surgiram na década de 1990 e ganham força nacional compondo o conjunto de ações políticas do MST e nos últimos cinco anos tem mobilizado em media de 15 mil crianças em nível nacional; a *Ciranda Infantil* espaço que garante a participação das crianças em todas as atividades do MST, que tem influenciado outras organizações da Via Campesina Brasil e internacional, proporcionado a participação efetiva das mulheres nos diferentes processos e espaços da luta pela terra.

Nesse processo da construção dos instrumentos políticos da infância Sem Terra, pela ausência de literatura crítica foi necessária a criação de referencias para a ocupação do universo infantil na comunicação e cultural. Foram produzidos coletivamente alguns materiais como fitas K7 e CDs -



Plantando Cirandas, livretos de cantigas infantis e literatura. Ou seja, o MST passou a produzir sua própria música, sua própria literatura com temáticas relativas à história, arte e cultura junto com as crianças e educadores. Produziu também o *Jornal das Crianças Sem Terrinha* (2007), uma novidade em um movimento camponês em ter encarado o desafio de escrever para crianças e adultos; a *Revista dos Sem Terrinha*, voltada para as crianças, com uma periodicidade anual, com a intenção de garantir que as escolas tenham acesso à Revista como também aos diferentes espaços educativos das crianças do MST. E essas produções tem se tornado um espaço de debate das crianças sobre o internacionalismo. Das sete edições da Revista, já foram debatido os temas de Cuba sobre os Cinco Heróis, da Palestina, da Venezuela, do Haiti e o próximo será sobre as crianças da Síria; Também na página de internet do MST www.mst.org.br há o link dos Sem Terrinha¹⁰² para acessar as produções infantis.

A experiência da prática educativa com as crianças dá significado à Pedagogia do MST e desafia, mesmo que com os limites e contradições da sociedade de classe, não perder a perspectiva do coletivo, da luta social e da organização política.

REFERENCIAS

ALENTEJANO, Paulo Roberto R. *Questão Agrária e Agroecologia no Brasil do século XXI*. in MOLINA, Monica Castagna, SANTOS, Clarice Aparecida dos Santos, MICHELLOTTI, Fernando & SOUSA, Romier da Paixão (orgs.). *Práticas contra-hegemônicas na formação dos profissionais das ciências agrária: reflexão sobre Agroecologia e Educação do Campo nos cursos do PRONERA*. NEAD, Brasília. 2014.

¹⁰² <http://antigo.mst.org.br/semterrinha>



FERNANDES, Bernardo Mançano. STEDILE, João Pedro. 1999. *Brava Gente. A trajetória do MST e a Luta pela Terra*. Ed. Fundação Perseu Abramo. São Paulo, 1999.

LAMOSA, Rodrigo & LOUREIRO, Carlos Frederico B. *Agronegócio e educação ambiental: uma análise crítica*. Ensaio: Avaliação de Políticas Públicas na Educação. Rio de Janeiro, v22, n.83, p. 533-554. Abr./jun. 2014.

LOMBARDI, José Claudinei. *Reflexões sobre Educação e Ensino na obra de Marx e Engels*. (Tese em educação) UNICAMP, Campinas 2010.

RAMOS, Márcia Mara. *A significação da Infância*. (Monografia de especialização) FIOCRUZ, Rio de Janeiro/RJ 2013.

24. TRANSFORMACIONES EN LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE MUJERES CAMPESINAS AFRODESCENDIENTES POR LA EXPANSIÓN DEL CULTIVO DE PALMA DE ACEITE. CASO: MUNICIPIO DE MARÍALABAJA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, COLOMBIA



Nombre del autor(a): Margarita Restrepo Méndez
Universidad Estatal Paulista
mirestrepo10@gmail.com

Orientadora: Bernadete Aparecida Caprioglio de Castro
Universidad Estatal Paulista
bernadete56@gmail.com

Problema

El presente proyecto de investigación se está realizando en Colombia, en el municipio de Maríalabaja, ubicado al norte del país, en la región Caribe, en el departamento de Bolívar. Municipio en el cual desde 1998, se instaló el cultivo de palma de aceite, promovido por las políticas rurales del gobierno colombiano, que buscan la transformación productiva y la modernización del campo para participar y competir en los mercados globales. Dicho cultivo ha sido fomentado como estrategia de desarrollo rural en el municipio. Por otro lado, Maríalabaja tiene otras dos particularidades, la primera, la mayoría de su población es afrodescendiente, y la segunda, sus habitantes han sufrido el conflicto armado interno colombiano, con mayor intensidad en los años 90 y principios de los 2000.

En medio de estas disputas territoriales, donde se producen y reproducen relaciones de poder, están las comunidades campesinas que continúan produciendo alimentos y resistiendo a pesar del acaparamiento de tierras y ocupación de sus territorios por el modelo agroindustrial de la palma y la violencia armada. En el municipio existen más de 10 organizaciones de campesinos. En mi proceso de trabajo con dichas organizaciones y comunidades campesinas, surgió en mi la pregunta de la presente investigación, en relación a las mujeres campesinas, de conocer por medio de sus voces, cuáles han sido las transformaciones vividas por ellas en este contexto tan complejo, en



especial en sus vidas productivas?, porque en medio de las relaciones patriarcales las voces de las mujeres es invisibilizada y no se alcanzan a dimensionar las formas de desterritorialización en sus vidas y territorios, y además no es reconocida su labor y fuerza en la producción campesina, en las luchas y en las resistencias. Para lo cual he planteando los siguientes objetivos:

Objetivos

General: Analizar las transformaciones en las actividades productivas de las mujeres campesinas afrodescendientes por la promoción y expansión del cultivo de palma en el municipio de Maríalabaja.

Para ello se indagará acerca de: (objetivos específicos):

- Conocer el desarrollo de las actividades productivas de las mujeres antes y después de la promoción y expansión del cultivo de palma africana en el municipio.
- Analizar las transformaciones en las actividades productivas de las mujeres por la expansión del cultivo en mención en sus territorios.
- Analizar las formas de resistencias y desafíos que enfrentan las mujeres para mantener sus actividades productivas y su permanencia en el territorio

Referencias teóricas

Algunos planteamientos teóricos para el análisis del proceso investigativo:

- Políticas rurales que se presentan como la solución para el “desarrollo” que requieren las comunidades y pueblos para salir de la pobreza, al contrario como lo manifiesta el autor Escobar han “multiplicando al infinito los problemas socioeconómicos... son en general una adaptación



pobre a las recetas neoliberales ideadas en otras latitudes; benefician a capitalistas y sectores dominantes del mundo y perjudican a los trabajadores, al ambiente, a los subalternos y a las culturas diferentes” (ESCOBAR, 2007, p.13)

- Las mujeres campesinas, como lo menciona Escobar: “han sido las agricultoras invisibles, (según cálculo de la FAO, cerca del 50 por ciento de los alimentos de consumo directo del mundo son producidos por ellas)...a quienes se les ha negado su reconocimiento en el rol productivo y se ha considerado solamente su rol reproductivo”(ESCOBAR, 2003, p.291), porque generalmente las actividades de las mujeres son consideradas como **ayuda** a los hombres y están incluidas dentro de los trabajos que se asignan a ellos,³ invisibilizando el aporte y reconocimiento social de las mujeres por participar tanto en lo productivo como en lo reproductivo, ya que a lo largo de la historia han estado sometidas a “múltiplas opressões e explorações patriarcal-capitalistas que demarcam a sua experiênciã como ser social”. (CISNE y GURGEL, 2008, p.69).

□ Las mujeres campesinas en medio de contextos tan difíciles, adversos y complejos, continúan resistiendo y reproduciendo la vida, mediante la construcción de “sus propias estrategias de sustento utilizando una variedad de recursos...apoyándose en la solidaridad de sus redes sociales y organizaciones comunitarias” (KAY, 2007, Pág. 15), desde las múltiples labores cotidianas en sus territorios.

Metodología

Para el desarrollo de la investigación se recurre la metodología cualitativa, tomando como caso el municipio de Maríalabaja, realizando:



- Una reconstrucción historia utilizando fuentes secundarias para establecer la forma como se instaló y expandió el cultivo de palma de aceite en Colombia y en el municipio de Marialabaja, en este último se tendrá un marco de búsqueda de información entre los años 1998 y 2014.
- Además se efectuarán talleres de cartografía social con las mujeres que pertenecen a las organizaciones campesinas para conocer las actividades productivas (antes y después del cultivo), identificando las labores agropecuarias realizadas en la producción, transformación y comercialización. También el acceso a los recursos para realizar las labores productivas. Analizando al mismo tiempo la división sexual del trabajo en la realización de las actividades productivas.

3 Ministerio de Salud y Protección Social y Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO. Las mujeres campesinas: su gran aporte a la agricultura familiar y la economía productiva. Boletín 001. Bogotá. Junio 2015

- Al igual se realizarán entrevistas a profundidad con mujeres campesinas de las organizaciones campesinas para analizar las transformaciones, formas de resistencia y desafíos a los que se enfrentan, considerando las formas de relacionamiento comunitario, familiares y con la tierra, además de la utilización de los mecanismos que ofrece el gobierno para la defensa de sus derechos como comunidad étnica y de sus territorios. □ Durante el proceso investigativo, se realizará observación en campo, realizando visitas en las parcelas campesinas o en los sitios donde las mujeres desarrollan sus emprendimientos productivos para observar y analizar las interacciones de las mujeres con su entorno y formas de resistencia de las mismas.



- También para el logro de los objetivos de la investigación se están revisando fuentes de información secundarias como investigaciones realizadas en el municipio, informes de periódicos locales o nacionales, documentos de entidades del gobierno, de organizaciones sociales y académicas, entre otros, para el acercamiento de la realidad y el análisis de las transformaciones.

Resultados parciales

A continuación algunos resultados encontrados hasta la fecha, todavía estoy efectuando el trabajo de campo para la recolección de la información.

En María la Baja, 16 años después de implementada la política de promoción y expansión del cultivo de la palma se han presentado las siguientes situaciones:

- De acuerdo a la empresa palmera en el municipio, Promotora Hacienda la Flores, ha integrado la economía campesina en cadenas agroindustriales, generado fuente de empleo lícito a los agricultores y sus familias, proteger a pequeños productores de la pérdida de sus parcelas por presión de la violencia que generan los grupos armados al margen de la ley, consolidar el control efectivo de territorios generando polos de desarrollo al incorporar regiones a la producción nacional (casos montes de María y región del Catatumbo-Tibú), financiación en condiciones oportunas para los

agricultores con las líneas de crédito de FINAGRO, con plazo hasta de 12 años, con tasas preferenciales.⁴



- La disminución en las áreas de cultivo de productos diversos ha generado que se produzcan menos alimentos en la zona, y se incrementen los precios de algunos alimentos sembrados en el municipio (GOMEZ, 2009).

Comparativo de áreas de uso de suelo 1998, 2008 y 2013

COBERTURA GENERAL	COBERTURA ESPECIFICA	USO PRINCIPAL	ÁREA (Ha) 1998	ÁREA (Ha) 2008	ÁREA (Ha) 2013
TERRITORIOS AGRÍCOLAS	Cultivos anuales y transitorios	Maíz, Yuca, Ñame, Frijol	1.180,00	296,44	3770
		Arroz	10.518,42	3.997,56	3000
	Cultivos permanentes	Palma de aceite	93,00	3.984,17	11015
		Otros cultivos permanentes/ Cacao, plátano, Frutales)	35,00	55,00	930

Fuente de los datos: VICTORINO, 2009, y Secretaria de Agricultura del departamento de Bolívar.

- A lo anterior hay que sumarle que al existir menos disponibilidad de tierras, los campesinos sin tierra que tradicionalmente han arrendado o les prestan tierras para realizar su labor, están perdiendo la posibilidad de seguir realizando los acuerdos de palabra con sus vecinos para el beneficio de su economía familiar. (RESTREPO, 2011) □ El cambio de la tenencia de la tierra concentrada y utilizada al cultivo de la palma, por la presencia de inversionistas del interior del país que están comprando tierras en el municipio para adscribirse a la propuesta del cultivo de palma. Esto, sin mencionar las compras de tierra que se vienen ofreciendo a familias que han sido desplazadas de sus tierras en años anteriores por cuenta de actores armados y los obstáculos que encuentra el campesino desposeído que quiere retornar para preparar la tierra para cultivar debido a su escasez de capital de inversión y de sostenimiento familiar.

Sin contar que la expansión de este monocultivo, ha alterado los ecosistemas y la biodiversidad presente en el territorio5



- De acuerdo a lo planteado en el plan de desarrollo municipal 2012-2015, “El monocultivo de Palma Africana está ocupando un lugar importante en María la baja (...) abarcando una extensa área de terrenos que tradicionalmente eran usados para cultivos de pan coger, modificando la geografía del paisaje local, las características agrícolas del territorio y la vocación productiva de la tierra”. 6

Referencias bibliográficas

AGUILERA DÍAZ, María. Palma africana en la costa caribe: Un semillero de empresas solidarias. Centro de Estudios Económicos Regionales. Banco de la República. Cartagena de Indias. No. 30 julio, 2002.

ALCALDÍA DE MARÍA LA BAJA. Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015. 172 págs.

CISNE, Mirla y Gurgel, Telma. Feminismo, Estado e políticas públicas: desafios em tempos neoliberais para a autonomia das mulheres. SER Social, Brasília, v. 10, n. 22, p. 69-96, jan./jun. 2008.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Consejo Nacional de Política Económica y Social No 3477 de 2007 y No 3510 de 2008. Colombia.

_____. Plan de desarrollo 2010-2014, Prosperidad para Todos. Bogotá, 2011. Págs. 541.

ESCOBAR, Arturo. La invención del territorio. Construcción y deconstrucción del desarrollo. Caracas, 2007.



FEDEPALMA. Minianuario estadístico 2015. Principales cifras de la agroindustria de la palma de aceite en Colombia. Bogotá, mayo del 2015. 64 págs.

FERNANDES, Bernardo CONSTRUINDO UM ESTILO DE PENSAMENTO NA QUESTÃO AGRÁRIA: o debate paradigmático e o conhecimento geográfico. Presidente Prudente. Volume 1 y 2. 2013

HAESBAERT Rogério e Limonad Ester . O território em tempos de globalização. Em: Etc, espaço, tempo e crítica. Revista Eletrônica de Ciências Sociais Aplicadas. 15 de

5 Aportes de la investigación de Andrés Gómez López y comentarios de los habitantes del municipio.

6Alcaldía de María la Baja. Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015. 172 págs.

Agosto de 2007, n° 2 (4), vol. 1.

Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – INDEPAZ. Agroindustria de la Palma de aceite. Preguntas sobre impactos y sostenibilidad. Bogotá, 2013. 32 págs.

KAY CRISTÓBAL. Pobreza rural en América Latina: teorías y estrategias de desarrollo. Revista Mexicana de Sociología, vol. 69, núm. 1, enero-marzo, Universidad Nacional Autónoma de México. México 2007, pp. 69-108

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Anuario estadístico del sector agropecuario 2012. Evaluaciones agropecuarias municipales. Bogotá, Septiembre del 2013.



MINISTERIO DE CULTURA. República de Colombia. Afrocolombianos, población con huellas de africanía. 2010. 13 págs.

Ministerio de Salud y Protección Social y Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO. Las mujeres campesinas: su gran aporte a la agricultura familiar y la economía productiva. Boletín 001. Bogotá. Junio 2015

PNUD. Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011. Colombia rural: razones para la esperanza. Bogotá, 2011. Pág 133.

RAFFESTIN, Claude. Por uma Geografia do Poder. São Paulo: Editora Ática, 1993. RESTREPO, Margarita. Memoria: Incidencia del cultivo de Palma africana en la seguridad alimentaria. Estudio de caso: corregimiento de Matuya. , municipio de María la Baja. Institutde Hautes EtudesInternationales el du Developpemnet. Suiza, 2011

ROSSET Peter M. y Martínez-Torres, María Elena. El Libro abierto de la Vía Campesina: celebrando 20 años de luchas y esperanza: La Via Campesina y Agroecología. 2013.

SANZIO, Rafael. Cartografia e quilombos: territórios étnicos africanos no Brasil. Em: AFRICANA STUDIA, Nº 9, 2006, Edição do Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto (CEAUP) 2006, pp 337-355

VICTORINO, Raquel. Tesis maestría: Transformaciones territoriales a partir del abandono y despojo de tierra asociado a la acción de grupos armados, caso Maríalabaja departamento de Bolívar. Pontificia universidad Javeriana. Bogotá, 2011. Págs., 156.



25. JÓVENES Y TERRITORIALIDAD EN EL CORREGIMIENTO DE EL GARZAL, MAGDALENA MEDIO

Ivón Natalia Cuervo¹⁰³
Universidad del Estado de Santa Catarina (UDESC)
icurvof@gmail.com

Pedro Martins¹⁰⁴
Universidad del Estado de Santa Catarina (UDESC)
weltermartins@yahoo.com.br

Introducción

La presente investigación¹⁰⁵ se localiza en el corregimiento de El Garzal, ubicado en el municipio de Simití, departamento de Bolívar, en la subregión del Magdalena Medio colombiano. Autodefinida como una “comunidad en resistencia pacífica”, El Garzal se encuentra bajo amenaza de masacre y desplazamiento masivo desde hace más de una década, tanto por la presión de grupos armados ilegales, como por el interés que tiene sobre estas tierras el sector privado, para el establecimiento de cultivos agroindustriales.

Gracias a la capacidad organizativa de la comunidad y al acompañamiento jurídico y político que ha recibido de ONG nacionales e internacionales, la comunidad de El Garzal es reconocida por la efectividad de sus mecanismos de acción-no violenta para permanecer en el territorio. Lograr ese reconocimiento es fruto de un trabajo comunitario que cuenta con varios años de historia, en 1998

¹⁰³ Estudiante de Maestría de la *Universidade do Estado de Santa Catarina- UDESC, Programa de Pós-Graduação em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental*, miembro del Grupo de investigación *Práticas Interdisciplinares em Sociabilidades e Territórios- PEST/UDESC*, icurvof@gmail.com

¹⁰⁴ Profesor asociado de la *Universidade do Estado de Santa Catarina- UDESC, Programa de Pós-Graduação em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental/ PPGPLAN*. Coordinador del Grupo de investigación *Práticas Interdisciplinares em Sociabilidades e Territórios - PEST/UDESC*. weltermartins@yahoo.com.br

¹⁰⁵ Este trabajo es una versión preliminar de la investigación titulada “*Jovens de territórios rurais e suas representações sociais do território em El Garzal, Colômbia.*”, disertación de la estudiante Ivón Natalia Cuervo, orientada por el profesor Pedro Martins, del *Programa de Pós-Graduação em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental/ PPGPLAN, Universidade do Estado de Santa Catarina- UDESC*.



los habitantes de El Garzal iniciaron el trámite para la titulación de tierras ante el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), proceso que ha tenido varias dificultades, pues hasta la fecha solo 64 familias cuentan con los títulos de propiedad, y en caso de darse la formalización completa de los títulos, cerca de 300 familias campesinas serían beneficiadas.

A pesar de vivir en un contexto adverso, un grupo de jóvenes de El Garzal decidió seguir haciendo parte de esta historia de construcción social del territorio que comenzó hace más de cinco décadas. Actualmente, en medio del conflicto armado, ellos impulsan nuevos proyectos productivos, buscando generar desarrollo socioeconómico para sí mismos y para sus familias.

Con esta investigación, nos proponemos analizar las percepciones que los jóvenes originarios de El Garzal tienen sobre ese territorio y, a partir de sus testimonios, pondremos de relieve las principales reivindicaciones que ellos exigen como sujetos de derechos para continuar haciendo de éste un territorio rural dinámico.

Consideramos que el territorio, además de ser un espacio físico, es una construcción social y política, en la que se configuran las identidades territoriales, en consecuencia, abordaremos el concepto de territorialidad desde la perspectiva de los jóvenes rurales, partiendo de algunos trabajos desarrollados sobre juventudes rurales, en el campo de las ciencias sociales, especialmente en Brasil (Paulilo, 2004; Brumer, 2014; Stropasolas, 2016) y en Colombia (PNUD, 2014; Misión para la Transformación del Campo, 2015). Esta investigación es de tipo cualitativo, por lo cual seleccionamos como instrumentos de recolección de la información las entrevistas semi-estructuradas y la observación participante. Los resultados parciales que presentaremos hacen parte



de la fase exploratoria del trabajo de campo¹⁰⁶ y del abordaje del referencial teórico. Esperamos que los resultados finales de esta investigación aporten de manera significativa a la difusión de experiencias para la construcción social de la paz en Colombia.

El texto inicia con una contextualización sobre las condiciones actuales en las que viven los y las jóvenes en el campo colombiano. A partir del análisis de los datos recopilados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) se explican las tendencias a la reducción, el envejecimiento y la masculinización de la población rural colombiana. Posteriormente, se hace énfasis en el caso de El Garzal, en donde un grupo de jóvenes decidieron desarrollar sus proyectos de vida vinculados a ese territorio, a pesar de las múltiples razones que tienen para migrar. Por esta razón, consideramos que este estudio es pertinente para comprender los factores asociados a la permanencia de los jóvenes en el medio rural, y así, dilucidar algunas líneas en las que es preciso trabajar a favor de esta población.

La situación de los y las jóvenes rurales en Colombia

El Tercer Censo Nacional Agropecuario (en adelante 3er CNA) realizado en Colombia en el año 2014, revela datos importantes sobre los cambios demográficos en el país, que ayudarán a actualizar y profundizar los estudios sobre el área rural dispersa del territorio nacional, sobre todo si se tiene en cuenta que hace más de cuarenta años que el gobierno colombiano no realizaba un

¹⁰⁶ Algunas de las entrevistas citadas en este documento, corresponden al trabajo de campo desarrollado por la socióloga Ivón Natalia Cuervo como investigadora del proyecto “Las comunidades cristianas no-católicas como escenario de paz y desarrollo sostenible. El caso de El Garzal, sur de Bolívar, Magdalena Medio”, financiado por la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, a través de la Convocatoria de Investigación Orlando Fals Borda de 2013. La investigación realizada desde la perspectiva teórica de la sociología de la religión está en proceso de publicación (Beltrán y Cuervo: 2016). Al citar las entrevistas, serán reservados los nombres verdaderos de las personas entrevistadas, por cuestiones de seguridad.



censo de este tipo. Los informes sobre el 3er CNA publicados por el DANE reportan que en el país existen 2,7 millones de productores agropecuarios y que la mayoría de ellos se ubica en el rango de edad de los 40 a los 54 años. Además, esta investigación estadística revela que “de un total de 725 mil productores residentes en área rural dispersa¹⁰⁷, el 63,6% son hombres, mientras que el 36,4% son mujeres.” (DANE, 2016a: 3-4). Al respecto de estos datos, resulta interesante observar que apenas un poco más de la tercera parte de la población de productores residentes en las Unidades de Producción Agrícola son mujeres, este dato puede considerarse una evidencia de los procesos migratorios, como explicaremos a continuación.

Varios investigadores han documentado el aumento de las migraciones de los y las jóvenes del campo a la ciudad en Colombia, siendo mayoritariamente una tendencia en las mujeres jóvenes rurales, fenómeno que influye sobre la reducción, el envejecimiento y la masculinización de la población rural (Arias et al., 2013; PNUD, 2014 y Misión para la Transformación del Campo, 2015a). Entre los motivos que explican la migración de los y las jóvenes rurales están la aspiración de autonomía económica y la búsqueda de oportunidades laborales y educativas. Sobre este mismo tema, un estudio de los problemas de género y generación presentes en la agricultura familiar en Brasil reveló que gran parte de la producción agrícola familiar se caracteriza por una división del trabajo diferenciada por sexo, y, en consecuencia:

Los hombres predominan en la gestión de las actividades productivas cuando la agricultura asume un carácter comercial y se prefiere a los hijos varones en la sucesión del patrimonio familiar. El resultado de esto es la falta de preparación (o de socialización) de las hijas para la actividad agrícola y su demostrado interés en

¹⁰⁷ Según la definición del DANE el *rural disperso* “es el área que se caracteriza por la disposición dispersa de viviendas y explotaciones agropecuarias. No cuenta con un trazado o nomenclatura de calles, carreteras, avenidas, y demás.” (DANE, 2008:7).



continuar los estudios con vistas a una profesionalización dirigida a actividades no agrícolas. (BRUMER, 2014: 232)

Según este estudio, una menor socialización de las hijas en el desempeño de las actividades agrícolas y las probabilidades más bajas de que ellas hereden la tierra, se convierten en incentivos para que ellas migren del campo a las ciudades, donde buscan insertarse en el mercado laboral y, en algunos casos, logran al mismo tiempo avanzar en su formación académica. De esta forma, el problema de la sucesión de la tierra, como patrimonio familiar, está atravesado por cuestiones de género y de división del trabajo: “El hecho de que hijos e hijas no reciban tierra cuando salen de la casa de sus padres para estudiar o trabajar en la ciudad, en caso de que no permanezcan trabajando en la propiedad, nos lleva a pensar en la repartición de la tierra más como una forma de remuneración del esfuerzo invertido en la manutención y el aumento del patrimonio que como una herencia.” (PAULILO, 2004: 235)

Las limitadas posibilidades de ascenso social en el sector rural son también una razón para que no solo las generaciones jóvenes busquen migrar para las ciudades, sino que sus padres las incentiven a hacerlo “para no repetir la historia” que ellos vivieron, como dice Jairo, un campesino de El Garzal, que ilustra el problema de la precariedad de las condiciones económicas y sociales que él y su familia enfrentan: “Nuestros padres y nuestros abuelos murieron tirando machete, yo no quiero llegar a los 60 años en lo mismo (...) los campesinos trabajamos duro, pero estamos pilando por el afrecho.”¹⁰⁸

¹⁰⁸ Entrevista a Jairo, 46 años de edad, hombre, productor agrícola residente en El Garzal, realizada el 14 de septiembre de 2013.



Ante el panorama expuesto, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) impulsó, especialmente a partir del año 2014, algunas iniciativas para promover la permanencia y el retorno de los y las jóvenes al campo, una de estas estrategias es la Red Nacional de Jóvenes Rurales Emprendedores¹⁰⁹. Bajo esta perspectiva, el trabajo del gobierno colombiano con los jóvenes rurales se concentra en fortalecer sus vínculos de carácter productivo-emprendedor con el territorio de origen.

Aunque las actividades de carácter agropecuario continúan siendo la fuente de ingreso más común en las Unidades de Producción Agrícola, son también las que reciben las remuneraciones laborales más bajas, así lo demuestra el siguiente análisis sobre los problemas en el mercado laboral rural colombiano:

Este mercado se caracteriza por los empleos de baja calidad –cuenta propia, jornaleros, trabajadores familiares sin remuneración-, inestabilidad laboral y/o estacionalidad del empleo e ingresos precarios. En efecto, el 75% de la población ocupada del área rural tiene un ingreso mensual inferior al SMMLV, mientras que en el área urbana, esta proporción es de apenas el 39,4%. (Misión para la Transformación del Campo, 2016a: 13)

Dada la compleja situación de precariedad que enfrentan las generaciones jóvenes que residen en las zonas rurales, se hace necesario desarrollar un trabajo intersectorial entre las instituciones públicas, las empresas privadas y la sociedad civil para mejorar las condiciones en que se vive en el campo:

¹⁰⁹ Según el portal de la Dirección del Sistema Nacional de Juventud “Colombia Joven” de la Presidencia de la República, los objetivos de la Red Nacional de Jóvenes Rurales Emprendedores son: “generar lazos de construcción y liderazgo en el ámbito rural, identificar sus problemáticas o intereses y promover canales mucho más participativos y que permitan intercambiar aprendizajes, logros y experiencias.” Ver: <http://www.colombiajoven.gov.co/quehacemos/Paginas/jovenes-rurales.aspx/> Fecha de consulta: junio 8 de 2016.



Para evitar la migración de jóvenes y abordar de forma efectiva la problemática de la sucesión generacional, las acciones aisladas no resuelven [el asunto] siendo necesarias estrategias integradas, multidimensionales y duraderas, involucrando todos los segmentos del grupo doméstico, que consigan alcanzar simultáneamente varios aspectos, entre ellos, los relacionados a la infraestructura social, cultural y económica de las comunidades y las familias. (STROPASOLAS, 2016: 24)

Parte de la solución se ha dado a través de la diversificación de las actividades laborales en el sector rural, modelo económico conocido como “pluriactividad”, que abre otras formas de interacción entre las zonas rurales y las zonas urbanas:

La pluriactividad si bien no forma parte del proceso de urbanización, constituye una modalidad de las relaciones entre el campo y la ciudad, que generan un nuevo territorio local, un espacio privilegiado de la vida social, que se constituye a partir de la “apropiación” de la ciudad por la población rural, pero también de la reiteración de lo rural como espacio recreado y como referencia identitaria. (ÁVILA, 2012: 30)

Particularmente, en los casos en que los y las jóvenes establecen una movilidad espacial rural-urbana-rural, es posible que se generen esos nuevos territorios locales a los que se refiere Ávila, que tienen que ver ya no con un recorte físico del espacio, sino con la construcción del espacio social y los nuevos sentidos que se le otorgan a través de las dinámicas de ida y retorno del campo a la ciudad, dinámicas que posibilitan la generación de otras fuentes de ingresos, principalmente en los sectores de la construcción, el comercio, la industria y los servicios (MISIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL CAMPO, 2015a: 14), así como el establecimiento de nuevas redes de relaciones y la integración de otras habilidades y conocimientos, que les servirán para transformar sus formas de producción y de sostenimiento económico (MÉNDEZ, 2012:93).

El caso de un grupo jóvenes en el territorio rural de El Garzal



Comúnmente, la juventud, como etapa del desarrollo humano, se determina dentro de un rango de edad¹¹⁰ o se asocia a un periodo de transición a la adultez marcado por la adquisición de responsabilidades laborales. Sin embargo, los autores de esta investigación consideramos que los estudios sobre la juventud, en este caso en las zonas rurales, deben abordar las particularidades locales e intersubjetivas de las personas que construyen su identidad en cuanto a lo que significa para ellos y ellas “ser joven”, de acuerdo con sus propias vivencias.

Bajo este criterio, una investigación sobre la juventud rural en Colombia, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el año 2014, provee algunas consideraciones metodológicas para estudiar el papel de los y las jóvenes en el mundo rural:

En primer lugar, se entiende el problema de la juventud atado a las dinámicas de reproducción de los grupos sociales concibiendo a los jóvenes rurales como actores determinantes en la preservación o cambio de tradiciones de las sociedades rurales y sus modelos de desarrollo. En segundo lugar, la relación con los ciclos vitales del hogar como el espacio de socialización por excelencia de los jóvenes rurales: las tensiones, las alianzas, los cambios, las estrategias, las tradiciones, la escala de valores que permanecen o se transforman en las relaciones intergeneracionales. (PNUD, 2014: 11)

Una de las tensiones que enfrentan los y las jóvenes rurales en el proceso de socialización de la labor agrícola es la de superar las dificultades de ese “trabajo pesado y mal pago”, mediante la tecnificación e innovación en el desempeño de las actividades agrícolas, conservando, sin embargo, las tradiciones familiares.

¹¹⁰ Por ejemplo, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) los jóvenes son las personas con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años de edad. Sin embargo, la UNESCO reconoce que la caracterización de esta categoría es más compleja, cuando expresa que “los jóvenes constituyen un grupo heterogéneo en constante evolución y que la experiencia de “ser joven”, varía mucho según las regiones del planeta e incluso dentro de un mismo país.” En: *La UNESCO trabajando con y para los jóvenes*. Disponible en: <http://www.unesco.org/new/es/popular-topics/youth/> Fecha de consulta: junio 15 de 2016.



Para el grupo de jóvenes entrevistados, el arraigo por la tierra, en la que ellos, ellas y sus familiares han luchado para permanecer, se nutre de las redes de relaciones y afectos construidos a lo largo de su historia en este territorio. Por eso, toda la familia vivencia la preocupación por las amenazas de muerte y desplazamiento forzado:

En el año setenta y siete [1977] yo venía joven, tenía 17 años y venía con mi papá (...) habían muchas plataneras, también cosechaban maíz, esa es una de las tradiciones que no se ha perdido (...) En ese tiempo, cuando llegamos, uno trabajaba libremente en este territorio. Posteriormente, llegó ese señor que decía ser el dueño de las tierras, él estaba hacia la parte de arriba en Nueva Esperanza. Él tenía su propia seguridad personal aunque aún no había habido problema con la gente de El Garzal (...) Tiempo después, a él le tocó irse a vivir a Cartagena, pero iba con problemas, pues la fuerza pública lo seguía por nexos con mafia y procesamiento de coca, que era lo que hacían en su hacienda. Desde entonces huyó y anduvo bastante encubierto. Después llegó a Simití nuevamente pero ya se sentía con más fuerza. Allí empezó a decir que manejaba un bloque de las autodefensas. Él empezó a decir que iba a recuperar sus tierras de la forma que fuera, despojando a la comunidad de El Garzal. En ese tiempo buscamos la forma de acercarnos y hablar con él, pero él dijo que no hablaría con nadie y que haría lo que él quisiera con sus tierras.¹¹¹

Aquí hemos vivido amenazas de parte de los que vienen y dicen que quieren llevarse la tierra. Yo tenía como 18 años cuando llegaron las primeras amenazas y uno mira a los papás de uno pensando la cosa y uno se pone también a mirar qué va a hacer, si nos desplazan ¿para dónde cogemos y qué hacemos?¹¹²

Es interesante que Alcides -en la entrevista anteriormente citada- haga referencia a que “quieren llevarse la tierra”, lo cual puede estar indicando el sentimiento de despojo que le genera la idea de abandonar El Garzal. La precariedad de la posesión de la tierra, ya que ellos aún no tienen los

¹¹¹ Entrevista realizada a Álvaro, 53 años de edad, hombre productor agrícola, residente en El Garzal, octubre 4 de 2013.

¹¹² Entrevista realizada a Alcides, 25 años de edad, hombre productor agrícola, residente en El Garzal, octubre 4 de 2013.



títulos que los legitiman como propietarios, produce un sentimiento de incertidumbre que los coloca en la encrucijada de irse o quedarse:

Cuando empezó el problema de las tierras yo sentía miedo y mis padres al escuchar eso me decían que me fuera con ellos a Simití, pero yo no podía dejar sola a mi familia. Tenía miedo porque se escuchaba que ese señor vendría por acá con muchas armas a destruirnos.¹¹³

Ante este dilema, la territorialidad se convierte en un incentivo para quedarse, pues los lazos construidos con el territorio cobran sentido en un lugar específico, porque aun cuando las mismas personas que construyeron ese territorio fueran reubicadas para continuar habitando, trabajando y reproduciéndose socialmente en otro lugar, las condiciones serán distintas y el territorio social construido será otro.

Entre las valoraciones que se hacen de El Garzal como territorio, encontramos constantemente la comparación entre “lo bien que se vive aquí” y las dificultades, principalmente de tipo económico, que pasan las personas que se van para las zonas urbanas, percepción que se construye a partir de la experiencia propia o de los relatos de los que retornan de las ciudades:

A pesar de todo, uno aquí vive tranquilo, porque dicen que en el pueblo son agresivos con la gente por robarle, por tantas cosas... y allá hay bulla y contaminación... pero acá se respira un aire limpio. Entonces acá uno está acostumbrado al campo, uno vive tranquilo y feliz, a pesar de todas las amenazas que siempre han tenido contra nosotros.¹¹⁴

¹¹³ Entrevista realizada a María, 51 años de edad, mujer productora agrícola, residente en El Garzal, octubre 4 de 2013.

¹¹⁴ Entrevista realizada a Sara, 19 años de edad, mujer productora agrícola, residente en El Garzal, octubre 4 de 2013.



Vivir aquí es mejor, porque en el pueblo o en la ciudad es muy difícil conseguir las cosas, porque si uno necesita un plátano tiene que comprarlo allá, mientras que aquí uno lo corta de la mata ¡y ya!¹¹⁵

Los y las jóvenes entrevistados en El Garzal, manifiestan un alto grado de valoración del trabajo agrícola, un sentimiento de arraigo al territorio en el que viven, les importa el cuidado del medio ambiente y hablan del “vivir bien” y de las prácticas de la economía solidaria:

Desde los cinco años vivo en El Garzal, para mí, vivir en El Garzal es una experiencia muy linda... por la libertad que hay en el campo, por el aire que se respira limpio y agradable. No quisiera irme de acá, porque aquí en el campo hay muchas maneras de vivir bien, cultivando plátano, cacao, arroz, maíz, frijol, y hay cultivos que se está experimentando si producen para la alimentación sostenible de los campesinos, productos como la soya y el maní, esperamos que esto dé buenos resultados para tener cultivos sostenibles en nuestra comunidad.¹¹⁶

Toda mi niñez y adolescencia he vivido aquí... ha sido una experiencia muy linda y a la vez muy dolorosa. Estoy acostumbrado a vivir en el campo, crece uno con amor a las plantas y a los animales que uno cría. No es lo mismo conseguir la comida aquí que en el pueblo, y para mí ha sido muy bueno vivir aquí.¹¹⁷

Un motivo por el que algunos(as) jóvenes de El Garzal se han ido para las ciudades es porque en ese corregimiento solo tienen una escuela en la que enseñan hasta el grado noveno de bachillerato, y aquellos que quieren continuar capacitándose tienen que salir del corregimiento, como lo hicieron tres de las personas entrevistadas, que lograron titularse como bachilleres y que continúan procurando especializarse:

¹¹⁵ Entrevista realizada a Edison, 17 años de edad, hombre productor agrícola, residente en El Garzal, octubre 4 de 2013.

¹¹⁶ Entrevista realizada a Rosa, 24 años de edad, mujer productora agrícola, residente en El Garzal, diciembre 3 de 2014.

¹¹⁷ Entrevista realizada a Alcides, 25 años de edad, hombre productor agrícola, residente en El Garzal, octubre 4 de 2013.



Aquí es frecuente que los padres pongan a sus hijos en el colegio hasta noveno, pero luego para hacer bachillerato es difícil porque hay que mandarlos a otro pueblo y el transporte y la estadía son complicados. Yo hice la secundaria completa hasta once, pero hice hasta séptimo en colegio diurno y el resto lo hice en un instituto en Vijagual. Yo siempre quise estudiar Derecho en la universidad...¹¹⁸

Los jóvenes no ven alternativas de trabajo o capacitaciones... porque más que estar en la ciudad, un joven tiene es ganas de capacitarse, de ser un doctor, de ser un veterinario, tal vez en la ciudad consiga ser un veterinario, pero se queda en un pueblo, trabajando en una empresa veterinaria, pero a veces no... porque aquí mismo no hay una persona que pueda hacer algo genético a un animal, porque no lo conoce. Tal vez apenas nace el ternero se le saca la leche, se vende la leche, se vende el ternero, se vende la vaca y no sabemos qué más hacer. Por ejemplo, si yo estudiara veterinaria y algo de genética, lo podría implementar acá, en el ganado de mi papá, y podría hacer razas mucho mejores.¹¹⁹

Yo terminé el bachillerato en Simití... y cuando tenía como 19 años conocí a una muchacha que me dijo que yo podía estudiar en Brasil, a mí me gustaba mucho la arquitectura entonces ella me dijo que ella me podía ayudar (...) pero, si me iba a estudiar por allá podía venir acá por ahí en dos o tres años (...) Y mi papá me dijo que no, primero él me había dicho que sí, pero ya después me dijo que no, que viera, que eso era muy lejos, que tanto tiempo para yo regresar y que yo sola por allá (...) Entonces no me dejó.¹²⁰

Yo hice acá [en El Garzal] hasta noveno. Me gustaría seguir, pero si fuera acá mismo en la comunidad, porque a una que ya está casada se le dificulta un poquito salir de la comunidad.¹²¹

Con frecuencia, las personas que viven en la zona rural dispersa del país cursan la educación básica, algunos alcanzan la educación media, y después de esa etapa tienden hacia la deserción escolar.

¹¹⁸ Entrevista realizada a Alcides, 25 años de edad, hombre, productor agrícola, residente en El Garzal, octubre 4 de 2013.

¹¹⁹ Entrevista realizada a Rosa, 24 años de edad, mujer, productora agrícola, residente en El Garzal, diciembre 3 de 2014.

¹²⁰ Entrevista realizada a Sofía, 26 años de edad, mujer, productora agrícola, residente en El Garzal, octubre 6 de 2013.

¹²¹ Entrevista realizada a Sara, 19 años de edad, mujer, productora agrícola, residente en El Garzal, octubre 4 de 2013.



Según el DANE (2016b: 33-35) en el 2014, mientras que, en promedio, el 80 por ciento de los hombres y las mujeres entre 5 y 16 años de edad, residentes del área rural dispersa, reportó asistencia a la educación, en el mismo año y en la misma área, el 73% de las mujeres y el 74% de los hombres entre 17 y 24 años de edad no asistían a instituciones educativas.

La posibilidad de que las generaciones jóvenes mejoren su condición socioeconómica, en comparación con las generaciones que les antecedieron, es lo que se conoce como movilidad social (ANGULO et al., 2012: 3). Este hecho social puede ser medido por medio de dos indicadores: el número de años de educación y la acumulación de riqueza basada en la posesión de bienes durables y otros activos fijos del hogar (ANGULO et al., 2012: 23).

Por esta razón, una de las demandas mencionadas por los y las jóvenes entrevistados es que el Estado colombiano les brinde oportunidades de educación cerca de donde ellos viven, se trata aquí de una educación con calidad, subsidiada, que los incentive a estudiar, que responda a sus intereses prácticos y que sea pertinente a las propias formas del “ser” y “saber hacer” locales:

Yo propongo que vengan a dar capacitaciones en temas agropecuarios o agrícolas, por ejemplo, cómo trabajar los manejos de los cultivos de cacao y de maíz. Esas capacitaciones posteriormente nos van a servir para darlo a conocer a los que no saben y también para ponerlo en práctica. También sería bueno trabajar la parte de cultura en nuestro campo, trabajar el deporte, eso es algo de motivación que iría de la mano con lo agropecuario, que sería la parte económica.¹²²

¹²² Entrevista realizada a Rosa, 24 años de edad, mujer, productora agrícola, residente en El Garzal, diciembre 3 de 2014.



Rosa, en esa entrevista, además de mencionar la necesidad de implementar proyectos educativos que sean pertinentes a sus proyectos productivos agropecuarios, coloca un asunto que es tan relevante como el derecho a la educación: el derecho a la cultura, que está ligado con la promoción de sus propias prácticas culturales y que, como ella dice, se convierte en un incentivo para las generaciones jóvenes.

Las demandas de los y las jóvenes referentes a la educación en las escuelas rurales coinciden con una de las propuestas fundamentales de la Misión para la Transformación del Campo Colombiano apoyada por el Departamento Nacional de Planeación:

Un currículum pertinente de educación secundaria y media en la zona rural debería incorporar componentes de Seguridad Alimentaria y de Proyectos Pedagógicos Productivos que fomente las capacidades asociativas, los emprendimientos y la formulación y creación de negocios ligados a las apuestas productivas de los territorios. (MISIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL CAMPO, 2015b: 272)

En la propuesta anteriormente citada se destaca la asociatividad como una práctica deseable para el desarrollo de los proyectos productivos, dado que permite trazar “objetivos comunes y visiones compartidas de los territorios [así como facilita] el acompañamiento continuo y prolongado por parte de emprendedores sociales, gestores, gremios o empresas privadas” (Misión para la Transformación del Campo, 2015b: 278). Esa visión la tienen clara los y las productores de El Garzal que integran la Asociación de Productores Alternativos de Simití (ASPROAS), una iniciativa que surgió desde la base comunitaria y que poco a poco ha ido ganando apoyo a través de los programas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y de otras entidades nacionales e internacionales que han llegado a patrocinar proyectos productivos, especialmente en el cultivo de cacao, las huertas caseras y la cría de animales:



En ASPROAS tenemos unas 474 familias asociadas, ubicadas no solamente en el corregimiento El Garzal, sino también en los corregimientos de San Luis y Ánimas Bajas (...) apoyamos a las familias asociadas en todo lo que es la parte del mejoramiento de su calidad de vida, porque hemos visto que es una forma como podemos mitigar el impacto de la violencia, porque ha sido una situación difícil para las comunidades allí, donde no hay una posibilidad de vida, donde no hay una alternativa de trabajo, entonces a través de la asociación estamos trabajando con recursos de cooperación internacional, pues es una lucha para poder lograrlo (...) Una de las cosas que implementamos, para tratar de solucionar, son las huertas caseras para madres cabeza de familia, se les da capacitación, se les suministra las semillas y se les presta toda la asistencia técnica, la asociación también cuenta con un fondo rotatorio, que no es suficiente para abarcar todas las necesidades, pero con eso estamos tratando de solucionar las cosas más importantes.¹²³

La Asociación ASPROAS está organizada en núcleos de trabajo, uno de ellos es el de jóvenes, del que hacen parte Rosa, Alcides y Sofía, quienes han encontrado en la cría de ganado y en el cultivo de maíz opciones rentables para el ejercicio de las labores agropecuarias:

Tenemos seis reses, y queremos seguir aumentando más, con eso, más adelante pensamos tener el proyecto de inversión de ganadería de doble propósito, que es ganado de ordeño, y los machos que salgan entonces esos los vendemos para carne, los engordamos y después los vendemos.¹²⁴

Sin embargo, el trabajo asociativo presenta retos para quienes emprenden ese camino, y en el caso de los y las jóvenes de El Garzal, mantenerse motivados ante las dificultades ha sido uno de los principales desafíos. Algunas de las dificultades mencionadas en las entrevistas son: lograr un consenso sobre lo que se quiere alcanzar como grupo (por encima de las metas individuales), cumplir con los requisitos burocráticos impuestos a las asociaciones para los desembolsos de dinero

¹²³ Entrevista realizada a José, 54 años de edad, hombre, productor agrícola residente en El Garzal, noviembre 22 de 2013.

¹²⁴ Entrevista realizada a Sofía, 26 años de edad, mujer, productora agrícola, residente en El Garzal, octubre 6 de 2013.



por parte de las entidades co-financiadoras y superar las incertidumbre propias del proceso de producción y las dificultades para la comercialización de sus productos.

Por ejemplo, el núcleo de ganado comenzó con quince jóvenes inscritos al proyecto de ASPROAS y solo tres completaron el proceso y fueron finalmente beneficiados. Así ocurrió también con el núcleo de comercialización de maíz, cuya principal dificultad ha sido sacar del corregimiento el maíz que les compran a sus coterráneos para comercializarlo fuera de El Garzal:

En el proyecto de comercialización de maíz empezamos ocho jóvenes y terminamos tres, porque ellos [los que desistieron] querían ver ganancias de una vez, y como eso es algo a largo plazo, que uno saca los gastos y después de la segunda etapa de comercialización se empiezan a ver las ganancias... En el núcleo de pollos de engorde eran diez y también quedaron tres (...) Estamos viendo viable comercializar el maíz en Medellín, porque están ofreciendo un buen precio de compra, pero el problema es el transporte, las vías son demasiado difíciles para sacar el producto (...) sale uno desde el centro de El Garzal, en mula para llegar al frente del Cerro de Burgos son tres horas, para cruzar al cerro son 5 minutos en motor-canoa, del Cerro de Burgos en camión hasta San Pablo son 4 horas, de ahí cruzar hasta Puerto Wilches media hora en ferri y de ahí a Medellín. Ese es el recorrido que pensamos hacer, no lo hemos hecho porque la cantidad de maíz no nos salió como necesitamos, ellos [los clientes] necesitan 200 bultos y nosotros tenemos apenas como 80 bultos.¹²⁵

Un reto adicional es la electrificación de El Garzal, pues hasta ahora sólo una tercera parte del corregimiento cuenta con el servicio de luz eléctrica. Para lograrlo, los habitantes de El Garzal se organizaron para gestionar ese proyecto ante la Alcaldía Municipal de Simití. Ahora que el proyecto está en marcha, Rosa (quien además es una joven madre cabeza de familia) fue contratada para supervisar el montaje de las redes eléctricas, labor que para ella significa no solo una fuente

¹²⁵ Entrevista realizada a Rosa, 24 años de edad, mujer, productora agrícola, residente en El Garzal, diciembre 3 de 2014.



importante de ingresos sino que le permite, al mismo tiempo, adquirir nuevas habilidades laborales y ayudar a cumplir un propósito de la comunidad:

El proyecto fue aprobado con recursos de regalías por parte de la Gobernación de Bolívar. Son 210 familias beneficiadas de este proyecto de electrificación del corregimiento El Garzal y las veredas Nueva Esperanza, Betel, Tierra Linda, Tierra Firme y Belén, del municipio de Simití (...) Para mí, esta es una oportunidad para demostrar que desde nuestra tierra podemos trabajar y es para nuestro mismo servicio, me siento feliz porque estoy cerca del paso a paso de cómo va el proyecto que por tanto tiempo hemos anhelado¹²⁶.

Como resultado de ello, los habitantes de El Garzal podrán desenvolver otros emprendimientos que habían postergado por la falta de electricidad. Su próxima meta es la construcción de un acueducto, porque solo la escuela y una parte de las casas del corregimiento tienen ese servicio: “Hay que buscar el agua en el río [Magdalena] o en un pozo para traerla en baldes al tanque, no llega hasta la casa de uno. No es agua potable, entonces necesita primero un tratamiento para usarla.”¹²⁷

De modo que en la comunidad de El Garzal, como en otras comunidades de Colombia, sus habitantes están desarrollando formas propias de organizarse para la toma de decisiones en los ámbitos social, político y económico. Todavía, en medio de las tensiones del conflicto armado interno y de las propias tensiones que implica realizar acuerdos comunes. Así mismo, llegan a presentarse tensiones por las diferencias intergeneracionales y las diferentes expectativas sobre el papel que juegan las nuevas generaciones en el territorio social. Sin embargo, los y las jóvenes que deciden permanecer en El Garzal, y también los que estando fuera del corregimiento mantienen

¹²⁶ Entrevista realizada a Rosa, 25 años de edad, mujer, productora agrícola, residente en El Garzal, junio 14 de 2016.

¹²⁷ Entrevista realizada a Edison, 17 años de edad, hombre, productor agrícola, residente en El Garzal, octubre 4 de 2013.



vínculos con ese territorio, pueden ayudar a dinamizar las prácticas locales. Por ejemplo, procurando innovar las formas de producción agrícola y de administración de los negocios familiares y socializando los conocimientos en tecnologías de la información y de las comunicaciones en los que ellos y ellas han avanzado más que sus antecesores.

Consideraciones finales

- La movilidad social guarda una relación directa de correspondencia con las redes de relaciones establecidas con actores sociales internos y externos a la comunidad, con el nivel educativo y la posesión de bienes, siendo la tierra el más importante de ellos.
- La migración de jóvenes ya no implica una salida definitiva, es más bien un proceso de ida y vuelta al territorio rural de origen, especialmente por vínculos afectivos y de carácter económico-emprendedor.
- La pluriactividad puede ser una estrategia de los y las jóvenes para permanecer en el territorio rural sin depender únicamente de los ingresos generados por las actividades netamente agrícolas.
- El proceso de formalización de los títulos de propiedad de la tierra es clave para la permanencia y el retorno de los y las jóvenes al campo, pues, como declara un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia: “es éticamente inaceptable pedirles que permanezcan y desarrollen sus proyectos de vida en el campo si no cuentan con las condiciones económicas para garantizar la estabilidad de sus familias.” (PNUD, 2014: 17).



- Aunque el Estado ha avanzado en términos de inversión para cubrir las necesidades básicas de la población, es necesario continuar haciendo esfuerzos para mejorar las condiciones en que viven las personas en la zona rural dispersa del país, en términos de salud, educación, inclusión digital y comunicación, oferta cultural y recreativa, vías de acceso y medios de transporte, programas de financiación y crédito para sus proyectos productivos, asistencia técnica y oportunidades para la distribución y la comercialización de sus productos, entre otros aspectos.

Referencias:

ANGULO, Roberto et al. (2012), Movilidad social en Colombia. Documentos CEDE, número 43, Bogotá, Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico, Universidad de los Andes.

ARIAS, María A.; Ana IBÁÑEZ y Ximena PEÑA (2013), Mujeres rurales jóvenes y migración en Colombia. Lima, IEP; Documento de Trabajo, 189. Serie Programa Nuevas Trenzas, 8.

ÁVILA, Héctor (2012) “Las prácticas agrícolas en las periferias metropolitanas: Territorialización y sociabilidad en ámbitos de interfase urbano-rural en América Latina”. En: MARTINS, Pedro; Héctor ÁVILA y Tânia WELTER (orgs.). Território & sociabilidade: relatos latinoamericanos, 1ª ED., Florianópolis, Editora da UDESC, pp. 27 – 54.

BELTRAN, William Mauricio e Ivón Natalia CUERVO. “Pentecostalismo en contextos rurales de violencia. El caso de El Garzal, sur de Bolívar, Colombia.”. Artículo aprobado para publicación en la Revista Colombiana de Antropología e Historia, N. 52 (1).



BRUMER, Anita (2014), “Os jovens e a reprodução geracional na agricultura familiar”. En: MENEZES, M.A; STROPASOLAS, V.L; BARCELLOS, S.B.. (Org.). *Juventude Rural e Políticas Públicas no Brasil*. 1ed. Brasília/DF, Secretaria Nacional de Juventude, p. 215-234.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS-DANE (2016a),

Tercer Censo Nacional Agropecuario, “Boletín informativo. No. 2”. Disponible en:

<http://www.3ercensonacionalagropecuario.gov.co/content/bolet%C3%ADn-no-2-0>. Fecha de consulta: marzo 24 de 2016.

_____ (2016b), Tercer Censo Nacional Agropecuario, “Boletín informativo. No. 7”.

Disponible en: <http://www.dane.gov.co/files/CensoAgropecuario/entrega-definitiva/Boletin-7-Mujeres-rurales/7-Boletin.pdf>/ Fecha de consulta: de 2016.

_____ (2008), Censo de población y vivienda de Colombia, año 2005. Análisis de la estructura y composición de las principales variables demográficas y socioeconómicas del Censo 2005.

Informe final. DANE, Bogotá. Disponible en:

http://www.dane.gov.co/censo/files/Grupo_mixto22%20_PUBL.pdf/ Fecha de consulta: marzo 25 de 2016.

MÉNDEZ, Marlon (2012), “Movilidad rural-urbana-rural en el marco de las interacciones entre el campo y la ciudad”. En: MARTINS, Pedro; Héctor ÁVILA y Tânia WELTER (orgs.) *Território & sociabilidade: relatos latinoamericanos*, 1ª ED., Florianópolis, Editora da UDESC, pp. 79 – 96.

MISIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL CAMPO (2015a), *El campo colombiano: Un camino hacia el bienestar y la paz*. Informe detallado de la Misión para la Transformación del



Campo, tomo 1, capítulo dos: “Diagnóstico de las condiciones sociales del campo colombiano”, Bogotá, Departamento Nacional de Planeación.

_____ (2015b), El campo colombiano: Un camino hacia el bienestar y la paz. Informe detallado de la Misión para la Transformación del Campo, tomo 3, Bogotá, Departamento Nacional de Planeación.

PAULILO, María Ignez (2004) “Trabalho familiar: Uma categoria esquecida de análise”. En: Revista Estudos Feministas, 12(1): 229 – 252, enero-abril de 2004.

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO- PNUD (2014), Jóvenes Rurales. Protagonistas del desarrollo humano. Serie Cuadernos Semillero de Desarrollo Rural, Bogotá, PNUD.

STROPASOLAS, Valmir (2016), Sucessão geracional, juventude rural e políticas públicas: as múltiplas faces de uma problemática complexa em questão. Brasília, MDA.

VIERNES 26 DE AGOSTO: EXPERIENCIAS DE TERRITORIALIZACIÓN E INSTRUMENTOS PARA EL ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

Hora: 10:30am - 1:00pm

Salón: No hay



Responsables:

- **Coordinador(a) de mesa: John Jairo Rincón**
- **Comentarista: Isabel Penaranda Currie**

**26. DYNAMICS OF LAND GRABBING IN THE GLOBAL SOUTH:
TERRITORY, EXTRACTIVE ECONOMIES AND SOCIAL
RESISTANCES¹²⁸**

Luis Felipe Rincón¹²⁹
Universidad Estatal Paulista
feliperincom@gmail.com

Introduction

Nowadays, worldwide capital is going through an accelerated process of accumulation and expansion which has the expropriation and the extraction of natural common goods (accumulation by dispossession) as the central point (Harvey, 2003, 2010). This model has a major impact over those countries which show lower levels of economic development and wellbeing for their population (Rincón, 2015). Countries which has been historically submitted and dominated by the relations which are imposed by the industrialized economies, and which have been defined as the “global South” from a critical perspective (Amin, 2012; Tarrow & Tarrow, 2003).

¹²⁸ Paper elaborated with grant #2015/14318-8, & #2013/20189-0 São Paulo Research Foundation (FAPESP).

¹²⁹ Visiting Fellow at International Institute of Social Studies (ISS- Erasmus University Rotterdam). and Post-Doctoral Research Fellow at Universidade Estadual Paulista (UNESP/Fapesp). Email: feliperincom@gmail.com.



The global south does not necessarily correspond to a geographical category (although most countries are actually located at the south of the Equator line) but intends to unite regions which promote historical development and relationships of economic dependence and political subordination in relation to the developed countries. From this perspective, South America, Sub-Saharan Africa and Southeast Asia are known as the global South, areas which over the last years –due to renewed strategies of capitalist expansion– have been the most recent suppliers of commodities, natural common goods such as water (Borras, Fig, & Suárez, 2011), forest (Sauer & Borras Jr., 2015), land (Borras, Franco, Gómez, Kay, & Spoor, 2012; Clements & Fernandes, 2013), biodiversity, minerals (Giarracca & Teubal, 2010), among others (Levien, 2011), which feed the continuous process of recreation and circulation of capital (Adetula, 2008; Levien, 2014).

This process, under the global impact, has brought about a series of problems in local territories such as the processes of deterritorialization of traditional rural communities, negative impacts at a socio-environmental level and the restatement of neo-developmental counseling in public policies, which have led to the emergence of socio-territorial conflicts.

Therefore, and in order to extend the knowledge and interpretation of the economic, social and political processes which are presented in our cases of study in South America, it is essential to expand the frame of analysis at a global scale which allows to recognize the macro processes and their impacts in local contexts.

Justification

This paper has the aim of furthering and delving into the study, analysis and theoretical interpretation of the processes of capital expansion from a “global South” perspective. In this paper



I have managed to identify that the processes of capitalist expansion at their current stage of accumulation by dispossession maintain local features, as well as continuities in the analyzed contexts. In Brazil and Argentina in particular, the dominant process of accumulation corresponds to the expansion of agro-commodities; in Brazil by means of sugar cane crops for biodiesel and forestry plantations of eucalyptus for wood and cellulose; and in Argentina by means of soy and cereal production for export. Nevertheless, in Colombia the accumulation model basically tends to favor the mineral and energy projects, which have led to a drastic reduction of the cultivated surface.

Among the continuities we identify, I remark the control over nature concerning the processes of profitability, the negative impacts at an environmental level, the processes of deterritorialization of ethnic and rural traditional communities (Fernandes, 2013), and finally the neo-developmental orientation in public policies (Aguilar, 2012). All this has led to the fact that the models of development in each of the different countries guide their efforts to sponsor and inspire the extractive productive sectors, mainly because their participation in the GDP is constantly increasing.

Therefore, the preliminary findings of my paper draw the following partial conclusions: first, the economic processes experienced by South American countries are not isolated; on the contrary, they form part of the process of capital expansion at a global scale. Second, I conclude that the process of globalizing the economy, supported by computing advances (Wallesteim 1995, 2007) and transport cost reductions occurring since the 1990s, has enabled the local economies to reach a great integration at a global scale; accelerating the processes of capital expansion and therefore



the local contexts are more capable of the cyclical variations of the world economy (McMichael, 2010, 2012). Finally, I remark the active participation of the

communities and social organizations, at a local and global scale, in defending their permanence in their territory and in implementing alternative strategies of rural territorial development (Borras, 2009; Scoones, 2008).

These elements reinforce the need to analyze and understand the economic, political and social processes not only in South America, but also in other areas of the “global South”. I will particularly focus on Sub-Saharan Africa and Southeast Asia because they are important territories of extractive capitalist expansion how we can conclude from The World Bank report (2011). Research done by McMichael (2010), Kaur (2014) among others shows that Malaysia is the second world producer of African palm trees covering a surface of 4.6 million ha which represents the annual production of 17.6 million t of oil, becoming an important area of expansion of agro-commodities (World Bank 2015). Meanwhile, Mozambique has been placed over the last years as an important center of expansion for capital investment, mineral extraction and energy resource. Moreover, in Mozambique there are agribusiness programs of rural territorial development being set up, especially sugar cane (Borras et al., 2011; Clements & Fernandes, 2013) placing the territory as one of the economic fast-growing markets of the area (World Bank 2015).

Objectives

i) Analyze the main productive transformations and environmental impacts as part of the current accumulation system



ii) Identify the alternatives of development and their articulation from a perspective of south-south cooperation.

iii) Contribute to the theoretical/conceptual discussion in the analysis of the processes of expansion of capital at the extractive stage in the global South; and to make methodological contributions to the transcontinental comparative studies.

Results

The study I am working on corresponds to a convergence of multiple disciplines such as political economy, rural sociology and human geography, keeping a critical perspective of the social phenomena. We agree with Harvey (2003) when he states that, at the current stage of neoliberal capitalist development at an international scale, a process of accumulation by dispossession is dominant. This process is contrary to the traditional process of expansive accumulation of capital, which involves the

commercialization and privatization of land, forced expulsion of rural populations; the conversion of different types of property rights-common, collective, state, etc.-by rights of personal property; the abolishment of the rights of common goods; the transformation of workforce into merchandise and the abolition of types of alternative production and consumption; the colonial, neo-colonial and imperial processes of expropriation of assets, including natural resources.

This model is the imposition of a developmental paradigm on the agrarian sector where the capitalist relations of production linked to the international capital prevail and are in contrast to the perspectives of development and autonomy from the territories which promote the local



populations, thus resulting in a process of socioterritorial disputes (Fernandes, 2013). Consequently, in our research, I demonstrate that the preliminary stage of the current program of capitalist expansion and accumulation in the rural territories of South America is developed in three ways: i) the agribusiness model related to the production of commodities for export; ii) the expropriation of common goods for the development of extractive mineral and energy projects; iii) the development of real estate/tourist projects and land grabbing (Rincón, 2015).

This new stage of capitalist accumulation has the financial market as the central point. This market is stimulant, dynamic, a source of resources and an area of speculation of goods, especially raw materials (grain, energy, minerals, land, work, common goods), which lead to a break-up between the processes of production of the objects and the demand for consumption. As a consequence, the prices of the goods are set in the stock market, which are determined by the market's speculative fluctuations.

When expropriating and using the common goods, the extractive model leads to the confrontation of the problems and disturbances to the environment which are characteristic of the neoliberal productive model, affecting its availability and permanence over time. This leads to a continuity and/or emergence of socioterritorial conflicts, on behalf of the impact at “every scale and multiple dimensions which involve relations in the territory” (Fernandes 2013).

Conclusions

The “global South” is the scene of territorial transformations with direct consequences for the rural traditional populations, and the access and control of



natural common goods, on behalf of the capital expansion in the characteristic territory. These changes are expressed in the loss and reduction on the productive structure of food of basic and local consumption which is currently concentrated on a mold of agro-commodities for the international markets. The territories are confiscated to favor foreign investment via land-grabbing, and mineral and energy extractive projects, which have led to the emergence of socio-territorial conflicts over the persistence of traditional communities, the defense of food safety, and the preservation and autonomy from natural common goods (Caceres, 2015; Sauer, 2012).

Therefore, it is necessary –by pointing out local features and making an analysis of their regional and global impact-to carry out a comparative analysis of global South areas in order to account for the continuities in public policies, models of development, strategies of resistance and an impact on the macroeconomic changes to fully understand the phenomena which are expressed from a local, regional and global perspective.

References

Adetula, V. (2008). Impact of “New” Global Trade Regimes on Retional Integration Processes in the South. Buenos Aires.

Aguilar, C. (2012). Transitions towards post-extractive societies in Latin America. Dublin: Comhámh. Retrieved from [http://www.womin.org.za/images/the-alternatives/fighting-destructive-extractivism/C_Aguilar - Post Extractive Societies in Latin America.pdf](http://www.womin.org.za/images/the-alternatives/fighting-destructive-extractivism/C_Aguilar_-_Post_Extractive_Societies_in_Latin_America.pdf)

Amin, S. (2012). Contemporary Imperialism and the Agrarian Question. *Agrarian South: Journal of Political Economy*, 1(1), 11–26. <http://doi.org/10.1177/227797601200100102>



Borras, S. M. (2009). Agrarian change and peasant studies: changes, continuities and challenges – an introduction. *Journal of Peasant Studies*, 36(1), 5–31.

<http://doi.org/10.1080/03066150902820297>

Borras, S. M., Fig, D., & Suárez, S. M. (2011). The politics of agrofuels and mega-land and water deals: insights from the ProCana case, Mozambique. *Review of African Political Economy*, 38(128), 215–234. <http://doi.org/10.1080/03056244.2011.582758>

Borras, S. M., Franco, J. C., Gómez, S., Kay, C., & Spoor, M. (2012). Land grabbing in Latin America and the Caribbean. *Journal of Peasant Studies*, 39(3-4), 845–872. <http://doi.org/10.1080/03066150.2012.679931>

Caceres, D. M. (2015). Accumulation by Dispossession and Socio-Environmental Conflicts Caused by the Expansion of Agribusiness in Argentina. *Journal of Agrarian Change*, 15(1), 116–147. <http://doi.org/10.1111/joac.12057>

Clements, E. a., & Fernandes, B. M. (2013). Land Grabbing, Agribusiness and the Peasantry in Brazil and Mozambique. *Agrarian South: Journal of Political Economy*, 2, 41–69. <http://doi.org/10.1177/2277976013477185>

Fernandes, B. M. (2013). Re-peasantization, Resistance and Subordination: The Struggle for Land and Agrarian Reform in Brazil. *Agrarian South: Journal of Political Economy*, 2(3), 269–289. <http://doi.org/10.1177/2277976013517200>



Giarracca, N., & Teubal, M. (2010). Disputas por los territorios y recursos naturales: el modelo extractivo. *Revista ALASRU, Nueva Época*, 113–133. Retrieved from <http://www.ger-gemsal.org.ar/wp-content/imagenes/Giarraca-y-Teubal.pdf>

Harvey, D. (2003). *The new imperialism*. (O. U. Press, Ed.). New York.

Harvey, D. (2010). *El enigma del capital y las crisis del capitalismo*. (Akal, Ed.). Madrid.

Levien, M. (2011). Special economic zones and accumulation by dispossession in India. *Journal of Agrarian Change*, 11(4), 454–483. <http://doi.org/10.1111/j.1471-0366.2011.00329.x>

Levien, M. (2014). Da acumulação primitiva aos regimes de desapropriação. *Sociologia & Antropologia*, 04(01), 21–53.

McMichael, P. (2010). Agrofuels in the food regime. *Journal of Peasant Studies*, 37(4), 609–629. <http://doi.org/10.1080/03066150.2010.512450>

McMichael, P. (2012). The land grab and corporate food regime restructuring. *Journal of Peasant Studies*, 39(3-4), 681–701. <http://doi.org/10.1080/03066150.2012.661369>

Rincón, L. F. (2015). (NEO)EXTRATIVISMO E DESPOJO NO SUL GLOBAL: CONFLITOS E RESISTÊNCIAS NOS TERRITÓRIOS. INTRODUÇÃO. *Revista NERA*, 18(28), 9–18.

Sauer, S. (2012). Land and Territory: Meanings of Land between Modernity and Tradition. *Agrarian South: Journal of Political Economy*, 1(1), 85–107. <http://doi.org/10.1177/227797601200100106>



Sauer, S., & Borras Jr., S. M. (2015). “ Land grabbing ” e “ green grabbing ” : Uma leitura da “ corrida na produção acadêmica ” sobre a. Campo E Território.

Scoones, I. (2008). Mobilizing against GM crops in India, South Africa and Brazil. *Journal of Agrarian Change*, 8(2-3), 315–344. <http://doi.org/10.1111/j.1471-0366.2008.00172.x>

Tarrow, S., & Tarrow, S. (2003). ‘Global’ Movements, Complex Internationalism, and North-South Inequality. Workshop on Contentious Politics, Columbia University, October 27, 2003.

Wallerstein, I., (1995) *After liberalism*. New York: The New Press.

Wallerstein, I., (2007) *La crisis estructural del capitalismo*. Bogotá: Ediciones Desde Abajo.

World Bank. (2011). *Rising global interest in farmland: Can it yield sustainable and equitable benefits?*. Washington, DC: World Bank.

World Bank. (2015). *Data*. Washington, DC: World Bank. (Retrieved from <http://data.worldbank.org>).

27. ALTERNATIVE TERRITORIAL ORDERING: PROSPECTS AND CHALLENGES OF GRASSROOTS-STYLE NEW POLITICS IN COLOMBIA



Patricia M. Rodríguez¹³⁰
Ithaca College, New York
prodriguez@ithaca.edu

Abstract:

Following a series of mass mobilizations in 2004-2008 in Cauca, Colombia to protest human rights violations and corporate economic dominance, Colombian social movements organized national dialogues to create mandates that reflect collective stances on issues such as security, land reform, territorial autonomy, and alternative development. These mandate/proposals are direct responses to past and current state and elite counter-reform policies, and continue to be worked on in the present, as the leaders and members of various organizations (Congreso de los Pueblos -CdP), Coordinador Nacional Agrario, and others) sit to negotiate their vision of alternative national agrarian policy with government representatives, despite constant surveillance, death threats, killings, and government-mandated arrests. In addition, for the past two years, in parallel to the peace negotiations between the Colombian government and FARC (Revolutionary Armed Forces of Colombia) in Havana, *campesinos*, Afro-Colombians, indigenous peoples, and urban social movements in Colombia have demanded a more profound peace; it entails new forms of thinking about territoriality and sovereignty. This includes the demarcation of (and resource-delivery to) autonomous zones of *campesino reserves* (ZRCs), and agro-food zones (*territorios agro-alimentarios*). Mobilization has been at the core of creation of new conditions that challenge the global and national interventionist political and economic model.

¹³⁰ Associate Professor, Ithaca College, New York. prodriguez@ithaca.edu



This paper draws on field research (interviews with grassroots activists in Cauca, Colombia, analysis of organization documents and mandates) and secondary research to bring light to how solidarity-based communities/groups are thinking and constructing their own notions of territorial ordering and rights, socioeconomic rights, and production and distribution of (mainly) agricultural goods. Civil society-led proposals center on demanding a ‘particular sort of state’ to confront their dispossession (Bebbington et al., 2015). But in what ways do these proposals replace rather than support mainstream local, regional, and national development(s) in Colombia? What is the viability of the proposed mandates in face of the powerful economic/institutional project of elite actors?

The organizations in CdP face the challenges of sustaining allied presence and building inclusivity in arenas (political-institutional, economic, and cultural) that have been the domain of other actors.

The paper argues that these groups construct ‘new spaces of engagement’ and creation of wide networks to solidify collective (non-fragmented) positions able to generate consensus on local level cultural, economic, and socio-political projects, but yet articulated at national level. The maneuvering between the local and national organizing work,

and the ability to establish competencies to administer services (the state merely delivers the resources) are two of the main challenges to overcome to establish the predominance of popular-local territorial ordering. Local organizing in Cauca is of prime importance, as it is only through an intercultural dialogue over how to live and govern together that territoriality and sovereignty can begin to be established. The work on figuring out the ‘complexity and diversity of local struggles for land, as well as the relations of production and social reproduction within different rural settings (Vergara-Camus 2014, 37). At the local level, in spaces where there are land or property-based conflicts between different ethnic groups and a state and private sector actors that



exacerbate the animosities, as in Cauca (Ng'weno 2007; Lopez 2014), a civil society-based territorial governance approach that stresses 'flexible authority structures' (and not rigid rules that abide by state-led equations regarding multiculturalism and territoriality) in the negotiation over territorial ordering can be a big part of the strategy of building conviviality, if not coalitions (Rappaport and Dover 1996, 36). As a campesino organization from Cauca notes in its mission document, "when we ourselves recognize that certain territory belongs to the indigenous, or to Afro-descendants, they also recognize us as *campesinos* with rights to our territory" (MCC 2014). This work explores ways in which local grassroots organizations understand their production and consumption, how they think about the common good, and establish a position in face of the question of whether and when to prioritize profit maximization or food consumption. The local collective work on *planes de vida*, human rights, alternative territorial ordering, and development is not limited to a struggle for the state's adherence to established rights, but it is also a struggle to enter previously non-permeable realms of state policy making and thereby "increase the infrastructural power of the state" (Keck 2015, 222). This includes local pressures to transform security within the territories, not in the name of national development, but as a way to achieve local sustainable communities based on dignity for everyone. It also includes a necessary collective analysis of how to halt the expansion of extractivism, and thus establish long term peace with social justice.

Sovereignty and alternative territoriality require revisiting the mining-energy and agricultural policies, as groups believe that civil society cannot construct a new model of peace with social justice without negotiating these themes. *Congreso de los Pueblos* calls for a broad Mesa Social por la Paz that includes input and engagement from broad sectors of the Colombian population



including political parties and economic groups. Concomitantly, issue of property rights need to be clarified legally in order to solve some of the huge problems created by displacement and dispossession in the countryside. Challenge to ownership of land by multinational companies are being decided in judicial courts, over whether said ownership was done legally under Law 160/1994, which defines the guidelines for ownership, sale, and buying of land, especially of public lands that are now part of the reparations for *campesinos* and other groups according to Victims and Land Restitution Law. In some cases, as in Cajibío, Cauca, civil society groups are coming together themselves to present projects that challenge the presence of one multinational corporation, Carton Colombia (Smurfit-Kappa).

On their part, state actors insist on formulas based on separate minorities' legal/territorial circumstances and relationships, on programs that promote partnerships between *campesinos* and agribusiness enterprises (ZIDRE plan/ Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico/Ley 223), and a posture of non-negotiation on the extractivist model. For instance, Decree 1953 (2014) defines the concept of ETI (Indigenous Territorial Entity), which was established in the 1991 Constitution. Though it has taken the State more than twenty years to pass, this legislation specifies how autonomy will operate within indigenous territories; but it doesn't, however, establish how ETIs will relate to territories in its surroundings. This regulation of *resguardos* in a separate realm than the negotiations with other civil society groups around territory and land is divisive.

The Colombian political and economic model is something that social movements in Colombia are contending with, in a different manner than other regional examples. Colombian rural movements cannot reject the state and form autonomous communities as in the Zapatista model; nor have they chosen the Brazilian Landless Rural Workers' Movement alternative of 'working with the state'



and negotiating market integration via decisions on private property rights that establish a temporary ‘use concession’ for settled landless families (Vergara-Camus 2014). My argument is that Colombian rural movements have taken the arduous route of challenging the state from within in order to establish alternative forms of territorial ordering, within a common governance system. The research builds on Acemoğlu’s (2015) concept of inclusive state building, or cases in which civil society builds the ability, along with pluralistic economic and political norms, to not only ‘check’ the power of the elite actors, but also to get the state to do more in terms of delivery of goods and security. The broad themes of this paper (social movement networks, state capacity, participation and change) contribute to debates around public policy, development, and peace.

Bibliography

Acemoğlu, Daron, and James Robinson. 2015. *State-Building: A Political Economy Perspective*. Guillermo O’Donnell Memorial Lecture. Kellogg Institute for International Studies/University of Notre Dame. September 30. <http://kellogg.nd.edu/news/acemoglu2.shtml>

Amnesty International. 2015. *Colombia, Restoring the Land, Securing the Peace: Indigenous and Afro-descendant Territorial Rights*. London: Amnesty International.

Asher, Kiran. 2009. *Black and Green: Afro-Colombians, Development, and Nature in the Pacific Lowlands*. Durham: Duke University Press.

Barton, Jonathan, and Alvaro Román. 2012. Social Movement Strategies for Articulating Claims for Socio-Ecological Justice: Glocal Assymetries in the Chilean Forestry Sector. *Globalizations* 9(6): 869-885.



Bebbington, Anthony, and Jeffrey Bury, eds. 2013. *Subterranean Struggles: New Dynamics of Mining, Oil, and Gas in Latin America*. Austin: University of Texas Press.

Congreso de los Pueblos. 2013. *Memoria del Congreso para la Paz*. Bogotá.
www.congresodelospueblos.org

Congreso de los Pueblos. 2015. *Llamamiento a fortalecer la participación de la sociedad en los diálogos de Paz*. www.congresodelospueblos.org

Diaz, Catalina. 2008. Challenging Impunity from Below: The Contested Ownership of Transitional Justice in Colombia. In K. Mcevoy and L. McGregor, eds. *Transitional Justice from Below: Grassroots Activism and the Struggle for Change*, 189-215. Oxford: Hart.

Fuentes, Adriana. 2010. *Marcos legales de acceso a la tierra: caso Colombia*. Bogotá: CINEP/Programa por la Paz.

Fundación Territorios por Vida Digna. 2011. *Descubriendo territorios: violaciones a los derechos humanos y violencia política en el departamento de Cauca*. Informe no. 5. Popayán: FTVD.

GAIN. 2015. The Altillanura: An Uncertain Future. *Global Agricultural Information Network* report date 10/13/15.

Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 2012. *Atlas de la distribución de la propiedad rural en Colombia*. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia.



Keck, Margaret. 2015. Weaving Social Movements Back In. In Federico Rossi and Marisa von Bülow, *Social Movement Dynamics: New Perspectives on Theory and Research from Latin America*, 215-227. Burlington, VT: Ashgate.

Lemaitre, Julieta, et al. 2011. *Derechos enterrados: comunidades étnicas y campesinas en Colombia, nueve casos de estudio*. Bogotá: Universidad de los Andes/USAID.

López, Daniela. 2014. Historia de los conflictos interétnicos por el territorio en Chocó y Norte de Cauca. *Memoria y Sociedad (Pontificia Universidad Javeriana)* 20 (37): 34-52.

Mitchell, Christopher, and L. Hancock (eds). 2012. *Local Peacebuilding and National Peace: Interaction Between Grassroots and Elite Processes*. London: Bloomsbury Academic.

Ng'weno, Bettina. 2007. *Turf Wars: Territory and Citizenship in the Contemporary State*. Stanford: Stanford University Press.

Ó Loingsigh, Gearóid. 2011. Una mirada desde el sur: huellas de lucha y resistencia. Bogotá: Impresol.

Rappaport, Joanne, and Robert Dover. 1996. The Construction of Difference by Native Legislators: Assessing the Impact of the Colombian Constitution of 1991. *Journal of Latin American Anthropology* 1(2): 22-45.

Rodríguez-Garavito, Cesar. 2011. Ethnicity.gov: Global Governance, Indigenous Peoples, and the Right to Prior Consultation in Social Minefields. *Indiana Journal of Global Legal Studies* 18(1): 263-305.



Vergara-Camus, Leandro. 2014. *Land and Freedom: The MST, the Zapatistas and Peasant Alternatives to Neoliberalism*. London, Zed Books.

28.A INTERDISCIPLINARIDADE NA EDUCAÇÃO DO CAMPO COMO INSTRUMENTO PEDAGÓGICO DO PROCAMPO – ALAGOAS/BRASIL



Autor: Manoel Valquer Oliveira Melo¹³¹
Universidad Central de Araraquara
valquermelo@hotmail.com

Coautor: Oriowaldo Queda¹³²
Universidad Central de Araraquara
quedaoriowaldo@gmail.com

RESUMO

O presente trabalho tem como escopo refletir sobre o acesso da política de formação para educadores do campo no território do agreste alagoano, amparada a partir de alternativas interdisciplinares circunscritas na pedagogia da alternância e no trabalho como princípio educativo. Para alcançar o objetivo proposto, utilizaremos como base empírica de análise uma experiência pioneira transcorrida no Programa de apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação do Campo/PROCAMPO, no âmbito da Universidade Estadual de Alagoas – UNEAL em parceria com o Governo Federal através do Convênio com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE, Ministério da Educação-MEC e a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão-SECADI. O princípio metodológico norteador da abordagem, buscará problematizar as dimensões sociais, culturais e ambientais a partir das alternativas pedagógicas interdisciplinares propostas para este coletivo. Destacaremos que o curso têm 02 áreas de concentração: Línguas, Artes e Literatura (30 vagas) Ciências da Vida, da Natureza e Matemática

¹³¹ Doutorando do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente da UNIARA.
E-mail: valquermelo@hotmail.com

¹³² Professor Dr. do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente da UNIARA
E-mail: quedaoriowaldo@gmail.com



(30 vagas). A proposta de qualificação profissional para os 60 futuros educadores do campo, vislumbra a dar uma resposta qualitativa à práxis educativa em questão. Objetivando a compreensão teórica e prática, com base na visão sistêmica, consideraremos a *ressignificação da diversidade cultural da atual ruralidade*, como síntese da expressão de alternativas pedagógicas para o empoderamento dos sujeitos do campo. No itinerário da pedagogia crítica, propomos dialogar com este processo de sociabilidade, na tentativa de postular um modelo de razoabilidade paradigmática para compreensão do acesso da política de formação para educadores do campo ofertada no território alagoano.

Palavras-chave: Interdisciplinaridade, Pedagogia da alternância, Trabalho como princípio educativo.

INTRODUÇÃO

As diretrizes norteadoras dessa abordagem pretende compreender a política de acesso à formação de educadores do campo amparada a partir de alternativas pedagógicas interdisciplinares circunscritas na pedagogia da alternância (Tempo – Comunidade) e do trabalho como princípio educativo. Baseando-se nestes recursos analíticos, buscaremos associar as experiências advindas do uso dessas ferramentas na formação de educadores do campo na região do agreste alagoano, consubstanciando com as suas adaptações e alternativas locais. As correlações destas modalidades de ensino serão colocadas sob a perspectiva epistemológica da interdisciplinaridade. A combinação entre o trabalho produtivo e a educação, já se tornou emblemático e referenciando, como um



instrumento da sociabilidade e emancipação da classe trabalhadora em sua totalidade¹³³. Mas considerando que as condições objetivas imbricadas na relação do homem com a natureza são contraditórias, a sua base de reprodução social também faz parte do processo educativo.

Sabemos que o modelo pedagógico caracterizado pela alternância é de origem francesa e era de cunho religioso, foi introduzido no Brasil, em 1969, no Estado do Espírito Santo através do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo - MEPES (BRASIL, 2006). Antecedentes da proposta de escolarização no território, (ALVES, 2012; MATTOS, 2010; MELO, 2010; RIBEIRO, 2008) nos apontam que posteriormente veio a ser implantado na Região Nordeste, no Estado de Alagoas no município de Arapiraca em 1981, a criação de uma das Casas de Famílias Rurais – CFR¹³⁴. Esta memória foi obscurecida no território analisado, pois até o presente momento não existem dados documentais que comprovem os relatos de experiência do funcionamento da CFR no agreste alagoano.

Ribeiro (2008) afirma que a *pedagogia da alternância*¹³⁵ foi uma ferramenta utilizada com o intuito de equacionar as discrepâncias sociais entre o trabalho como força reprodutora da sociedade frente à desumanização provocada pelo capitalismo, e que por outro lado, existia a ação dos movimentos católicos que procuravam combater ao crescente movimento do comunismo ateu com suas novas teorias ideológicas, tanto na Europa como no Brasil.

É importante registrar aos avanços provocados a partir das intermediações da sociedade civil

¹³³ Analogamente diz-se que a abordagem filosófica sobre o referido modelo já aparece distintamente em algumas das obras de Karl Marx, nos estudos sobre o Capital, sobre a escola na integração da educação com a produção material. (MARX, 2006, 2009, 2012)

¹³⁴ É um espaço destinado à formação de jovens do meio rural.

¹³⁵ Alternância do ambiente no aprendizado educacional, neste caso, se insere no tempo escola e no tempo comunidade (o espaço de aprendizado é alternado frente às necessidades dos alunos, o campo, o rural, o lazer; a escola, a casa, o trabalho, a comunidade, etc.) novos e antigos espaços de discussões são retomados e revistos dentro de uma estética educacional não tradicional.



organizada e dos movimentos sociais na política que envolve as práticas educativas nas escolas do campo. No que se refere ao resgate de pedagogias não consolidadas, suas ações permitiram a criação de novas institucionalidades para discutir a práxis educacional voltada para o homem e a mulher do campo. Por outro lado, se estabelece a criação de um ambiente político favorável, que é revestido pelos interesses educacionais das ruralidades presentes no campo, cujo objetivo é em transformar as condições de exclusão educacional que se encontra a comunidade escolar da zona rural.

Destacaremos que a proposição oriunda das alternativas pedagógicas analisadas tem a tendência de não medir esforços para tentar unir o ensino-aprendizagem, contextualizando a teoria e a prática com a cotidianidade da vida dos educandos e educadores envolvidos de modo interdisciplinar:

O fundamental no conhecimento não é sua condição de produto, mas seu processo. Com efeito, o saber é resultante de uma construção histórica, realizada por um sujeito coletivo. Daí a importância da pesquisa, entendida como processo de construção dos objetos do conhecimento. (SEVERINO, 1998:40).

Vislumbram que nesta práxis, a formação educativa reconheça o papel dialógico da relação entre o aluno e o professor. Neste processo de dialogicidade as mudanças reverberam no ato de ensinar-aprender dentro de um coletivo, correspondendo que:

Quando vivemos a autenticidade exigida pela prática de ensinar-aprender participamos de uma experiência total, diretiva, política, ideológica, gnosiológica, pedagógica, estética e ética, em que a boniteza deve achar-se de mãos dadas com a decência e com a serenidade. (FREIRE, 1996:13).

A partir da perspectiva crítica, identificamos que as práticas pedagógicas não podem estar dissociadas dos modos de vida dos educadores e educandos do campo. Neste sentido, o ensinar-



aprender pressupõe o empoderamento dos atores da educação, em meio a sua cotidianidade e a ruptura da reprodução social na qual estão inseridos, quer seja no campo, ou em outros espaços sociais, hipoteticamente ao longo do trabalho, o nosso intento é reafirmar que o sujeito ao:

(...) assumir posição sobre como se imagina o presente e o futuro da sociedade na qual, mediado por tais decisões, ele se reproduz individualmente, como ele a deseja enquanto ser, sobre qual direção do processo corresponde a suas ideias sobre o curso favorável de sua própria vida e de seus semelhantes (LUKÁCS, 2010:99).

Entendemos que é necessário olhar o educando como um detentor de possibilidades para a emancipação e a conquista da sua autonomia. A escola deve configurar-se como o lugar do acontecer solidário e do diálogo, das discussões delineadas principalmente para compreensão das condições objetivas. Pois evidenciamos que os interesses e os aspectos da ruralidade na política educacional do campo são construídos a partir de interditos, apropriados invisivelmente, mantendo poderes e saberes de paradigmas dominantes. Nas determinações dessa lógica:

Não surpreende, portanto, que mesmo as nobres utopias educacionais, anteriormente formuladas do ponto de vista do capital, tivessem de permanecer estritamente dentro dos limites da perpetuação do domínio do capital como modo de reprodução social metabólica (MÉSZÁROS, 2008:26).

Partindo da perspectiva crítica metodológica das doutrinas utópicas da educação, já sabemos das expectativas que sobrepujam os interesses da educação do campo, e esta sozinha não deve operar milagres, as heranças das formulações educacionais que interviam na vida escolar destes coletivos, se perpetuaram na forma de subalternidade e docilidade. Pois, o perfil pedagógico designado para estes sujeitos sociais era adequado para:

Um povo manso e resignado, respeitoso e discreto, um povo para quem os patrões sempre tenham razão, como não haveria ele de ser o ideal de uma burguesia que só aspira resolver a sua própria crise, descarregando todo



o peso sobre os ombros das massas oprimidas? Só um povo “gentil e meditativo” é que poderia suportar sem “discussão” a exportação feroz. É esse povo de que o fascismo necessita é o que a sua escola se apressa em preparar. (PONCE, 1963:167)

Dentro desta representação social reducionista, a educação investida era advinda de programas e modelos exógenos que reforçavam a lógica de exclusão escolar ofertada para esse povo, que a caracterizava *consequentemente* em parâmetros estruturais que tinha como finalidade a manutenção de um modelo de educação dissociado das necessidades reais. De acordo com (Mészáros, 2008), é necessário compreender que a educação é continuada, permanente, ou não é educação. A mudança qualitativa é apreender que a educação não é uma mercadoria. Neste outro modelo, o ensinar-aprender para a educação do campo deve propor uma educação para além dos limites do capitalismo no campo, aprofundar o debate da Reforma Agrária e dos Assentamentos rurais no território, evidenciando os motivos que tem aprofundado o esvaziamento do homem e da mulher do campo. É necessário legitimar alternativas que contribuam para o que resta da biodiversidade local, como a Agroecologia frente à expansão da Agricultura Convencional na região do agreste de Alagoas.

Dentro da análise percebemos que a política de acesso à formação dos educadores do campo em Alagoas ainda está em processo de construção. Como suporte normativo para nortear esta demanda tem-se a RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 040/2014, que dispõe sobre a regulamentação da oferta da Educação do Campo no Sistema Estadual de Educação de Alagoas. As orientações expressas no Parecer, advogam que as *práticas permanecem* inalteradas e inflexíveis por conta de outras finalidades difusas da própria política de acesso.

JUSTIFICATIVA



De acordo com a consciência dos limites regulados pela legitimação de um sistema educacional que não valoriza o ensinar-aprender, a pedagogia da alternância e o trabalho como princípio educativo serão pesquisados a partir de dimensões ontológicas, epistemológicas, políticas, ideológicas e agroecológicas. Partiremos destas perspectivas e analisaremos a política de acesso para formação de educadores do campo no Nordeste do Brasil. Especificamente os imperativos estruturais e as alternativas adaptativas transcorridas no território do agreste de Alagoas. Dentro destes critérios, objetivamos sistematizar e prospectar um conhecimento sobre os desdobramentos políticos e pedagógicos, e suas possibilidades de abrangência para a compreensão da educação do campo no território estudado.

Inicialmente o que nos motivou a esta investigação, procede de uma experiência como educador do PROCAMPO, ao perceber as dificuldades de incorporar nas disciplinas de filosofia, ações práticas de acordo com o que preconizava a pedagogia da alternância, especificamente no chamado Tempo – Comunidade. Tendo em vista que não existia uma receita ou modelo anterior que servisse de guia para comparar com aquela intervenção. Dentre as sinalizações que compôs o nosso consenso, era que aquele contexto comunitário da escola do campo estava sob a ótica dos formandos, e os aspectos da alternância significativamente davam sentido de pertença e a referência do lugar da existência, que agora participava também como o lugar da formação pedagógica proposta pelo programa.

O método desta perspectiva nos convida a insistir na inserção do cotidiano do educando como ferramenta para criação de novas prévias-ideações para transformar as condições de vida dos estudantes do campo. O trabalho como princípio educativo, ao mesmo tempo, modifica a posição do objeto pesquisado em sujeito pesquisador, considerando ideologicamente as bases objetivas e



concretas. Porém, destacamos na análise, os antagonismos incongruentes existentes na produção deste conhecimento que está subordinado aos interesses do capitalismo do campo e da sua incapacidade de articulação dos meios de apreensão do próprio conhecimento objetivo, enquanto modelo efetivo de emancipação e transformação social radical.

Nessa interface apontamos a coexistência histórica do papel da educação escolar no campo e da assistência técnica como produtos institucionais importantes da sociedade brasileira. A noção do processo extraescolar idealizado pelo movimento extensionista aparece com um propósito, é educar o público. Especificamente a comunidade rural, vista como uma organização social homogênea, sem conflitos internos de interesses, (Queda, Szmrecsányi, 1972). Os programas visavam à melhoria do padrão de vida do público rural por meio de predeterminações pedagógicas condicionadas a modelos educacionais assistencialistas e tecnicistas:

(...) esses programas relegam a um segundo plano, ou simplesmente omitem, quaisquer referências às reformas econômicas (redistribuição da renda agrícola) e político-sociais (alterações da estrutura de poder) no meio rural, que condicionam a sua efetiva implementação. (QUEDA, SZMRECSÁNYI, 1972:272).

A maioria dos analistas tem observado que existe uma trajetória específica para esses programas, a ação de adaptar os modelos de escolarização no campo, adequando às necessidades momentâneas de sustentação do próprio modelo doutrinário econômico e para suprir as novas demandas da sociedade capitalista. A primeira vista, podemos dizer que houve inovações institucionais. Mas dentro dessa ótica, a situação das formulações dos problemas estruturais da educação do campo permaneceu praticamente estagnada, pois:

A expansão do sistema educacional continuava a processar-se principalmente nas zonas urbanas. Além do quantitativamente menos difundida, a educação escolar de nível primário no meio rural era qualitativamente



inferior à escola oferecida nas zonas urbanas. (...) A situação de inferioridade educacional, do campo em relação às cidades, foi-se mantendo inalterada. (IBID, 1972:278).

Nesta análise, há uma realidade que reaparece insistentemente (Marx, 2009), pois consta que a chamada burguesia submeteu o campo sob o domínio da cidade. Desse modo, podemos analisar que existe uma cultura da dominação voltada sob o pensar urbanocêntrico, disposta historicamente a qualquer custo, a se perpetuar para manter o domínio da cidade como o lugar central da educação. A exclusão educacional nas escolas do campo é parte dos resultados da perda crescente das ruralidades que foram invisibilizadas de acordo com as necessidades de outrem.

Se historicamente partirmos das tentativas de implantação dos modelos doutrinários capitalistas, a exemplo da catequese jesuítica na pedagogia rural, e o modelo extensionista de cunho meramente capitalista. Analogamente tendo por base esses modelos exógenos, o nosso objetivo é investigar, se a perpetuação deste atraso no mundo rural brasileiro reforça ainda que paradoxalmente, a subalternidade da política de acesso para a formação superior para os educadores do campo no Agreste de Alagoas. Para corroborar com o que foi proposto trazemos à baila o que cita o Parecer N° 313/2014 – Conselho Estadual Educação- CEE/AL, sobre o Procampo e a pedagogia da alternância, objetos da nossa análise:

A Pedagogia da Alternância em Alagoas encontra alguns obstáculos diante da estrutura pré-estabelecida de organização dos sistemas de educação e o pouco conhecimento dos gestores acerca de seu reconhecimento pela legislação vigente. Após o 4º período, a turma será dividida pelas duas áreas de concentração: Línguas, Artes e suas Literaturas e Ciências da Vida, da Natureza e Matemática, tendo como eixo central a educação do campo. Destaca-se a necessidade de regularizar este curso na UNEAL, visto que a turma tem tido inúmeros prejuízos com as grandes demoras no repasse dos recursos, chegando a ter períodos de quatro a oito meses de interrupção. (CEE/ALAGOAS, 2014:11).



Com a sucessão dos programas governamentais e seus componentes ideológicos, a educação do campo em Alagoas, sobre o ponto de vista da política de acesso à formação de educadores, está circunscrita entre avanços e retrocessos. Objetivando uma compreensão teórica e prática do ensinar-aprender na experiência caracterizada como pedagogia da alternância, com base na visão sistêmica, consideraremos a *ressignificação da diversidade cultural* das ruralidades presente nas experiências, como síntese da expressão de alternativas pedagógicas para o empoderamento dos sujeitos educadores, objeto desta análise.

No nosso itinerário metodológico propomos dialogar com este processo de sociabilidade a partir do trabalho como princípio educativo. Com a intenção de ratificar dentro desta problematização uma mudança educacional radical e emancipadora, que extrapole uma educação do campo para além das determinações incorrigíveis dos modelos impostos. Legitimando a inter-relação e o intercâmbio dos educandos com o seu cotidiano, através de modelos paradigmáticos que permitem a autonomia e a resiliência frente às tendências dominantes que pregam mudanças sociais na vida rural, mas que parecem inalteradas e ameaçadoras.

OBJETIVOS:

Geral: Analisar a política de acesso à formação para educadores do campo amparada sob alternativas pedagógicas interdisciplinares no PROCAMPO/Alagoas.

Específicos:



- a) **Identificar os educandos enquanto objetos e pesquisadores da sua própria práxis educativa;**
- b) Fundamentar os aspectos da pedagogia da alternância associada ao trabalho como princípio educativo;
- c) Identificar o trabalho como fundante na divisão do território urbano-rural;
- d) Prospectar os desdobramentos do conhecimento interdisciplinar durante as incursões observadas no cotidiano escolar dos educadores.

HIPÓTESES

- a) A política de acesso à formação de educadores do campo no agreste alagoano está circunscrita sob a influência de modelos exógenos, mas amparados por alternativas pedagógicas locais.
- b) As instituições de educação do campo em Alagoas reproduzem as desigualdades sociais e educacionais no meio rural, tendo em vista que a expansão dos usos da terra para a agricultura convencional são demandas determinadas pelo aumento da produção no território.
- c) Com a vinculação de criação de políticas públicas para manter o homem e a mulher jovem no meio rural, devido ao processo de intensificação do “ruralismo urbano” que cresceu nas últimas décadas no Brasil, a tendência é termos um campo vazio e com a população envelhecida.

METODOLOGIA

De acordo com abordagem da pesquisa, utilizaremos como método de catalogação de dados:

- Um arcabouço bibliográfico;
- Tem um viés descritivo; tendo em vista a posição dos agentes (sujeitos) observadores, pesquisadores e observados;



- A Pesquisa é de suporte qualitativo, propondo encontrar subsídios epistemológicos que possam qualificar a educação do campo dos sujeitos envolvidos;
- Pesquisa de campo com o uso da pedagogia da alternância de forma subjetiva;
- Exame de documentos oficiais, leis, relatórios, atas e agendas que tratem do tema em Alagoas e no Brasil.
- Gravação em vídeo, fotografias e mídias, criação de um dossiê para se construir uma ideia da situação local e pesquisas em sites da web.
- Construção de Banco de dados de novas experiências paradigmáticas a serem analisadas no território;
- Mapeamento das políticas públicas afirmativas para a educação do campo em Alagoas;
- Utilizaremos o método hipotético-dedutivo a partir do materialismo histórico dialético
- O uso de categorias conceituais como: pedagogia da alternância e trabalho.

Dos instrumentos de coleta de dados tendo as pessoas como fonte de informação:

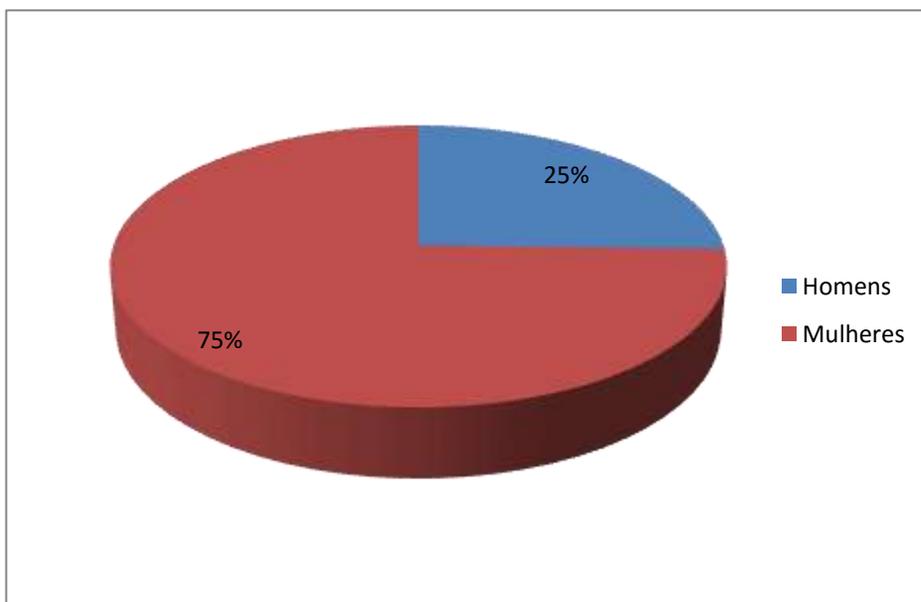
- 1) Diagnóstico Rápido participativo - DRP
- 2) Solicitação de liberação ao Conselho de Ética para prosseguir com a pesquisa;
- 3) Pesquisa Observação Participante; Pesquisa Etnográfica (Ação-participativa);
- 4) *A utilização do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE*
- 5) Entrevistas semiestruturadas;
- 6) Questionário
- 7) Depoimentos;
- 8) Grupo Focal (a turma de 60 alunos do PROCAMPO/UNEAL);



Ressaltamos que parte da metodologia já está sendo elaborada. Neste cenário, identificamos que a forma de acesso dos educandos ao Procampo foi via vestibular, e a proposta de abrangência e representatividades diversas, dentro de um contexto sócio-histórico e político da primeira licenciatura para a educação do campo em Alagoas, nos parece ter sido alcançado neste primeiro momento.

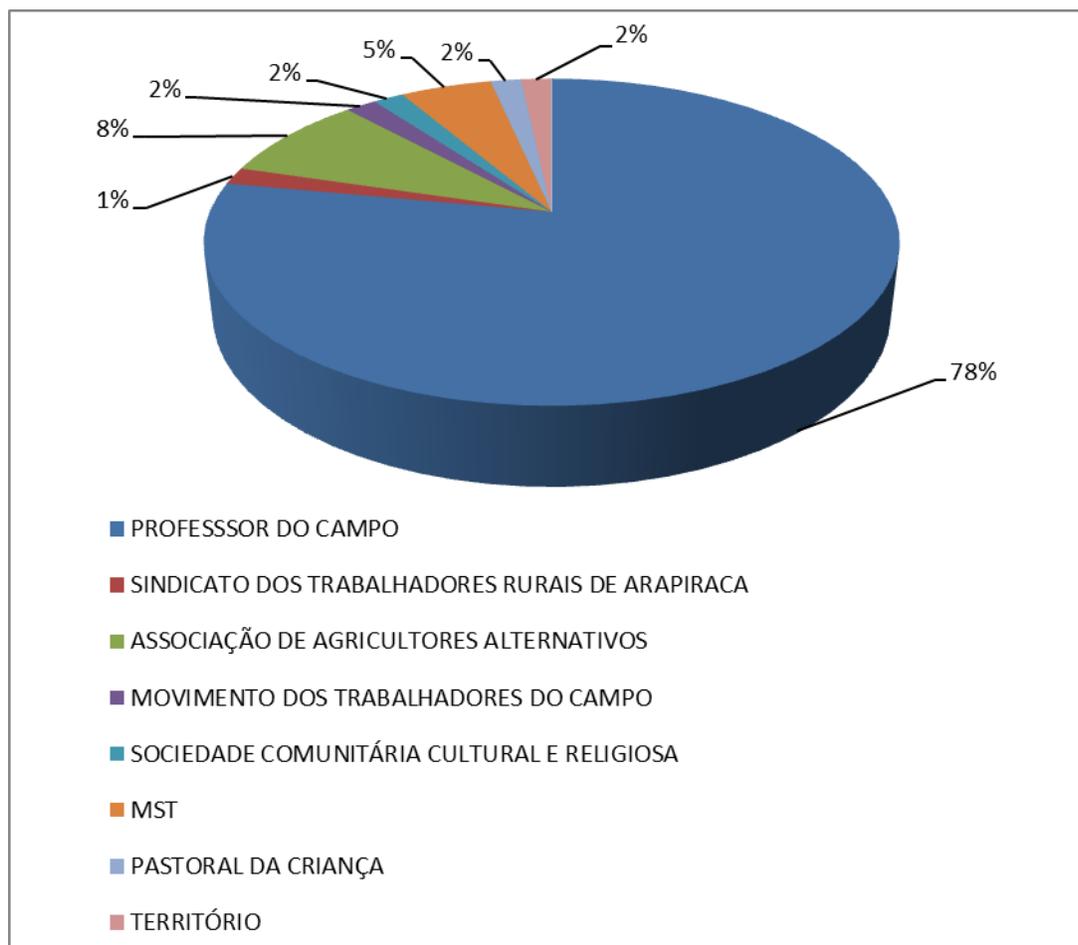
De acordo com os critérios estabelecidos, dados da pesquisa aponta que no contexto geral do grupo focal, no universo de 60 alunos, 78% destes já são professores do campo que atuam na Educação Básica. Considerando os demais segmentos das entidades de classes e movimentos sociais que atuam no campo, a sua representatividade é de 38%, neste sentido, a diversidade do campo na política de acesso para os educadores do campo, demonstra certa heterogeneidade no que tange a questão de gênero, o lugar que reside, a faixa etária, etc. Para ilustrar, as figuras abaixo podem nos subsidiar nas nossas incursões.

Figura 1 – A relação de gênero por sexo



Fonte: Arquivo da pesquisa, 2016

Figura 2 – A forma de acesso de acordo à representatividade no campo





Fonte: Arquivo da pesquisa, 2016.

BASE TEÓRICA, CONCEITUAL E EMPÍRICA

Identificando o que dispõe o Decreto N° 7.352, de 4 de Novembro de 2010, sobre a política de educação do campo, de acordo o Art. 2º, incisos I, II e III. Segundo a legislação, são os princípios propostos para a educação do campo:

I - respeito à diversidade do campo em seus aspectos sociais, culturais, ambientais, políticos, econômicos, de gênero, geracional e de raça e etnia;

II - incentivo à formulação de projetos político-pedagógicos específicos para as escolas do campo, estimulando o desenvolvimento das unidades escolares como espaços públicos de investigação e articulação de experiências e estudos direcionados para o desenvolvimento social, economicamente justo e ambientalmente sustentável, em articulação com o mundo do trabalho;

III - desenvolvimento de políticas de formação de profissionais da educação para o atendimento da especificidade das escolas do campo, considerando-se as condições concretas da produção e reprodução social da vida no campo. (BRASIL,2010).

No artigo citado, no que se refere o desenvolvimento de políticas de formação de profissionais da educação que atenda as especificidades do campo, os desafios são atenuados através de programas e convênios governamentais que funcionam de forma precarizada e em estruturas que não atendem as reais necessidades da formação desses profissionais. As ações pedagógicas são formuladas apenas no discurso, na prática os objetivos permanecem incipientes. A nosso ver, a reprodução da



vida no campo é também reproduzida dentro dos muros da instituição escolar. São reflexos das condições de desigualdades e exclusões educacionais que se justificam restringindo em promover as mudanças socioambientais necessárias.

Por entendermos que o meio ambiente é a totalidade das ações humanas disposta sobre um determinado espaço geográfico e que carrega em si a diversidade ambiental. Por sua dinâmica natural e social, o espaço acaba se reelaborando, trazendo consigo novas necessidades e novas possibilidades.

Considerando o desenvolvimento e manutenção da política de educação do campo em seus sistemas de ensino, as bases metodológicas da experiência de ensinar-aprender a partir da pedagogia da alternância são colocadas em todas as etapas da educação do campo. Segue a normativa do decreto que norteia um dos objetos da pesquisa. O Art. 7º, inciso II explicita, que: *“II - oferta de educação básica, sobretudo no ensino médio e nas etapas dos anos finais do ensino fundamental, e de educação superior, de acordo com os princípios da metodologia da pedagogia da alternância”* (IBID).

Ocorre que no Brasil as instituições e os modelos educacionais avançaram, porém ainda permanecem os seus avanços desconhecidos e ausentes da maioria da população brasileira. No caso da pedagogia da alternância na educação do campo, ainda continua sendo pouco confrontada e disseminada nas esferas das políticas públicas educacionais para o campo. Acontece que algumas mudanças são facilmente apenas reproduzidas socialmente no meio ambiente rural, não há uma efetivação da transformação radical para exercer o enfrentamento a esta contradição ideológica, que foi imposta pela economia política na condição da exploração do homem pelo homem pela força de trabalho e pela ignorância.



O Estado de Alagoas assim como a maioria dos Estados do Nordeste possui um extenso território rural, aonde contraditoriamente poucos são os detentores das forças produtivas e não há diversificação na produção agrícola. Principalmente quando se estabelece o monocultivo da cana de açúcar, como um único meio de agricultura produtiva. “A ação do agronegócio na região é – também – a produção de commodities para exportação. O Nordeste é uma região sobretudo agroexportadora, e donos de terra, senhores do engenho e coronéis sempre se beneficiaram dessa condição” (FERNANDES et al, 2014:43). Nesta região, o trabalho vem de antecedentes perversos – o da escravidão. O valor do trabalho se manifesta por vários aspectos, e é calculado pela sua reprodução material e, nunca pelo valor da pessoa humana, ou seja, ainda continua como um subemprego devido às condições materiais e psicossocial dos trabalhadores do campo.

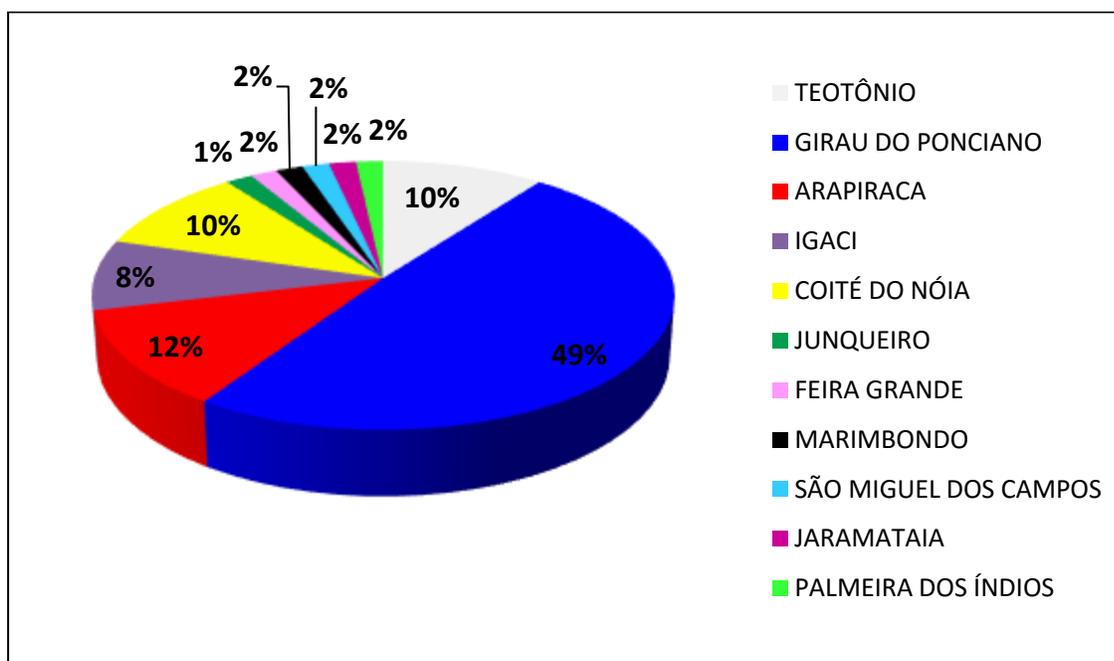
Entretanto, na condição crescente da sociedade, a decadência e o empobrecimento do trabalhador é o produto do seu próprio trabalho e da riqueza produzida por ele. Consequentemente, a miséria surge de forma espontânea da *essência* do trabalho presente (MARX, 2006: 71)

É possível notar que alguns problemas persistiram ou se complexificaram com o tempo. O espaço da educação do campo vem sendo sufocada frente às atuais demandas, a exemplo, da expansão da agricultura convencional (o Agronegócio) frente à agricultura familiar. A exclusão no uso da terra na região Nordeste tem sido um fenômeno recorrente:

O processo recente de estrangeirização da terra adquirida por empresas e governos da China e países árabes tem criado novos elementos da questão agrária. Também o monocultivo de árvores para produção de papel para exportação tem expropriado e subalternizados populações camponesas e indígenas (FERNANDES et al, 2014:43).

Para retornamos a nossa discussão, durante as nossas incursões no chamado (Tempo – Comunidade), foi proposto um Diagnóstico Rápido Participativo – DRP, com a intenção de relacionarmos a identificação do sujeito (os educandos) referenciando o seu lugar de pertencimento.

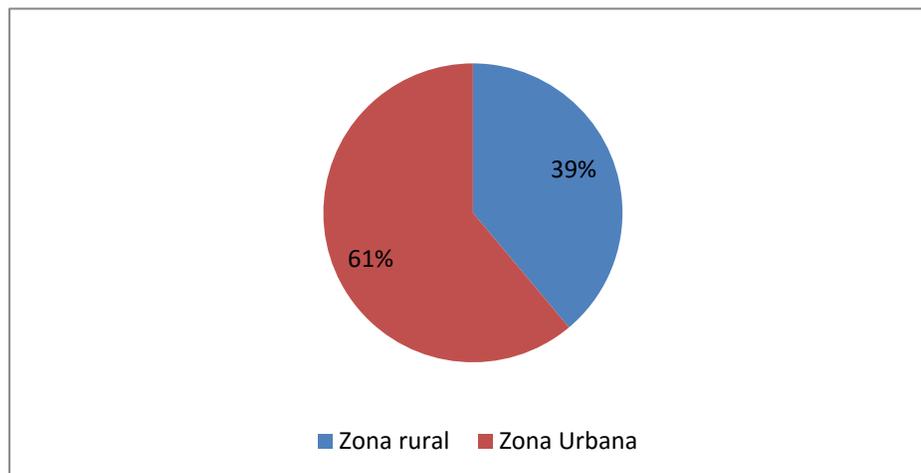
Figura 3 – relação dos municípios atendidos pelo PROCAMPO/UNEAL



Fonte: Arquivo da pesquisa, 2016.

Manifestando em primeira análise o diagnóstico levantado, percebemos que na **figura 3 e 4**, existe uma demanda maior em número de alunos advindos da zona urbana, e isto certo modo, reforça na análise a dominação da cidade sobre o campo, ainda que a licenciatura esteja voltada para educadores do campo. A comprovação na ilustração abaixo confirma o que havíamos afirmado anteriormente, a cidade se sobrepõe aos domínios do campo.

Figura 4 – relação dos educandos de acordo com o lugar que reside



Fonte: Arquivo da pesquisa, 2016.

Noutra análise proposta, fizemos uma nova leitura dos dados, e concluímos que a maioria dos alunos (as) que residem na zona urbana é porque o campo lhe foi negado. Dentro do DRP, partindo de um diagnóstico participativo sobre os possíveis lugares da alternância do (Tempo – Comunidade), que por ventura iriam ser visitados e trabalhados no território rural.

Quadro 1 – Temas apontados pelos estudantes no chamado tempo-comunidade.

POTENCIALIDADES	PROBLEMAS E CONFLITOS
Água encanada, rio, cisternas, cacimbas, poço e carros de bois e	O ínfimo abastecimento de água para algumas comunidades



carroças de burro para o transporte da água.	
Casas aconchegantes.	Moradias precárias.
Energia elétrica	O sistema de abastecimento de energia é precário
Escolas de ensino básico e superior	Escolas precárias, a falta de creches, bem como a obrigatoriedade do deslocamento para adquirir o aprendizado escolar.
Transportes para acessibilidade dos moradores, o carro de mão como veículo para transportar o lixo	Falta de estradas asfálticas
As famílias e a união existente nas suas comunidades	Famílias carentes e desestruturadas
As associações comunitárias; o MTC	A falta de um líder e de cooperativas
A agricultura para o plantio, o cultivo e o complemento da renda familiar.	Trabalhadores convivendo em terras arrendadas
Terra fértil que tranquiliza os agricultores para a lavoura, inclusive os que são considerados de baixa renda.	O êxodo rural



Informatização e o acesso à internet	A dificuldade de acesso à telefonia
O posto médico	A sua ausência de atendimento para alguns moradores
<i>Os projetos? Quais? As parcerias?</i>	A falta de políticas públicas
As raízes culturais, a identidade do homem do campo.	Grupos culturais desativados
O Amor e a hospitalidade entre as pessoas	As divergências sobre o pensamento do Outro
Profissionais capacitados, professores e alunos, agentes de transformação social.	Jovens e grupo sem oportunidades e sem nenhuma formação
A Cana de açúcar	A fuligem das queimadas
A natureza (o meio ambiente), o ar puro e a tranquilidade do lugar	Falta de áreas de lazer no campo
A igreja	Discriminação a outros cultos religiosos
A esperança, o espírito de luta e a autoestima das pessoas.	A falta de conscientização dos sujeitos frente ao cotidiano, (o valor do voto)
O trabalho do homem e da mulher do campo	O preconceito histórico sobre o gênero

Fonte: Arquivo pessoal, 2015.

Durante a nossa análise evidenciamos que devido à ausência de uma política de infraestrutura básica para suprir as carências das escolas do campo, há uma busca incessante por uma reprodução social do modelo dominante vigente. Na edição popular sobre a Ideologia Alemã é possível



destacar a contraposição entre a separação entre a cidade e o campo. “*A maior divisão do trabalho material e espiritual é a separação da cidade e do campo... e estende-se através de toda história da civilização até os nossos dias*” (ENGELS; MARX, 2009, p. 74 e 75).

Segundo a análise amistosa do nosso **Quadro – 1**, apontamos uma das possíveis causalidades que se objetivam na divisão do rural e urbano, e que se dá através do fenômeno da cornubação¹³⁶ desenfreada do território, não se sabe o que é rural e o que é o urbano, daí acontece que podemos pensar que os sujeitos do campo podem está passando por um processo de desterritorialização. Outro problema apresentado demonstra o desinteresse através da evasão do alunado por razões diversas, podemos associar o que reverbera negativamente é a falta de articulação desse sujeito social com o seu lugar de existência. Estes, muitas vezes não se reconhecem como pertencente àquele local, e a sua formação educativa é direcionada para a reprodução do mesmo, que é imposto (o do modo e estilo de vida urbano), este tende abandonar o campo em razão de uma promessa que o melhor modo de vida é da cidade.

Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar as condições em que os educandos em relação uns com os outros e todos com o professor ou a professora ensaiam a experiência profunda de assumir-se. Assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque capaz de amar. Assumir-se como sujeito porque capaz de reconhecer-se como objeto. (FREIRE, 1996, p. 23).

Cada sujeito também pode ser objeto de uma razão global, mesmo que existam existências, intencionalidades, identidades e ontologias. O mundo está no lugar e o lugar está no mundo, que

¹³⁶ Designa uma extensa área urbana surgida do encontro ou junção da área urbana de duas ou mais cidades. Seus limites geográficos se perdem em virtude do seu crescimento horizontal.



numa abordagem sistêmica e atual, o mundo é o próprio lugar. Entretanto o sujeito não se reconhece muitas vezes como pertencente a tal. E este parece ser o nosso grande desafio para a questão de repensar sobre a atualidade da ontologia do ponto de vista metodológico. Recorremos essencialmente à citação da tese ontológica do ser social:

(...) a historicidade do ser é o fundamento último da sua exigência metodológica...Imprescindível, apenas, é apontar que, para ele, a totalidade é complexa porque histórica. A explicitação categorial de toda e qualquer totalidade se dá no sentido da gênese e desenvolvimento de categorias mediadoras que tornam cada vez mais heterogênea a sua estrutura originária, às vezes por meio de rupturas ontológicas (LESSA, 1999, p. 06).

Retomando a perspectiva ontológica do trabalho como princípio educativo, não há sociedade sem trabalho, este, se insere como categoria fundante para a reprodução social entre os indivíduos. Podendo ser objetivada na prática, através das formações sociais, das transformações dos lugares e suas paisagens. O que essa ação humana provoca nos indivíduos muitas vezes é estranho e está fora de sua consciência. Desde modo:

É preciso insistir: este saber necessário ao professor - que ensinar não é transferir conhecimento - não apenas precisa ser apreendido por ele e pelos educandos nas suas razões de ser - ontológica, política, ética, epistemológica, pedagógica, mas também precisa ser constantemente testemunhado, vivido. (FREIRE, 1996, p. 27).

Para exemplificar, a lógica perversa que tem acompanhado a dinâmica da alienação do espaço do homem no contexto geográfico rural, o fator econômico, se sobrepõe a todos os outros contextos. Em relação à concepção urbanocêntrica da educação do campo, não se tem senão a aparência do real. Por isso, não seria possível abarcar a totalidade, enquanto ela é mais que a soma de todas as partes.



A gênese ontológica do trabalho enquanto princípio educativo, predominante o real é independente do que se deseja e nos alerta para a necessidade de procurarmos dissociar alguns termos que nos parecem normais, mas que de fato, são de uma natureza posta (social) e são bem distintos da realidade concreta. Sob esta visão, a teoria só se realiza enquanto prática na medida em que a realização se transforma em necessidades. Nesta relação, a saber, que:

Todo ato de trabalho, portanto, dá origem a uma nova situação, tanto objetiva quanto subjetiva. Essa nova situação possibilitará aos indivíduos novas prévias-ideações, novos projetos e, desse modo, novos atos de trabalho, os quais, modificando a realidade, darão origem a novas situações, e assim por diante (LESSA; TONET, 2011, p.22).

Vale observar, que atualmente com a crise dos modelos institucionais extensionistas, o tema da pedagogia da alternância tem estado na pauta do dia. Com isso, a modalidade educacional que tenta associar o trabalho e a educação, tem se mostrado em processo de construção, embora possamos suscitar que o seu objetivo central também se apresente de forma antagônica e paradoxal. Desta feita:

Da educação que, não podendo jamais ser neutra, tanto pode estar a serviço da decisão, da transformação do mundo, da inserção crítica nele, quanto a serviço da imobilização, da permanência possível das estruturas injustas, da acomodação dos seres humanos à realidade tida como intocável. (FREIRE, 2000, p. 27).

Vale salientar, que a centralidade do trabalho na discussão busca estabelecer uma reflexão ontológica e epistemológica sobre a teoria e prática como objeto de enfrentamento ao sistema desumanizador e excludente da educação do campo. Síntese de uma relação de forças que reaparece a cada momento histórico com suas incompatibilizações e incongruências. Sob o olhar da pedagogia crítica é necessário desvelar a capacidade dos elementos aqui dispostos.



Através da manipulação, as elites dominadoras vão tentando conformar as massas populares a seus objetivos. E, quanto mais imaturas, politicamente, estejam elas (rurais ou urbanas) tanto mais facilmente se deixam manipular pelas elites dominadoras que não podem querer que se esgote seu poder (FREIRE, 1987, p. 83).

É nesta perspectiva que os enfoques propostos podem contextualizar a educação do campo dentro de uma leitura específica, para além dos modelos conformistas, sobre o que é na prática a pedagogia da alternância e sua relação com o trabalho enquanto princípio educativo.

RESULTADOS ESPERADOS

A partir desta análise, diríamos da responsabilidade atribuída ao papel pedagógico interdisciplinar para além da educação formal. E que é necessário o despertar para a consciência das bases materiais reais e objetivas, nas quais os atores sociais estão inseridos, e isto será determinante para o enfrentamento dos problemas locais relacionados à degradação socioambiental do território. Compreende que a pedagogia da alternância, atua independente do espaço físico, quer seja no campo, na fábrica, em casa, no lazer, etc. Esta pode ser de suma importância como mediadora e transmissora de teorias relacionadas às práticas que elevem o protagonismo e a emancipação dos atores sociais concomitantemente com a educação formal.

A ideia da alternância perpassa em mudar as regras do jogo para promover o empoderamento dos sujeitos com o seu cotidiano de trabalho, estudo e lazer, inclusive para enfrentar o poder ideológico de que o modo de vida rural é inferior. Desse modo o trabalho deve ser visto como o embrião do princípio educativo, sendo a categoria fundamental aonde os indivíduos podem se transformar ontologicamente como seres sociais emancipados e autônomos. Nesta perspectiva, (Mészáros, 2008) o sujeito social capaz de regular esse processo poderá alcançar um condição denominada de “produtores livremente associados”.



Desse modo, a orientação da pedagogia crítica na educação do campo, poderá ratificar uma educação para além dos modelos incorrigíveis do capital. Ressignificando o seu papel reformulador na criação de uma consciência crítica da totalidade social. Sinalizando que através da categoria existencial e ontológica do trabalho, os indivíduos procuram se adaptar às novas necessidades e exigências que surgem pelo *telos* (*finalidade da ação*) da causalidade do próprio processo dialético do trabalho, e que é inerente. O homem transforma a natureza e acaba se transformando continuamente, criando novas possibilidades e novas demandas nos respectivos espaços sociais.

O reconhecimento ontológico da pedagogia da alternância e do trabalho para compreender este recorte histórico da atualidade da educação do campo no Nordeste do Brasil, busca através de uma experiência localizada, a reconquista sobre a perda da atividade do trabalho, não como algo externo ou exterior ao sujeito, mas na tentativa do reencontro do próprio sujeito consigo mesmo, pedagogicamente reconhecendo o território e o meio ambiente como construções histórico-social.

Diante dos pressupostos das transformações do papel da educação para o ambiente rural, propomos uma educação do campo sob o paradigma da Agroecologia frente à expansão da Agricultura Convencional na região do agreste rural alagoano, como um modelo alternativo que possa ensinar-aprender no para minimizar o conjunto de problemas que estão subordinados ao objeto em questão. Ressaltando que a pesquisa ainda está em estágio de construção e os desdobramentos estão no processo do devir.

REFERÊNCIAS



BRASIL. Conselho Nacional de Educação (2006), Parecer CNE/ CEB n. 01/2006 que dispõe sobre dias letivos para a aplicação da Pedagogia de Alternância nos Centros Familiares de Formação por Alternância (CEFFA). Brasília, DF.

_____ (2010). Presidência da República, Decreto no 7.352, de 4 de novembro de 2010: dispõe sobre a Política Nacional de Educação do Campo e sobre o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. Brasília, Diário Oficial da União.

ALAGOAS. Conselho Estadual de Educação (2014), Resolução Estadual de Educação do Campo em Alagoas - Nº 040. Maceió, Diário do Estado de Alagoas.

_____ (2014), Parecer Estadual de Educação do Campo em Alagoas - Nº 313. Maceió, Diário do Estado de Alagoas.

FERNANDES, B.M.; WELCH, C. A.; GONÇALVES, E.C. (2014), Os usos da terra no Brasil. Debates sobre Políticas Fundiárias. 1. Ed. São Paulo, Cultura Acadêmica: Unesco,

FREIRE, Paulo (2000), Pedagogia da indignação: cartas pedagógicas e outros escritos. São Paulo: UNESP.

_____ (1996), Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo, Paz e Terra.

_____ (1987), Pedagogia do Oprimido. 11. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra.

LESSA, Sergio (1999), Lukács, Ontologia e Método: Em Busca de Um (a) Pesquisador (a) Interessado (a). Rio de Janeiro.

LESSA, Sergio, TONET, Ivo (2011), Introdução à filosofia de Marx. 2.ed. São Paulo, Expressão Popular. LUKÁCS, György (2010), Prolegômenos para uma ontologia do ser social: questões de



princípios para uma ontologia hoje tornada possível. Tradução Lya Luft e Rodnei Nascimento. São Paulo, Boitempo.

MARX, Karl (2006), Manuscritos Econômicos Filosóficos. São Paulo, Boitempo.

_____ (2012), Crítica ao programa de Gotha. São Paulo: Boitempo.

MARX, K. & ENGELS, F (2009), A Ideologia Alemã. São Paulo, 1.ed. Expressão Popular.

MÉSZÁROS, István (2008), A educação para além do capital. Tradução Isa Tavares. 2ª ed. São Paulo, Boitempo.

MATTOS, Beatriz Helena de Mello (2010), Educação do campo e práticas educativas de convivência com o semiárido: a Escola Família Agrícola Dom Frágoso. Tese de Doutorado do programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Ceará. Ceará. Disponível: <<http://www.repositorio.ufc.br>> Acesso em maio de 2015.

MELO, ANDRÉ DE OLIVEIRA (2010), Educar para a Sustentabilidade: a experiência da Casa Familiar Rural de Boa Vista do Ramos-Amazonas. Dissertação de Mestrado do programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da Universidade Federal do Amazonas – Amazonas, Disponível: <<http://www.tede.ufam.edu.br>> Acesso em maio de 2015.

QUEDA, Oriowaldo; Szmrecsányi, Tamás (1972), O papel da educação escolar e da assistência técnica. In. QUEDA, Oriowaldo; Szmrecsányi, Tamás (Org.) Vida rural e mudança social. São Paulo, Editora Nacional.

PONCE, Anibal (1963), Educação e Luta de Classes. Tradução José Severo de Camargo Pereira. Editora Fulgor, São Paulo.

RIBEIRO, Marlene (2008), Pedagogia da alternância rural/do campo: projetos em disputas. Educação e Pesquisa. São Paulo, Vol. 34, Núm. 1, enero-abril. USP, São Paulo.



SEVERINO, Antônio Joaquim (1998), O conhecimento pedagógico e a interdisciplinaridade: o saber como intencionalização da prática. In: FAZENDA, Ivani. (Org). Didática e Interdisciplinaridade. Campinas, SP: Papirus.



29. MEMORIA Y TERRITORIO: SABERES Y PRÁCTICAS GEOPOLÍTICAS EN EL CAUCA INDÍGENA

Natalia Barragán León

**Universidad Nacional Autónoma de México y Universidad Nacional de Colombia
geoconsul1@gmail.com**

La geopolítica de los pueblos es una práctica que supera la forma ortodoxa de entender la Geografía Política, partiendo de ello esta presentación abordará las posibilidades de comprensión de los actores y saberes geopolíticos del Pueblo Nasa, presentes en la memoria de su histórica lucha por el territorio en el sur occidente colombiano. Para ello se expondrá parte del proceso de recuperación de su historia política y las implicaciones geopolíticas del proceso de reconocimiento identitario, visibilizando así su carácter organizativo frente a la defensa histórica de su territorio.

El pueblo Nasa- Paéz, es un pueblo indígena que se encuentra en el suroccidente colombiano, más exactamente en el departamento del Cauca. Es un pueblo de tradición oral y este trabajo abarca la recuperación de la memoria histórica de larga duración y su concepción de la política, por ende su conceptualización de territorio. Estas memorias además se encuentran representadas en unos murales escenificados llamados Mapas Parlantes, herramientas de formación política utilizadas en el marco de la organización indígena del sur occidente, los cuales fueron realizados en la década de 1980 entre indígenas y solidarios.

Se tomará como saberes y prácticas geopolíticas, no desde la geopolítica ortodoxa, sino lo geopolítico como una cualidad de la sociedad histórica y en particular una cualidad del actuar de los pueblos indígenas, que se manifiesta a lo largo de su historia y a diversas escalas geográficas.



30. PROBABILIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA PISTA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSÉ MARÍA CÓRDOBA, MUNICIPIO DE RIONEGRO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN COLOMBIA

Jhon Jairo Serna Sánchez¹³⁷
Universidad Católica de Oriente
jserna@uco.edu.co

1. Despojo y desarraigo

“Entre lo que se trama en la zad (zona a defender) hay algo de la comuna, de 1871, cuando una irreprimible emoción colectiva invade a los habitantes de París, que se convirtieron tras las barricadas, en los dueños de su vida cotidiana, y de su historia levantando una esperanza revolucionaria enorme y acarreado a su paso levantamientos en numerosas ciudades, algo de las comunas de la Edad Media que consiguieron liberarse del poder feudal y defender los comunales, esas tierras, herramientas y recursos para uso compartido y algo de la comuna de Nantes de 1968 en la que obreros y estudiantes ocuparon el ayuntamiento de la ciudad, bloquearon la región y organizaron el abastecimiento de los huelguistas con los campesinos. Ese es el medio de la lucha al que hay que profundizar, la búsqueda de un presente deseable y de un futuro posible. Ahora desde la primavera de 2013, visualizamos el futuro de la zad sin aeropuerto, a partir de obras colectivas en asambleas, con el pasar de las siembras y los cultivos, algo está naciendo de nuestro

¹³⁷ Esta intervención se realiza desde la pertenencia a Agrodscendientes en la Coordinación de su Comité Académico, la Mesa de Derechos Humanos y Atención Humanitaria del Oriente en el cual es el Secretario Técnico, de la Veeduría VIDA por la defensa de la autonomía del territorio de la Segunda Pista del Aeropuerto Internacional José María Córdoba de Rionegro, de la cual es asesor, por delegación de la Mesa de Derechos Humanos y Atención Humanitaria del Oriente y de la Universidad Católica de la cual es funcionario. Correo electrónico jserna@uco.edu.co.



arraigo sobre el territorio, se trata de construir entre nosotros una construcción común de la situación”¹³⁸

Otra batalla se asume, contra nosotros mismos y en nosotros mismos esta vez, siempre hay más que individuos separados, envarados en identidades sociales; nos tortura el consumismo, las dependencias, los prejuicios, el sexismo. Los conflictos que nacen en la tensión, ya sea sobre el uso de un bien común, sobre un desacuerdo político o sobre una agresión física, no son fundamentalmente diferentes de aquellos que animan cualquier barrio o pueblo y esto hay que reconocerlo, sobre todo por la falta de participación de un sujeto político en el caso de los campesinos afectados por la construcción probable de la segunda pista del aeropuerto internacional José María Córdoba de Rionegro.

Queda claro que el reconocimiento es una política de inclusión del otro en el espacio moral y político, del que al parecer el campesino está excluido, y desde la postura teórica que se asume a efectos de este estudio, cabe señalar que lo que le preocupa a Levinas y a Derrida es el otro excluido, y desde esa postura argumentativa, realizamos acá, una desarticulación crítica de esa exclusión y su lógica filosófica, como una reacción que asume que por más que la filosofía griega la disfraza de racionalidad articulada en torno a la identidad, como principio supremo del discurso, lo que evidenciamos es que la identidad es inclusión y exclusión en lo abstracto, exclusión de todos los que difieren de ella, e inclusión de los que son de su lógica existencial, lo que se traduce como

¹³⁸ Defender la Zad Colectivo Mauvaise Troupe. L'éclat



un ejercicio que en nombre de la inclusión, genera y valida la exclusión política, del otro, del campesino que no entra en su esquema de organización del poder de la sociedad.

La apropiación es una actividad social de formato jurídico y funcionalidad económica, y en ella es imprescindible la identidad para distinguir la relación de propiedad: el apropiador-propietario, el expropiado o excluido, y lo apropiado o propiedad en sus diversas variantes (Aeropuerto, la apropiación define las ideas) desde un esquema al que se pretende que nos acostumbremos y que validemos, en torno a una mirada excluyente del otro que se hace conveniente negar. La apropiación es originariamente violenta contra el otro, el expropiado o competidor, que en ese acto queda excluido de la relación de propiedad, del uso y disfrute de lo apropiado, como ejemplifica la apropiación de los bienes naturales y de las aguas por parte del capital financiero internacional.

“Ni Levinas ni Derrida exploran la dimensión jurídico-económica de la apropiación (a diferencia de Marx, que se centró en ella) a estos pensadores como a nosotros, nos interesa la violencia contra el otro, el excluido, que originada en el acto de apropiación real es incorporada por el discurso filosófico fundacional como matriz estructural que va al discurso en general y a sus consecuencias culturales y políticas”¹³⁹. La filosofía de la totalidad se constituye de dos formas: 1. Legitimando la inclusión de lo idéntico y exclusión de lo diverso u otro, con base en la violencia, 2. Lo que valida apropiándose de la política, a la que hace suya como racionalidad que incluye lo idéntico y excluye lo diverso, pero la filosofía de la alteridad, asume que la violencia que Derrida y Levinas tratan de des(en)cubrir y erradicar del discurso filosófico lo que intenta es una purificación ética

¹³⁹ Poscolonialismo, emigración y alteridad. Gabriel Bellos Reguera, Granda, 2007, pp 9-10



radical desde la alteridad como deconstrucción de lo identitario posesivo, que es invitado y retado a hacerse cargo del otro.

2. Recuento de una lucha de resistencia, que es melancólica.

Sin duda alguna, la tarea que venimos implementando con las comunidades de probable afectación con la construcción de la segunda pista del aeropuerto de Rionegro, lo que ha de realizar en una vitalización de la vida pública democrática, contra la apatía de la participación en voga; desde una intervención pedagógica, diferenciada e indagadora, con formas de representación nuevas, para hacerle frente a una mixtura entre el miedo, la defensa del territorio, y el embrujo de quienes representan los intereses del gran capital que quiere adueñarse de sus territorios.

Calificar la lucha de resistencia como un ejercicio melancólico significa reconocer un agridulce en el trabajo organizativo de las comunidades, quienes “al parecer han logrado” que se reduzcan las hectáreas de 784 que afectaban a 5 veredas y a 10 mil personas, a 301 hectárea que al parecer afectarán a unas 2500 personas. Y cuando digo que al parecer, es porque ese es el último dato que emitió el consorcio responsable de diligenciar el estudio de factibilidad de la construcción de la segunda pista, pero aún no se cambia el auto que validó la primera versión del impacto arriba mencionado.

Evidenciamos que la pérdida que se va a sufrir además de sus fincas, en algunas de ellas con entables productivos y no sólo zonas de habitación, está acompañada por el daño a las fuentes de agua, microcuencas, bosques, espacios comunitarios, nacimientos de agua y por supuesto los espacios propios de la tradición familiar y social. Lo que acá se puede perder es el proyecto de vida personal, familiar y social de las colectividades humanas, que como se indicó en el numeral anterior



son vistas como sujetos sin rostro y por lo tanto sin derecho a tener derechos, por cuanto el aeropuerto en su segunda pista pudo disponer de otro trazado, en el que no se incluyera pobladores campesinos, muchos de ellos en descomposición como cultura campesina, pero en recomposición de un tejido social comunitario con dinámicas semiurbanas en su modo de vida en construcción.

El hecho es que la Veeduría por la defensa y la autonomía del territorio VIDA, viene realizando su actividad desde Agosto de 2015, hasta el momento presente, manteniendo una relación permanente con las comunidades afectadas que dejaron de ser 5 veredas y ahora al parecer son 4, y con unas condiciones de impacto no tan profundas como estaban estipulados al comienzo del proyecto de construcción e la Segunda Pista del aeropuerto de Rionegro. Un dato muy importante es reconocer que se ha contado desde el comienzo de las actividades con el respaldo por la Mesa de Derechos Humanos y Atención Humanitaria del Oriente de Antioquia, por Agrodendientes y por la Universidad Católica de Oriente, para que la organización Veeduría VIDA, contara con respaldos claros en su apuesta de acompañar a las comunidades en su posible afectación por esta obra.

Un par de datos importantes desde lo formal de la lucha estriba en que en reunión de 6 de diciembre de 2015, realizada con el ALCALDE de Rionegro, para ese momento electo, Andrés Julián Rendón, quien llegó a la alcaldía como parte del Centro Democrático y émulo especial del Senador Álvaro Uribe Vélez, él se comprometió a: “Trabajar por una Reubicación en Iguales o Mejores Condiciones” –Cita textual, de lo afirmado por el burgomaestre- de los habitantes de las veredas con afectación probable por la construcción de la Segunda Pista, y de otro lado, la Personería del Municipio de Rionegro, otorgó la resolución de aprobación como Órgano Comunitario de Vigilancia de la obra probable de la Segunda Pista, el código 21002 de enero 21 del año 2016 a la VEEDURIA VIDA JMC.



En las tareas emprendidas, vale la pena mencionar que se han realizado varias Asambleas Comunitarias y acciones por la Defensa del Territorio, se ha acudido al llamado y a llamar varias entidades como Concejo Municipal de Rionegro, Airplan, Cornare y Aeronáutica Civil manifestando nuestra posición del no con negociación, frente al Megaproyecto Segunda Pista Aeropuerto J.M.C, y ante la desidia por no ponerle otro nombre de la institucionalidad, la Veeduría Vida participó en el 17 de marzo en el Desfile artístico cultural por la Autonomía Territorial convocada por la organización Cumbre Agraria, dentro del Paro agrario nacional, y de otras marchas realizadas en el municipio de Rionegro, El Carmen de Víbora y El Santuario

Una lección que se va aprendiendo, que por lo demás ha sido difícil de lograr es eso de que: “O nos Juntamos o nos fregamos, e igualmente en el camino se han identificado asuntos como una máxima que se planteó en la Veeduría: “NO ESTAMOS VENDIENDO”. La idea es mantener esta postura, por sí hay que negociar lo hagamos en bloque, sin dejarnos desgranar y hacernos parte de una unión popular seria. De otro lado se considera que es válido que se mantenga como postura no actas o documentos, pues no faltan los trucos y engaños para hacer “jugadas”, frente a las cuales hay que estar atentos. Y la certeza de si “El pueblo se va uniendo no será vencido”, es el momento de hacer realidad esa máxima para no negociar solos con nadie, y así desde la unidad presionar negociaciones que no perjudiquen los intereses y necesidades de las comunidades.

3. La proletarización de los campesinos o de la descampesinización del capitalismo en proceso de urbanización.

No ha sido fácil, pero lo que se ha venido proponiendo, es que en el mundo donde reina el yo ambicionamos aquí hablar del nosotros, de aquello que se construye en común y es indeleble en el



entrecruzamiento viviente de nuestras posiciones y las experiencias individuales. Es la lucha contra un proyecto de aeropuerto, que debía aterrizar lo antes posible en las zonas de humedales, aldeas y tierras agrícolas. Lo que es visible es que el Estado parece tener todo de su lado: medios financieros considerables, y una Declaración unitaria pública, a la que apela para asentar su autoridad. Este proyecto de Aeropuerto está obviamente al servicio del crecimiento, del empleo, de la transición ecológica e incluso de la seguridad; en resumen, de todos los fetiches de los cuales quienes nos gobiernan son los guardianes y agentes activos. Pero los trabajos de la Veeduría VIDA, y los trabajos emprendidos desde ella, que ha ido perfilando unos contraexpertos han contribuido a convertir el aeropuerto en un proy muy impopular.

Lo que está en juego se entremezcla: calentamiento global, protección de la biodiversidad, preservación de las tierras agrícolas, defensa de espacios refractarios al desierto consumista que se extiende con la metrópolis, de un lado, pero más allá de eso también se está apostando por limpiar los fragmentos de los recuerdos de las comunidades, siendo éste un factor que para mí expresa la manera que la zona que ellos decían vacía, estaba en realidad llena de vida: nadie puede pretender ser insensible al miedo, a las dudas y a la fragilidad que atraviesan a los habitantes campesinos en aquellas circunstancias, así que ese es un factor muy importante para entender que mientras exista la mínima posibilidad de poder incidir en la situación con la que estamos comprometidos tenemos que hacerlo

4. Aguas y Bienes Naturales de resistencia y, resistencia de los Bienes Naturales y de las aguas.



Llamamos a multiplicar las acciones con el fin de lograr el abandono del proyecto de la segunda pista del aeropuerto José María Córdoba, y a apoyar el aseguramiento de la continuidad de la experimentación política de efervescencia en este territorio. Pero hay que defender las veredas de Rionegro Antioquia, como posibilidad histórica, desde ahora y ya, convertida en contagiosa, que puede actualizarse en miles de lugares diferentes y de miles de maneras todavía, como posibilidad de abrir brechas por todas partes. Brechas frente al frenesí de la seguridad, frente al desastre ecológico, frente al cierre de las fronteras, a la vigilancia generalizada, a la mercantilización de todo lo que existe como señalan los defensores de la zad.

El asunto de las aguas y de los bienes naturales en el municipio de Rionegro, es un tema de primer nivel en el tipo de sociedad urbanizada a la que va impulsada por dinámicas de presión urbanística de la ciudad de Medellín y del Valle de Aburrá sobre el Valle de San Nicolás, que requieren del cuidado y sostenibilidad de aguas y bienes naturales con más urgencia que de suelos en sí mismos para construir sus zonas de habitación en su propio proceso de configuración territorial.

Lo anterior nos permite señalar que la tarea emprendida por la Veeduría VIDA, es prácticamente civilizatoria, sobre todo hoy cuando vamos entendiendo que la humanidad esta apremiada a un reencuentro con la Naturaleza. En tanto venimos de un período que fue definido por Francis Bacon (1561-1626) con un mandato que se volvió cultural de: “que la ciencia torture a la Naturaleza, como lo hacía el santo oficio de la Inquisición con sus reos, para conseguir develar el último de sus secretos¹⁴⁰, lo que sustenta estilos de vida hoy en revisión antropocéntricos, particularmente

¹⁴⁰ Agua Un derecho humano fundamental. Alberto Acosta y Esperanza Martínez (Compiladores). Universidad Politécnica Salesiana ABYA YALA. Quito Ecuador, 2010, p 36.



exacerbados por las demandas de acumulación de capital, que son cada vez más notables e intolerables, pues, la humanidad no está por fuera de la Naturaleza, e incluso hoy se puede afirmar dentro del paradigma ambiental emergente que todos los seres vivos tienen el mismo valor ontológico, en el entendido que para lograr esta transformación civilizatoria, la desmercantilización de la Naturaleza se perfila como indispensable.

Debe ser superado el divorcio profundo entre la economía y la Naturaleza, como un paso clave en esta dirección, los objetivos económicos deben estar subordinados a las leyes de funcionamiento de los sistemas naturales, sin perder de vista el respeto a la dignidad humana y la mejoría de la calidad de vida de las personas. La ruptura epistemológica que supuso desplazar la idea de sistema económico, con su carrusel de producción y crecimiento, al mero campo del valor, fue la destrucción de gran parte de la vida, y con ello la disminución de la calidad de la misma en el planeta como un todo.

Las así llamadas leyes económicas no son leyes eternas de la Naturaleza, sino leyes históricas que aparecen y desaparecen (Engels) se trata de enfrentar democráticamente la lucha por la vida, que es lo que está realmente en juego, o como habría que señalarlo, es la supremacía de los intereses de unos pocos sobre la gran mayoría, es la inserción sumisa en el mercado mundial, y que por ende, nos condena al subdesarrollo, al despojo y al desplazamiento humano acompañado por la destrucción del tejido natural y acuífero.

Estamos asistiendo a un dumping ambiental, que va más allá del dumping social; matar un río supone quebrar la salud y la vida de las comunidades que dependen de él, de ahí la importancia de



trabajar por la sostenibilidad de los ríos, lagos, humedales y acuíferos, es un reto de supervivencia para los más pobres, más allá de un reto global de calidad de vida para todos.

1.2 millones de personas no tienen garantizado el acceso al agua potable, por la quiebra de su sostenibilidad. La relación agua-ciudadanía ve con la oferta de servicios domiciliarios de agua y saneamiento como un salto cualitativo respecto a la fuente pública que garantiza el acceso a esos 30-40 litros por persona y día, como referencia del derecho humano al agua potable¹⁴¹; en una sociedad compleja como la actual, garantizar el acceso universal a servicios de calidad, al tiempo que minimizar el impacto ecológico sobre los ecosistemas acuáticos, constituye un reto de especial envergadura y significatividad. La conflictividad suscitada por las presiones privatizadoras del modelo Neoliberal vigente tiene su eje clave de resolución en el diseño y desarrollo de nuevos modelos de gobernanza participativa desde ámbitos locales, regionales y nacionales, pero en un marco global que debe garantizar los Derechos Humanos y desarrollar una nueva condición de ciudadano global, tal como percibimos en la Veeduría VIDA.

5. Y éste tema de la probable construcción de la Segunda Pista, ¿cómo se relaciona con el posacuerdo?

La paz no es un concepto abstracto, y si en alguna municipalidad queda esa aseveración validada es en Rionegro, como un municipio que recibió todos los impactos propios de la guerra, como un hecho que hizo entender que la paz es una realidad muy concreta, siendo un asunto que está relacionado con los pobladores, con los territorios y sus bienes naturales y acuíferos, y por supuesto con los entornos institucionales que han estado envueltos en un conflicto armado de baja intensidad

¹⁴¹ Ibid, p 309



pero con una duración de décadas, que les han dado una configuración que ahora tendría que ser revisado de cara a la instauración de otro arreglo organizacional en el cual los antiguos enemigos, ahora por los arreglos a que haya lugar, quepan en lugares comunes no sólo espaciales, sino culturales, ético y legales.

En Colombia venimos por efectos de la guerra de una anomia institucional a gran escala, de lo que se trata ahora es de reparar los daños humanos y reconstruir la conexión de las poblaciones afectadas con sus territorios de origen y entornos institucionales más inmediatos, he uno de los más grandes desafíos que la sociedad colombiana tendrá que enfrentar en la próxima década, como un asunto que tiene todo que ver con la probable construcción de la segunda pista del aeropuerto de Rionegro.

Si entendemos que la reparación humana y la reconstrucción social es una labor de alta cirugía social que involucra a todo el aparato institucional del Estado, la sociedad y las fuerzas del mercado a las que se suman las fuerzas de la comunidad internacional, habría que señalar que una intervención lesionadora de lo humano, natural y acuífero como el que se pretende en el municipio de Rionegro, riñe con el espíritu de las tareas propias del posacuerdo.

Esta temática de la cirugía o la reingeniería social reconstructiva en contextos de pc es el objeto de este comentario, en el cual se puede mencionar que la Revista Semana menciona una cifra: 5.5 millones de colombianos, o sea el 11,5% de la población ha sufrido de manera directa el poder destructivo del conflicto armado en los pasados 30 años¹⁴², una cifra que desde otras fuentes, incluso del Estado se señala que asciende a los 8 millones de afectados, lo que significa que uno

¹⁴² ¿Qué es el post conflicto? Col después de la guerra, Jairo Morales Nieto, B Grupo Zeta, Bogotá 2015, p 69



de cuatro colombianos ha sido impactado por esta problemática. De lo que se trata ahora es de evitar por los medios jurídicos y políticos posibles que ahora surjan nuevos desplazados por ejercicios de despojo desde el Estado.

Como se puede concluir de esta simplificada exposición: 1. La paz es un proceso de reconstrucción social, territorial (ambiental y acuífera) e institucional, que de una vez recomienda la no realización de esta obra, 2. La dimensión local de la paz ofrece una perspectiva idónea para la acción pública pues nos orienta no sólo sobre qué hacer, sino cómo, dónde con quién hacerlo, o lo que es lo mismo, en caso de que sea indispensable realizar este desalojo, proceder a dotar a los pobladores y a los bienes naturales y acuíferos de una reubicación en iguales o mejores condiciones a los que hoy poseen y, 3. Por el reconocimiento de la existencia de métodos democráticos y deliberativos que facilitan la consolidación de la paz en el sentido de buscar que el conflicto armado no se repita nunca más y que las poblaciones sientan que sus Derechos Humanos fundamentales están protegidos, o lo que es lo mismo, atender a la población para que las razones objetivas de la guerra no se reengendren por posturas que no son recomendables hoy, como no lo fueron en el pasado hace más de cincuenta años en Colombia; es decir, que hayan consultas y que se decida no de manera unívoca la suerte de las gentes y sus territorios con formas ajenas a la democracia y a la dignidad de las personas que habitan en su territorio.



31. BIODIVERSIDAD, AGUA Y MINERÍA EN LA DISPUTA TERRITORIAL: DOS CASOS EN MÉXICO

Yolanda Massieu¹⁴³

Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
yola_massieu@hotmail.com

Irene Talavera¹⁴⁴

Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
nadxieli.talavera@gmail.com

RESUMEN

La ponencia comienza con una reflexión sobre las características destructivas ambientalmente del capitalismo contemporáneo, y se discuten las propuestas teóricas de la acumulación por desposesión, la sustentabilidad y la conservación. En una segunda parte se enmarca el crecimiento reciente de la minería en el país y lo que significa su expansión en términos ambientales y sociales. En una tercera y cuarta parte se exponen los casos del proyecto minero Los Cardones, en la reserva Sierra La Laguna en Baja California Sur; y el del proceso social de la región del Totonacapan (Puebla y Veracruz) en la resistencia a varios proyectos mineros, de hidroeléctricas y petroleros de fractura hidráulica, que depredarían un territorio rico en cultura, agua y biodiversidad. En ambos casos se han dado procesos de resistencia desde hace varios años y han logrado contener dichos proyectos, pero no hay una solución definitiva y la amenaza es latente. Concluimos con reflexiones sobre las posibilidades de que estos movimientos de resistencia puedan aportar en sus procesos formas civilizatorias más sustentables, equitativas socialmente y respetuosas de la Naturaleza.

¹⁴³ Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, México. yola_massieu@hotmail.com

¹⁴⁴ Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, México. nadxieli.talavera@gmail.com



Crisis y Acumulación por despojo

El trabajo que proponemos intenta caracterizar los procesos de disputas territoriales y acumulación por despojo en México, a partir de la exposición de dos estudios de caso en los que existen resistencia y propuestas locales ante proyectos depredadores y excluyentes que amenazan a los actores sociales y sus territorios. El objetivo es que la reflexión de dichos casos nos permita identificar las posibilidades de dichas resistencias y proyectos alternativos para ser un contrapeso real a la destrucción planetaria en la que estamos inmersos.

Más que un proceso actual y vigente de acaparamiento de tierras, en México estamos ante presiones crecientes sobre territorios con recursos estratégicos. Ello se debe a que el país tuvo una profunda revolución agraria a principios del Siglo XX, que permitió que la tierra se repartiera y 50% del territorio es de propiedad social¹⁴⁵. Durante el Siglo XX este tipo de propiedad, a la vez que fue manejada de forma paternalista por los sucesivos gobiernos posrevolucionarios, ha sido objeto de reformas legales y presiones para que regrese a manos privadas en un proceso concentrador. Las reformas al Artículo 27° Constitucional de 1992, en el marco de una política neoliberal, buscaron facilitar la venta de la propiedad social, y más recientemente la reforma energética significa que en los hechos esta propiedad puede ser despojada de sus recursos del subsuelo por los capitales petroleros.

Esta última reforma pasa inclusive por encima de las formas de propiedad reconocidas por el Estado para la conservación. Cuando en estos territorios existen recursos de importancia biológica

145 Por propiedad social entendemos el ejido (forma de tenencia sui géneris surgida de la Revolución mexicana) y la comunidad agraria. Además hay propiedad privada



o económica, como minerales, agua y biodiversidad, las presiones ya existentes se exacerbaban con la reforma energética, que facilita la explotación de hidrocarburos en cualquier tipo de régimen jurídico.

La llamada acumulación por desposesión, propuesta por Harvey (2004) y que en este texto llamaremos acumulación por despojo por cuestiones idiomáticas y fonéticas, implica esta voracidad sobre los territorios y sus recursos. Si bien en otros países eso se expresa en las compras masivas de tierras, como las realizadas en años recientes por capitales chinos en África, en México las reformas jurídicas conducen a que se facilite el acceso a los recursos en manos de comunidades locales, indígenas o campesinas, y a privatizar o excluir del uso colectivo bienes comunes como el agua. Ello se explica porque un capitalismo en crisis, como el actual, en el que las ganancias se dan más por especulación en la esfera financiera que por rentabilidad en la producción, requiere de la explotación desmedida de recursos naturales para la generación de rentas

En el capitalismo moderno se observa lo que Armando Bartra (2014) llama *neoexpansionismo territorial capitalista*, mismo que se convierte en necesario para el sistema capitalista que se encuentra, desde hace varios años, en una crisis (insuficiencia de rentabilidad en la producción de bienes y la explotación de recursos). David Harvey (2010) a este proceso lo ha llamado “reacomodo espacial” de las contradicciones del capitalismo. Según él (2010:24) “la expansión geográfica, es una de las formas en que temporal y parcialmente el capital puede vencer sus crisis de sobreacumulación (“capacidad productiva ociosa y poder laboral ocioso”), pero no lo hace.

El desarrollo capitalista-neoliberal es insaciable y expoliador, y devora lo que va quedando disponible para mercantilizar. El capitalismo constituye un sistema invasivo, ya que se basa en el crecimiento continuo de la economía, lo que vuelve “necesaria” la reproducción de bienes, sin



ninguna reflexión sobre su necesidad real para el bienestar o sobre el agotamiento de recursos naturales que esta necesidad provoca y el agotamiento, la escasez de recursos naturales le es conveniente puesto que de ahí devendría una ganancia extraordinaria.

El capitalismo es un sistema económico que se basa en la desigualdad de condiciones materiales, al mismo tiempo que las reproduce. Al día de hoy se puede hacer la lectura de que el capitalismo ha llegado a los límites, inclusive, para reproducir esa desigualdad. Las condiciones materiales del capitalismo están en crisis.

El modelo de desarrollo que impulsa el sistema capitalista ha buscado maquillarse con distintos apellidos para parecer más humano, equitativo o sostenible. Lo cierto es que sólo se maquilla y se cambia el nombre pero la forma de producir sigue siendo exactamente la misma, se piensa en otras formas de llamarle al desarrollo con la intención de modificarlo y que no sea tan agresivo y depredador y sin embargo se sigue priorizando la forma de producir y no se concientiza de manera real en cambiar las estructuras que encaminan hacia ese desarrollo tan prometido.

En el caso de el desarrollo sustentable aunque surge desde el decontento y la preocupación genuina por un futuro común y en miras de un desarrollo más integral, lo cierto es que el desarrollo que contempla el modo de producción capitalista no puede funcionar sin una tendencia extractiva, Lo que Marx señala como el inicio del capitalismo en lo que él llama acumulación originaria o permanente en el caso de Rosa Luxemburgo es un proceso permanente que David Harvey lo explica como Acumulación por desposesión.

El despojo no es algo nuevo, desde siempre ha existido un despojo no solo de la fuerza de trabajo sino también un despojo cultural, de vidas. La tendencia que trastoca hoy cada vez más formas de vidas es la tendencia extractiva de recursos naturales.



La extracción de recursos naturales tampoco es algo nuevo, el modelo económico lo necesita para funcionar. Lo que desde nuestro punto de vista es nuevo o innovador es la forma en la que se lleva a cabo esta extracción la cual supone escenarios en los cuales la violencia y el conflicto es uno de los pilares del despojo.

Es así que en el discurso de la política ambiental internacional, las Reservas de la Biosfera se consideran como un medio para asegurar la conservación de la biodiversidad. (M. Santo y Dos Santos, Sinopsis de la Agenda 21) y con ello lograr el avance hacia el desarrollo sustentable, un desarrollo sustentable presentado como una “máscara” al desarrollo neoliberal (Esteva, 2009), ya que lo que vemos en este tipo de zonas protegidas es una valorización económica de la biodiversidad, a partir de las leyes de mercado (Massieu y Chapela, 2006).

Sin embargo, la implementación de zonas protegidas son, en algún sentido, medidas que van en contra del mismo sistema en un sentido neoinstitucional, es decir, funcionan como mecanismos de blindaje frente a proyectos depredadores como la minería, el fracking y las estaciones eléctricas.

En México también hay territorios que han conservado recursos naturales sin ser decretados áreas protegidas, pues existen comunidades locales, indígenas, mestizas y campesinas, que han sabido explotar sustentablemente estos recursos a través de decisiones colectivas. Estos grupos participan hoy activamente en la defensa de sus territorios y recursos, ante amenazas crecientes. Lo anterior se debe a que el capitalismo reciente se manifiesta de forma cada vez más voraz y depredadora. Ello se refleja en México en que las concesiones para minería a tajo abierto han crecido hasta representar casi el 30% del territorio, con la reciente reforma energética se han dado concesiones a capitales privados para explotación de hidrocarburos, y se promueve un turismo masivo destructor de la naturaleza y la vida comunitaria. Por si esto fuera poco, los precios bajos del petróleo



intensifican la búsqueda de fuentes alternas de energía y cada vez se fomenta más la formación de presas hidroeléctricas en los caudales de los ríos.

En muchos lugares estas nuevas amenazas, que frecuentemente se suman a problemas de inseguridad, violencia y dominio del crimen organizado en varias regiones, se topan con procesos de resistencia que surgen de antiguas y nuevas formas identitarias y culturales de los actores sociales residentes de los territorios, ante la amenaza de despojo tanto de su hábitat como de los recursos de éste.

En los casos que exponemos destacan varios recursos estratégicos. Uno de ellos es la biodiversidad, que comprende a todos los seres vivos en los territorios y es fuente de alimento, materias primas, madera, agua, oxígeno, caza y muchos servicios más. Es además, un recurso sumamente frágil, que puede ser destruido con rapidez por el avance industrial, inmobiliario, de proyectos mineros o hidroeléctricos. Su fragilidad se expresa en que en las últimas 40 décadas han desaparecido el 52% de los vertebrados (WWF, 2014), lo cual también nos habla del alarmante ritmo que está tomando la destrucción ecológica en la actualidad.

En uno de los casos que presentamos la zona amenazada es área natural protegida decretada por el Estado, en la cual, además de protegerse la biodiversidad, se recarga el acuífero para una zona de escasez de agua, la península de Baja California Sur. Dicha área natural protegida (Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna) está amenazada desde hace décadas por un proyecto minero, que ha sido detenido por la resistencia de los habitantes locales. Además, toda la región ha sufrido el impacto del turismo masivo depredador desde los ochentas del siglo pasado.



El otro caso comprende una localidad (Cuetzalan, en el estado de Puebla) en una zona de rica biodiversidad en la serranía del Golfo de México, con abundancia de agua. Aquí los grupos nahua y totonaco han poblado el territorio ancestralmente y poseen una rica cultura de relación y uso respetuoso de la Naturaleza. Su historia ha permitido que la mayoría de los dueños de la tierra sean indígenas que producen en pequeñas parcelas, principalmente café orgánico, y conserven superficies importantes de bosques entreverados con los cafetales, que abastecen de muchos otros productos. En la zona hay una presencia importante de organizaciones sociales de base indígena. Esto último ha sido determinante para que los habitantes del territorio, tanto indígenas como mestizos, se hayan organizado en 2010 para tener un ordenamiento territorial autogestivo, ante la amenaza de proyectos de turismo depredador, minería y construcción de presas hidroeléctricas. Este documento les ha permitido orquestar una defensa efectiva, pero la intención gubernamental es extender los proyectos a otras comunidades aledañas, con lo cual la resistencia se ha generalizado (Meza, 2014).

Dado que en los dos casos encontramos amenazas similares, pero diferentes políticas económicas y de conservación, introducimos en nuestro análisis el papel del Estado en México para facilitar el acceso de los grandes capitales a bienes naturales y comunes, en un proceso de negociación en el mejor de los casos, y de violencia frecuentemente, con formas cada vez más evidentes de despojo. Ello nos permite una reflexión sobre el Estado en la promoción de un capitalismo crecientemente excluyente y depredador y las resistencias que pueden llegar a obtener, en algunos casos exitosos, concesiones para que la explotación de los recursos no cancele el futuro y pueda traer beneficios mejor distribuidos socialmente.



Pensamos que de la exposición de estos dos casos y la caracterización de la resistencia en ellos, podemos elevar reflexiones sobre las actuales presiones de la acumulación por despojo, y las posibilidades de que las comunidades locales puedan tanto resistir a la destrucción de sus recursos y territorios, como proponer y poner en práctica proyectos de desarrollo equitativos y sustentables. Todo ello contribuye tanto a caracterizar las tendencias del despojo y acaparamiento presentes en América Latina, como a valorar experiencias que contribuyan a vías de desarrollo equitativas y sustentables.

2. Minería y resistencia en México

A principios del Siglo XX y hasta el año pasado, los altos precios de los metales preciosos y las reformas a la Ley Minera llevadas a cabo en el sexenio de Vicente Fox (que por primera vez permiten la minería a cielo abierto en el país), generaron una expansión sin precedentes de la minería en México. Las concesiones se multiplicaron. Dada la agresividad, escala y depredación ambiental que genera esta minería, encaja en lo que Harvey (2004) llama acumulación por despojo, que expusimos en el apartado 1. Dicha explotación de los yacimientos minerales va acompañado de diversos mecanismos de despojo de las comunidades campesinas e indígenas dueñas de los territorios, pues aún en los casos en que las comunidades aceptan, son frecuentes el engaño en cuanto a los daños ambientales y de salud y el cumplimiento de las obras de mitigación comprometidas.

La actividad minera basa sus ganancias en mecanismos monopolísticos de renta, que se refieren a las condiciones excepcionales por el control de recursos escasos o estratégicos, por estar en ubicaciones clave y el dominio privado amplio y concentrado de tierras, inmuebles o conocimientos. “Así, las empresas están en posibilidad de lograr mayores utilidades cuando se



convierte a la mala un bien colectivo en mercancía y, además, se controla el territorio y la producción bajo condiciones monopólicas” (Rodríguez, 2013:147).

México es un territorio muy atractivo para la minería, pues el primer productor de plata, undécimo de oro y duodécimo de cobre, el mayor productor de fluorita, el tercero más grande bismuto y el quinto de plomo. La extracción en el país es de 21% de oro, 20% de plata, 14% de cobre, 8% de zinc y el resto de otros minerales. En el gobierno de Calderón la inversión extranjera directa en minería creció en más de 224%. Una buena parte de las minas (40%) está en manos de empresas extranjeras (Muñoz, 2013).

Frecuentemente el señuelo para que las comunidades acepten concesionar sus territorios a las empresas mineras nacionales y extranjeras es el empleo, pues la minería genera 350 mil empleos (Saldaña, 2016). En este aspecto, la situación de los trabajadores de la industria es de vulnerabilidad. Son frecuentes cáncer de pulmón, neumoconiosis y silicosis. En la minería más reciente, también es común que la mina concesione múltiples labores a otras empresas, por lo que los trabajadores no tienen ninguna prestación ni cuentan con servicio médico mientras que su salud se deteriora. Generalmente las empresas hacen pingües negocios y las comunidades de los territorios mineros se quedan con los daños y ninguna ventaja.

En Mazapil, Zacatecas, municipio semidesértico de muy alta marginación, se encuentra la mina de oro más grande de México, de la empresa canadiense Gold Corp. La explotación utiliza y contamina grandes cantidades de agua para los procesos de lixiviación (como todas las minas), dejando a la comunidad sin suficiente líquido. En Oaxaca, la minera Cuzcatlán de la canadiense Fortuna Silver Mines, ha provocado fuertes protestas de la comunidad debido a los daños a la salud y el medio ambiente. Otro caso emblemático de resistencia es Wirikuta en el Estado de San Luis



Potosí, en donde la minera canadiense Firsit Majestic amenaza a la comunidad huichol y su legado histórico (Íbidem). En Carrizalillo, Guerrero, donde la comunidad aceptó la mina y la canadiense GoldCorp produce 15% de todo el oro que obtiene, los daños ambientales y a la salud de los pobladores son evidentes. Los trabajadores de la mina se han movilizado para demandas tan elementales como el pago de salarios. La empresa no tomó siquiera la mínima medida de seguridad de cercar las lagunas de lixiviación, y los animales silvestres mueren al tomar agua de ellas (Salazar y Rodríguez, 2015).

Ante estos graves problemas, la política gubernamental es de entreguismo: el régimen fiscal en México es altamente permisivo para los emporios mineros, pues el gobierno no cobra derechos sobre productos minerales. Las mineras tampoco pagan impuestos estatales ni municipales. Para Henry Veltmeyer, académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas, “por presiones del Banco Mundial en México se eliminaron por completo el régimen de regalías de la Ley de Minería desde 1991, el cual es común en la industria en todas partes del mundo. Y el sistema impositivo en México solo impone el pago de 1.2% sobre el valor del producto exportado”. Además, no hay evidencia alguna de que las empresas transnacionales hayan cumplido con el pago de impuestos.

Las empresas mineras trabajan con tecnologías eficientes en términos económicos, aunque muy destructivas para el medio ambiente. Desde 2000, las minas han sido capaces de extraer el doble de oro y la mitad de plata, comparado con lo que se extrajo en los 300 años de conquista y colonización, según datos de la Unidad Académica de Desarrollo en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Muchas de las concesiones se han otorgado sin los estudios necesarios para proteger el medio ambiente y los medios de vida (Muñoz, 2013).



Un recurso natural vital del que la minería hace un uso desmedido y depredador es el agua, de ahí el interés por comparar dos casos con diferente disposición del recurso: en la región del Totonacapan éste es abundante y en la Sierra La Laguna escaso.

Para aprovechar una mina a cielo abierto se debe volar la roca, triturarla y luego centrifugar y «lavar» con cianuro el mineral pulverizado. Estas actividades requieren enormes cantidades de agua, de energía eléctrica, de explosivos y de productos químicos. De acuerdo datos del investigador Eckart Boege, para obtener un metro cúbico de oro se tienen que desplazar 120 millones de toneladas de tierra y de roca, utilizando 35 000 toneladas de explosivos para volar la piedra. En el transporte y la trituración del mineral, se gastan 144 millones de litros de diesel, mientras que el lavado del mismo requiere 10 millones de litros de agua, a la que se le deben de agregar 700 toneladas de cianuro y de mercurio, dos productos extremadamente tóxicos. El cianuro mata inmediatamente a los humanos y a los animales, mientras que el mercurio envenena lentamente, provocando la célebre «enfermedad de Minamata», que ataca el sistema nervioso de los humanos. Las fosas de lixiviación, tarde o temprano tienen fisuras y contaminan el manto freático del que provienen el agua potable y los afluentes de toda una cuenca hidrográfica (Albores, 2014).

El panorama minero ha sido alterado por las recientes bajas en los precios de los minerales: el oro pasó de \$260 dlrs la onza en 2001 a \$1880 en 2011 (Rodríguez, 2013:148) y cae a \$1,080 en 2015, su mayor disminución desde 2013 (El Economista, 2015). Está por verse si estos decrementos en los precios generarán que se retiren masivamente inversiones en minería, pues el precio del oro es aún muy superior al de 2001. Lo cierto es que las caídas de precios orillan a las compañías pequeñas y medianas a buscar fusiones, y éstas también han disminuido: el valor de las fusiones y adquisiciones que se concretaron en 2015 fue de \$3,200 millones de dlrs, en comparación con \$4,400 de 2014 (Íbidem). Se han cancelado o pospuesto 154 proyectos mineros en el país, las



inversiones fueron en 2012 de 8 mil 43 millones de pesos, en 2015 de 4 mil 630, y en 2016 se espera que la cifra se mantenga en 4 mil 700 millones. En cuanto al valor de la producción, en 2014 esta fue de 14 mil 820 millones de pesos, y en 2015 de 13 mil 469 (Saldaña, 2016).

Estas cifras hablan de un cierto desaliento de la industria minera, mientras que muchas comunidades están en resistencia contra concesiones que aún no se han hecho efectivas, o los efectos dañinos y promesas incumplidas de las empresas. Lo que rara vez se menciona es el aspecto de la demanda y el consumo, pues en la vida diaria usamos una gran cantidad de productos en cuya fabricación se usan minerales: se usan 40 minerales distintos en la fabricación de un automóvil y 31 para una computadora (Íbidem).

En los siguientes apartados detallaremos dos casos, de características ecosistémicas y sociales distintas, en los que la resistencia a los proyectos mineros ha tenido éxito relativo.

2. Proyecto minero Los Cardones y resistencia en Baja California Sur

La Sierra de La Laguna ubicada en el municipio de La Paz en Baja California Sur es considerada una isla de vegetación por el entorno desértico que la rodea, una extensión de se ventan al sur de la península californiana por debajo del Trópico de Cáncer. “La Sierra” como nos referimos a ella los sudcalifornianos tiene una importancia en términos identitarios y en términos biológicos por lo que en 1994 fue declarada como Reserva de la Biósfera. En el plan de manejo de la Reserva existe un apartado de aprovechamiento minero en donde han sido otorgadas más de veinte concesiones mineras en polígono que comprende la zona protegida. La concesión ubicada en el predio El Encantado es la única en la que ha habido exploraciones. La empresa minera Paredones



Amarillos, propiedad de la americana VistaGold Corp¹⁴⁶, realizó exploraciones y encontró factible la explotación para la extracción de oro, afortunadamente hubo una caída en los precios del oro y la explotación ya no era rentable para la empresa, por lo que el proyecto quedó parado durante varios años. Cabe mencionar que estas concesiones se dieron “por debajo del agua” y la población desconocía por completo el proyecto minero. El proyecto minero que hoy se presenta como proyecto Los Cardones tiene una historia de “estire y afloje” en la península de Baja California Sur.

Pasaron varios años para que la empresa Paredones Amarillos regresara a Baja California Sur. Fue en el año 2009, cuando regresa con el proyecto *Concordia*, ubicado en el predio “El encantado”, en donde se extraería oro con la técnica de Cielo o *tajo* abierto¹⁴⁷. La minera pretende llevar a cabo el mega proyecto a cielo abierto denominado “Paredones Amarillos”, ubicado dentro del área natural protegida Sierra La Laguna, para extraer un total de 202 millones de toneladas de mineral,

146 Vista Gold es una minera estadounidense que se dedica a la exploración, desarrollo y operación de minería de oro. La compañía posee proyectos en Australia, México y EEUU. El emprendimientos de la empresa en México incluyen el proyecto de oro y plata Guadalupe de los Reyes, que comprende 37 concesiones mineras en un área de 6.310,9 hectáreas en el estado de Sinaloa. Vista Gold también es dueña de la propiedad Mt. Todd en Australia y la iniciativa Long Valley en California. En 2013, la minera suscribió un acuerdo vinculante para vender su participación accionaria y deuda en el proyecto aurífero **Los Cardones, en el estado mexicano de Baja California Sur**, a Invecture Group por US\$13m. Vista Gold fue fundada en 1983 y tiene su sede en Littleton, Colorado. Fue creada originalmente como Granges, Inc. y tras fusionarse con Da Capo Resources en 1996 adoptó su actual denominación. <http://www.bnamericas.com/company-profile/es/vista-gold-corp-vista-gold>

147 A diferencia de las minas subterráneas, en la minería a cielo abierto se elimina la cubierta vegetal, se perfora el terreno para colocar explosivos de alto poder y obtener rocas fragmentadas ; y en esta parte del proceso, los cráteres resultantes alcanzan dimensiones de 150 ha de extensión así como profundidades de hasta 1,200 m. El material así extraído se transporta en grandes camiones de volteo a otra área previamente acondicionada llamadas pilas de lixivización, en estas pilas se lava (lixiva) el material rocoso (por goteo) con una solución cianurada para obtener el oro. La solución cianurada arrastra las partículas microscópicas de oro presentes en el material rocoso hasta ser conducidas hasta tanques o fosas de almacenamiento. Tanto la pila de lixivización como la fosa de almacenamiento están forradas con un sistema de protección para el suelo, denominado membrana, esta membrana es muy frágil, puede sufrir rupturas por deslizamientos, temblores o por su propio desgaste, filtrando así los componentes tóxicos hacia las mantos freáticos , del suelo circundante y de la biodiversidad. (Romero y Ortega, 2012)

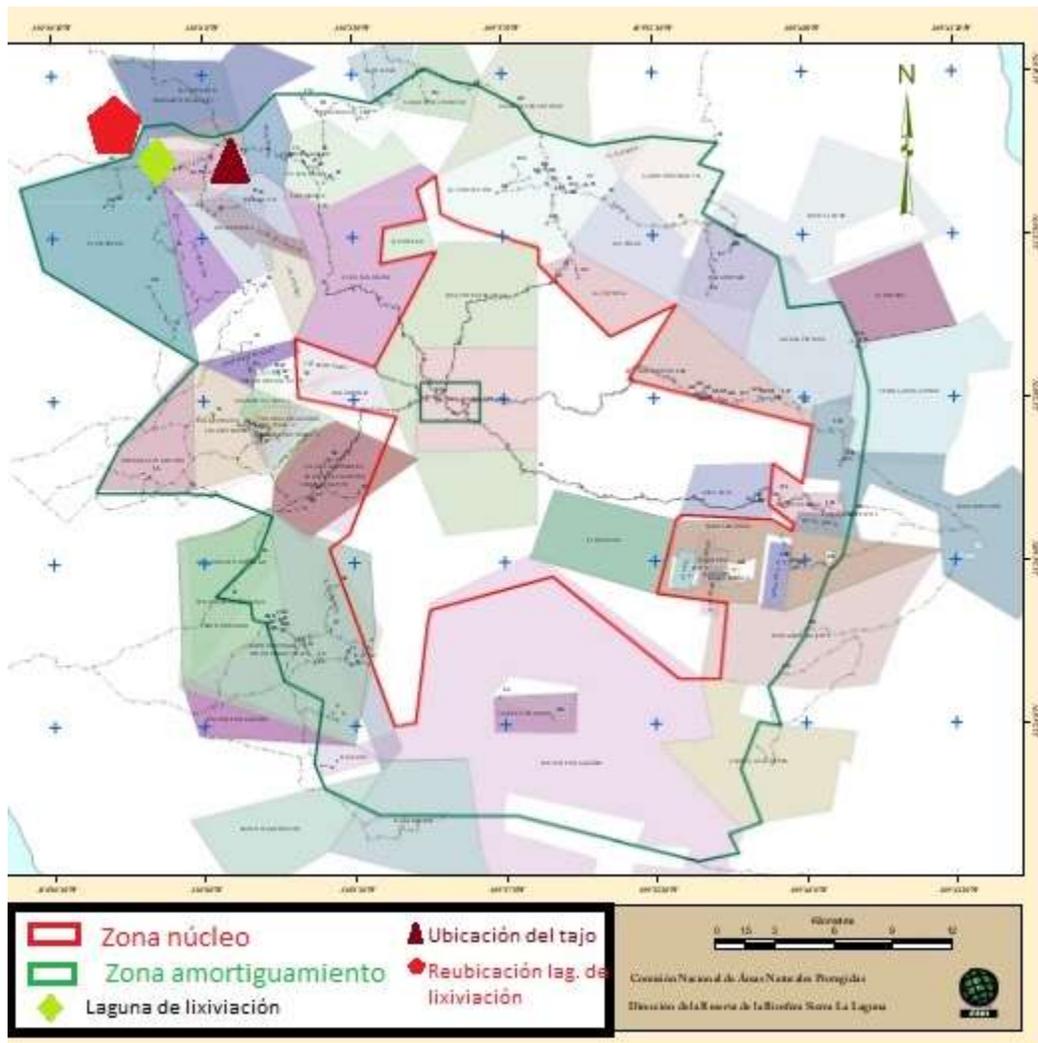


con un promedio de 80 mil toneladas diarias, de las cuales 11 mil toneladas serán molidas y lixiviadas con cianuro, y las 69 mil restantes serán desechadas a un costado de la mega excavación, por ser pobres en oro.

En 2009 a la empresa ya se le habían vencido los permisos de explotación y los tenía que renovar, hay que destacar que en estos años el precio del oro estuvo estancado y empezó a repuntar justamente en 2009. Durante este proceso salió a la luz pública el mega-proyecto Paredones Amarillos y la sociedad civil respondió en contra desde el principio, había un descontento generalizado y se empezaron a formar mesas de debate con la ciudadanía, en cooperación con ONG's ambientalistas (Medio Ambiente y Sociedad, Niparajá), con la finalidad de difundir, entre la población menos enterada, las consecuencias de una Minera a Cielo Abierto en la entidad.

En enero de 2011 hubo una gran movilización, un llamado de auxilio hacia el exterior, que consistió en una mega-marcha de San José del Cabo a La Paz , como era periodo de elecciones los cuatro candidatos a gobernador se vieron obligados -con fines electoreros- a firmar una carta-compromiso de rechazo total a la minería en Baja California Sur. En 2011, en un nuevo intento, VistaGold Corp, ahora asociada con Invecture Group, rebautiza el proyecto *Concordia* como *Los Cardones* y empieza una exhaustiva campaña de convencimiento¹⁴⁸ de la población, la cual, por supuesto, no surgió efecto. En octubre de 2012 se hace una consulta pública y el proyecto, una vez más, no pasa. En un reciente intento, VistaGold Corp le vende sus acciones a Invecture Group y presentan en octubre de 2013 un nuevo estudio de impacto ambiental (ahora la laguna de lixiviación está fuera de la zona de amortiguamiento de la Reserva, ver mapa 1).

148 Anuncios de “minería responsable” y de “la minería no contamina” inundaron las ciudades de La Paz y Los Cabos, así como las poblaciones a ledañas a la Sierra de la Laguna.



Un dato que resulta por demás curioso es que quien es presidente ahora de Invecture Group (empresa que supuestamente es mexicana) es el señor John Detmold quien también es accionista de Vista Gold Corp, empresa que impulsaba los proyectos Paredones Amarillos y Concordia. Es decir que si le pusiéramos cara a los tres proyectos tendrían la del señor Detmold.

La consulta pública con la SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) se hizo el 9 de enero de 2014 a la consulta asistieron Organizaciones de la Sociedad Civil (más de treinta), profesionistas de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, médicos del Colegio



de Médicos, representantes de distintas localidades de la RBSL, entre muchos otros actores que se oponen frontalmente al proyecto, durante la consulta se organizó un espacio para que hubiera ponencias de parte de estos actores y se argumentara el por qué no es un proyecto viable. La mayoría de los argumentos, los cuales estaban bien documentados técnica y científicamente, apuntaron hacia desmentir el Manifiesto de Impacto Ambiental presentado por la empresa y el cual Semarnat tiene que evaluar,[y que en julio pasado ya aprobó] se mencionó que en el MIA existen irregularidades y omisiones que van desde falsear datos referentes a la taxonomía de las especies hasta decir que no tocarán ni una sola gota de agua de los acuíferos de la Reserva.

Respecto al punto del agua existen unos datos que me gustaría resaltar: dentro de la propuesta del proyecto Los Cardones prepondera un discurso de Minería sustentable, uno de los argumentos para justificar este discurso va en torno al agua, dicen que no tocarán ni una sola gota de los mantos freáticos, por el contrario, lo que harán es construir una planta desaladora de agua, esta agua será bombeada, desde las costas del océano pacífico hasta la zona del proyecto. Esto implica dos cosas, una es el gasto de energía que se necesitará para desalarla y para bombear esa agua hacia la sierra (más de 100 millones de megawatts al año) y por otro lado los efectos ambientales de las plantas desaladoras se desconocen hasta el momento.

Otra de los puntos discutidos en la reunión con la Semarnat son los vacíos legales que existen tanto en la ley minera como en la ley de áreas naturales protegidas, en el MIA se dice que no se va a tocar ni una sola gota de agua de los acuíferos, sin embargo la Ley Minera en su artículo 19, apartado V establece que: “Las concesiones mineras confieren derecho a: Aprovechar las aguas provenientes del laboreo de las minas para la exploración o explotación y beneficio de los minerales o sustancias que se obtengan y el uso doméstico del personal empleado en las mismas.”



Es decir, que el agua que se encuentre mientras labore la mina podrá ser aprovechada por la empresa.

Así pues ante el descontento generalizado de la población tanto la empresa como la Semarnat abandonaron la reunión ante la imposibilidad de sostener sus argumentos a favor del proyecto. Sin embargo, la lucha en contra de la minería tóxica sigue, en mayo del presente año se inició frente al Palacio de Gobierno de Baja California Sur, mismo que se levantó el día 14 de junio, el objetivo de este plantón es, por un lado presionar a las autoridades municipales en la elaboración de un Programa de Ordenamiento Local, mismo que cambiaría el uso de suelo de la región y que funcionaría como herramienta en la defensa del territorio. Por otro lado el plantón tenía como objetivo presionar a la semarnat para que el resolutivo que de la semana próxima no se el favorable para la empresa minera.

La Sierra de la Laguna no es la única amenazada por esta clase de megaproyectos en Baja California Sur, existen en la región otros tres proyectos de extracción minera a cielo abierto, La pitalla, San Antonio y Picacho Blanco.

La resistencia que se está configurando frente a Loa Cardones es una lucha territorial en donde lo que está en juego es la vida. Como ya se dijo antes la Sierra de La Laguna recibe las mayores captaciones de agua en el sur de la península, si bien el agua es importante y es vital en cualquier esfera que nos encontremos, en la península de Baja California sur se convierte en un elemento fundamental, debido a su escasez. Siendo el agua un elemento que resulta primordial para la reproducción de la vida, en el marco de un conflicto socioambiental como lo es la imposición de una Minería a Cielo Abierto, se convierte en un elemento que desde los sujetos colectivos se revaloriza y se defiende.



Lo que se observa entonces, desde mi punto de vista, es una lucha societal la cual se expresa como forma de resistencia frente al proyecto minero Los Cardones, el cual, de llevarse a cabo, devastará ambientalmente el entorno natural, afectando así a las poblaciones aledañas dentro de la Reserva de La Laguna y a las ciudades alrededor de ésta.

Como ya se dijo, el proyecto minero Los Cardones representa una gran amenaza no sólo hacia la biodiversidad característica de la región sino también hacia el agua. Ya que de llevarse a cabo el proyecto, la explotación de oro sería con la técnica de Tajo o Cielo Abierto. La minería a Cielo Abierto es de las técnicas extractivas más violentas que existen hoy en día. Dicho lo anterior, la explotación minera es una clara expresión de la contradicción entre los bienes comunes y los intereses privados del capital.

2. Proyectos mineros, hidroeléctricos y de extracción de hidrocarburos en la región del Totonacapan.

Iniciaremos contando la experiencia de Cuetzalan, lugar mágico de naturaleza impresionante, resistencias y luchas, en el presente el municipio y su gente se encuentran transitando por un interesante proceso de llevar a cabo un ordenamiento territorial propio y autogestivo. Dicho ordenamiento territorial, logrado a través de un proceso de lucha contra proyectos depredadores socioambientalmente, que querían imponerse desde el gobierno del estado (turismo masivo y excluyente, WalMart y, más recientemente, mineras e hidroeléctricas), ha sido un instrumento muy valioso para la defensa del territorio. El proceso de gestación de dicho instrumento demuestra como los ordenamientos territoriales pueden no ser solamente medios de política gubernamental (Meza, 2013). Esta concepción olvida que “los pueblos campesinos e indígenas, en su proceso de organizar



su subsistencia en un territorio determinado, ordenan ese terruño en función de sus necesidades materiales y de sus valores culturales”, nos dice Pierre Beaucage, antropólogo de Montreal con una experiencia de investigación en la región que data de 1985 (Beaucage: 2012,3). Debido a la existencia de este documento, con validez oficial, las concesiones mineras e hidroeléctricas se han dado en otros municipios aledaños.

Lo anterior ha conducido a que en otros municipios de la Sierra Norte y Nororiental de Puebla cunda la resistencia, ante la amenaza de proyectos que poderosas empresas nacionales y transnacionales quieren echar a andar y que, de lograrlo, dañarían severamente la riqueza biocultural de la que gozan los casi 600 mil habitantes serranos. Los proyectos contemplan más de 25 concesiones para desarrollar la [minería a cielo abierto](#), alrededor de 10 presas hidroeléctricas, la construcción de varias “ciudades rurales sustentables” y la instalación de tiendas Walmart (Albores, 2014). Los proyectos están ligados entre sí e implican el uso desmedido y contaminante de recursos abundantes en la Sierra: agua y minerales:

la explotación minera requiere de grandes volúmenes de agua y del uso excesivo de [energía eléctrica](#) que serían abastecidas por las presas; en las ciudades rurales serían reubicadas las familias que viven en los terrenos afectados por las presas y las minas, quienes dejarían de ser productores para convertirse en consumidores de las tiendas de autoservicio (Íbidem).

Otras regiones de la Sierra, y más recientemente del Totonacapan (incluyendo la parte que baja de la Sierra hacia Veracruz) se han organizado en defensa de su territorio: En San Miguel Tenextatiloyan, del municipio de Zautla, se detuvo la construcción de la primera, de un total de 48 “ciudades rurales sustentables” que había programado establecer el actual mandatario estatal durante su período de gobierno; en el municipio de Tetela de Ocampo la población se ha opuesto a los trabajos que había iniciado la minera Frisco, de Carlos Slim. La población ha presionado al



gobierno del estado para comprometerse a detener la apertura de la mina. “Para ello han contado con el apoyo de su actual presidente municipal, quien no sólo se ha opuesto a otorgar los permisos para el cambio en el uso del suelo, sino que ha pedido que los terrenos se declaren «zona protegida»” (Íbidem). Los habitantes celebraron en noviembre de 2014, con un ritual de agradecimiento en un manantial, 3 años de resistencia a uno de los proyectos mineros autorizados (OCMAL, 2014). En 2015 la minera Frisco registró una pérdida de 3, 782 millones de pesos, 72% mayor a la pérdida de 2014, lo cual puede estar relacionado con la baja del precio del oro (Barranco, 2016); en Zautla se organizó el pueblo, “junto con todas sus autoridades comunitarias y municipales, para cancelar los trabajos que ya estaba realizando una empresa China en la mina “La Lupe”, ubicada cerca del pueblo de Tlamanca. Le dieron 24 horas para que recogiera sus máquinas y se marchara” (Albores, 2014); en la comunidad de Zaragoza, del municipio de Olintla “se plantaron frente a la maquinaria que iba a ser utilizada para abrir un camino, que permitiría el acceso al lugar donde una empresa del Grupo México pretende construir una presa hidroeléctrica en el río Ajajalpan. Hasta hoy la maquinaria sigue detenida.” (Íbidem).

En Cuetzalan las autoridades municipales, primero para elaborar el OT y después para mantenerlo vigente. En abril de 2014 el recién electo presidente municipal Paula, “se comprometió con una representación del Comitpe del Ordenamiento Territorial Integral a no autorizar la instalación de ninguna mina ni hidroeléctrica” (Fernández, 2014). En la asamblea estaba presente el órgano de conducción de los ordenamientos ecológico y urbano, los representantes de los comités de agua de más de 20 comunidades, casi todas masehuales (indígenas). El alcalde recomendó no vender ni rentar sus tierras para minas e hidroeléctricas.



En la región hay ya una organización que coordina los movimientos y la resistencia: en Consejo Tiyat Tlali agrupa a las organizaciones serranas más importantes. En la zona las autoridades parecen más bien gestoras de las empresas que defensoras del bien común.

La Secretaría de Economía y la Semarnat autorizaron la exploración de minerales en Cuetzalan, Zacapoaxtla y Tlatlauquitepec, sin que mediara consulta alguna con los pueblos. La delegada de Semarnat en Puebla, Daniela Migoya Mastretta, niega que exista permiso, pero en la gaceta oficial de su dependencia está bien acreditada su existencia en favor de la Minera Autlán (Íbidem).

También en abril de 2014, los legisladores Ricardo Monreal y Zuleima Huidobro, con información del Comité del OT cuetzalteco, presentaron un punto de acuerdo para investigar qué está sucediendo con las compañías mineras y específicamente con el caso de Cuetzalan.

El OT ha sido útil también para la amenaza de las exploraciones de hidrocarburos, pues la nueva Ley Energética permite explorar y explotar por encima de la voluntad de los dueños de la tierra. En abril de 2014 PEMEX reconoce que el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial (parte del Ordenamiento Territorial Integral) de Cuetzalan no autoriza la exploración para hidrocarburos en el municipio, pues sólo permite actividades de pequeña industria y microindustria.

El reconocimiento del Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan como un instrumento legalmente normativo fue hecho por la paraestatal en el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) dado a conocer a través de la Gaceta Ecológica del 13 de marzo del presente año publicada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) respecto e ingresada por Pemex Exploración y Producción, para solicitar la autorización ambiental del “Proyecto Regional Petrolero Poza Rica–Alta Mira y Aceite Terciario del Golfo 2013–2035”, con clave 30VE2014X0008. (Hernández, 2014).



Estos logros de Cuetzalan han sido ejemplo para otras organizaciones de la sierra, mientras que la agresividad de los megaproyectos y la acumulación por despojo ha ido en aumento. A fines de abril de 2016, más de dos mil representantes de 92 comunidades de 27 municipios de Puebla y Veracruz, se reunieron en la 13^a. Asamblea por la vida y el territorio, en Atoluca, Teziutlán, y rechazaron los proyectos mineros, hidroeléctricos y petroleros de [fractura hidráulica](#) que amenazan los ríos, bosques y montañas de la [Sierra Norte de Puebla](#) y la zona del Totonacapan. Ya son 5 municipios que se han declarado libres de este tipo de proyectos. Dicha asamblea concluyó con el acuerdo entre ejidatarios y pequeños propietarios de no vender sus tierras para los megaproyectos de la industria extractiva minera, de hidrocarburos e hidroeléctricas.

Atoluca va a ser atravesado por un túnel con el que la Compañía de Energía Mexicana, filial de Grupo Ferrominero y Minera Autlán, quiere ampliar la hidroeléctrica Atexcaco, represando el agua de varios arroyos que alimentan el río Apulco. Este cauce está en la mira de la empresa ICA para instalar cuatro generadoras de energía (Albores, 2016).

En dicha asamblea Oscar Jiménez Reyes, agente municipal del ejido El Porvenir de Papantla. En este municipio hay 2 mil 117 pozos petroleros, más de 340 abiertos con fractura hidráulica (o “fracking”). El agente municipal explicó que esto lo permite la nueva Ley de Hidrocarburos. Su territorio “fue licitado en las Rondas Cero y Uno, y en las que siguen será concesionado el de 15 municipios de los presentes en la asamblea: Tenampulco, Acateno, Atlequizayan, Ayotoxco, Caxhuacan, Cuetzalan, Huehuetla, Hueytamalco, Hueytlalpan, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tuzamapan de Galeana, Yaonahuac y Zoquiapan” (Íbidem). El dirigente recordó que las tierras fueron obtenidas por la lucha, oncusive arrebatándolas a los terratenientes y que el ejido es más que un pedazo de tierra “es todo el espacio que para nosotros tiene vida: el agua, las plantas, los



animales. Por eso no debemos venderla para que la dañen. Es nuestra esperanza, nuestros sueños” (Íbidem).

En la reunión Xochiapulco se comprometió, mediante Acta de Cabildo, a no otorgar ni autorizar permisos para cambio de uso del suelo para la extracción de los bienes naturales ni la ejecución de obras que impliquen la privatización del agua o pongan en riesgo su territorio. Con ello se convierte en el quinto municipio al que sus autoridades declaran “oficialmente” libre de megaproyectos.

Conclusiones

Como podemos ver la tendencia de despojo que atenta contra la vida está cercenando cada vez más a más territorios. Apenas hace unos días se ha actualizado el Atlas Global de Conflictos Ambientales creado por un grupo de investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona en donde se documentan 1750 conflictos. Los casos presentados en esta ponencia nos dejan ver que no importa que tan distintos sean los contextos de los conflictos socioambientales, cuando se ponen en riesgo aspectos tan básicos para la reproducción de la vida, los bienes que el capitalismo quiere privatizar y mercantilizar son defendidos desde una lógica común y organizada.

Bibliografía

Albores, María Luisa (2014) “Las luchas por la defensa del territorio en la Sierra Nororiental de Puebla”, en *Regeneración*, 15 de enero. Disponible en <http://regeneracion.mx/ambientalistas/las-luchas-por-la-defensa-del-territorio-en-la-sierra-nororiental-de-puebla/>, [11 de diciembre de 2013]

Albores, María Luisa (2016) “Habitantes de 27 municipios de Puebla y Veracruz rechazan minas, hidroeléctricas y fracking”, en *Regeneración*, 25 de abril. Disponible en <http://regeneracion.mx/habitantes-de-27-municipios-de-puebla-y-veracruz-rechazan-minas-hidroelectricas-y-fracking/> [28 de abril de 2016]



Barranco, Alberto (2016) “Slim a la baja”, *El Universal*, Opinión, 2 de marzo

Beaucage, Pierre (2012), “Historia social y construcción de un ecosistema: la toponimia del ordenamiento territorial campesino indígena en Cuetzalan”, en *Kuojtakiloyan. El monte donde producimos*. Publicación Oficial del Órgano Ejecutivo del Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan, México, marzo-abril, 11 y 12, 3-12.

El Economista (2015), “Desplome del oro amenaza proyectos de mineras”, 21 de julio.

Disponible en: <<http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas-2015/07/21/desplome-oro-amenaza-proyectos-mineras>> [4 de julio de 2016]

Esteva Gustavo (2009) “Más allá del desarrollo: la buena vida”, en ALAI, *América Latina en movimiento: la agonía de un mito: ¿Cómo reformular el desarrollo?*, Agencia Latinoamericana de Información, Quito, pp. 26-30.

Fernández, Aurelio (2014), “México: Cuetzalan, defenderse y construir”, *La Jornada de Oriente*, 11 de abril. Disponible en:
<http://biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Mexico_Cuetzalan_defenderse_y_construir> [5 de junio de 2015]

Hernández, Martín (2014), “Reconoce PEMEX que no puede perforar en Cuetzalan debido al POET”, *La Jornada de Oriente*, 8 de abril,
<<http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2014/04/08/pemex-reconoce-que-no-puede-perforar-en-cuetzalan-debido-al-poet/>> [6 de nyo de 2015]

Massieu Trigo, Yolanda y Chapela Francisco, 2006. “Valoración de la Biodiversidad y el



Conocimiento Tradicional. ¿Un recurso público o privado?” en Luciano Concheiro Bórquez y Francisco López Bárcenas , coordinadores, BIODIVERSIDAD Y CONOCIMIENTO TRADICIONAL EN LA SOCIEDAD RURAL. Entre el bien común y la propiedad privada. Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria. Cámara de Diputados LIX Legislatura/Congreso de la Unión.

Meza, Alejandra (2014). Masehuales y coyomes de Cuetzalan. Respuesta social: construcción de procesos en defensa del territorio. Rodríguez Wallenius C. & Cruz Arenas, R. (Eds.), *El México bárbaro del Siglo XXI*. 169-181. Ed. Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. México

Muñoz, Mara (2013), “Minería en México: la nueva colonización”, en Sin Embargo.mx.

Periodismo digital con rigor, 9 de abril. Disponible en: <http://www.sinembargo.mx/09-04-2013/579050> [4 de julio de 2016]

OCMAL (Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina) (2014). “Celebra Tetela 3 años de resistencia a la minería”. 18 de noviembre. Disponible en: <http://www.conflictosmineros.net/noticias/23-mexico/17222-celebra-tetela-tres-anos-de-resistencia-a-la-mineria> [7 de mayo de 2015]

Rodríguez Wallenius, Carlos (2013), “El México bárbaro de las mineras canadienses y las comunidades rurales”, en Carlos Rodríguez Wallenius y Ramsés Arturo Cruz Arenas (coordinadores), *El México Bárbaro del Siglo XXI*, en Carlos Rodríguez Wallenius y Ramsés Arturo Cruz Arenas (coordinadores), *El México Bárbaro del Siglo XXI*, pp. 143-168



Salazar, Hilda y Maritza Rodríguez (2015), “Caso Carrizalillo, Guerrero”. *Miradas al territorio. Cómo hombres y mujeres se enfrentan a la minería*, Fundación Henrich Böll, pp. 20-47
